

Chile, el terremoto y la oportunidad de la crisis

La reconstrucción en Estado precario: El laboratorio de la Nueva forma de gobernar

Memoria para obtener el título de Periodista

Alumnas: Lissette Fuentes Lorca y Úrsula Schüler Vidal.

Profesora guía: María Olivia Mönckeberg Pardo.

Santiago, 27 de diciembre de 2012

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: CHILE REMECIDO.....	5 - 30
El terremoto social del Bicentenario.....	6
“Se necesitan marinos y militares en las calles”.....	8
La madrugada en que la tierra crujió.....	9
A buscar responsables.....	12
Reacciones en otros frentes.....	15
Responsabilidades políticas y penales.....	16
Pruebas claves.....	17
El video vuelve a la palestra.....	19
Diligencias pendientes y el silencio de Bachelet.....	20
Aterriza Piñera en el Estado.....	22
Asumir entre réplicas.....	25
Una movida ceremonia.....	26
Errores de protocolo.....	27
El sentir concertacionista.....	29
CAPÍTULO II: UN TERREMOTO, VARIAS CATÁSTROFES.....	31 - 53
“Estuve tres horas pensando que me iba a morir”.....	33
Al ataque del centro histórico.....	35
“Viviendo en gallineros”.....	37
La incertidumbre de Las Concentradas.....	38
El Barrio Yungay amenazado.....	41
El mar cruza Constitución.....	43
Vivir en una “zona inundable”.....	44
Dichato inundado.....	46
El día en que el Bío-Bío se paralizó.....	49
Complicaciones de vida.....	50
Olvidados por la historia.....	51
El azote del abandono.....	52
CAPÍTULO III: LA LLEGADA DE LA DERECHA POST PINOCHET.....	54 - 106
La “Nueva forma de gobernar”.....	55
Colores para la tragedia.....	58
Arriba los corazones.....	59
Entre conocidos.....	60
El nodo de la red.....	64
Los colegas de Cencosud.....	68
Academia, empresa y elite.....	70
Del mercado y los <i>think tanks</i> al Estado.....	72
Los amigos del Presidente.....	76
Un Presidente preocupado por sus empresas.....	78
¿Manos a la Obra?.....	82
Los intereses cruzados.....	84
El origen de la decisión.....	85
Los intendentes y sus edificios.....	87
La pyme del intendente.....	89

Piñera y Echeverría hacen negocios.....	91
“¡Vaya a ver nuestras casas!”.....	91
Un próspero y multifacético empresario.....	92
Sin trabajo por ley.....	95
Un intendente y las necesidades de su empresa.....	96
Empleos y crecimiento a la chilena.....	97
Los desempleados que el gobierno no ve.....	98
Los asalariados que ya no existen.....	101
El <i>pendrive</i> con fecha de vencimiento.....	102
“Fue un lapsus de vacaciones”.....	105

CAPÍTULO IV: LA FÓRMULA DEL FINANCIAMIENTO..... 107 – 143

Cifras más, cifras menos.....	109
La billetera del Estado se hace presente.....	110
La batalla del reajuste presupuestario.....	112
El fútbol y el presupuesto de Ena.....	114
Los tres puntos de la discordia.....	118
El público <i>lobby</i> de los empresarios.....	120
Reaparece Büchi en la senda de Piñera.....	122
Alzas para el tabaco.....	123
Larraín propone.....	124
La reforma tributaria para la educación.....	125
El royalty de Piñera.....	127
El intento de Lagos.....	129
El gobierno vuelve a la carga.....	130
De dulce y agraz para la oposición.....	132
Cultura de donaciones y generosidad.....	134
Fondo Nacional de la Reconstrucción.....	134
Editoriales y Chile ayuda a Chile.....	136
¿Dónde fue a parar el fondo Teletón?	137
La credencial de la solidaridad.....	139
La tensión Hinzpeter- Berríos.....	140
Donaciones para la evasión.....	142

CAPÍTULO V: LOS OJOS PUESTOS EN LA CATÁSTROFE..... 144 - 213

El desplome de las alturas.....	146
Endeudarse para la casa propia.....	147
El banco de todos los chilenos.....	148
Pagar por polvo y aire.....	150
La vía judicial.....	151
Justicia para Alto Río.....	151
Protestando en Macul.....	153
Reparar para rematar.....	154
Villa Futuro fracturada.....	155
Quiebres y campamentos en Villa Futuro.....	156
Culpa de los vecinos.....	157
Un acuerdo a regañadientes.....	158
Una larga historia en Concepción.....	160
Por encima del poder comunal.....	163
Solos en la periferia de Talcahuano.....	165

Casas con paneles solares.....	167
La agonía del sueño.....	169
“El puente vale callampa, igual que nosotros”.....	170
El factor Navarro.....	175
Costosas y sin destino.....	177
Desde 1988 entregando calidad.....	178
Un trato directo y millonario.....	180
Con agenda propia.....	181
“Inventamos una historia”.....	182
El gallito por el poder penquista.....	184
Cae la doña del Bío-Bío.....	185
La planificación urbana de la reconstrucción.....	186
La primavera pública-privada.....	188
Delegar la planificación territorial.....	191
Allegados al borde del río.....	192
Un Plan para Constitución.....	193
Celco Elemental.....	194
De prioridad a olvido nacional.....	195
El desarme de El Molino.....	197
Resistiendo la expropiación.....	198
El director del Serviu expropia a un familiar.....	199
En el corazón de Talca.....	201
Los tira y afloja con la autoridad.....	202
Reconstrucción sin Estado.....	206
De bajo perfil público.....	208
En defensa del adobe.....	209
Zona típica arrasada.....	211
Sin planes del gobierno.....	212

CAPÍTULO VI: PIÑERA WAY..... 214 - 230

Amigos y conocidos.....	214
La celebrada llegada de Bitar.....	216
El primo del Presidente opina.....	217
La concesión de la gestión clínica.....	218
El modelo probado.....	220
El primer fracaso de Mañalich.....	221
Salud a trato directo.....	223
Tiempos privados vs tiempos públicos.....	224
Los subsidios en tela de juicio.....	226
La promesa vencida.....	228
Mezclar peras con manzanas.....	228

CAPÍTULO VII: EL RETIRO DEL ESTADO Y EL MALESTAR

EMERGENTE..... 231 - 250

El “antes y después”.....	232
El Presidente hace arder <i>Twitter</i>	233
La consulta de los terremoteados.....	234
Perspectivas finales.....	237
“No creo que esté garantizado llegar a la meta”.....	240
Minvu y Segpres se contradicen.....	242
El permanente desencuentro de las cifras.....	243

El foco en el territorio.....	245
Estado ausente.....	246
ANEXO I, FUENTES.....	249 - 254
ANEXO II, CRONOLOGÍA.....	255 - 261
ANEXO III, ÍNDICE ONOMÁSTICO.....	262 - 267

INTRODUCCIÓN

Han pasado casi tres años desde el último terremoto que sufrió Chile. A las 03:34 de la madrugada del sábado 27 de febrero de 2010, un sismo de 8.8 grados en la escala de Richter remeció al territorio.

Los sismógrafos marcaron 0.2 décimas más que en mayo de 1960, cuando una catástrofe que incluyó nueve terremotos en dos días y un tsunami asoló a la ciudad de Valdivia. El terremoto del 21 de mayo de ese año afectó gran parte de la zona centro y sur del país que quedaron incomunicadas de Santiago. Al día siguiente un segundo terremoto arrasó con poblados pesqueros como Puerto Saavedra, Corral y Queule, mientras en Valdivia, Puerto Montt, Osorno y Chiloé, los daños materiales fueron cuantiosos. En esa oportunidad las pérdidas de vidas se estimaron en cerca de dos mil personas. El papel del Estado a través de todas sus reparticiones fue fundamental para superar la tragedia y la reconstrucción.

Entre otros de los grandes sismos de las últimas décadas está el que afectó a la zona central en 1971, que marcó grado 7.5 y provocó 85 muertes y millonarias pérdidas.

Catorce años después, el 3 de marzo de 1985 otro terremoto agitó el territorio nacional desde la región de Atacama hasta La Araucanía. Murieron 167 personas y miles de viviendas quedaron destruidas.

En febrero de 2010 el movimiento telúrico que afectó a las regiones desde Valparaíso a La Araucanía duró casi tres minutos y provocó la muerte de 525 personas y la desaparición de 23, daños en viviendas, escuelas, hospitales y caminos. Como en 1960, el terremoto vino acompañado de un tsunami que impactó al borde costero de la Región del Maule y a la Isla de Juan Fernández. La desinformación de las primeras horas y de los días que siguieron, al igual que el sismo, fue de gran magnitud, pese al desarrollo que en las últimas décadas han tenido los sistemas comunicacionales.

Las consecuencias de la crisis que provocó el terremoto y la necesidad de

reconstruir todavía generan roces entre los poderes del Estado, los grupos empresariales, los chilenos y chilenas afectados por el sismo y quienes se han preocupado de seguir el proceso de reconstrucción, que aún no termina.

Casi dos millones de personas fueron afectadas y muchas de ellas aún no logran recuperar su anterior calidad de vida, en términos de vivienda, educación, trabajo y entorno comunitario. En estos casi tres años se han abierto debates agitados que aún están en desarrollo para los afectados y el país.

La marcha de las reparaciones y reedificaciones de viviendas y obras públicas, así como algunos casos de corrupción en distintas escalas de la administración pública, han tenido su lugar en informes especializados y pautas de prensa. Pero hay algo que no se observa a primera vista ni se informa en los medios de comunicación: el “laboratorio” en materia de políticas públicas territoriales y sociales que ha desarrollado el gobierno de Sebastián Piñera y que el terremoto de 2010 permitió realizar mediante renovados procesos de subsidiariedad y privatización.

Después del terremoto de marzo de 1985 el recién estrenado ministro de Hacienda de Augusto Pinochet, Hernán Büchi, emprendió la privatización de las empresas estratégicas del Estado. Así también, el terremoto de febrero de 2010 generó un escenario especial para el primer gobierno de derecha elegido después de medio siglo.

La destrucción de barrios, pueblos y ciudades del sur de Chile abrió una oportunidad inesperada para un gobierno que optó por incluir a los empresarios en el diseño y la ejecución de sus lineamientos políticos. A tal punto que incluso la planificación territorial de la reconstrucción pasó a ser una materia que la institucionalidad ordinaria no contuvo: se tomó la decisión política de articular el retiro programado del Estado mediante la entrega más y más iniciativa al sector privado.

Se podría decir así que el recargado “laboratorio” inspirado en políticas neoliberales que comenzó a operar en febrero de 2010 tiene varias vertientes y antecedentes que la nutren y configuran.

Esta Memoria de Título es un reportaje de investigación sobre la reconstrucción

como ventana de oportunidades para esos diseños y nuevos grandes negocios. Sobre la espera, algunos avances y muchas frustraciones que experimentan hasta hoy los damnificados de las distintas localidades golpeadas por los movimientos de la tierra y del mar. También aborda casos de negligencia y corrupción de algunas autoridades públicas. Es sobre el proceso de reconstrucción como caso de fortalecimiento del Estado subsidiario y del modelo de licitaciones y concesiones en Chile. Sobre la disminución del rol del Estado en un proceso de envergadura nacional y pública, de ese Estado que afrontó tragedias como la de Chillán en 1939 o la de Valdivia y el sur en 1960 y coordinó y planificó la reconstrucción en aquellas oportunidades. Y sobre la privatización encubierta de la planificación territorial en las localidades terremoteadas.

La potencia del terremoto no sólo afectó a la tierra. Las arenas políticas también se movieron al ritmo del 8.8. Desde que Jacqueline Van Rysselberghe fue nombrada intendenta, el Bío-Bío no conoció la paz como consecuencia de las pugnas clientelares y caudillistas que se desplegaron entre las dos principales fuerzas políticas de la región: por un lado Van Rysselberghe, con toda una tradición familiar en el Bío-Bío, y por otro el senador Alejandro Navarro, exsocialista, fundador y militante del Movimiento Amplio Social (MAS). Ambos políticos con sus rencillas de vieja y nueva data aportaron a nutrir las frustraciones de la ciudadanía penquista y de todos los habitantes de las regiones que, a partir del 27F, sintieron que entre ellos y el Estado había una distancia cada vez mayor.

Uno de los elementos decisivos del sentir ciudadano fue el abandono completo de la política respecto a las zonas afectadas. A sus ojos, los representantes de la Concertación aparecieron en las comunidades damnificadas recién un año después del sismo. En diciembre de 2011 los políticos visitaron los espacios públicos del Movimiento por la Reconstrucción Justa, instancia social que nació al calor de las demandas y necesidad de organización de los terremoteados. “Dos años después de la catástrofe llegó la senadora Ximena Rincón -precandidata presidencial en campaña- y Jaime Gazmuri -precandidato al municipio de Talca, en ese entonces-, también en campaña”, recuerda Walter Imilan, coordinador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, que le comentaban los vecinos en sus visitas a terreno.

Cada sector político buscó tener de su lado una porción de los lugareños, avizorando tal vez que el terremoto sería un tema de largo aliento y que movilizaría

fuertemente a la población. Ninguna de las dos figuras políticas del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe y Alejandro Navarro, escatimó recursos materiales ni políticos y el resultado fue una división que perdura hasta hoy entre los habitantes de esa región.

Para el desarrollo de esta Memoria realizamos un amplio reporteo en terreno, y a distancia; una revisión, y seguimiento de prensa; a la vez, efectuamos una recopilación y análisis de documentos públicos de libre acceso, en algunos casos, y otros obtenidos mediante la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Está compuesta por siete capítulos y tres Anexos. Estos incluyen: la lista de fuentes personales, documentales y de la bibliografía recopilada, una cronología de los hechos y un índice onomástico.

Finalmente consignamos que esta Memoria de Título está redactada según las nuevas normas de la última edición de la Real Academia Española introducidas durante 2012.

CAPÍTULO I

CHILE REMECIDO

Era el penúltimo día de un febrero muy caluroso, en que el ajeteo se alargaba hasta pasado la medianoche. Era también el penúltimo día del segundo mes del año del “Bicentenario”, cuando Chile conmemoraba 200 años de vida independiente.

Los *pub*, *discoteques* y restaurantes del Barrio Bellavista, Suecia y otros puntos estratégicos del traspasado santiaguino estaban repletos. En las casas, algunos esperaban que saliera al escenario el *show* final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que celebraba su versión 51.

De pronto, un movimiento subterráneo sacudió gran parte del país. Eran las 03:34 horas. Treinta segundos después todos dejaron de bailar, dormir, comer o ver televisión. Durante casi tres minutos, un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter remeció a los habitantes de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bío-Bío, de La Araucanía, de Valparaíso y Metropolitana. Fue el segundo sismo más fuerte en la historia mundial, desde que existen los sistemas de medición.

El epicentro del terremoto fue frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura, a unos 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes, en el borde convergente entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana.

En total, se calcula que la catástrofe del 27 febrero de 2010 afectó a más de trece millones de personas, cerca del 80 por ciento de la población de Chile, según estimaciones oficiales. Es posible considerarlo, en términos de su extensión, como el mayor terremoto urbano conocido, ya que afectó severamente la macro zona metropolitana del gran Concepción, cinco ciudades con más de cien mil habitantes, 45 sobre los cinco mil, y más de 900 pueblos y comunidades rurales y costeras. Se declaró como zona afectada el territorio comprendido desde la Región de Valparaíso hasta La Araucanía, incluyendo la Región Metropolitana.

Pero, a nivel de percepción de los habitantes, muy pocos tenían noción real de la magnitud del desastre. E incluso no la tuvieron hasta semanas después.

El suministro eléctrico en las zonas afectadas se cortó y muchas poblaciones estuvieron a oscuras y sin acceso a los medios de comunicación. Las redes de celulares colapsaron, lo que agregó un grado más de pánico a la incertidumbre del momento.

El terremoto social del Bicentenario

El terremoto reveló zonas grises de la sociedad chilena. La ausencia de un sistema de telecomunicaciones regulado y sometido a normas de fiscalización de la calidad del servicio fue solo un ejemplo. A los propietarios de los edificios Alto Río en Concepción y Don Luis en Maipú, el sismo les derrumbó sus departamentos y la ilusión de vivir “con la calidad del barrio alto, pero a precios de la clase media emergente”, según recuerda Alejandra Monasterio, propietaria del edificio Don Luis, quien el 27 de febrero estaba embarazada de siete meses¹.

En la actualidad Monasterio es dirigente de los que alguna vez fueron sus vecinos y lleva adelante las iniciativas legales para demostrar la responsabilidad de la inmobiliaria Francisco de Aguirre y la constructora Mujica y González Ltda., que construyeron los edificios Don Tristán y Don Luis en Maipú.

Si personas de clase media perdieron sus departamentos, y con eso una inversión en promedio de 30 millones de pesos, hay sectores de la sociedad que no sufrieron tanto el rigor del sismo.

El comercio, según indica el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, fue de los primeros que repuntó. “El terremoto y posterior maremoto que vivió el país en febrero dio un gran impulso a la actividad comercial minorista”, según el informe “Análisis económico 2010” del INE. Este efecto se observó con fuerza en abril, dice el documento, cuando las tasas de crecimiento real anual en la venta de bienes durables y no durables alcanzan 46

¹ Entrevista realizada a Alejandra Monasterio por las autoras de esta Memoria. 3 de junio de 2011.

y 17 por ciento, respectivamente, “por la reposición generalizada de enseres afectados por el desastre”.

El historiador y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Usach, Mario Garcés², piensa que es cierto que en los primeros momentos del terremoto, éste perjudicó al conjunto de la sociedad, “pero a la larga termina comprometiendo según la condición de los distintos sujetos y de las distintas clases, de acuerdo a cómo ellos están parados en la sociedad y el lugar que ocupan. Todo eso hace más complejo el análisis y activa una bomba de tiempo por la desigualdad radical que existe en Chile”.

La bomba de tiempo a la que se refiere Garcés detonó en Dichato, Región del Bío-Bío, en julio de 2011. Los habitantes del campamento El Molino se retiraron de una mesa de negociación que mantenían con el gobierno y comenzaron a manifestarse. Entre los actos de protesta contra la autoridad y la fuerza policial estuvo la retención en una sede del Hogar de Cristo del gobernador provincial de Concepción, Alejandro Reyes.

El profesor Mario Garcés señala que el terremoto y las aldeas a las que las personas afectadas debieron mudarse los puso en una situación de emergencia que dio rápido paso al sentimiento de impotencia, ya que “viven en la contradicción de una sociedad desigual como la chilena donde los segmentos no afectados por el terremoto continúan su forma de vida consumista, de disfrute, de placer en el mercado. Entonces, los habitantes de las aldeas se preguntan por qué ellos sí y nosotros no. Eso no tiene que ver con un arribismo, sino con condiciones básicas que han perdido”, afirma el académico de la Usach.

Lo que significó para unos y otros el terremoto revela una situación de desigualdad profundamente arraigada y estudiada a nivel internacional. El portal de la BBC de Londres publicó en junio de 2011, “Lo que oculta la riqueza de Chile”³, un reportaje que desmenuza la distribución de los recursos en el país, a partir de un estudio realizado por Andrés Zahler Torres, investigador y profesor del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. El académico señaló que en Chile, “el 60 por ciento de las personas viven con ingresos promedio peores que Angola”.

2 Entrevista realizada a Mario Garcés por las autoras de esta Memoria. 22 de julio de 2011.

3 Vladimir Hernández, *Lo que oculta la riqueza en Chile*. Disponible en sitio web de BBC Mundo (www.bbc.co.uk). Consultado el 30 de junio de 2011.

Estas profundas desigualdades ocultas detrás de las cifras macroeconómicas quedan al descubierto en un proceso de reconstrucción que ha avanzado lento y dificultoso. Como bien lo sabían en julio de 2011 los estudiantes de la escuela Las Concentradas en Talca o los habitantes de la población Villa Futuro en Chiguayante. Para esa fecha, algunos no tenían escuela definitiva y otros llevaban un año y medio en campamentos y vivían su segundo invierno sin techo propio.

De desigualdad social e impunidad política también tuvieron que aprender los vecinos de la población Centinela II de Talcahuano. Sus hogares no habían sido afectados de forma estructural por el terremoto, y aún así, atendiendo un llamado de la entonces intendenta Jacqueline Van Rysselberghe⁴, destruyeron sus viviendas sociales para recibir otras nuevas que tendrían “paneles solares y entrada de auto por cada casa”⁵, según recuerda Leonardo Escobar, dirigente del actual campamento Aldea Barcaza Valdivia de Talcahuano, en entrevista con las autoras de esta Memoria.

“Se necesitan marinos y militares en las calles”

La madrugada del 28 de febrero de 2010, Jacqueline Van Rysselberghe exigió al gobierno que enviara militares para “restablecer el orden” en la Región del Bío-Bío, donde se produjeron saqueos después del terremoto. “Se necesitan marinos y militares en las calles, porque hay caos”, afirmó la entonces alcaldesa de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en declaraciones a radio Bío-Bío, cuando un grupo de pobladores se enfrentó con Carabineros en el saqueo de un supermercado Líder. “Queremos que se restituya el orden, la gente decente quiere seguridad”, afirmó Van Rysselberghe, quien unas semanas después fue nombrada intendenta de la Región por el Presidente Sebastián Piñera.

Durante el saqueo del supermercado, la televisión captó a pobladores llevándose no solo alimentos o agua, también electrodomésticos. La discusión que se instaló fue la de un posible aprovechamiento de la emergencia para robar. “¿Es esa lavadora un bien

4 Intendenta de la Región del Bío-Bío desde el 11 de marzo de 2010 hasta el 03 de abril de 2011. Antes, alcaldesa de Concepción desde el 06 de diciembre de 2000 hasta el 10 de marzo de 2010 por la Unión Demócrata Independiente, período que incluyó el terremoto.

5 Entrevista realizada a Leonardo Escobar por las autoras de esta Memoria. 7 de junio de 2011.

de primera necesidad?”, se preguntó en vivo por las pantallas de Televisión Nacional de Chile (TVN), el periodista Amaro Gómez Pablos. En esa línea, la alcaldesa insistió en que “solo llevamos un día en emergencia, no se justifica tanta desesperación” de la población.

En medio de la tragedia la intendenta retomó sus conflictos con los socios de Renovación Nacional y un par de días después aparecieron por todo Concepción afiches sindicándola como “La Quintrala”. Y mientras sectores de la UDI señalaron como responsable del acto a la Democracia Cristiana, otros vieron a los militantes de Renovación Nacional detrás de esta publicación.

Al parecer la alcaldesa no quería desaparecer de la palestra pública, ya que no dudó en sumarse a la discusión valórica del momento: el aborto terapéutico. Se manifestó en contra de todo tipo de interrupción del embarazo y aprovechó de declararse partidaria del retorno de la pena de muerte, a propósito del caso de un hombre que violó a una niña de cinco años. No era la primera vez que la psiquiatra supernumeraria del Opus Dei entraba en estos temas, pues ya antes había vaticinado que si se repartía la píldora del día después habría una “explosión de SIDA”.

La madrugada en que la tierra crujió

El fin del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet no fue fácil. Primero le tocó asumir la derrota política que vivió la Concertación en las elecciones presidenciales de 2010, y su posterior desconcierto público. Después tuvo que hacer frente al terremoto en su período más crítico: la catástrofe y la emergencia, a solo doce días antes de entregar el mando.

Esa madrugada del 27 de febrero, la primera mujer Presidenta de Chile se encontraba en su casa descansando después de un viaje que realizó en avión a Argentina para participar en la partida de una regata internacional con las escuelas matrices de la Marina de varios países. En declaraciones posteriores a la prensa, Bachelet contó que apenas terminó el sismo partió desde su casa en Las Condes hacia el centro de la capital para llegar a la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi, a tomarle el pulso al siniestro y ponerse en acción.

“La reacción inicial del gobierno fue muy deficitaria, pero más que por su disposición a reaccionar a un fenómeno de esta naturaleza fue por los problemas de información que caracterizaron las primeras 24 horas después del terremoto”, recuerda el diputado demócrata cristiano Juan Carlos Latorre, en su oficina santiaguina de un barrio de arquitectura clásica, ubicada a cuerdas de Plaza Italia⁶.

Continúa Latorre: “En ese vuelo viajaba el alto mando de la Marina. Venían todos en el mismo avión. Entonces, cuando los marinos aparecieron con dificultades para entregar una información adecuada de lo que estaba pasando por la costa chilena, yo dije, ‘espero que no haya sido por el traspaso del alto mando y sea más bien un reflejo de lo que fue la crisis de las telecomunicaciones’”, confidencia.

La expresidenta llegó a la Onemi vestida entera de negro, con una ancha y ligera blusa, pantalón recto y sin maquillaje; esos detalles después fueron interpretados como signos de su pronta reacción.

En la Oficina se encontró con Carmen Fernández, directora de la entidad que en lo sucesivo, cuando la capacidad de atención de la emergencia fue juzgada, sería sindicada como una de las responsables de la descoordinación.

Los minutos pasaron y Francisco Vidal, ministro de Defensa, Patricio Rosende, subsecretario del Ministerio del Interior, Sergio Bitar ministro de Obras Públicas y el alto mando de las Fuerzas Armadas se sumaron al personal regular que se encontraba en la Oficina.

“El riesgo de tsunami en la zona costera es una posibilidad muy remota, así que llamamos a la ciudadanía a la calma”, dijo la Presidenta Bachelet por televisión a las seis de la mañana. Con estas palabras trató de contener a los chilenos que se encontraban alarmados y también estampó las declaraciones que servirían como prueba para cuestionar su desempeño.

Tres cuartos de hora antes, a las 05:15 de la mañana, el cabo Raúl Díaz se logró

6 Entrevista realizada a Juan Carlos Latorre por las autoras de esta Memoria. 30 de mayo de 2011.

comunicar desde el retén de la Isla Juan Fernández para dar la primera señal de que algo no andaba bien, cuando la marea aumentó peligrosamente y el oleaje se hizo más violento. “Hay riesgo de tsunami”, avisó.

El tiempo terminaría dando la razón a la intuición de Díaz. A la misma hora que la Presidenta descartaba el riesgo de la inmensa ola, la isla de casi 600 habitantes fue el primer pedazo de tierra azotado por el descontrol del agua.

Las carreteras y canales de comunicaciones presentaban fallas en gran parte de Chile y en la Onemi no había información exacta de la magnitud y consecuencias del sismo.

El aumento explosivo de las llamadas, más el daño que sufrieron las estructuras de conectividad produjeron un colapso que interrumpió la comunicación en la mayor parte del territorio nacional. Al día siguiente del siniestro, el presidente de la Asociación Gremial de Telefonía Móvil, Guillermo Pickering, explicó a través de un comunicado la ineficiencia que presentó el sector privado. Argumentó que el problema de comunicaciones de la red de celulares radicó “en que las radio estaciones y antenas repetidoras funcionan con energía eléctrica”⁷.

En caso de fallas, el sistema de telecomunicaciones chileno tiene de respaldo bancos de batería de duración limitada. “Lamentablemente, y dada la magnitud de la catástrofe, en muchas localidades estos bancos ya se agotaron. Esa es la razón que explica que de la Región de Valparaíso al Bío-Bío el servicio móvil se encuentre funcionando solo parcialmente”, justificó el presidente del gremio telefónico, Guillermo Pickering.

En la televisión abierta los canales pronto comenzaron a transmitir. Desde el set de *24 Horas*, la periodista Mónica Rincón inició las transmisiones en TVN. En la medida que el resto de las señales se integraba a la oferta programática, las imágenes y testimonios que llegaron a las pantallas de los hogares fueron aumentando su impacto dramático.

7 *La Nación*, 28 de febrero de 2010. “Empresas de telefonía móvil explican las fallas post sismo”, equipo País.

En medio de esta situación miles de chilenos que no podían comunicarse con sus seres queridos imaginaron lo peor.

A buscar responsables

El desastre natural no solo implicó derrumbes que se podrían haber evitado con mejores construcciones, también tuvo consecuencias penales. Algunas situaciones se han resuelto, con polémicos resultados, como los saqueos que ya fueron perseguidos y el caso de los ocho fallecidos por la caída del edificio Alto Río de Concepción. Otras, aún están en investigación, como las muertes derivadas de la ausencia de alerta temprana del tsunami. Todos estos hechos han sido tomados como línea de investigación por entidades con distintas potestades y alcances políticos y legales.

Haciendo uso de su rol fiscalizador, la Cámara de Diputados conformó una comisión especial para buscar responsabilidades políticas en la mal evaluada reacción a la catástrofe. Solange Huerta, fiscal de la Zona Metropolitana Occidente, fue designada por el fiscal nacional Sabas Chahuán para investigar desde el ámbito judicial los posibles errores cometidos por las autoridades involucradas en la alerta de tsunami. Estas investigaciones se realizaron de forma paralela desde el plano político y penal.

En los patios de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Uniacc, Carmen Fernández ejerce en la actualidad la docencia. Mientras toma un café caliente y fuma, la periodista y exdirectora de la Onemi se lamenta más que nunca que el ante proyecto de ley que presentó en 2007 al Ministerio del Interior no hubiese sido impulsado por la Concertación. En el documento Fernández planteaba que Chile “debía contar con un sistema único de alerta, porque para los incendios forestales la Onemi depende de la Corporación Nacional Forestal de Chile, Conaf; para los temporales de la Dirección Meteorológica; y para los tsunamis de la Armada”⁸.

Al momento de consultarle por la tardía y descoordinada respuesta que hasta hoy es investigada, la exfuncionaria de Estado sostiene que la institucionalidad de emergencia del país “está sometida a la dinámica de ‘se le dijo a uno y ahí el otro recién puede

8 Entrevista realizada a Carmen Fernández por las autoras de esta Memoria. 31 de mayo de 2011.

operar”.

Fruto de la investigación del denominado “caso tsunami”, recién el 26 de enero de 2011, casi un año después del sismo, Solange Huerta pudo entregar un catastro de las víctimas. La gran ola provocó la muerte de 156 personas que se encontraban en las orillas del litoral o en islas cercanas y 25 chilenos se contabilizaron como desaparecidos.

A principios de mayo de 2010, Canal 13 difundió por su señal un video que registró las tensas y confusas horas que se vivieron esa madrugada de febrero en la Onemi. Esta acción de *Teletrece* es hoy cuestionada por la exdirectora de la Oficina de Emergencia: “Yo tenía instrucciones de que siempre se grabara todo en la Onemi, porque el manejo de crisis opera sobre el concepto de lecciones aprendidas. Después se evalúa todo lo hecho y se sacan lecciones. Es un instrumento técnico, si se los entregas a los medios periodísticos, ¿qué van a hacer con él?”, cuestiona Fernández, quien se desempeña como profesora de Comunicación Corporativa, Manejo Comunicacional de Crisis, y Formulación y Evaluación de Proyectos en la Uniacc.

El 6 de septiembre de 2010 la Comisión Investigadora, presidida por el diputado UDI Jorge Ulloa, aprobó un informe que responsabilizó políticamente a Michelle Bachelet porque, “a pesar de observar los saqueos y robos producidos y contar con basta información sobre las distintas situaciones de desorden social en las regiones afectadas, la expresidenta posterga sin razón explicable la decisión de decretar Estado de Excepción Constitucional”⁹.

También se le endosaron responsabilidades a Carmen Fernández respecto al actuar después del terremoto y al jefe de turno de esta Oficina, Osvaldo Malfanti; a Mariano Rojas, director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA); y a los ministros del Interior Edmundo Pérez Yoma, y de Defensa, Francisco Vidal, así como al subsecretario del Interior, Patricio Rosende.

Ese fue el informe denominado “de mayoría”. El de “minoría”, suscrito por los congresistas de la Concertación eximió de responsabilidad a la expresidenta socialista.

9 Informe de la Comisión Especial Investigadora del estado de la institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta frente a desastres naturales. Disponible en sitio web de la Cámara de Diputados (www.camara.cl). Consultado el 02 de febrero de 2012.

Ulloa acusó que "la Concertación no aceptó de ninguna manera, entender que hubo un retraso en lo que fue la dictación de la norma que fijaba el Estado de Excepción, que permitía el control de las Fuerzas Armadas y del orden público. Eso es lo que no nos ha permitido tener un informe único"¹⁰.

A la hora de definir la estrategia adecuada para restablecer el funcionamiento del país ese fue otro de los nodos de la discordia. Meses después, el ministro de Obras Públicas del período, Sergio Bitar, así como otros personeros de la Concertación, confesaron a medios de prensa que la decisión de convocar a las Fuerzas Armadas a controlar el orden público fue difícil de tomar dado el pasado militarizado que vivió el país durante la dictadura.

El lunes 1 de marzo, Francisco Vidal, por ese entonces a cargo del Ministerio de Defensa, anunció que diez mil efectivos de las Fuerzas Armadas serían desplegados para enfrentar las emergencias del terremoto y sus consecuencias en la seguridad y el orden.

Hoy el profesor de historia, geografía y educación cívica, y exministro de Michelle Bachelet, trabaja en la Fundación Chile XXI, centro de pensamiento ligado a la Concertación donde convergen personas e instituciones que se identifican con un pensamiento progresista. Desde una amplia sala de reuniones de la institución relata el proceso de despliegue: "En la fase uno no requieres emitir decretos para las Fuerzas Armadas, porque es la fase de ayuda humanitaria. Esta fue su única función hasta el domingo 28 a las tres de la tarde", explica.

Dice que en ese momento eran pocos militares porque para esa fecha y en esa zona del país, el grueso del contingente son concriptos, a diferencia del norte donde son soldados profesionales. Según Vidal, el número de uniformados se vio disminuido porque una parte se licencia en diciembre y otros en abril, y sumado a las vacaciones, en febrero hay casi un tercio de las filas.

10 *El Mostrador*, 6 de septiembre de 2010. "Informe de diputados acusa a Bachelet de deficiencias en gestión tras terremoto", equipo *El Mostrador*.

Con el desplazamiento de militares desde el norte, centro y sur del país se subsanó el déficit y a las 72 horas posterremoto ya había quince mil militares en las calles. “La fase de orden público requiere de una instrucción apelando a la Constitución. La decisión se tomó el domingo a las once de la mañana, desde ahí operó la orden desde el punto de vista administrativo y se dio a conocer a las tres de la tarde”, responde Vidal, consultado sobre la supuesta demora del despliegue militar¹¹.

Reacciones en otros frentes

A horas de la catástrofe y cuando se pudo restablecer conectividad radial, la alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, pidió ayuda en alimentos. Anticipó que de no solucionarse la necesidad de abastecimiento que manifestaba la alarmada población "podrían haber problemas serios y graves durante la noche". Estas declaraciones las dio en medio de los saqueos que sufrieron las tiendas mayoristas del *retail* y supermercados de la zona, por lo que también exigió la intervención directa de los militares con el fin de restablecer la calma en la Región.

El alcalde de Tomé, Eduardo Aguilera, se sumó al llamado de la alcaldesa penquista y pidió apoyo de los uniformados para mantener el orden: "Es hora que las Fuerzas Armadas tomen el control de las calles", dijo a *Emol* el 28 de febrero de 2010.

En Santiago, Horst Paulmann, propietario de Cencosud y dueño de una de las mayores fortunas de Chile; junto a Enrique Ostalé, gerente general de D&S Wal-Mart, y un representante de Unimarc llegaron hasta La Moneda. Se reunieron con el ministro de Hacienda Andrés Velasco, el jefe de gabinete del ministro del Interior, Carlos Mladinic, y un enviado de la Presidencia para analizar la situación de los supermercados después del terremoto, los saqueos y la necesidad de abastecimiento en los territorios afectados.

Para el presidente de Renovación Nacional y actual senador Carlos Larraín “el día del terremoto se vio lo perdida que estaba la Concertación; llegaron al extremo de no permitir que salieran carabineros y militares a la calle para impedir los saqueos, por un simple prejuicio ideológico. Para ellos tenía una asociación política y por eso dilataron la

11 Entrevista realizada a Francisco Vidal por las autoras de esta Memoria. 2 de agosto de 2011.

decisión. A ese punto llegó su perplejidad”¹².

El exministro Francisco Vidal responde que la principal opinión contraria al despliegue militar la dio Sergio Bitar, ministro de Obras Públicas. Bitar dijo a los medios de comunicación “que 'era complicado sacar a los militares por el golpe', ¡pero nada que ver! Se construyó un mito a partir de la opinión, posterior, equivocada, extemporánea, de Bitar”, afirma el actual miembro de Fundación Chile XXI.

Responsabilidades políticas y penales

Después de cuatro meses de oficios y sesiones, el 5 de enero de 2011, el informe que responsabilizaba políticamente a la posible candidata de la Concertación a las presidenciales de 2014, Michelle Bachelet, fue rechazado en votación general de la Cámara Baja. Esto sucedió en el plano político. En la línea de la investigación judicial sigue trabajando hasta estos días la fiscal Solange Huerta. La exmandataria tuvo que comparecer a dar su testimonio en calidad de testigo, no de imputada, como en algún momento solicitaron quienes criticaron su desempeño.

A pesar del uso que se le dio en las distintas investigaciones al comentado video, la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández, explica el “exagerado” enjuiciamiento público que recibió la entidad a la que ingresó en 1994 y dirigió por cuatro años. “En un comité de crisis hay desconcierto, hay silencios, hay momentos muertos y la gente con lo único que podía compararlo era con las películas. Nunca antes habían visto operando un comité de crisis, se veía todo como tremendo”, subraya.

Solange Huerta investiga desde el 16 de marzo de 2010 si pudo haber existido una alerta de maremoto que salvara la vida de 156 personas fallecidas y 25 desaparecidos. Ha solicitado 200 oficios de información a las variadas instituciones implicadas, ha tomado más de 800 entrevistas a testigos e imputados y ha realizado unas 50 pericias nacionales e internacionales.

Por sus extensos interrogatorios han pasado como imputados el exministro de

12 Entrevista realizada a Carlos Larraín por las autoras de esta Memoria. 28 de diciembre de 2010.

Defensa Francisco Vidal, el exministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende, el exintendente de la Región del Bío-Bío, Jaime Tohá, y la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández.

Fernández renunció a su cargo en la Oficina de Emergencia un día antes del cambio de mando entre Bachelet y Piñera, a pesar de que aseguró en la entrevista concedida a las autoras de esta Memoria que el Presidente le pidió que continuara dirigiendo la institución. Pese a su salida, después de 16 años de trabajo en la entidad, la periodista nunca ha aceptado las responsabilidades que se le atribuyen. Ni siquiera lo hizo el 18 de octubre cuando la fiscal Huerta la interrogó largamente.

Vidal y Rosende siempre han atribuido el lento actuar del Estado a los problemas comunicacionales: los caminos y las líneas telefónicas se cortaron. Coinciden también en endosar culpas a la Armada que aseguró que no había riesgos, ya que el epicentro era en tierra, “entonces, es difícil que la Onemi haya bajado información que no existió”, dice Fernández, en referencia a la ausencia de la alerta de tsunami.

Para el senador de la Región de Los Lagos y presidente del Senado en el período 2012, Camilo Escalona, las críticas que cayeron sobre Carmen Fernández son injustas porque “la autoridad civil hizo todo lo que podía hacer. Tenemos un ordenamiento institucional que depositó esos instrumentos de acción en las Fuerzas Armadas y estas instituciones no actuaron con la diligencia, la rapidez y la eficiencia que aquellos que les entregaron esos instrumentos en su momento creyeron tendrían”¹³, argumenta.

Pruebas claves

Fueron más de ocho mil páginas las que entregó el 3 de febrero de 2012 la Policía de Investigaciones, PDI, a Solange Huerta. El informe detallaba lo acontecido el 27 de febrero de 2010 con videos, declaraciones y testimonios de los familiares de las víctimas y las circunstancias de muerte de éstas.

En el “minuto a minuto” se señalan los lugares, afectados y lo que sucedía en dichos sectores a cada instante. Al mismo tiempo, se relata lo que ocurría en el SHOA y la

13 Entrevista realizada a Camilo Escalona por las autoras de esta Memoria. 8 de agosto de 2011.

Onemi, además de las decisiones de las respectivas autoridades, según informó radio Cooperativa el 28 de febrero. Se detallan declaraciones de funcionarios de Carabineros, Bomberos, Policía de Investigaciones (PDI), de los distintos municipios afectados y de las autoridades, entre ellas la expresidenta Michelle Bachelet. El documento contiene entrevistas a especialistas de Hawái, que habrían alertado al SHOA sobre el tsunami. Esta información de la PDI fue clave para la decisión que tomaría la Fiscalía ocho días después.

Dentro de las conclusiones del equipo especial de la PDI -formado en marzo de 2010 y que recorrió las zonas afectadas por las olas- está la posible responsabilidad penal del exsubsecretario Rosende, la exdirectora de la Onemi Carmen Fernández y del entonces jefe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, Mariano Rojas. Este último, ya había sido dado de baja el 20 de mayo de 2010, después de un sumario interno de la institución.

Las pericias también apuntaron a la eventual negligencia del exjefe del Centro Nacional de Alerta Temprana (CAT) Johaziel Jamett, y del exjefe de turno de la Onemi Osvaldo Malfanti, según informó *La Tercera*¹⁴. A esto se agregó la decisión de formalizar al sismólogo de la Universidad de Chile Carlos Aranda. Según la fiscalía, Aranda estaba a cargo de asesorar a las autoridades esa madrugada. También fueron formalizados el exjefe de turno del SHOA Mario Andina y el extitular de Oceanografía de la misma entidad, Andrés Enríquez.

16 días antes que se cumpliera el segundo aniversario de la catástrofe, el 11 de febrero de 2012, la fiscalía resolvió formalizar a ocho jefes de la época -liderados por Patricio Rosende-, por cuasidelito de homicidio. El exsubsecretario del Interior de Bachelet es la única exautoridad política que deberá enfrentar responsabilidades penales, pese a que desde el gobierno de Sebastián Piñera insisten en que Michelle Bachelet debería afrontar cargos como líder del equipo que condujo las primeras horas del 27F.

De acuerdo a las versiones entregadas por la prensa, la decisión de formular cargos contra Rosende responden al poder de "decisión que tuvo durante la cita de

14 *La Tercera*, 11 de febrero de 2012. "Ex subsecretario de Bachelet y ex jefes de Onemi y Shoa serán imputados por 27F", S. Labrín, J. Poblete, A. López.

emergencia en la Onemi" y a su "condición de superior jerárquico" de Carmen Fernández. *La Tercera* señaló en la edición del 11 de febrero de 2012 que, de acuerdo a fuentes de fiscalía, la responsabilidad de la exdirectora de la Oficina "radicaría en la negligencia que habría cometido el personal a su cargo, al no evacuar las zonas costeras, pese a contar con información que hacía presumir el ingreso de las olas, como la alerta de tsunami que elevó el SHOA, la cual fue retirada 37 minutos después, a las 4:56 horas".

Para el abogado Raúl Meza, representante de las víctimas, la formalización representó un "gigantesco triunfo", ya que "no tiene precedente en la historia judicial chilena, en cuanto a imputar delitos a autoridades políticas por las decisiones que toman en el ejercicio de su función pública", indicó al diario.

A principios de mayo de 2012, el Séptimo Juzgado de Garantía realizó la audiencia de formalización de la investigación judicial.

El video vuelve a la palestra

El mismo registro audiovisual que desnudó la descoordinación y confusión de las instituciones del Estado y que ya Canal 13 había difundido, volvió a aparecer un tiempo después.

En el extracto de la nueva versión, que se hizo pública a mediados de mayo de 2012, los audios de fondo que ambientaban las declaraciones a la prensa de la expresidenta Michelle Bachelet, y que parecían simple ruido, fueron clarificados con subtítulos en amarillo. Con estos arreglos se hizo evidente que los personeros de gobierno, reunidos esa madrugada en la Onemi, manejaban más información sobre la alerta del tsunami de la que la Mandataria entregó a los chilenos a través de los medios.

El video se reeditó y los audios que antes se escuchaban difusos ahora podían ser leídos mediante subtítulos. Se logra percibir un mensaje por radio que es recibido por un grupo de funcionarios de la Oficina. En los subtítulos se lee "atento, información dada por concejal de Juan Fernández... dice que ocurrió tsunami". El aviso se escucha con una voz baja y radial en el video mientras, con mayor volumen y en primer plano, aparece la

expresidenta Bachelet descartando a todos los medios de comunicación la catástrofe marítima.

Esta edición todavía se encuentra online en *YouTube*. En ella también se muestra a la exmandataria conversando con su asesora Angélica Álvarez, conocida como “la Jupi”, sobre víctimas en el archipiélago, asunto que Bachelet omitió en posteriores declaraciones a la prensa.

Este nuevo pasaje del denominado “caso tsunami” encendió los ánimos entre el gobierno y los defensores de la expresidenta. El vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick, declaró a los medios que de ser efectiva la denuncia constituiría un hecho grave. Desde la Concertación acusaron una “grosera campaña de desprestigio” en contra de la exjefa de Estado.

El incidente reanudó la labor de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la que antes ya había aprobado un informe sobre el mismo tema que atribuía responsabilidades políticas a exrepresentantes del gobierno de Michelle Bachelet.

El informe concluyó que la exmandataria ocultó información sobre el tsunami que afectó a la Isla Juan Fernández. Cabe mencionar que el documento, así como la mayoría del desarrollo de la Comisión, fue aprobado solo por los diputados oficialistas. La Concertación se ausentó en la mayor parte del último período de las sesiones de la investigación.

Diligencias pendientes y el silencio de Bachelet

Mientras esto sucedía en la arena política, la veta judicial también presentó novedades. A mediados de junio de 2012 y a través del abogado Juan Vasseur las familias de 69 víctimas del tsunami presentaron la mayor demanda colectiva que se haya entablado contra el Estado de Chile, cuyo monto asciende a 66 mil millones de pesos. Esto sucedió después de la primera reunión entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y representantes de parte de los 181 fallecidos finales del maremoto para explorar una fórmula que permitiera evitar un largo juicio y llegar a un acuerdo.

El monto indemnizatorio al que aspiran unos 200 familiares directos de las víctimas es de 300 millones de pesos para que se “compense el daño sufrido”, según señaló Vasseur.

Hasta hoy, el “caso tsunami” y la demanda colectiva están abiertas y en desarrollo.

En noviembre de 2012 Patricio Rosende, exsubsecretario del Interior de Michelle Bachelet, requirió el sobreseimiento definitivo del caso en el que figura como imputado por la fiscal Solange Huerta.

El abogado de las familias querellantes por las decenas de muertos que dejó la tardía alerta de tsunami, Raúl Meza, anunció que en la misma audiencia que pidió Rosende fijada para marzo de 2013, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, solicitará que se discuta la eventual formalización de cargos en contra de la expresidenta Michelle Bachelet. “Que se discuta y exponga por parte de la fiscal Huerta las razones jurídicas y penales que ha tenido para no formalizar a la expresidenta Michelle Bachelet”¹⁵, manifestó el abogado.

“Rechazamos categórica y enérgicamente la solicitud de sobreseimiento definitivo del exfuncionario del gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende”, afirmó Meza, y declaró la oposición desde el punto de vista penal y procesal a dicha petición por estimar “que existen antecedentes jurídicos graves, calificados y fundantes en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público que tendría responsabilidad penal por cuasidelito de homicidio reiterado en contra de 156 compatriotas muertos el 27F por no haber dado la alerta oportuna de tsunami y haber evacuado a la población de las costas del centro sur del país”¹⁶.

El 17 de diciembre de 2012, ante la solicitud de la fiscal Solange Huerta por más tiempo para realizar diligencias pendientes, el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez, fijó la postergación del cierre del “caso tsunami” por cuatro meses más. Con esto la investigación terminaría el 17 de abril de 2013. Álvarez

15 Radio Bío-Bío, 21 de noviembre de 2012. “Querellante en el Caso Tsunami solicitará formalización de cargos contra Bachelet”, Alberto González/UPI.

16 Radio Bío-Bío, 21 de noviembre de 2012. “Querellante en el Caso Tsunami solicitará formalización de cargos contra Bachelet”, Alberto González/UPI.

también programó la audiencia para el 25 de marzo de 2013, donde se definirá la solicitud de sobreseimiento en el caso de tres imputados: Andrés Enrique, asesor técnico del director del SHOA, Patricio Rosende y Carmen Fernández.

En vísperas de la Navidad 2012, el lunes 24 de diciembre, familiares de las víctimas del tsunami se dirigieron hasta la casa de la expresidenta Michelle Bachelet para entregarle una carta en la que expresaron su dolor por la ausencia de sus seres queridos en las festividades de fin de año.

La exmandataria se encontraba en el país por motivos familiares y había emitido escuetas declaraciones en relación a la expectación sobre su eventual candidatura presidencial tres días antes de la visita de los querellantes: “Creo que hay que bajar la angustia, hay tiempo suficiente, hablemos en marzo”¹⁷, dijo a los periodistas que la esperaban en un breve punto de prensa afuera de su residencia en La Reina.

El abogado de las familias afirmó que a través de la carta a la exmandataria le solicitaron que “pida perdón por la actuación de las autoridades políticas de su gobierno que estuvieron presente el 27F en la Onemi”. Además, le exigieron que “se presente voluntariamente a declarar ante la fiscal Solange Huerta”¹⁸.

Aterriza Piñera en el Estado

Al comienzo, tan apremiantes e impredecibles fueron las consecuencias de la catástrofe, que incluso la misma Presidenta Michelle Bachelet, aún en el gobierno, decidió cambiar su agenda y suspender una campaña publicitaria destinada a promover los beneficios sociales entregados en su administración.

La propaganda contaba con un presupuesto de 120 millones de pesos y tenía como fecha de inicio el 1 de marzo de 2010. Sería intensa durante nueve días, uno antes de entregar el mando a Sebastián Piñera. La idea de la publicidad que circularía por radio y televisión era mantener la popularidad al alza de la Presidenta que la ubicaba con el 84

17 *La Tercera*, 21 de diciembre de 2012. “Creo que hay que bajar la angustia, hay tiempo suficiente, hablemos en marzo”, Paula García y Pablo Cádiz.

18 Radio Cooperativa, 27 de diciembre de 2012. “Familiares de víctimas del 27-F emplazaron a Bachelet a comparecer ante la fiscal”, *EFE*.

por ciento de aprobación nacional.

Pero la campaña se suspendió. Aunque Bachelet conservó altos niveles de aceptación, se le abrió un primer flanco que traería muchas críticas al último gobierno de la Concertación: el manejo de la catástrofe. Y, según la Coalición por el cambio, las decisiones tardías que se tomaron y que tuvieron consecuencias fatales.

Horas después del sismo, el domingo 28 de febrero, Bachelet anunció una reunión con el Presidente electo Sebastián Piñera para entregarle toda la información de las labores de ayuda y coordinación relacionadas con el terremoto.

Esa misma tarde, el gabinete ya designado por el nuevo Presidente trabajaba en el que fue su comando de campaña. Su objetivo era mantenerse plenamente informados de las medidas que tomaba el último gobierno de la Concertación, de modo de conducir el trabajo después del cambio de mando. Con este gesto, los futuros ministros Rodrigo Hinzpeter, Cristián Larroulet y Ena Von Baer comenzaron a estampar el principio que la Coalición deseaba que fuera el sello del nuevo período: "La excelencia".

Piñera anunció que preparaba un plan especial de reconstrucción, el cual pondría en marcha cuando asumiera el gobierno, el 11 de marzo. Según señaló el Mandatario, incluía "reasignaciones y la solidaridad del mundo de la empresa privada". En conferencia de prensa explicó que estaban "trabajando en un plan de reconstrucción bajo el concepto de 'Levantemos Chile'".

Esa fue la actitud con que Sebastián Piñera Echeñique, un empresario seducido por la política, llegó al palacio de gobierno. El entonces militante del Partido de Renovación Nacional (RN) renunció una vez asumido el mando presidencial, como lo estima el reglamento de la colectividad. El hombre emprendedor, de gran fortuna, que quería empezar a tomar decisiones de Estado, triunfó en las elecciones con su propuesta gobierno y la tesis del desalojo bajo el brazo. Piñera recibió su mandato el 11 de marzo de 2010, como el primer Presidente de derecha elegido por la vía democrática en Chile desde 1958.

Ante el desgaste progresivo que presentó la Concertación, la campaña de Piñera

logró convencer a los críticos y desencantados. En primera vuelta construyó un equipo denominado Grupos Tantauco, un programa, discurso y estética que desde la derecha intentó alcanzar al centro, para desestabilizar el núcleo de la coalición del arcoíris.

Ninguno de los candidatos alcanzó el 50 por ciento más uno, necesario para triunfar en las elecciones de diciembre de 2009. Eduardo Frei Ruiz Tagle y Sebastián Piñera, por ser los más votados, pasaron a la segunda vuelta electoral.

La Alianza por Chile pasó a llamarse Coalición por el Cambio, una vez que se incorporó el movimiento Chile Primero, liderado por el exconcertacionista Fernando Flores. En la segunda vuelta sus dirigentes continuaron con su estilo esquivo a los temas controversiales asociados a la derecha conservadora y al pasado dictatorial del país. Lograron captar adeptos de candidaturas ajenas que quedaron fuera de la carrera presidencial y triunfaron con una campaña versátil, ambigua y con acento centrista, por lo menos en la estética y en el discurso.

Sebastián Piñera antes de llegar a La Moneda había sido senador de la República por la circunscripción Santiago-Oriente entre 1990 y 1998. Postuló en dos oportunidades a la Presidencia del país: la primera en 2005 y fue derrotado por Michelle Bachelet, y en 2009, cuando le ganó al demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la segunda vuelta de enero de 2010.

Pero Piñera no llegó solo al gobierno y a la dirección del Estado. La plataforma que lo apoyó estaba compuesta por RN y la UDI, unidos en la Alianza por Chile. Con el triunfo llegaron al Estado militantes, asesores variopintos y centros de pensamientos afines, como el Instituto Libertad, ligado a RN, y Libertad y Desarrollo (LyD), vinculado a la UDI. También predominó su relato. El que habla de “los mejores”, el de las chaquetas rojas, el “todo terreno”, el “24x7”, o el “de los empresarios y gerentes”, como lo calificaron las miradas más críticas a su proyecto.

De los 22 ministros iniciales que conformaron el gabinete, once eran dueños o fueron gerentes de alguna gran empresa privada, trece se declaraban “independientes” de los partidos políticos; seis eran ingenieros civiles; 16 eran profesionales egresados de la Pontificia Universidad Católica de Chile y catorce tenían postgrados en el extranjero.

Asumir entre réplicas

En el Congreso Nacional los arreglos florales dieron la primera señal. Un leve movimiento en las flores blancas y en los maceteros hizo temer lo peor. En pocos segundos, y ante la mirada atónita de los invitados, en su mayoría extranjeros, tres fuertes sismos, dos de los cuales tenían graduación de terremoto, fueron los convidados de piedra en la ceremonia de cambio de mando que protagonizó el primer Presidente de derecha electo después de medio siglo. Sebastián Piñera Echeñique recibió la banda presidencial el jueves 11 de marzo de 2010.

El príncipe Felipe de Borbón de España se puso pálido: “Si los chilenos están tranquilos, yo también”, expresó aterrado, según recuerda el demócrata cristiano Jorge Pizarro¹⁹, presidente del Senado en ese momento. La Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, pidió un celular: “No me asusté”²⁰, aseguró después. La exmiss Universo Cecilia Bolocco y el tenista Fernando González se mantuvieron calmados.

Todos miraron hacia el cielo esperando la caída de las imponentes lámparas que iluminaban el Congreso de Valparaíso. Los encargados de sacar adelante la ceremonia y mantener el control de la situación, como el Presidente del Senado, recibían discretos informes del edecán naval Sergio Jaman.

En ese momento, en las calles, desde la Cuarta a la Décima Región, se vivía un caos. Carabineros con megáfonos y en camionetas trasladaban ancianos y discapacitados hasta las zonas más altas de cada ciudad. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter viajó de urgencia a Santiago para coordinar en terreno las acciones de la Onemi.

En el Palacio del Cerro Castillo, donde estaba programada una reunión de trabajo que finalmente se suspendió, el Presidente recién asumido llamó a la calma: “Ha sido un cambio de mando con mucha emoción, muy significativo. Tuvimos tres réplicas y en este instante hay alerta de tsunami que es preventiva y no queremos alarmar a nadie, sino

19 Entrevista realizada a Jorge Pizarro por las autoras de esta Memoria. 1 de agosto de 2011.

20 *Ciper*, 12 de marzo de 2010. “La réplica, los nervios y el escaso protocolo que deslucieron el cambio de mando”, Sebastián Minay.

tomar todas las precauciones necesarias y prevenir accidentes. Seguir las instrucciones de las oficinas de emergencia, es mejor prevenir que curar”, dijo.

La Primera Dama, Cecilia Morel, se hizo cargo de las delegaciones extranjeras en Cerro Castillo y Piñera piloteó su helicóptero hasta Rancagua para apreciar en terreno los daños en la zona huasa.

La ceremonia fue transmitida por la televisión abierta y la audiencia bromeó en tiempo real en las redes sociales de internet sobre el significado de la coincidencia de las réplicas y la asunción del Mandatario. “Ni la tierra lo quiere”, escribieron algunos, “es yeta”, aseguraron otros. El comentario fue recordado de forma insistente en los encuentros sociales de la Concertación, según confesó el senador Jorge Pizarro en entrevista con las autoras de esta Memoria.

Una movida ceremonia

La primera gran réplica ocurrió a las 11:41 de la mañana, cuando Michelle Bachelet y Sebastián Piñera aún iban rumbo al Congreso. La mayoría de los invitados y el público ya se encontraban en sus puestos; presidentes extranjeros, ministros entrantes y salientes, más diversas autoridades conversaban hacía un buen rato sobre la alfombra roja.

En el exterior del Congreso, apostados justo en la Avenida Argentina con Pedro Montt un grupo de entusiastas gritaban “¡Viva Chile y Pi-no-chet!” y “¡El que no salta es Ba-che-let!”. Instalado en la testera el recién asumido Jorge Pizarro recibió de boca del edecán naval del Senado, Sergio Jaman, las primeras informaciones del remezón que generó alerta de tsunami. Decidió continuar con la ceremonia.

El senador por la Región de Coquimbo, Jorge Pizarro recuerda que la mayoría de los asistentes se quedaron tranquilos y otros ni siquiera percibieron el movimiento. Todos participaban de la republicana ceremonia, ya sea ocupando un asiento, recorriendo las dependencias del Congreso o haciendo vida social. Para quien el movimiento -grado 6,4- no pasó inadvertido fue para el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien “no pudo más y partió rumbo a la salida junto a un grupo de asistentes asustados”, recuerda Pizarro. A

los pocos minutos, acompañado por guardias, Uribe debió volver a su puesto por razones de seguridad.

Eran las 12:18 y la ceremonia estaba a minutos de comenzar. La Mandataria Michelle Bachelet se ubicaba sobre la alfombra roja y a los aplausos, vítores y gritos aislados del tipo “¡Vuelva luego, Presidenta!”, se sumó una segunda réplica de 7,2 grados. Fue la más fuerte de la jornada y tuvo características de terremoto.

Pasado el movimiento, la todavía jefa de Estado se instaló en su puesto. El edecán del Senado ya le había informado de la magnitud del sismo, y decidió que solo si esta era igual o superior a 7,5 grados había que preocuparse.

Antes que entrara Sebastián Piñera al salón principal se produjo el segundo movimiento, un poco menos intenso y más breve que el que despidió a Michelle Bachelet. “Ahí yo pensé, si esta cuestión sigue así capaz que tengamos que suspender. Se me acercó el edecán de nuevo, me informó del grado del terremoto y yo le dije 'sigamos no más, pero hagámosla cortita’”, rememora Jorge Pizarro.

El senador por la decimocuarta Región de Los Ríos y contendor del Presidente Sebastián Piñera en las últimas presidenciales, Eduardo Frei Ruiz Tagle, recuerda²¹ que vivió ambos remezones “con la tranquilidad y normalidad que se viven las tradiciones propias de una democracia, y ciertamente con el agregado de que se estaba iniciando una nueva etapa en la historia política de nuestro país”.

Errores de protocolo

El momento exacto en que la Concertación le traspasó el poder a la derecha estuvo más plagado de nervios, imprevistos, increíbles descuidos y emociones, que de símbolos y gestos republicanos.

La tensión propia de la histórica ceremonia, el ánimo de un país terremoteado y la violenta seguidilla de sismos determinaron el tono que tendría la cita.

21 Entrevista realizada a Eduardo Frei Ruiz-Tagle por las autoras de esta Memoria vía correo electrónico. 12 de abril de 2012.

Asumía un Presidente que esperaba llegar a La Moneda por lo menos desde hace 20 años. Era tal el nivel de emoción del Mandatario y de su círculo, que sus excompañeros del colegio Verbo Divino le mandaron a hacer a Francia la banda presidencial que luciría en el cambio de mando. El artículo de fina tela francesa costó cerca de 800 mil pesos, según informó el 12 de marzo de 2010 *Ciper*²².

Michelle Bachelet se sacó la réplica de la medalla de O'Higgins, el verdadero símbolo del traspaso de poder e intentó infructuosamente ponerla en la flamante banda. "No tengo dónde ponerla", le musitó al presidente del Senado. "Amárremela", recuerda Jorge Pizarro que dijo Piñera, tratando de controlar los nervios.

El gran detalle es que la exclusiva banda no tenía un gancho para afirmar la piocha. El senador Pizarro buscó ayuda y el edecán del Senado, Sergio Jaman, fue quien salvó la situación al sacarse el alfiler de una de sus medallas.

Las réplicas habían parado y todo indicaba que la ceremonia seguiría su curso protocolar, con el nombramiento de los ministros del nuevo gabinete. Jaman se acercó de nuevo al senador demócrata cristiano para entregarle las últimas novedades: "Presidente, la Escuadra dio orden de zarpar alta mar. Apenas podamos tenemos que evacuar aquí", le dijo.

Cuando llegó el momento de la esperada primera alocución formal del Presidente Piñera ocurrió tal vez lo más inesperado de la jornada. Los encargados de protocolo del nuevo gobierno olvidaron imprimir el texto de juramento con el que el Jefe de Estado empoderaría a sus nuevos ministros y se dirigiría por primera vez al país.

Jorge Pizarro recuerda que ya se había ido Michelle Bachelet del Congreso y Sebastián Piñera le preguntó a él por el texto. "No sé Presidente, eso es suyo, no es responsabilidad nuestra", le dijo.

El secretario del Senado, Carlos Hoffman y Jorge Pizarro debieron musitarle las

²² *Ciper*, 12 de marzo de 2010. "La 'réplica', los nervios, la piocha y el escaso protocolo que deslucieron el cambio de mando", Sebastián Minay.

frases de rigor. Al senador DC le sorprendieron las habilidades del recién asumido Presidente: “Este gallo tenía una capacidad de retención y de memoria fotográfica impresionante, porque nadie se dio cuenta que cuando tomaba el juramento estaba repitiendo lo que nosotros le habíamos dicho recién, leyendo las notas que había apuntado. Al final lo dijo mirando como si hubiera tenido un *teleprompter*²³”, rememora.

El sentir concertacionista

El exministro de Defensa del período de Michelle Bachelet, Francisco Vidal, recuerda con indignación el cambio de mando. Para él, Sebastián Piñera no ganó, sino que “nosotros perdimos el norte, por eso estaba amurrado, choreado, molesto”²⁴. Lo objetivo, dice, es que “temblaba mucho y lo subjetivo es qué le pasa a uno cuando entrega el mando a la derecha. Yo estaba ofuscado”, confiesa.

La distribución de los puestos en la ceremonia de cambio de mando es protocolar y para mala suerte del extitular de Defensa, le correspondió sentarse al lado de Andrés Velasco, ministro de Hacienda. Las relaciones entre ambos, siempre complicadas, se tensionaron todavía más cuando pasada la elección Vidal afirmó a través de la prensa que Andrés Velasco era el principal responsable de que la Concertación perdiera. Aunque después suavizó sus dichos, ninguno de los dos estaba cómodo en los asientos contiguos de la ceremonia.

“Yo estaba furioso y Velasco aplaudía muy entusiasmado, casi de pie. Para mí que gobierne la derecha es un retroceso, para él es una alternativa y así no podemos trabajar”, reflexiona el exministro Francisco Vidal sobre aquel 11 de marzo de 2010, instalado en su oficina de la Fundación Chile XXI en La Reina.

Al momento del cambio de mando, el senador de la Región de Los Lagos, Camilo Escalona estaba parado justo al centro del pasillo y observaba cómo una lámpara en el techo se movía de forma particular. Había intranquilidad en el ambiente, pero él afirma que en lo único que pudo pensar fue en que “la división nos llevó a la derrota, nada más, que es lo que siempre he pensado: que la desunión de las fuerzas progresistas determinó

23 Aparato electrónico usado en televisión que refleja el texto de la noticia, previamente cargado en una computadora, en un cristal transparente que se sitúa en la parte frontal de una cámara.

24 Entrevista realizada a Francisco Vidal por las autoras de esta Memoria. 2 de agosto de 2011.

el triunfo de la derecha”.

Accede a detallar su percepción del ambiente de aquel día, para después pedir que no se le pregunten más “nimiedades” en la entrevista concedida para esta Memoria. Recuerda que con la réplica se puso un poco nervioso. “Pero tengo la ventaja de que soy una persona tranquila así que no me da pánico ni histeria. Solo esperé que se cumpliera el mandato constitucional de jurar”, señala en su oficina en el ex Congreso Nacional.

CAPÍTULO II

UN TERREMOTO, VARIAS CATÁSTROFES

En los años 90 se comenzaron a construir en distintas comunas de Santiago edificios para vivir en altura, de menor superficie y grosor en sus paredes, en comparación a los tradicionales. Aparecieron en Santiago Centro, Macul, Maipú y Ñuñoa. A medida que la capital recibe más población, se han multiplicado en varias comunas.

Este tipo de construcciones experimentó su prueba de fuego durante el terremoto de 2010. Las casas y edificios que se dañaron, vivieron su desplome material y azotaron contra el piso las proyecciones de cientos de chilenos que vieron cómo su “casa propia”, todavía adeudada y pagándose en dividendos, se transformaba en un lugar inhabitable con daño estructural.

La madrugada del 27 de febrero Alejandra Monasterio despertó exaltada. Después de cerciorarse de que su familia y su casa estaban en buen estado, pensó en su departamento del edificio Don Luis de Maipú que mantenía en arriendo.

“Creo que a los 30 segundos del terremoto, se empezó a desmoronar la construcción, a quebrarse los ventanales, a hundir el suelo y a caerse encima el piso de arriba”, recuerda Alejandra Monasterio gracias a los testimonios que después escuchó de sus vecinos.

Marco Ortiz²⁵, propietario del departamento ubicado un piso más arriba del de Alejandra, lo vivió en primera persona junto a su señora Marisol y tres hijos: Ademir, Benjamín y Axel, que en ese entonces tenían 16, ocho y dos años. “Estábamos durmiendo. Cada vez que empieza a temblar instintivamente me levanto y abro las puertas, lo hice y tomé conciencia del terremoto recién en ese momento. Como no paraba, me devolví a buscar a los niños. Mi señora estaba preocupada de la guagua. Mientras, los dos mayores bajaban por las escaleras, vino el remezón fuerte, y el mayor

25 Entrevista realizada a Marco Ortiz por las autoras de esta Memoria. 10 de marzo de 2012.

se hirió los pies”, detalla.

Ortiz cuenta que gracias a que su suegro vive a dos cuadras del edificio, esa noche contaron con techo para sus hijos. El matrimonio se quedó despierto, cuidando su departamento y pertenencias que permanecían en las ruinas afuera del inmueble; nadie se atrevió a dormir dentro porque “en cualquier minuto el edificio se venía abajo”.

Con el pasar de los días, las emociones y pensamientos ante la catástrofe fueron cambiando entre los vecinos. “Dejando de lado el *shock*, está claro que esto fue una estafa: se nos ofreció mediante una oferta verbal y escrita un producto de alta calidad, que debe cumplir las normas sísmicas. Frente a eso, nosotros creímos y nos endeudamos en créditos hipotecarios, no eran departamentos baratos: costaban 30 millones de pesos en promedio. Hay cerca de seis personas que compraron al contado, el resto todos nos endeudamos como la mayoría de los chilenos, a 25 o 30 años”, explica Alejandra Monasterio en un café de Plaza Italia.

Revisa su cartera, busca el encendedor y prende un cigarro antes de describir el perfil de sus vecinos: “Eran matrimonios o profesionales jóvenes, con su primera vivienda. También había abuelitos, jubiladas, que vendieron una casa grande y con ese dinero compraron el departamento”, dice la expropietaria.

El edificio Don Luis fue declarado inhabitable. Su primer piso, construido para estacionamientos, colapsó, rompió las murallas que lo sostenían y cayó encima de los autos de la comunidad.

En paralelo a la entrega de los certificados de inhabilitación, cada familia tuvo que seguir una ruta de trámites con los bancos y aseguradoras. Las entidades crediticias, a través de una liquidadora de seguros, enviaron inspectores para que evaluaran la situación y les emitieran informes. El proceso demoró meses, casi un año en el caso de Marco Ortiz y su familia.

Alejandra Monasterio y Marco Ortiz no solo vivieron de forma distinta el terremoto, también las posteriores negociaciones. Ella, exjefa de Servicio al Cliente de Fallabella.com y actual productora de eventos, lidió con el Banco del Estado. Marco Ortiz

es técnico electrónico y se desempeña como administrador de sistemas, él se enfrentó a Consorcio Nacional de Seguros. En lo que coinciden ambos es que eran deudores de un crédito hipotecario por una propiedad que sus respectivos bancos aseguraron deficitariamente. El departamento de Monasterio costó mil 660 Unidades de Fomento (UF)²⁶, un poco más de quince millones, y BancoEstado lo aseguró por 932 UF; el de Ortiz costó lo mismo y Consorcio lo resguardó por mil cien UF.

Durante meses fue una posibilidad que las diferencias tuvieran que ser cubiertas por los mismos damnificados. Con rabia y decepción la comunidad no aceptó que los escombros, además de simbolizar el derrumbe de sus sueños de movilidad social, empezaran a representar una deuda crónica que no querían, y en muchos casos, no podían pagar. Sobre todo pensando que varios tuvieron que comenzar a costear arriendos o embarcarse en nuevos créditos para una vivienda propia definitiva.

El edificio Don Luis estaba compuesto por 40 departamentos de 39 propietarios distintos. Este inmueble fue uno de los más de 20 que vivieron las consecuencias del terremoto en alturas poco sólidas del Santiago emergente.

En Concepción se contabilizaron por lo menos nueve edificios en una situación similar.

“Estuve tres horas pensando que me iba a morir”

“Un nuevo barrio residencial se consolida en Concepción. De la mano de constructora Socovil, en un renovado sector, lo invitamos a conocer Condominio Alto Río. Con maravillosas vistas de la capital de la Región, se distingue por su bello diseño y calidad constructiva”. Así se promocionaba en un video corporativo el edificio reconocido en todo Chile por ser una de las más dramáticas postales del terremoto. La imagen tomada desde altura que muestra al edificio de quince pisos tumbado de espaldas en la ciudad penquista es recordada hasta hoy por la mayoría de la población.

Entre mil 200 y dos mil 500 UF costaba cada uno de los 113 departamentos

26 Unidad de Fomento o UF cuya equivalencia en pesos a diciembre de 2012 es de 22 mil 888 pesos.

repartidos en los quince pisos del edificio ubicado a siete cuadras del centro de Concepción.

En el piso once vivía la psicóloga Mónica Molina²⁷, quien al relatar su experiencia se nota todavía afectada. “Pensé que me iba a morir, no tenía ninguna esperanza que nos fueran a rescatar. Yo viví eso como un cataclismo, me imaginé que la mayoría de los edificios altos de Concepción estaban en el suelo. Mi departamento daba hacia el río y después del terremoto quedamos mirando hacia el cielo”, cuenta. “A mí me rescataron del edificio el sábado en la mañana. Antes de escuchar a los rescatistas estuve lidiando tres horas con el pensamiento de que me iba a morir ‘ahora ya’, no sabía el cómo, pero tenía esa certeza”, describe por teléfono desde Concepción.

Mónica Molina dice que después de esas tres horas empezó a tener más esperanza de vida, cuando escuchó las balizas de los bomberos y sus gritos de coordinación. “En ese momento pensé ‘tenemos oportunidad de que nos rescaten’”, dice.

Un bombero se asomó por la ventana de su pieza, que la estaba aplastando. El edificio se encontraba tumbado en el piso, lo que tenía a sus paredes en posición horizontal al suelo y cada vez más proclive a colapsar sobre los cuerpos de sus habitantes. A pesar de la dificultad de la visión nocturna la psicóloga agarró una polera para hacerle señales.

“Ahí vio dónde estaba ubicada y como a las dos horas después apareció otro bombero con una escalera. La sostuvo desde arriba porque no podía apoyarla en el muro. Tuve que saltar hacia ella, antes que todo se viniera abajo. El bombero nunca entró al edificio, yo salí y subí sola. Una vez afuera tomé conciencia de que éramos el único edificio que se había caído completamente al suelo”, narra Mónica Molina y la velocidad de sus palabras se acelera cada vez más.

Ya a salvo, fue de las primeras en ayudar al resto de sus vecinos. Cuenta que desde el primer momento su profesión le permitió contener psicológicamente a los siniestrados.

27 Entrevista realizada a Mónica Molina por las autoras de esta Memoria. 10 de julio de 2011.

Al pasar los días comenzaron a organizarse como damnificados. “Fue un proceso complejo, porque era una comunidad nueva, se habían realizado solo dos reuniones. Yo había llegado recién, no conocía a nadie, pero sospechaba que era necesario que nos organizáramos porque esto no podía quedar así”, dice Molina. Continúa explicando cómo se organizaron: “Me acerqué a la Radio Bío-Bío para tratar de convocar a las personas que estaban en el edificio. Llegaron varias a la plaza, tomé sus datos, sus teléfonos, sus correos electrónicos. Ahí se generaron algunas reuniones para coordinarnos, para ver qué íbamos a hacer y compartir información porque no habían servicios básicos y poca gente tenía radio a pilas, que era la única forma de comunicación que quedó durante varias semanas en Concepción”.

De esas reuniones surgió la necesidad de trabajar con abogados porque la comunidad temió que la Constructora e Inmobiliaria Socovil pudiese traspasar su patrimonio a otra figura legal o se declarara en quiebra.

Mónica Molina representa a quienes se organizaron y establecieron la demanda con el estudio de Fernando Saenger. Son alrededor de 35 familias que habitaban varios de los 113 departamentos del edificio.

Esa noche los rescatistas lograron sacar a 119 personas de los escombros. Ocho vecinos murieron, entre ellos la esposa de Marcelo González y el hijo de ambos, de nueve meses. González presentó una querrela por cuasidelito de homicidio contra los responsables del derrumbe de Alto Río y la consecuente muerte de su esposa, la abogada Paola Herrera y el niño.

Al ataque del centro histórico

En algunas zonas del país subsistían verdaderos oasis no colonizados aún por el auge inmobiliario. En el centro histórico de Talca y en el sector poniente de Santiago, en el Barrio Yungay, vivían hasta antes del terremoto familias humildes en casas espaciosas, a pasos de los servicios y centros cívicos de las ciudades. Pero después del terremoto supieron de la vulnerabilidad en que los dejó el megasismo de 8.8.

Los habitantes del Barrio Santa Ana, ubicado en el histórico centro de Talca,

llevaban en promedio 16 años viviendo en el sector. La mayoría eran arrendatarios en casas antiguas, de adobe, pero muy amplias, tanto así, que les permitía vivir en el mismo terreno con tres o cuatro familias más para abaratar los costos.

A los pocos minutos del terremoto, los habitantes tomaron conciencia de que las cosas habían cambiado. Vieron derrumbarse sus casas, pero se mantuvieron tranquilos porque, al menos, no había pérdidas humanas. Pero al tercer día, la tragedia ya era elocuente.

Marcos Peña vivía hace doce años en el casco histórico de la ciudad. Se fue de Santiago buscando una localidad más calmada, pequeña y con mejor calidad de vida. Después de arrendar en varios sectores del centro, llegó en 2005 al Barrio Santa Ana, en compañía de su hija, que tenía seis años en esa época. Levantó, a pocas cuadras de su vivienda, en pleno centro de Talca, un pequeño negocio donde fabricaba avisos publicitarios de neón. Ese ingreso, más algunos trabajos de ocasión, le permitían vivir sin apuros.

El 27 de febrero de 2010, Marcos y su hija de doce años dormían. En fracción de segundos el movimiento de 8.8 grados trizó paredes, rompió vidrios y botó muebles. Marcos alcanzó a salir al patio, antes que se derrumbara la antigua construcción de adobe que los alojó por seis años.

A unas cuadras de su vivienda, en el mismo centro histórico de la capital de la Región del Maule, la Escuela Las Concentradas resistía el sismo. El antiguo edificio no se cayó, pero como gran parte de la infraestructura escolar talquina, sufrió serios daños, lo que obligó a retrasar el inicio de clases en dos meses.

Marcos Peña, ya sin casa, decidió ocupar el terreno que arrendaba. Vivía solo con su hija y no con otras familias, como la mayoría de los habitantes del Barrio Santa Ana, ya que el negocio de los avisos de neón se lo permitía. Instaló una carpa y a poco andar se dio cuenta que las condiciones eran riesgosas para su hija: las enfermedades del invierno doblegaron su voluntad. “Con mucha tristeza, tuve que mandarla con la mamá, porque era

imposible la vida después del terremoto, no la podía tener en una carpa o un *container*²⁸, detalla desde Talca, en entrevista con las autoras.

El *container* llegó después del primer invierno. Un hermano que vive en Santiago se lo consiguió y le ayudó a instalarlo en el terreno del centro histórico. En ese mismo espacio, Marcos Peña debió ubicar el laboratorio de neones, ya que el antiguo local que arrendaba se derrumbó.

“Viviendo en gallineros”

Para el conjunto de afectados del Barrio Santa Ana, a quienes Marcos Peña representaba como dirigente en junio de 2011, no ha habido reconstrucción y ni siquiera consideran superada la emergencia provocada por el terremoto. “No hay ningún miramiento por la situación que está viviendo la gente. Algunos habitan mediaguas, arriendan en otro lado o derechamente viven en un gallinero”, recuerda.

La dureza de la situación que describe Peña se acrecienta cuando las familias que arriendan en otros terrenos del centro histórico deben seguir pagando contribuciones de Bienes Raíces, por una casa que ya no tienen y por las que siguen llegando cartas de la Tesorería General de la República anunciando incluso remate de las propiedades. “Imagínate que llegue una carta que dice que debes 200 mil pesos y si no los pagas en 30 días te rematan una propiedad que vale 20 o 30 millones de pesos. Es demoledor”, asegura.

La situación de la mayoría de los habitantes del Barrio Santa Ana es la de arrendatarios o allegados. Esta condición disminuye sus posibilidades de seguir viviendo en el mismo terreno o en otro lugar del centro histórico. Eso es lo que Marcos Peña y sus vecinos han sufrido, pese a que en teoría la política de reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), de marzo de 2010, los considera en una de las siete soluciones habitacionales propuestas que se ajustarían a distintas realidades posterremoto.

28 Entrevista realizada a Marcos Peña por las autoras de esta Memoria. 11 de junio de 2011 en Talca.

Entre estas soluciones está la reconstrucción de conjuntos del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) con severos daños, la reconstrucción de ciudades y pueblos costeros, la recuperación de vivienda colapsada, la reconstrucción en zonas típicas chilenas, el apoyo a la clase media damnificada, el subsidio de reparación y las soluciones a damnificados sin casa ni terreno²⁹.

Esta última opción contempla a “familias en condición de extrema vulnerabilidad social acreditada, sin vivienda a causa del terremoto o maremoto, que estuvieran allegadas en construcciones que resultaron con destrucción total, que habitaran en viviendas destruidas sin título de propiedad y en zonas de riesgo”, según consta en el informe del Minvu, “Chile Unido Reconstruye Mejor”.

La incertidumbre de Las Concentradas

La Escuela Las Concentradas tiene 105 años de antigüedad, se ubica frente al mercado y es el segundo establecimiento con mayor cantidad de matrículas en la Región del Maule. Es un complejo municipal de dos escuelas, una mixta y otra de niñas: Carlos Salinas Lagos, que alberga a mil 176 estudiantes de educación básica, y José Manuel Balmaceda y Fernández, que en 2009 tenía una matrícula de mil 74 estudiantes de básica.

El edificio fue declarado inhabitable por la Dirección de Obras Municipales y el Ministerio de Educación. En entrevista con las autoras de esta Memoria, la presidenta del Centro de Padres de la Escuela Carlos Salinas Lagos, Gladys Núñez, indicó que los informes resolutivos emanaron de meras “inspecciones oculares”.

En mayo de 2010 la dirección decidió reubicar en otros colegios a los estudiantes, con el objetivo de no seguir retrasando el inicio de clases. Los alumnos de Carlos Salinas Lagos comenzaron a asistir a la Escuela Carlos Spano, en el sector Independencia de la ciudad de Talca, mientras que la Escuela José Manuel Balmaceda y Fernández comparte, desde junio de 2010, espacio físico con el Liceo Diego Portales.

29 Información obtenida por Ley de Transparencia en el Programa de Reconstrucción Nacional de Vivienda *Chile Unido Reconstruye Mejor*, del 29 de marzo de 2010.

Gladys Núñez cuenta que a casi tres años del terremoto, los niños siguen sin escuela definitiva. Ahora todos los mil 176 niños de prekindergarten a octavo básico están albergados en la escuela Carlos Spano que tiene capacidad para 600 alumnos. “Estaban en nueve salas modulares y en el verano 2011 era espantoso, pero pusieron aire acondicionado. Después lo que pedimos fue que por favor pusieran un techo para que los niños pudieran salir de la sala cuando llueve”, dice Núñez.

Lo impactante es que de los arreglos de las salas modulares no se hace cargo el Mineduc ni la municipalidad, sino que son los propios apoderados los que reúnen dinero y hacen pequeñas mejoras. “Es que no podemos permitir que los niños se mueran de calor o pasen frío”³⁰, manifiesta la presidenta del Centro de Padres.

La Escuela Carlos Spano, antes de recibir a los estudiantes de Las Concentradas tenía jornada completa, pero debieron modificar su rutina para hacer clases solo en la mañana. En la tarde debían ocupar el espacio los compañeros nuevos, que no alcanzaron en las salas modulares. A la hora del almuerzo la dinámica no es mejor: los que entran a clases a las tres de la tarde deben esperar afuera del comedor hasta que el primer turno termine de almorzar. Ahí recién pueden hacerlo ellos, porque el espacio del casino no da abasto. “Muchos niños y niñas entran a clases sin comer”, afirma Gladys Núñez.

Aunque a diciembre de 2012 esta situación se ha regularizado, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados insiste en que ella no ha visto ningún avance importante más que la demolición de una parte del edificio colapsado días antes de la elección de alcalde de octubre de 2012, votación en la que resultó electo por amplia mayoría Juan Castro.

El Consejo Municipal en su sesión del 20 de julio de 2011 decidió que la reubicación sería temporal mientras se repara la antigua construcción emplazada en la calle 1 Sur del centro de Talca. La votación fue tres a cinco y el alcalde independiente ligado a la Coalición por el Cambio, Juan Castro, valoró la decisión como “un asunto democrático que debe respetarse. Se ha logrado un acuerdo y hay que asumir esta

30 Actualización de entrevista realizada a Gladys Núñez por las autoras de esta memoria. 21 de diciembre de 2012

condición”, dijo al diario *El Centro*³¹, de la Región del Maule.

Los concejales que votaron a favor de restaurar las Escuelas fueron los miembros del bloque opositor al alcalde: Paulina Elissetche, Patricio Herrera, Carlos Ramírez, Rubén Albornoz y Manuel Saavedra. Por la postura de reubicarlas en avenida El Arenal con 1 Oriente, se inclinaron los concejales Luis Sebastián Vielma, Manuel Yáñez y Julio Cheriff de la Coalición por el Cambio. Las posiciones estuvieron divididas desde el principio y el propio alcalde, simpatizante de la UDI, no dudo en ser un actor más.

El 13 de abril de 2011 hubo una velatón por la continuidad de las Escuelas en la zona céntrica. Los apoderados, e incluso algunos concejales, se manifestaron junto a los directores de las escuelas y ONG's de la zona. Pero lejos de querer aquietar las aguas, menos de un mes después, el 5 de mayo de 2011 el alcalde Juan Castro afirmó al diario *El Centro* que Las Concentradas eran su mayor dificultad, en referencia a la férrea oposición que encontró en la ciudadanía su plan de demolición y reconstrucción de las Escuelas.

Según manifestó el alcalde Castro, días después del terremoto, el plan era utilizar los terrenos céntricos de las escuelas para levantar el Edificio Consistorial que le permitiría tener en un mismo espacio todas las oficinas municipales, muchas de las cuales quedaron sin oficina producto de la catástrofe. Las voces del Consejo Municipal más críticas a la gestión del alcalde creían en la versión del Edificio para dependencias municipales, pero también tenían fuertes certezas para sospechar que el alcalde aprovecharía de arrendar los primeros pisos del Consistorial para locales comerciales. No era la primera vez que la autoridad talquina intentaba cambiar de lugar a Las Concentradas.

El movimiento por la reparación de las Escuelas que lidera Gladys Núñez siente como una victoria que el Consejo Municipal haya decidido la reparación del establecimiento, que se ubica en la calle 1 Sur desde hace 105 años. Pero la lentitud del proceso los intranquiliza. En junio de 2011³², a la apoderada le preocupaba que “los niños estuvieran viviendo su segundo invierno ahí, los accidentes escolares han aumentado y

31 *Diario El Centro*, 21 de julio de 2011. “Escuela Las Concentradas no serán removidas del centro de la ciudad”, Claudio Rojas.

32 Entrevista realizada a Gladys Núñez por las autoras de esta Memoria. 10 de junio de 2011.

todavía no empiezan a reparar el edificio antiguo. Creemos que no hay voluntad del alcalde, porque él quería que la Escuela se fuera del centro”.

De acuerdo a lo que informó el diario *El Centro* de Talca³³, la Municipalidad de Talca se adjudicó más de cuatro mil millones de pesos otorgados por el Ministerio de Educación, a través del Plan de Reparaciones Mayores, para financiar la reconstrucción de las Escuelas Concentradas. Gladys Núñez no entiende por qué habiendo recursos asignados, aún no comienzan los trabajos. Ya no busca a los responsables en el municipio sino que directamente en el gobierno, por el abandono en que han dejado a los niños. “Yo ya no creo en nadie. Cuando hablamos de derechos, los derechos del niño empiezan por preocuparnos de que los alumnos que queremos educar, en primer lugar, estén en buenas condiciones para estudiar”³⁴, señala.

La ingeniera civil de la Secretaría Comunal de Planificación de Talca, Secplan, Verónica Reyes, expresó al diario que “es muy difícil dar una fecha exacta de cuándo estará todo el proceso terminado y los edificios listos para ser ocupados”, ya que “aún no se cuenta con los convenios definitivos y su resolución de aprobación. Solo con ese documento nosotros podemos iniciar el proceso de licitación”, concluyó al diario talquino. El edificio que albergará a las escuelas Carlos Salinas Lagos y José Manuel Balmaceda y Fernández estaría construido recién después del segundo semestre de 2014.

El Barrio Yungay amenazado

El 20 de enero de 1839 el Ejército chileno al mando del general Manuel Bulnes derrotó por completo a las fuerzas de la Confederación Peruano- Boliviana en la localidad de Yungay, ubicada en el centro norte del Perú. Por iniciativa del Presidente de la República, Joaquín Prieto, el 5 de abril de 1839 se erigió una nueva población en el centro poniente de Santiago, en conmemoración de la célebre batalla.

La plaza de la nueva población fue desde un comienzo el centro de reunión vecinal, donde las señoras y caballeros salían a pasear durante las tardes o se juntaban a

33 *Diario El Centro*, 9 de marzo de 2012. “Próxima a licitarse la demolición parcial de las Escuelas Concentradas”, Daniela Giacaman.

34 Actualización de entrevista realizada a Gladys Núñez por las autoras de esta memoria. 21 de diciembre de 2012.

discutir sobre la actividad política. A partir de esto, comenzó a expandirse el sector, hasta llegar a los límites actuales. A mediados del siglo XIX, el intelectual argentino Domingo Faustino Sarmiento se refirió al barrio Yungay como un “pueblito de las afueras de Santiago”.

Las familias más acomodadas de la época edificaron allí grandes casonas; algunas aún siguen en pie, otras sucumbieron ante la modernización. Incluso en su época de mayor auge, el sector tuvo una estación de tren. Décadas más tarde, el Barrio Yungay, como se le conoce hoy, fue habitado por la clase media y familias de escasos recursos, quienes originaron alrededor de 65 cits.

Después de sufrir un período de decadencia y abandono, en la década de los 90 se remodeló la plaza, se mejoró la iluminación, se instalaron nuevos juegos infantiles y esporádicas actividades culturales, lo que marcó el renacer del sector.

En 2010 Rosario Carvajal, dirigente nacida y criada en la zona típica de Esperanza con Portales, de nuevo vio amenazado su barrio. Sus padres llegaron desde Valparaíso a Yungay hace más de 44 años y murieron en 2008 en la misma casa esquina que habita hoy Rosario, en el pasaje Hurtado Rodríguez.

“Toda mi historia está aquí. Si me sacan de aquí pierdo mi identidad”, es lo primero que afirma la dirigente, quien estudió Licenciatura en Historia en la Universidad de Chile. En 2008 lideró la lucha para que el Barrio Yungay fuera declarado “zona típica” por el Consejo de Monumentos Nacionales y esa ardua batalla le exigió dedicación exclusiva. Por eso Rosario Carvajal dejó de hacer clases de Historia en universidades y comenzó a “hacer historia en las calles Esperanza, Libertad, Brasil, Cautín y Balmaceda golpeando puertas, juntando firmas, recopilando papeles de las familias”. ¿Su objetivo? Que al ser declarado zona típica se protegiera al Barrio de “la depredación inmobiliaria, construcción a diestra y siniestra, expulsando a los vecinos que han vivido acá por las más 50 años”.

En una sede social del Barrio Yungay, Rosario Carvajal señala³⁵ que “no se trata de impedir el desarrollo, sino de saber para quién es ese desarrollo: ¿para las personas o para las empresas?”. No desconoce los problemas de algunas construcciones y vecinos

35 Entrevista realizada a Rosario Carvajal por las autoras de esta Memoria. 3 de mayo de 2012.

que arriendan por piezas sin invertir nada en refaccionar la estructura, pero la vida del Barrio es tan potente que como comunidad apuestan a mejorar. Su organización ciudadana ya es reconocida. En mayo de 2008 ganó el Premio a la Conservación del Patrimonio que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales en la categoría de organización social. Se ha adjudicado dos Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (Fondart), organizan el Festival Barrio Yungay y publica la revista *Bello Barrio*.

El mar cruza Constitución

Pasaron entre diez minutos y una hora para que los violentos oleajes llegaran a las costas de las regiones O'Higgins, del Maule, del Bío-Bío y de La Araucanía, causando grandes pérdidas humanas y materiales, esa madrugada del 27 de febrero de 2010.

Más de seis mil kilómetros de longitud conforman el borde costero chileno. Dichato, Constitución, Talcahuano, Tirúa, Puerto Saavedra, Punta Topocalma, Pichilemu, Tregualemu, Loanco, Pelluhue, Lebu, Piure, Rumena, Morhuilla, Puntas Lavapies y Cobquecura fueron las localidades litorales más afectadas con el terremoto y posterior tsunami.

En la Región del Maule destacan por sus reconocidas playas, comida y estancia Constitución y Dichato. Al frente de Constitución, en el río Maule, se encuentran las islas Orrego y Cancún de 600 metros de largo y 200 de ancho y 700 por 150 metros, respectivamente. Casi siempre están deshabitadas, pero la madrugada del terremoto no fue así.

En el puerto, con sus 57 años, vestido de *jeans*, camisa a cuadros, cortavientos, *jockey* y botas de agua, Francisco Pérez Farfán³⁶, antes pescador y operador de grúa pesquera desde hace tres años, cuenta que después de la catástrofe su trabajo tardó tres meses en reactivarse, pues “estaba todo destruido”.

Según Pérez, el maremoto se demoró una hora en llegar a Constitución. “La mar nunca entra de frente, busca las partes planas porque es viva. Aquí hizo eso”, cuenta. “Cuando pasó el terremoto estaba frente a Celulosa Arauco, Celco -empresa del grupo

36 Entrevista realizada a Francisco Pérez por las autoras de esta Memoria. 11 de junio de 2011.

Angelini-, y le dije a mi señora 'en 20 minutos se va a secar la mar', y en 20 minutos se secó. Se recogió como tres cuerdas. Y ahí empezaron las olas: seis olas de seis metros, atravesadas de norte a sur. Yo vi las olas y después se nubló todo, no veía nada. Y vino la llovizna con arena, con ruido, como cuando corre un tren –dice-, con escombros, fierros, con todo”.

Todos los años se celebra la Noche Veneciana el 28 de febrero en Constitución, festividad típica del lugar. El día del terremoto, las islas Orrego y Cancún, ubicadas en el río Maule y habitadas la mayor parte del tiempo solo por árboles, se encontraban atiborradas con familias residentes y visitantes que esperaron durante la madrugada la festividad que tendría barcos alegóricos, fuegos artificiales y escenarios flotantes.

Centenares de personas sufrieron la inundación de las islas. Pérez cuenta que todos los años se celebra la Semana Maulina, “tiene bailes y *shows*, y quedan las fogatas del día, en la Playa Vega de los Patos. Después viene la Noche Veneciana en el río. Por eso hay gente que se va para allá antes, se van en la noche a dormir y se quedan comiendo asado esperando la fiesta, haciendo ‘la previa’ todo el día”. Esta situación explica la cantidad de gente que se encontraba en Orrego y Cancún el día de la tragedia. “El maremoto justo pasó esa madrugada. Muchos pasaron de largo para la Noche Veneciana y se quedaron ahí. Familias enteras, gente de acá. Fue bien triste. La ola los agarró ahí mismo”, recuerda el operador de grúa pesquera de la zona.

Vivir en una “zona inundable”

Al principio de la emergencia se habló de 350 muertos. Mientras pasaron las semanas y meses la cifra fue cambiando. En enero de 2011 se estableció que 525 chilenos habían muerto en medio de la catástrofe y 23 continuaban desaparecidos. Después de un año de investigación posterremoto, la Fiscalía Nacional llegó a una nómina oficial de 156 fallecidos producto del tsunami. De las muertes sucedidas en los bordes marítimos del país, 45 correspondieron a Constitución.

Para la asistente social Carolina Manríquez y sus vecinos, habitantes del borde del

río en Constitución, esa cifra negra ha generado inesperadas consecuencias³⁷. Después del tsunami, las más de 400 personas que viven en las 160 casas construidas en el borde costero de la localidad recibieron una noticia que los ha mantenido alerta y en pie de protesta y negociación: el gobierno anunció la expropiación de sus terrenos por haber sido catalogados como “zonas inundables”.

En ese sector viven distintas generaciones de pescadores de la zona y también veraneantes que han adquirido terrenos y propiedades. “Aquí hay propietarios, allegados y arrendatarios. Esta es una población de cinco casas que se entregó con título de dominio el año ‘65 a familias de pescadores, que murieron en la mar”, detalla en Constitución Carolina Manríquez, quien fue vocera de su comunidad. “El resto, según el mismo proyecto original, iba a ser un parque que nunca se hizo y al final el terreno fue tomado por los pescadores y familias, y se armó una población bastante grande”; de esta forma, explica la asistente social que en el borde del río habitan “pescadores artesanales, que todavía salen con sus remos, y empresarios veraneantes”.

Al ser declarada “zona inundable”, se les ha dicho que serán expropiados para construir un “parque de mitigación”, pero esta alternativa no tiene sentido para los pobladores que se han organizado bajo la consigna “No a la expropiación”.

Walter Imilan es antropólogo y coordinador del Observatorio de la Reconstrucción (OR), entidad formada durante 2010 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile para seguir el proceso de la reconstrucción. Desde fines de 2010 realizan instancias de capacitación, investigación y difusión que los han posicionado ante las organizaciones locales de damnificados, la academia y la prensa como un referente en el área.

Según Imilan el caso de los bordes costeros es “el tema más sensible de todo el proceso”³⁸. Opina que “en términos de políticas públicas las zonas de riesgo siempre son consensuadas como sociedad. Hay que definir cuál es el nivel que está dispuesto a asumir el país y su población”.

37 Entrevista realizada a Carolina Manríquez por las autoras de esta Memoria. 11 de junio de 2011

38 Entrevista realizada a Walter Imilan por las autoras de esta Memoria. 5 de abril de 2012.

El antropólogo afirma que después del terremoto hay lugares del borde costero en los que la gente no quiere vivir, pero hay otros en los que sí quieren. “Ahí hay gran diversidad. Es indiscutible que los bordes costeros son muy preciados para la inversión turística, ¿quiénes son los que se van a quedar?, ¿quiénes son los que van a aprovechar los plusvalores de estas zonas?, eso tampoco está claro”, cuestiona.

En Constitución se concentra la mayor cantidad de fallecidos dentro del contexto del desastre natural. La dirigente Carolina Manríquez aclara que la mayoría no eran residentes. Recuerda que en el borde río murió solo una persona que no quiso salir de su casa, una señora de 80 años. El resto falleció “porque nunca se dio la alarma y dijeron que no era tsunami, por eso la gente bajó a buscar sus cosas. Pero nadie murió por el impacto de la ola”. Este es uno de los argumentos con los que la exvocera y sus vecinos refutan la medida que ha planteado el gobierno en la zona.

Antes del terremoto y del tsunami, la vida social, económica y turística de Constitución ya había sido golpeada. Celco, conocida también en Valdivia por el daño ambiental que distintas investigaciones le han adjudicado, es una sociedad anónima resultante de la privatización y fusión durante la segunda mitad de la década de los 70 de dos empresas de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo): Celulosa Arauco y Celulosa Constitución. La industria se instaló en Constitución y desde su llegada ha generado controvertidas opiniones entre los lugareños, que ven día a día su medio ambiente impactado.

Como consecuencia de la devastación que provocó la catástrofe de 2010, en Constitución se establecieron cinco campamentos. La naturaleza remeció y azotó a la población y su entorno. Todavía no logran recuperar por completo su economía local ni sus viviendas. En tanto, el proceso de expropiación y el rol de la Celulosa Arauco han abierto una serie de posibilidades inesperadas y polémicas para los habitantes de la zona.

Dichato inundado

La tarde del domingo 28 de febrero de 2010 el subsecretario del Interior Patricio Rosende afirmó que la situación en Tomé era desoladora y confirmó que en Dichato el 80 por ciento del pueblo se encontraba inundado. En Coliumo una marejada empujó los

botes y los dejó tierra adentro, después de que el agua ingresara más de un kilómetro por el pueblo. En *Twitter* los pocos usuarios que tuvieron contacto con dichatinos comunicaron que la localidad se encontraba sin alimentos ni agua porque el mar había inundado todo.

Ana Muñoz es habitante de la Aldea El Molino de Dichato. Trabajaba en el Centro Abierto del lugar, donde los niños jugaban y había computadores para el uso de los vecinos. Ella es parte de los cientos de dichatinos que perdieron su casa y que viven en las “aldeas”, como las bautizó el gobierno. “La gente de mi población tuvo que irse porque todo se derrumbó”, cuenta Ana Muñoz³⁹, quien fue pescadora artesanal.

Vestida con pantalones y polerón negro de polar para el frío, explica que no todos sus vecinos llegaron en la misma fecha a vivir al campamento. Los primeros lo hicieron en mayo de 2010 y, según ella, esas personas “estaban en carpas, lo habían perdido todo y no tenían otra alternativa”. En entrevista con las autoras de esta Memoria, la expescadora artesanal detalla que al principio algunos resistieron en sus hogares originales para cuidar sus pertenencias, por miedo al abandono y los saqueos.

En su caso, después de un corto paso por el campamento, Ana Muñoz retornó a su vivienda dañada, “porque tuvo como un metro de agua no más y era urgente pasar el invierno bajo techo. El problema es que se me partió arriba en el segundo piso, entonces por ley teníamos que demolerla, por eso me vine, pero recién el 10 de noviembre de 2010”, explica la transitoria niñera de sus vecinos, y prende su segundo cigarrillo.

Conocido en el país y el extranjero por sus tranquilas y frías aguas, ideales para los deportes acuáticos, el balneario de la Región del Bío-Bío es zona turística recomendada para todo el verano. Después del terremoto el mar arrasó con las residencias de los veraneantes y de los pocos lugareños que vivían en el borde costero. Además, los numerosos restaurantes especializados en productos del mar, la oferta hotelera y la pesca artesanal se vieron afectados por la violenta marejada.

La profesora y residente -como ella misma se denomina- “histórica” de Dichato Lorena Arce cuenta que se establecieron cuatro campamentos en la localidad: El Molino, que lo constituían alrededor de 500 familias; El Esfuerzo que son unas 30; el campamento

39 Entrevista realizada a Ana Muñoz por las autoras de esta Memoria. 8 de junio de 2011.

Iglesia con cerca de 40 y Nuevo Amanecer donde hay unos 40 grupos familiares⁴⁰.

La familia de Lorena Arce, compuesta por sus tres hijos Baltazar, Montserrat y Vicente, más su esposo Ricardo, son damnificados totales. “Perdimos todo, todo, todo. Pero la estructura y el muro de la casa están impecables. Yo a la casa le puedo colocar vidrio, ventana y techo y queda habitable”, afirma. Lorena refuerza la posibilidad de reconstruir su hogar no solo por añoranza o por necesidad concreta, también por un temor que ha aparecido entre los residentes del borde costero de Dichato: la expropiación de sus terrenos por ser zonas inundables, susceptibles de nuevas catástrofes marítimas.

Cuando se le pregunta más en detalle, ella explica su inquietud a nivel general: “En Dichato el fundamento de las expropiaciones es la seguridad ciudadana por un plan maestro que contemplaba un muro y un parque de árboles, el tema es que si hubieran tenido voluntad política hubiesen construido igual el plan de mitigación, pero sin expropiar a los pobladores”, asegura.

Hace una distinción entre dos tipos de posibles expropiados: los veraneantes y los residentes dichatinos históricos. Afirma que la mayoría de los propietarios van de vacaciones a Dichato, pero acepta la expropiación. “Ahí hubo irregularidades porque hay personas a quienes les están pagando tres UF y otros reciben diez por el mismo metro cuadrado”, señala Lorena Arce. En el caso de quienes han vivido toda su vida en Dichato, “los históricos”, hay doce litigios en curso por lugareños que no querían expropiación bajo ningún motivo. “Nosotros nos juntamos en la Intendencia con megáfonos, le íbamos a entregar una carta al Presidente y nos tomaron presos”, acusa.

Según la vocera, su caso es más complejo. Es residente del sector Litril, donde están los terrenos de mayor plusvalía, que tienen acceso directo al mar. “Quedamos seis familias del sector negándonos a la expropiación”, relataba en junio de 2011 la dirigente.

Esta situación grafica las causas del descontento general en la zona. Pero a nivel particular el conflicto suma muchos episodios, elementos y nombres de autoridades que aumentaron la molestia de los damnificados y expropiados dichatinos.

40 Entrevista realizada a Lorena Arce por las autoras de esta Memoria. 9 de junio de 2011.

En medio de esta catástrofe llama la atención un debate que se ha producido entre los afectados por la forma en que el oficialismo se refiere a sus actuales lugares de residencia: “Son campamentos. Para nosotros no son ‘aldeas’”, afirma categórica Lorena Arce durante la conversación concedida en un café penquista. “El gobierno les dice ‘aldeas solidarias’ por una cuestión semántica. Para hablar del terremoto dicen ‘el evento’. Aquí la gente en su mayoría les dice campamentos, porque son eso: hay hacinamiento, no hay agua para todas las casas, hay enfermedades, existen problemas psicológicos”, enfatiza.

Según la dirigente que ha participado en diversas instancias públicas dando a conocer la situación de su comunidad, “esto no es una aldea, me gustaría que buscaran en el diccionario urbanístico dónde aparece el concepto de ‘aldea’, que incorpora la idea de ‘barrio’, que involucra desarrollo, jardines, seguridad ciudadana, carabineros”.

Otro fantasma que ronda a estos residentes es pasar de haber sido habitantes cercanos del mar, a tener una posible nueva ubicación en la periferia de sus respectivas ciudades. En los otros bordes, los de la periferia de Constitución y Dichato, ya se están construyendo numerosos proyectos de viviendas sociales para los damnificados que se resisten a partir de su lugar de origen.

El día en que el Bío-Bío se paralizó

Para los habitantes de los estratos medios que quedaron sin sus departamentos, la frustración fue grande al ver cómo sus ahorros de años para tener un “buen pasar” se convertían en escombros. El terremoto con su fuerza demoledora los hizo sentirse abandonados, igual que a los vecinos de los barrios periféricos de la Región del Bío-Bío. Solo que para ellos el castigo fue triple: ya antes del terremoto vivían en barrios inseguros, muchos habían pasado de campamentos a viviendas sociales. Pero el 27F los devolvió a las mediaguas. Algunos siguen esperando su casa y otros ya resignados saben que sus soluciones habitacionales están en tierra de nadie. Para todos ellos el terremoto, además de dejarlos sin casa, terminó de sumirlos en una profunda marginalidad.

Chiguayante existe como comuna solo desde 1996, después que los vecinos crearan en 1990 el Comité Pro Comuna para dejar de ser una subdelegación de

Concepción. La historia de organización se repitió en 2011, cuando Gladys Catalán y Bárbara Orrego se levantaron como dirigentes y crearon el Comité Pro Defensa de Chiguayante. El objetivo esta vez no era independizarse, sino unirse frente a la reconstrucción y tener una posición unitaria respecto a las soluciones habitacionales que llegaban desde el gobierno.

La población Villa Futuro, que era representada ese año por Catalán y Orrego, se ubica a las orillas del río Bío-Bío en Chiguayante y fue construida sobre un territorio aún periférico, semi urbanizado y con pocos servicios. Cuando en 1984 los vecinos recibieron sus departamentos, como parte del plan de viviendas sociales de la dictadura, éstos no eran más que pisos sin estucar de 38 metros cuadrados que debieron ser armados, según las necesidades de las más de mil 300 familias que poblaron el lugar. Cada una de ellas hizo las subdivisiones para las habitaciones, estucó el cielo y puso el piso. A lo largo de los años tuvieron numerosos problemas que acusaron una construcción deficiente, por eso los bloques se aprecian a simple vista parchados y, sobre las numerosas enmiendas, todas las casas están recubiertas con latas.

Bárbara Orrego es dirigente de la pesca en Talcahuano y vive con su familia en uno de los bloques de cinco pisos que conforman la populosa población. En el mismo edificio habita Gladys Catalán, militante del Partido Por la Democracia que vive en compañía de su gato llamado Gordo.

Complicaciones de vida

Gladys Catalán trabajaba en Hualpén desde 2005. Allí tenía a cargo el cuidado de diez mujeres con sus hijos, en un centro de acogida para víctimas de violencia. Dos años antes, en 2003, había terminado su propia historia de violencia intrafamiliar cuando decidió separarse de su marido y quedar al cuidado de los dos hijos.

El 28 de febrero de 2010 a las ocho de la mañana llegó a Chiguayante después de un viaje de dos horas. “Me encontré con mi edificio, que no había sufrido mayores daños. Toda la población estaba en la calle, parada en las multicanchas. Me impactó tanto que

pensé que era necesario trabajar”⁴¹.

Era junio de 2010 y Catalán y Orrego empezaron a participar en las reuniones de la Unidad Vecinal. “Ahí fuimos logrando un liderazgo más amplio y empezamos con un pequeño mitin en la Intendencia de Concepción. Ese fue nuestro inicio”, recuerda Gladys.

Más adelante la comunidad de Villa Futuro se vería enfrentada a una serie de problemas generados por la primera autoridad regional, Jacqueline Van Rysselberghe. A mediados de agosto de agosto de 2010 ella visitó la población anunciando un paquete de supuestas soluciones habitacionales, de las que hasta hoy no hay frutos concretos.

Olvidados por la historia

Aurora de Chile es una población periférica de la Octava Región ubicada a unas diez cuadras de la Plaza de la Independencia, en la costanera junto al río Bío-Bío. Tiene más de 120 años desde que se empezó a gestar y hace 60 está funcionando con un volumen constante de pobladores, de alrededor de dos mil personas. Sus calles aún son de tierra y las viviendas precarias fueron construidas sobre rellenos realizados por los mismos vecinos. Las casas que se autoconstruyeron eran de material ligero, algunas todavía se conservan así, con instalaciones sanitarias provisorias como fosas sépticas y pozos negros.

Cuando Jacqueline Van Rysselberghe era alcaldesa de Concepción trabajó con la Junta de Vecinos de la Población y presentaron el proyecto “Conjunto habitacional Aurora de Chile” que contemplaba la construcción de trece torres de edificios con un total de 240 departamentos y 88 casas pareadas, para modernizar el sector.

Llegó el terremoto y la exalcaldesa, en su rol de intendenta, dejó acordado que la propuesta continuaba. La inversión estipulada se acercaba a los seis mil millones de pesos y las viviendas estarían listas en un plazo aproximado de 18 meses. Los vecinos estaban felices, ya que por fin tendrían terrenos y viviendas propias y saldrían de Aurora de Chile, población que en lo legal constituye una toma, con tierras de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y del Ministerio de Bienes Nacionales.

41 Entrevista realizada a Gladys Catalán por las autoras de esta Memoria. 2 de abril de 2011.

A poco andar los pobladores, liderados por Jorge Figueroa, comenzaron a descubrir errores en el proyecto. “La principal falencia fue la cantidad de viviendas”, señala el dirigente y, a su juicio, el error más importante fue el conteo de casas que realizó la Municipalidad. “Nunca realizaron un catastro de la situación real de Aurora de Chile, porque las 580 familias que viven en la población no se traducen en número de viviendas, ya que dentro de una casa habitan dos o tres núcleos familiares. Es decir, quedaban 150 o 160 familias sin solución habitacional”⁴².

Después del terremoto, Aurora de Chile resonó por varias semanas en la agenda noticiosa y no solo por los daños del sismo. Un video, acusaciones cruzadas entre el senador Alejandro Navarro y la en ese entonces intendenta Jacqueline Van Rysselberghe, por “fraude social” de un lado, y “montaje” del otro, dieron forma al conflicto que se desató en la histórica población y que para los vecinos no tenía otro objetivo que expulsarlos a la periferia.

El azote del abandono

La población Centinela II, ubicada en los cerros de Talcahuano, se construyó durante 2001 y 2007. Después de cinco años que pagaran arriendo, la exministra de Vivienda de Michelle Bachelet, Patricia Poblete, condonó la deuda a los vecinos y reconoció que los departamentos tenían "fallas en su construcción".

Aunque la edificación era de mala calidad, los vecinos que en su mayoría venían de campamentos, decidieron hacer su vida ahí. Era, al fin y al cabo, la casa propia.

Con la catástrofe, los departamentos que ya estaban afectados, quedaron muy debilitados y las casi 600 familias que viven en los 30 bloques comenzaron a temer por su seguridad. No tenían agua ni luz y debían bañarse en el río. “Se movieron hartos, son estructuras metálicas hechas en Huachipato y forradas con lata e internit, son bastante precarios, pero aguantaron bien el terremoto, la estructura no falló”, recuerda Aldo

42 Entrevista realizada a Jorge Figueroa por las autoras de esta Memoria. 7 de junio de 2011 en Concepción.

Beroiz⁴³, quien vive en el bloque seis hace cinco años.

El 3 de septiembre de 2010 llegó a la Escuela Los Lobos de Talcahuano una comitiva del Serviu y la Intendencia. Y tal como se repitió en otras poblaciones, el grupo lo lideró Jacqueline Van Rysselberghe. La autoridad se dirigió a la gente y les comunicó que el plan de reconstrucción contemplaba que dejaran sus casas el 12 de noviembre y el 15 comenzaría el proceso de demolición. El tiempo que demoraba el trabajo lo pasarían en aldeas o con familiares. “Todos estábamos de acuerdo en que había que echar abajo estos departamentos y construir otros, porque siempre nos dijeron que estos eran provisorios. Después del terremoto se reforzó la idea y además pasamos a ser terremoteados dentro del catastro”, recuerda Aldo Beroiz.

La vecina Patricia Hernández vive en el bloque dos y recuerda que entre la intendenta y la presidenta de la Junta de Vecinos, Rosalba Bello, se acordó hacerlos pasar como damnificados, pese a que había un informe que decía que no estaban afectados. “Eso nos gustó porque la idea de fondo era darnos nuevos departamentos. Pero la intendenta dijo que para que los construyeran había que irse de allegados o arrendatarios y mucha gente no tenía ni para comer; ahí empezó la desconfianza, aunque el sueño de tener una mejor vivienda pudo más y la mayoría se fue igual a los campamentos”, indica Beroiz.

Este acto fue un adelanto del comportamiento que los vecinos observaron de parte de la autoridad en los meses posteriores. Una convocatoria masiva para participar de una importante reunión con Jacqueline Van Rysselberghe, en la escuela del sector, marcó el inicio de una nueva vida en campamentos, la que todavía no tiene fecha segura de término para toda la comunidad.

43 Entrevista realizada a Aldo Beroiz por las autoras de esta Memoria. 6 de junio de 2011

CAPÍTULO III

LA LLEGADA DE LA DERECHA POSTPINOCHET

Una vez que Sebastián Piñera ganó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Eduardo Frei Ruiz Tagle, su primera preocupación fue el equipo de ministros, subsecretarios y jefes de servicio que lo acompañarían en el gobierno de centroderecha.

Desde el 18 de enero de 2010 los exdirectores de la Fundación Jaime Guzmán y del Instituto Libertad, Miguel Flores y María Luisa Brahm, trabajaron con Rodrigo Hinzpeter y Cristian Larroulet sin cesar. Eran la comitiva a cargo de la instalación del gobierno. “Han oficiado como verdaderos *head hunters* del Piñerismo”, señaló *La Tercera* el 21 de marzo de 2010.

Profesionales independientes de derecha, centroderecha y de la Concertación fueron contactados por el equipo cazatalentos que al llamarlos por teléfono lo primero que consultaban era si estaban dispuestos a desempeñar una “labor importante” dentro del nuevo gobierno. Sin dar mayores detalles del cargo para el que se les sondeaba.

Comenzaban averiguando si los nombres aportados por los *think tanks* de derecha o por los partidos de la Alianza estaban disponibles. Sorteado ese escollo inicial, el equipo liderado por Hinzpeter se abocaba a recoger los antecedentes de los preseleccionados.

La última semana de enero de 2010 el Presidente se fue de vacaciones a su casa en el Lago Ranco. Desde allá monitoreó los avances y se llevó las carpetas con los antecedentes de los preseleccionados para ejercer en el aparato público. Los estudió en profundidad para no cometer ningún error a la hora de conformar su equipo. Por eso, los nombres de las nuevas autoridades y mandos medios no salieron a la luz sino hasta la segunda semana de febrero de 2010.

“A ver... qué tenemos”, fue una de las frases que más escuchó el equipo reclutador

desde el 18 de enero. El núcleo de confianza sabía bien que lo que quería el primer Mandatario era, ojalá, un gabinete que durara los cuatro años. Lo más parecido, relató *La Tercera*, al gobierno de Patricio Aylwin que solo tuvo un recambio ministerial en su gestión.

Tan relevante era la decisión que Piñera no dudó en reunirse con sus amigos y círculo de hierro, los ingenieros comerciales y socios en los negocios: José Cox, Patricio Parodi, Juan Bilbao e Ignacio Guerrero, quienes se pasearon por las oficinas de La Moneda, aportando sus opiniones sobre los candidatos a los cargos públicos.

El proceso de selección era tal cual Sebastián Piñera reclutaba personal para sus empresas. Para encontrar a los funcionarios públicos idóneos primero se investigaron los antecedentes académicos y solo los alumnos destacados pasaban a la siguiente etapa. El equipo se dedicó a estudiar los problemas de cada ministerio y ver si el potencial ministro o subsecretario tenía el perfil adecuado. Valores como el trabajo en equipo y rendir bajo presión sumaron puntos a los candidatos, que debieron pasar el último filtro de los antecedentes económicos: para evitar sorpresas poco decorosas se revisó el Dicom de los postulantes.

La “Nueva forma de gobernar”

El gobierno llegó a instalarse en las dependencias del Estado portando un relato innovador. En los primeros convocados al gobierno primó la juventud y los “rostros nuevos”, sin militancias públicas. En un primer momento el equipo de Piñera trató de sacudirse de los recuerdos y autoridades ligados a la dictadura militar. Aunque, con el correr de la administración y los conflictos que enfrentó, resulta evidente que fueron estos últimos, militantes duros que tuvieron cargos políticos civiles durante el régimen, los que terminaron indicando el rumbo del Ejecutivo.

Los jóvenes ministros que dieron vida a la ilusión de la “Nueva forma de gobernar” tenían como motor las libertades individuales, lo que los hacía adherir con fervor al modelo económico, político y social instaurado por Augusto Pinochet.

El Presidente y 17 de sus 22 ministros del gabinete original provienen de la

Universidad Católica. Ellos encarnaron en todo su esplendor el discurso de la “Nueva forma de gobernar”: excelencia, transparencia y trabajo en terreno. En su mayoría, los ministros estudiaron ingeniería comercial o civil en la UC. También había tres abogados, una periodista, un médico, un técnico agrícola y un licenciado en cine.

El Colegio de San Ignacio y el de los Sagrados Corazones de Manquehue suman tres ministros cada uno, mientras que el Instituto Nacional figuró con dos representantes en el gobierno. Jaime Mañalich, de Salud, es quien proviene de un colegio de menos renombre, al egresar de la Escuela N° 48 de Ñuñoa.

Otra de las características de los integrantes de la “Nueva forma de gobernar” es la cantidad de descendencia de cada ministro: entre los 22 convocados iniciales sumaron 85 hijos, con un promedio de 3,8 por cada titular de cartera. Joaquín Lavín, exministro de Educación y hoy responsable del Ministerio de Desarrollo Social, y Cristián Larroulet, secretario general de la Presidencia, son quienes más hijos tienen, con siete cada uno. Felipe Bulnes, quien fue ministro de Justicia y Educación, y hoy es embajador en Estados Unidos, es el único con solo un hijo.

El 9 de febrero de 2010 se anunció a las seis mujeres y 16 hombres que liderarían el nuevo proceso. El equipo de protocolo del gobierno determinó que la ceremonia se celebrara en el Museo de Historia Natural, cuyo edificio fue sede de la Real Audiencia, donde abdicó el padre de la Independencia Bernardo O’Higgins. Piñera se situó en la testera de la Casa Colonial y, uno a uno, llamó a quienes lo acompañarían desde el 11 de marzo de 2010.

Convocó a cinco militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), cuatro de Renovación Nacional (RN), un ex demócrata cristiano (DC), tres cercanos a la UDI y nueve independientes.

La designación más polémica estuvo marcada por la incorporación del exministro demócrata cristiano, Jaime Ravinet, en la cartera de Defensa. Ya por la mañana el vicepresidente DC, Renán Fuentealba, quizás previendo que alguno de sus militantes podía simpatizar con la derecha, recordó que si alguien ocupaba un cargo de confianza en el gobierno de Piñera debería renunciar a su militancia o sería expulsado. A las seis de la

tarde del 9 de febrero de 2010, Jaime Ravinet envió una carta al partido con su renuncia, después de asumir la titularidad en Defensa. En la sede DC dijeron no haberla recibido.

De manos del Presidente todas las nuevas autoridades sectoriales recibieron un *pendrive*. Ahí se almacenaron las tareas que le competían a cada cartera y los desafíos que, como jefe máximo, Sebastián Piñera les encomendaba para los primeros 100 días de trabajo. A los ministros también se les entregó en una carpeta el programa de gobierno elaborado por los Grupos Tantauco⁴⁴.

Orgullosos de su nuevo equipo, el Mandatario aseguró a Radio Bío-Bío que se trataba de un grupo de personas “con auténtica capacidad y formación académica y profesional”. Para el ministro de Minería, Laurence Golborne, tenían “un real compromiso con los problemas de la gente, lo que significa la disposición ‘24x7’ de colaborar, ayudar y trabajar. El foco tiene que estar en los más necesitados. El Presidente nos ha planteado un desafío ético tremendo, que es superar la pobreza en este país”⁴⁵.

Junto con la seguridad ciudadana, uno de los temas fuertes para el gobierno era diferenciarse de la Concertación, y lo hacían criticando los vicios típicos de aquellos que se enquistan en el poder. Uno de estos vicios era la imagen del político como lejano y burocrático, poco cercano a las problemáticas sociales. Por eso el gobierno de Piñera en su afán de construir su propia imagería levantó la figura del gobierno “24x7”, que trabaja las 24 horas del día los siete días de la semana.

Pero la oposición no tuvo paciencia de esperar al equipo todoterreno y se demoró solo 24 horas en salir a criticar al nuevo gobierno. A través del diario *La Tercera*, el diputado DC Pablo Lorenzini cuestionó al gabinete entrante por considerarlo técnico y poco político. El parlamentario le auguró una corta vida al grupo pues, a su juicio, los nuevos ministros tenían pocas habilidades para dialogar. “Si van a ser simples gerentes de un presidente de directorio, esto no va a funcionar”, sentenció el 10 de febrero de 2010.

Mucho más radical fue el diputado DC, Gabriel Ascencio. Aseguró a Radio ADN que la

44 Los Grupos Tantauco están compuestos por mil 200 profesionales y 36 comisiones, que durante dos años trabajaron para elaborar el programa de gobierno para los primeros 100 días y el primer año de gestión de Sebastián Piñera.

45 Video subido en la cuenta *Youtube* de La Moneda, el 4 de noviembre de 2010.

conformación era "el cuoteo de los empresarios, donde cada rama del empresariado nacional tomó, sin decoro alguno, una parte del Estado chileno".

Colores para la tragedia

Técnicos o políticos, lo concreto es que a 18 días de asumir el cargo debieron hacer frente a uno de los terremotos más agresivos que recuerde la historia reciente de nuestro país.

Desde las primeras horas los ministros y el propio Presidente recorrieron Chile. Para identificarse entre el polvo y los escombros usaron chaquetas rojas con el nuevo logo del gobierno. "El tema de las parkas fue una idea de mi hija Magdalena. Era como una especie de símbolo de la gestión en terreno, cercano a la gente. Creo que fue una buena idea y no me voy a sacar la parka roja ", afirmó Piñera el 30 de julio de 2010⁴⁶.

La colorida indumentaria la confeccionó Monserrat Pino, una ejecutiva bancaria, que después de 21 años de trabajo, se hizo asesora de una empresa de ropa técnica. Descubrió un mercado interesante, se unió con dos socios más y crearon "Kanuk" en el Barrio Patronato.

Las parkas tienen un valor minorista de 45 mil pesos. A mediados de 2010 la microempresaria estimaba que entre las chaquetas entregadas y los pedidos hechos ya sumaban 500 prendas. Hay rojas y azules, lo que indica la diferencia de grados entre los funcionarios públicos. Las rojas las usan desde el intendente hacia arriba, pasando por los ministros y el propio Presidente, y las azules le corresponden a los cargos de menor jerarquía.

El exsubsecretario de Obras Públicas del gobierno de Eduardo Frei Ruiz- Tagle, Juan Carlos Latorre, hoy diputado por la Región del Libertador Bernardo O'Higgins recuerda, a modo de anécdota, que él fue el primero en usar la parka roja, "porque salía hartos a

46 *Emol*, 30 de julio de 2010. "La historia desconocida de las parkas rojas del Gobierno", Leonardo Núñez.

terreno y en esa época me tocó una tragedia, entonces me identificaba entre el polvo, pero claro, de mí nadie se acuerda”⁴⁷.

Arriba los corazones

“En la Concertación estábamos perdidos, sin saber qué hacer fuera del gobierno. Lo único que nos quedó fue darle una tregua, por el bien del país y para rearmarnos nosotros”. Así recuerda el exministro secretario general de Gobierno y Defensa de Michelle Bachelet, Francisco Vidal, los días posteriores al cambio de mando, cuando el liderazgo de la emergencia lo comenzó a llevar el gobierno recién asumido.

A esta tregua política, la prensa la llamó “luna de miel” y tuvo algunos hitos que permitieron hablar de “unidad nacional”. Desde que asumió el gobierno, Sebastián Piñera buscó instalar ese concepto.

Por ejemplo, y aunque no estaba en tabla, los 59 diputados que asistieron el 8 de marzo de 2010 a la Cámara no tuvieron objeciones en aprobar un proyecto de acuerdo que proponía postergar hasta septiembre de ese año el pago del permiso de circulación en las zonas afectadas por el terremoto. El sábado 6 de marzo de 2010 los presidentes de partidos de la Concertación sostuvieron una distendida reunión con el Presidente, según informó *El Mercurio*, donde acordaron apoyar todas las iniciativas que apuntaran a enfrentar la tragedia.

La única duda del conglomerado del arcoíris surgió cuando el nuevo gobierno les pidió mantener en sus puestos de trabajo a algunos gobernadores y seremis de las zonas más afectadas por el terremoto. Los jefes de partidos de la Concertación aceptaron, sin aplicar sanciones, que sus militantes permanecieran en sus cargos por un tiempo limitado, es decir, no más allá de un mes de ocurrido el cambio de mando.

El entonces presidente provisorio del Partido Socialista (PS), Fulvio Rossi, señaló a Radio Universidad de Chile que “todos los socialistas que quieren colaborar con la reconstrucción lo pueden hacer, porque hay un bien mayor y es el momento de la unidad”.

47 Entrevista realizada a Juan Carlos Latorre por las autoras de esta Memoria. 30 de mayo de 2011.

Y agregó que “frente a cada proyecto de ley que presente Piñera, el PS está dispuesto a colaborar”.

El gobierno ansiaba protagonizar una “nueva transición”, como lo explicó el Presidente Piñera en su discurso inaugural en el balcón de La Moneda. En la ocasión destacó la unidad nacional e interpeló a las iglesias, fuerzas armadas, sociedad civil y oposición a “estar a la altura del momento histórico, porque el proceso que lideraré va mucho más allá de reconstruir viviendas, hospitales y escuelas”, aseveró.

Para RN esta “luna de miel”, si lograba consolidarse, daría paso a la política de los acuerdos; en ese escenario el Presidente y su partido se sienten muy cómodos y tienen larga experiencia, tal como recoge el libro *Yo, Piñera*⁴⁸ del periodista Ernesto Carmona.

Carmona relata que en 1990, con Piñera como senador, RN se propuso “consolidar los indicios que ofrecían la posibilidad de generar una atmósfera de consenso en torno a la democracia representativa y a la economía de mercado”. El líder político del partido en esa época, Andrés Allamand, defendía una de las dos visiones que rondaban a la colectividad y representaba a Sebastián Piñera, Teodoro Ribera y Alberto Espina. Para Allamand, “compitiendo con la UDI solo nos derechizamos, pero no ganamos una sola adhesión más. (...) Yo quiero que al gobierno de Aylwin le vaya bien, que tenga éxito”.

Entre conocidos

Dentro del actual gobierno chileno hay lazos de amistad, negocios, familiares y de clase social. Pero por decisión política de los medios masivos de comunicación, todos afines al gobierno, los vínculos y profundos alcances de las trenzas compuestas entre el poder político y económico nacional se han desdibujado en su profundidad y, aún peor, omitido en varios casos. El poder mediático entramado con el poder político se alinean para que la población tenga, en caso de existir, un conocimiento superficial y acrítico de sus gobernantes.

Cuando el Presidente Sebastián Piñera asumió el gobierno de Chile, nombró a su gabinete, mandos medios y asesores. La información sobre ellos, quiénes eran, qué

48 Ernesto Carmona, *Yo, Piñera*. Editorial Mare Nostrum, Santiago, 2010.

representaban en lo político, ideológico y económico fue escasa. Salvo por algunas excepciones, la prensa en general no ofreció información y opinión detallada para armar el rompecabezas de las relaciones.

Con el correr del tiempo los nexos se han revelado cada vez más.

Desde un comienzo, el estrecho vínculo que han cultivado por décadas el Presidente de la República Sebastián Piñera con el actual ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín Bascuñán, recibió atención y fue descrito en la prensa.

Larraín y Moreno se conocieron siendo estudiantes universitarios en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (Facea) de la Pontificia Universidad Católica de Chile; en esa institución también estudió el Presidente. A mediados de los 70, Moreno cursaba hace dos años ingeniería civil en la UC, sin embargo, su interés por la economía lo llevó a tomar ramos en Facea. Así se produjo el encuentro entre los dos, como indica la periodista Mónica González en el artículo “Las redes de amistad y negocios del gabinete de Sebastián Piñera”⁴⁹ de *Ciper*.

Por esos años formaron un grupo de estudios al que también se sumó el economista Fernando Coloma, hermano del expresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio.

A diferencia de los otros nombres, Fernando Coloma, hoy no figura en la primera línea política. Él se dedicó a otras actividades, como la presidencia de Canal 13 durante 2004 y 2007, la dirección de la Bolsa Electrónica y la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. Antes de las elecciones presidenciales integró el Grupo Tantauco para apoyar en el plano programático a la campaña de Sebastián Piñera. Por estas razones se le barajó hasta última hora como posible integrante del gabinete, pero su designación no se concretó.

49 *Ciper*, 10 de febrero de 2010. “Las redes de amistad y negocios del gabinete de Sebastián Piñera”, Mónica González.

Además de la academia, a algunos de los miembros originales del equipo de gobierno de Sebastián Piñera, también los han relacionado desde jóvenes los negocios.

A fines de los '70 uno de los grupos económicos más importantes de Chile, el Grupo Cruzat, formó el Departamento de Estudios de Forestal S.A. La entidad ofreció contrato a destacados profesionales que egresaron de la UC en la época. Entre ellos, el hoy canciller Alfredo Moreno, quien aceptó. También lo hicieron Juan Bilbao y Francisco Pérez Mackenna, sus dos mejores amigos de facultad. Más adelante se encontrarían en la Forestal con el exministro de Economía del gobierno actual, Juan Andrés Fontaine, y con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, empresarios y amigos del Presidente.

La carrera académica de Fontaine le permitió conocer con mayor profundidad durante su juventud al ministro de la Secretaría General de la Presidencia Cristián Larroulet y a Joaquín Lavín, exministro de Educación y actual ministro de Desarrollo Social. Los tres fueron estudiantes de postgrado del Master in Business Administration (MBA) de la Universidad de Chicago. Pérez Mackenna, amigo del canciller Moreno y hoy parte del grupo Luksic, también se graduó de este MBA. Fontaine se unió al Departamento de Estudios de Forestal S.A. después de terminar este postgrado.

Una camada de jóvenes chilenos se formó en el extranjero, y en particular en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Fueron bautizados en la época como los “Chicago boys”.

Así lo describe el periodista Ernesto Carmona en su libro *Yo, Piñera*. En 1968, cuando Sebastián Piñera ingresó a ingeniería comercial UC “estaba en su clímax la influencia teórica de la escuela de economía de la Universidad de Chicago, liderada por Milton Friedman, catedrático estadounidense de origen húngaro que recibió el Premio Nobel de Economía en 1976. En virtud de un convenio de cooperación e intercambio entre ambas casas de estudio activado en 1957, se trasladó a Chile un grupo de profesores, encabezados por Arnold C. Harverger, quienes introdujeron en el mundo académico local la teoría neo conservadora del nuevo liberalismo económico, rebautizado como 'economía social de mercado’⁵⁰.

50 Ernesto Carmona, *Yo, Piñera*. Editorial Mare Nostrum, Santiago, 2010

Algunos de los ministros del gabinete fueron parte de los “Chicago boys”, economistas que se hicieron conocidos por ser promotores y defensores de un modelo en extremo libremercadista y carente de Estado en Chile. Mirada que influyó de forma decisiva en los cambios que se produjeron durante la dictadura militar.

Según Carmona, “los 'Chicago boys' de la Católica aportaron la teoría y los cuadros para la puesta en marcha de las políticas económicas que impulsó por la fuerza el poder militar. De ese semillero ideológico surgió el documento más célebre de la historia económica chilena del siglo XX, *Bases de la Política Económica del gobierno Militar Chileno*, un texto fundamentalista y difícil de digerir que se hizo famoso con el mote de 'El Ladrillo’”.

Joaquín Lavín, Juan Andrés Fontaine, Cristián Larroulet y Alfredo Moreno, miembros del gabinete original de Sebastián Piñera, estudiaron en Chicago. También lo hicieron Jorge Selume, Sebastián Edwards y Julio Dittborn, hoy conocidos hombres de empresa. José Piñera Echenique, hermano del Presidente, también estudió en la institución estadounidense.

El actual Presidente conoció a quienes serían la nueva camada de los “Chicago boys” en el semillero que forjó Manuel Cruzat. El Departamento de Estudios de Forestal S.A. fue el núcleo en el que Fontaine y Moreno se formaron, también desde donde surgieron nuevos economistas y hombres de empresas que irrumpieron en el mundo de los negocios durante la dictadura militar, en plena privatización de las empresas del Estado, como relata la Premio Nacional de Periodismo 2009 María Olivia Mönckeberg en su libro *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*⁵¹.

El amigo del Presidente, Carlos Alberto Délano y su actual socio del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, los ministros Alfredo Moreno, Juan Andrés Fontaine y el propio Jefe de Estado Sebastián Piñera se conocieron en la UC y al alero del Grupo Cruzat. A pesar de no haberse especializado en Chicago, sino que en Harvard, el actual Mandatario accedió de forma directa desde su juventud a los nexos que tejieron los seguidores criollos de Friedman.

51 María Olivia Mönckeberg, *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*. Ediciones B, Santiago, 2001.

El nodo de la red

El canciller Alfredo Moreno es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y MBA de la Universidad de Chicago. Su carrera gerencial y empresarial es extensa. Después de ser parte del Departamento de Estudios de Forestal S.A. continuó estrechando sus vínculos con la familia Cruzat durante los ochenta, cuando administró el área de comunicaciones del grupo económico. Fue propietario de la Editorial Santiago y después a fines de esa época se integró al Banco de Chile. En la institución, ya intervenida por la dictadura militar, el ingeniero formó parte del directorio.

La actividad empresarial de Alfredo Moreno se fortaleció al acercarse al Grupo Penta, núcleo económico con negocios en variados rubros del país y controlador de la entidad bancaria. En 2000 Moreno vendió su porcentaje de acciones del Banco de Chile al Grupo Luksic. Después se integró a la sociedad Dersa de la familia Del Río, otro grupo económico poderoso. En su nueva gerencia trabajó en la fusión de la filial Sodimac, de propiedad de Dersa con la empresa *retail* Falabella. Al finalizar la transacción, se hizo parte del directorio de esta multitienda. También fue presidente de la Teletón.

El ministro de Hacienda Felipe Larraín es ingeniero comercial de la Universidad Católica, Master of Arts y doctor en Economía de la Universidad de Harvard. De un perfil más académico, ha sido asesor del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo y de varios gobiernos latinoamericanos.

A pesar de no haber destacado en el ejercicio de la administración y las finanzas, ha tenido apuestas empresariales. Fundó Viña Quintay junto a Felipe Morandé, el primer ministro de Transporte y Telecomunicaciones de Piñera y exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También fue miembro de variados directorios de empresas, como AntarChile del Grupo económico Angelini y la sociedad del equipo de fútbol de la Universidad Católica de Chile, Cruzados SADP.

Cristián Larroulet, titular de la Secretaría General de la Presidencia, también es ingeniero comercial de la UC. En esta institución de educación superior fue donde conoció

a Joaquín Lavín, ministro de Desarrollo Social, y a Jaime Guzmán, líder del Movimiento Gremialista y miembro civil de los círculos ideológicos y de poder de la dictadura. Durante el régimen militar, Larroulet trabajó en la Oficina de Planificación Nacional, repartición en la que conoció a uno de sus mentores, el economista y reconocido “Chicago Boy”, ministro de Estado de Augusto Pinochet y expresidente del Banco Central, Miguel Kast. Después fue jefe de gabinete de Hernan Büchi en el Ministerio de Hacienda, entre 1985 y 1987.

Hernán Büchi Buc es ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile y fue ministro de Hacienda desde el 12 de febrero de 1985 hasta el 3 de abril de 1989, cuando renunció para postular como candidato presidencial.

Su período como máxima autoridad de la política económica que se aplicó en Chile durante la dictadura, coincide con la fecha en que se realizó “el proceso de privatización de las que fueron las grandes empresas del Estado de Chile”, recuerda la periodista María Olivia Mönckeberg en su libro *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*⁵².

Fue subsecretario de economía entre 1979 y 1980, subsecretario de salud desde 1980 hasta 1983, ministro de Planificación en 1983-84 y superintendente de bancos e instituciones financieras en 1984-85.

Estuvo presente en todas las reformas de la dictadura. Fue parte activa del diseño de reforma previsional, de salud y educación, como detalla María Olivia Mönckeberg en *El Saqueo de los grupos económicos al Estado chileno y La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias*⁵³. Junto a José Piñera, hermano del Presidente, y Miguel Kast, fue uno de los ideólogos del Plan Laboral, en vigencia desde 1979, y de la reforma en el sector que comenzó su aplicación en mayo de 1981.

Fue director, presidente y vicepresidente de empresas públicas desde mediados de los 70 y en 1975 hizo su primera incursión en una empresa estatal al asumir como

52 María Olivia Mönckeberg, *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*. Ediciones B, Santiago, 2001.

53 María Olivia Mönckeberg, *La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias*. Editorial Copa Rota. Santiago, 2005.

director suplente de la Industria Azucarera Nacional (Iansa). En 1978 después de su intervención para la privatización integró el primer directorio provisional de la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC).

Después del término de la dictadura, se sumó en condición de profesor y socio de la Universidad del Desarrollo, UDD, eje intelectual del Grupo Penta que reúne a Joaquín Lavín, el ministro Cristián Larroulet y el fallecido Ernesto Silva Bafalluy, con los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, señala Mönckeberg. Hoy Hernán Büchi es presidente del consejo del Centro de Economía Internacional y consejero de LyD. Desde 2000 preside el Consejo Directivo de la UDD.

Joaquín Lavín es ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de Chicago. Fue nombrado ministro de Educación por Sebastián Piñera, pero debió ser removido del cargo, en medio de la extensa movilización social por una nueva educación en Chile. En 2011 fue trasladado al recién creado Ministerio de Desarrollo Social, que reemplazó al Ministerio de Planificación.

El militante UDI y miembro del Opus Dei es un conocido político que colaboró con el régimen militar durante su juventud. Fue alcalde de Las Condes y candidato presidencial por la derecha. En 2000 compitió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Ricardo Lagos; en esa circunstancia perdió por un mínimo margen, cerca de 200 mil votos. Junto a Larroulet, Lavín fue socio fundador de la UDD, donde también fue académico. Fue editor de economía de *El Mercurio*. Antes de estudiar ingeniería comercial cursó un año de periodismo en la Universidad de Chile.

Hasta su designación, Ena Von Baer era conocida en el país por ser parte del panel de conversación y análisis político del programa *Estado Nacional* de Televisión Nacional de Chile. De su participación en Libertad y Desarrollo (LyD), y los negocios de su familia, poco se sabía. Desde 2002 la doctora en Ciencias Políticas de la universidad alemana de Aquisgrán trabajó en LyD como investigadora del Programa Político y dirigió la división Sociedad y Política de la entidad. Fue directora académica de la Escuela de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesora de la Universidad del Desarrollo, donde los ministros Lavín y Larroulet eran socios fundadores. En 2009 fue candidata a

senadora por La Araucanía Sur como independiente apoyada por la UDI y perdió con su compañero de lista, José García Ruminot, de RN.

Su familia se dedica a la agricultura y ha sido cuestionada por conflictos de interés debido a los proyectos impulsados sobre la propiedad de las semillas nacionales. La exministra y actual senadora, comparte propiedad en Semillas Von Baer, empresa familiar dedicada al desarrollo y cultivo transgénico de alimentos.

Juan Andrés Fontaine se suma a la lista de ingenieros comerciales de la UC con MBA en Chicago. El exministro de Economía fue director de Estudios en el Banco Central de Chile, socio de la empresa de consultoría económica Fontaine Consultores y miembro del directorio de otras sociedades. Fue profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Después de ser reemplazado en el Ministerio de Economía por Pablo Longueira se integró a la fundación LyD, donde es consejero “en cuanto a políticas públicas para favorecer competitividad, emprendimiento e innovación”, según informa el sitio web de la entidad.

Dentro del gabinete Rodrigo Hinzpeter es el más fiel compañero de gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El abogado de la Universidad Católica y ahora exministro del Interior conoce desde 1989 al Mandatario, cuando fue jefe de campaña de Evelyn Matthei en las elecciones de la Cámara Baja que disputó contra el actual Jefe de Estado. Con el tiempo Hinzpeter se unió al círculo de cercanos de Piñera. En 2005 el abogado fue parte del comando de la candidatura presidencial del empresario frente a Joaquín Lavín, quien se levantó como alternativa en la derecha chilena.

A pesar de no haber estado nunca en primera línea política, fue generalísimo de la última campaña presidencial del empresario contra Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Con esta experiencia Hinzpeter se hizo de la confianza y venía del resto de la Alianza por Chile. A pesar de que otros nombres de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente sonaron y presionaron para ocupar la titularidad del Ministerio del Interior, con estos antecedentes el abogado de RN contó con la promoción directa del Mandatario para ser ministro.

Rodrigo Hinzpeter es cofundador del estudio Bofill Mir & Hinzpeter Jana Abogados,

entidad que ofrece servicios de derecho corporativo, económico y comercial. Antes de asumir la cartera, el abogado se desprendió de su participación en la sociedad.

En el último cambio de gabinete oficializado el 5 de noviembre de 2012, Rodrigo Hinzpeter fue trasladado al Ministerio de Defensa.

Los colegas de Cencosud

En el resto del gabinete también resonaron nombres ligados a la elite y a las actuales empresas chilenas.

En Justicia asumió Felipe Bulnes Serrano. El nieto del senador conservador Francisco Bulnes Sanfuentes, es abogado de la Universidad de Chile y máster en derecho de la Universidad de Harvard. Durante 2006 se desempeñó como abogado de Cencosud, gran empresa del *retail* chileno, con presencia en Argentina, Brasil, Perú y Colombia, según consigna su sitio web.

Bulnes defendió a la importante compañía en el conflicto que se le generó por alzar de forma unilateral las comisiones de administración de la tarjeta de crédito “Jumbo Más” a sus clientes. El fallo fue desfavorable para la compañía y se hizo público en enero de 2011, cuando Felipe Bulnes ya se encontraba en el Ministerio. En ese contexto se negó a emitir opinión sobre el tema.

Al Ministerio de Minería llegó quien es hoy una de las cartas a La Moneda 2014 de la derecha. Laurence Golborne estudió en el Instituto Nacional, es ingeniero industrial de la Universidad Católica, cursó un programa ejecutivo de la Universidad Stanford y fue gerente corporativo de Cencosud.

Golborne fue parte de variados directorios empresariales del *retail* y de fondos de pensiones. Era miembro del Consejo Asesor Empresarial de la Universidad del Desarrollo, establecimiento donde se encontraban Lavín, Larroulet, Hernán Büchi y Ena Von Baer.

Una referencia común en el mundo de los negocios era la confianza que el dueño de Cencosud, Horst Paulmann, tenía con su gerente Laurence Golborne. Según la

investigación realizada por los periodistas Paulina Andrade y Marcelo Cerda para su Memoria de Título, que se recogió en el libro *Los pasos del elefante: El imperio de Herr Paulmann*⁵⁴, el ingeniero UC “no daba con el típico perfil de los ejecutivos que solían ocupar las gerencias generales de las principales compañías chilenas. La suya era, en gran parte, una historia de esfuerzos y mérito. De hecho, y al igual que su jefe, aprendió a hablar inglés con fluidez ya siendo adulto. Tal vez eso explica la química que Horst Paulmann tuvo con él desde sus primeros encuentros”.

La fortuna de Paulmann figura en la casilla número 98 en la lista de la revista Forbes 2012 que establece todos los años un ranking de las riquezas privadas a nivel mundial. La lista incluye millonarios de 58 nacionalidades, en la que el alemán nacionalizado en Chile por gracia durante el gobierno de Ricardo Lagos aparece con una acumulación de nueve mil 300 millones de dólares.

Ocho años después de trabajar para la empresa de Paulmann, Golborne renunció a la compañía que lo posicionó en el mundo de los negocios. Como relatan los periodistas Andrade y Cerda en la reseña del gigante del *retail*, *Los pasos del elefante*, la salida de Laurence Golborne provocó un remezón en los pasillos de Cencosud. Se oficializó en noviembre de 2008. “El ingeniero civil industrial ya había presentado en cuatro ocasiones su renuncia, pero en todas ellas Paulmann lo había convencido de continuar en el cargo. Esta vez fue diferente”, afirman en el libro.

Golborne arrendó una oficina en el cotizado edificio El Golf 99, en el sector oriente de Santiago, “donde también están ubicados los centros de operaciones de los hermanos Vittorio y Canio Corbo, Ernesto Tironi, Pablo Alcalde, el controvertido expresidente de La Polar y Hans Eben, fundador de ese multidespacho. Dentro de los planes del ingeniero se contaban continuar como director de la Sociedad Deportiva Audax Italiano, de la Fundación San Agustín de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile y de Icare”⁵⁵. Después de abandonar su cargo en Cencosud destaca su participación en otras sociedades anónimas como Alsacia S.A, uno de los principales operadores de Transantiago, Alsacia S.A.

54 Paulina Andrade y Marcelo Cerca, *Los pasos del elefante: El imperio de Herr Paulmann*. Editorial Radio Universidad de Chile, Santiago, 2011.

55 Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas. Promueve los principios, valores y conceptos que inspiran el desarrollo de la empresa privada como agente de progreso nacional.

Después de abandonar Cencosud el gran paso para Golborne fue el nombramiento como ministro de Minería. Asumió el 11 de marzo de 2010 y el 5 de agosto del mismo año le tocó liderar el que sería su mayor desafío, y que a la larga lo impulsaría a la vida política más activa: el rescate de los 33 mineros que, producto de negligencias en la seguridad laboral, quedaron atrapados como consecuencia del derrumbe que sufrió la mina San José en Copiapó, donde trabajaban.

El en ese entonces titular de Minería acaparó todas las cámaras nacionales e internacionales al irse prácticamente a vivir al campamento que formaron los familiares de los trabajadores atrapados. A las 00:00 horas del 13 de octubre comenzó el rescate y Golborne lloró junto las familias de cada uno de los 33 que emergieron a la superficie.

En la actualidad es titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y su figura se ha proyectado como precandidato presidencial para las elecciones de 2013, apoyado por la UDI.

Academia, empresa y elite

En el primer gabinete de Piñera, Hernán De Sominihac era el ministro de Obras Públicas. Después del cambio ministerial, se hizo un enroque entre él y Laurence Golborne: De Sominihac fue trasladado a Minería y el exbrazo derecho de Paulmann se quedó con Obras Públicas.

Hernán De Solminihac es ingeniero civil en construcción de la Universidad Católica. Junto con el actual precandidato presidencial de la Alianza por Chile, son los dos institutanos que forman parte del gabinete, entre una mayoría egresada de colegios privados. Exdecano de la Facultad de Ingeniería de la UC, De Sominihac fue criticado por sus conflictos de interés: “es reconocido por su actividad de investigación en el área de infraestructura vial y por haber encabezado proyectos y estudios para el Ministerio”, según afirma *Yo, Piñera*. El punto en discordia fue que De Solminihac encabezaría la cartera a la que antes le presentaba proyectos desde el sector privado.

El nuevo ministro estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UC (Dictuc) y de varios proyectos privados del rubro que participaron en licitaciones del MOP. Su hermano, el ingeniero civil químico UC, Patricio De Solminihač, ha sido un importante ejecutivo en la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), donde es director.

Esta empresa, que se privatizó durante la década de los 80, es una de las principales explotadoras del litio, mineral del que Chile es productor mayoritario en el mundo y que es componente principal de piezas electrónicas de diverso tipo. El 7 de febrero de 2012 el gobierno informó a través del subsecretario de Minería, Pablo Wagner que impulsaría la explotación del mineral a través de licitaciones. "Se licitará el derecho a poder explotar el mineral por el equivalente a cien mil toneladas metálicas durante 20 años", manifestó. El conflicto de interés se expresa en tanto la privatización del preciado mineral ocurrió justo cuando el ministro de Minería es hermano de uno de los directores de Soquimich.

Magdalena Matte Lecaros entró al gabinete a un cargo clave para la reconstrucción. La ingeniera civil de la Universidad Católica fue convocada para la cartera de Vivienda y Urbanismo. Después de su bullada renuncia la reemplazó el también ingeniero UC Rodrigo Pérez Mackenna.

La exministra es parte de la elite chilena. En su familia hay destacados nombres de la política y negocios nacionales. Es bisnieta de Arturo Alessandri Palma, Presidente de Chile en dos periodos y está casada con el senador UDI Hernán Larraín. Más lejano es el parentesco con Patricia, Eliodoro y Bernardo Matte Larraín, miembros de uno de los grupos empresariales más ricos en Chile, con quienes es prima en tercer grado.

En los ministerios de Medio Ambiente y de Salud asumieron titulares relacionados al mundo privado de sus respectivas carteras. Jaime Mañalich, médico de la Universidad de Chile y director médico de la Clínica Las Condes, asumió en la cartera de Salud. La ingeniera civil química de la Universidad de Chile, María Ignacia Benítez, fue designada ministra de Medio Ambiente.

Antes de dirigir el Ministerio de Salud (Minsal), Mañalich mantenía un porcentaje en las acciones de Clínica Las Condes, donde el Presidente Sebastián Piñera compartía propiedad.

Antes de ser ministra, María Ignacia Benítez era conocida en el rubro de los proyectos energéticos como gran gestora, operadora y lobbista de las iniciativas privadas ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Trabajó para Endesa y la Compañía Aceros del Pacífico (CAP), fue asesora del senador Pablo Longueira en materias de institucionalidad ambiental y es hermana del rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez.

Felipe Morandé, exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, socio y amigo de Felipe Larraín en Viña Quintay, y exgerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, fue nombrado ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Al Ministerio del Trabajo llegó Camila Merino, ingeniera civil industrial de la Universidad Católica y exgerenta de Metro. Al de Agricultura, José Antonio Galilea, técnico agrícola del Inacap. Catalina Parot, abogada de la Universidad Católica, fue nombrada titular de Bienes Nacionales. En la cartera de Energía, Ricardo Raineri, ingeniero comercial de la Universidad Católica asumió como ministro. La ingeniera comercial de la Universidad Católica, Carolina Schmidt fue nombrada ministra del Sernam. El actor y licenciado en cine de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Luciano Cruz Coke, es el titular de Cultura.

Del mercado y los *think tanks* al Estado

En el cuerpo de intendentes nombrados destacaron Fernando Echeverría y Rodrigo Galilea. Echeverría, exintendente metropolitano, es socio y fue el representante legal de la constructora Echeverría e Izquierdo, responsable de la construcción de al menos tres de los edificios dañados por el terremoto.

Rodrigo Galilea, intendente de la Región del Maule, fue gerente general de Galilea S.A. Ingeniería y Construcción. La empresa constructora de su familia es una de las que

tiene mayor presencia en la zona, que resultó muy afectada en materia de edificaciones.

La dotación de mandos medios y asesores de los ministerios fue alimentada por los centros de pensamientos ligados a la derecha: Libertad y Desarrollo (LyD), Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Libertad y Fundación Pinochet.

A este nuevo contingente se le bautizó como los “Sebastián boys”: jóvenes en su mayoría formados en la Universidad Católica, con estudios en el extranjero, currículo académico de excelencia, escasa experiencia laboral en el mundo público y con una dura visión ideológica de cómo debía funcionar el Estado y el mercado.

Además de los nuevos intendentes, otros nombres relacionados a empresas de construcción y obras de uso público entraron a la nueva orgánica gubernamental. Herman Chadwick Piñera, abogado, expresidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) y primo hermano del Presidente Sebastián Piñera, fue convocado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), donde hoy es presidente.

Durante el período de emergencia y al comienzo de la reconstrucción, el abogado Chadwick fue el principal promotor de la estrategia de concesiones, lo que tuvo buena recepción en el MOP bajo la gestión de Hernán De Solminihac.

El lunes 15 de marzo, Herman Chadwick dijo a la prensa que quería “hablar un poco con el nuevo ministro y con el Presidente Piñera para que todas las rutas, además de escuelas, hospitales, cárceles y edificios públicos que se cayeron, se concesionen”. Un día después, De Solminihac declaró al vespertino *La Segunda* que “el proceso de concesiones ha ayudado al desarrollo del país” y que “podría ayudarnos ahora en la reconstrucción”.

Entre los puestos claves del MOP hay más profesionales ligados a Copsa, el gremio de las concesionarias. Loreto Silva, subsecretaria de Obras Públicas, quien en el último cambio de gabinete de noviembre de 2012 fue nombrada ministra de la cartera, se había hecho un nombre en la historia de las concesiones en Chile. Fue socia del estudio Morales & Besa, donde lideraba el equipo de mercados regulados. Se desarrolló en las áreas de infraestructura pública y proyectos inmobiliarios y en la Asociación de

Concesionarios de Obras de Infraestructura (Copsa) se desempeñó como fiscal. Además fue profesora de Concesiones en el magíster de Derecho de la Universidad del Desarrollo.

Antes trabajó para la Cámara Chilena de la Construcción y participó en la “redacción de diversos proyectos legales, como la ley de Concesiones y el marco jurídico aplicable a las empresas de servicios sanitarios”, según señaló la revista *Capital* a fines de 2008.

Loreto Silva asesoró a bancos, *retail* e inmobiliarias. Entre otros, a Metrogas y Costanera Center de Cencosud, compañía en la que el ministro Laurence Golborne fue gerente corporativo y Felipe Bulnes abogado defensor.

El exdirector general de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera, Patricio Lahsen, duró solo dos meses en el aparato estatal. Exgerente general de la Concesionaria Embalse Convento Viejo -miembro de Copsa-, renunció por diferencias con Loreto Silva y con el ministro Hernán De Solminihac.

Antes de asumir su cargo en el MOP, Lahsen ya había trabajado con Loreto Silva. A fines de 2009 el ingeniero civil de la Universidad de Chile presentó una querrela contra el MOP por 28 millones de dólares a favor de su empresa. Loreto Silva, actual ministra de Obras Públicas, era parte del estudio de abogados que patrocinó la causa judicial en contra del Estado de Chile, cuando ambos defendían los intereses de los privados.

Otro personaje trasladado desde Copsa al MOP es Mauricio Gatica. El excoordinador de Concesiones del Ministerio fue el gerente general de la concesionaria Rutas del Pacífico S.A., además de vicepresidente del gremio privado durante un período.

Llamaron también la atención los nombres de Andrés Iacobelli Del Río y Pablo Allard. Iacobelli es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y magister en políticas públicas de la Universidad de Harvard, quien fue nombrado subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Él y Pablo Allard, arquitecto urbanista de la PUC, son fundadores y miembros del directorio de Elemental, firma asociada desde 2007 a la privatizada Compañía de Petróleos de Chile, Copec, y a la Universidad Católica.

Según consta en su sitio web, la empresa se dedica a “proyectos arquitectónicos de interés público e impacto social”. Después del terremoto ha participado en proyectos y licitaciones vinculados a la reconstrucción.

En la actualidad ni Allard ni Iacobelli siguen en sus cargos públicos. Después de ser blanco de variadas críticas por la reconstrucción, en su rol de coordinador nacional del Plan de Reconstrucción Urbana del Minvu, el arquitecto Allard dejó su puesto en agosto de 2011. De inmediato asumió como decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, institución privada ligada a la UDI, presidida por Hernán Büchi y donde Cristián Larroulet, Joaquín Lavín, Ena Von Baer y Laurence Golborne también han participado.

Iacobelli se desvinculó de la Subsecretaría de Vivienda en julio de 2011, en medio de las investigaciones que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República emprendieron por las peticiones que su esposa habría realizado al Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano. Las cuestionadas tratativas de su mujer tenían como objetivo acelerar el pago por unos terrenos que sus abuelos vendieron en Puente Alto, los que fueron utilizados en la construcción de viviendas sociales.

En el llamado “segundo piso” de la era Piñera llegó a comandar María Luisa Brahm. La abogada de la Universidad Católica pasó de ser la directora ejecutiva del Instituto Libertad -ligado a RN-, a la mujer fuerte y brazo derecho del Mandatario en La Moneda.

María Luisa Brahm ha formado un núcleo de asesores de extrema confianza, reclutados desde los distintos centros de pensamiento relacionados a la derecha. Su función es colaborar en los ministerios y ser puente directo entre su división y la Presidencia. Los integrantes de su equipo realizan coordinación intersectorial, participan de comités temáticos con diputados, senadores y ministros, y elaboran minutas especializadas sobre asuntos de interés del Jefe de Estado y las carteras.

Los amigos del Presidente

En los negocios Sebastián Piñera no está solo. Cuenta con numerosas redes familiares y de amistad. Los íntimos amigos del Presidente de la República, Carlos Alberto Délano, José Cox y Andrés Navarro, figuran en la lista de nombres relacionados con empresas del rubro de la construcción, entre otros.

Carlos Alberto Délano es accionista del Grupo Penta, uno de los *holdings* empresariales más importantes del país que en la actualidad administra activos por más de veinte mil millones de dólares. Tiene presencia en el área de seguros mediante Penta Vida y Penta Security; el rubro financiero con el Banco Penta; previsional a través de AFP Cuprum; inmobiliario, con Penta Inmobiliaria; salud con la Isapre Vida tres S.A., Laboratorio Bio Nuclear, Help, VidaIntegra, Clínica Las Condes, Health Group y Banmédica S.A.

Délano y Carlos Eugenio Lavín además de ser accionistas de Penta tienen intereses en educación con la Universidad del Desarrollo, donde son parte del Consejo Directivo. Ahí comparten con Hernán Büchi quien lo preside, y Federico Valdés Lafontaine, rector de la institución educativa y expresidente de la sociedad anónima Azul Azul, administradora del Club deportivo Universidad de Chile.

José Cox Donoso, quien lideró la recaudación de fondos de Sebastián Piñera en la carrera presidencial a La Moneda, fue presidente de la Bolsa Electrónica, es director de la conocida empresa constructora Socovesa y es parte de numerosos directorios. Además ha compartido negocios con el Presidente. Cox, Piñera e Ignacio Guerrero compraron acciones a los socios minoritarios de la Empresa Eléctrica Pangué, exfilial de Endesa. Lo hicieron a través de Bancard e Ilihue y obtuvieron grandes ganancias al venderlas a Endesa España, según indica *El Mostrador*⁵⁶.

En “José Cox, el negociador del Presidente”⁵⁷, las periodistas de Reportajes de *La Tercera*, Michelle Chapochnick y Pilar Palma, destacan la cercanía y rol clave que Cox ha

56 *El Mostrador*, 9 de marzo de 2012. “La doble militancia de José Cox como negociador del Transantiago y contraparte del MOP en ruta concesionada”, Claudia Urquieta.

57 *La Tercera*, 4 de junio de 2011. “José Cox, el negociador del Presidente”, Michelle Chapochnick y Pilar Palma.

desempeñado en distintos episodios de la vida del Mandatario. “Cuando surgieron las críticas por la propiedad de Colo Colo, en medio de las polémicas elecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, Cox también fue uno de sus consejeros”. Durante la campaña presidencial llevó a cabo “las negociaciones para que el candidato se desprendiera de tres de sus empresas más importantes: LAN, Chilevisión y Clínica Las Condes”, afirma la nota.

Otro de sus grandes amigos, Andrés Navarro Haeussler es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. En 1974 fundó la empresa Sonda, una de las líderes a nivel latinoamericano en servicios de tecnologías de la información. En la actualidad es presidente de la entidad, también es miembro del directorio de la Clínica Las Condes y de SalfaCorp, la mayor empresa constructora del país, en la que participaba el Mandatario Sebastián Piñera. Navarro presidió la Fundación Teletón, fue director de Chilevisión, LAN Airlines y Viña Santa Rita, entre otras empresas en las que compartió negocios con su amigo Jefe de Estado. Hoy es uno de los dueños y directivos de la Universidad San Sebastián.

El mismo Sebastián Piñera tenía presencia en el rubro de la construcción a través de Salfacorp y la Constructora Aconcagua, ligada a la inmobiliaria El Bosque S.A que comercializó el edificio capitalino dañado Geocentro, construido por Novatec. En su momento el Presidente poseyó el 17,8 por ciento de las acciones de Aconcagua. Su participación se diluyó cuando ésta se fusionó con Salfacorp. Las últimas informaciones de prensa indicaban que poseía un 5,7 por ciento de esta empresa. Piñera fue accionista de algunas concesionarias de Obras Públicas, junto a José Cox, a través de un fondo de inversiones, indican los periodistas Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa en su investigación para *Ciper*⁵⁸.

Al regreso de su MBA en Chicago Moreno y Piñera se volvieron a ver. En la década de los 80 Moreno formó una consultora con sus excompañeros de ingeniería comercial y trabajaron para Citicorp, donde Sebastián Piñera era gerente. El actual Mandatario quedó tan satisfecho de la labor de los consultores Moreno, Bilbao y Pérez

58 *Ciper*, 18 de marzo de 2010. “Los vínculos de Piñera con las empresas de los edificios dañados: los hombres del Presidente”, Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa.

Mackenna, que les ofreció trabajo. Estos últimos aceptaron, mientras, Moreno Charme regresó al grupo Cruzat.

En la actualidad Juan Bilbao es accionista del Consorcio Financiero. Francisco Pérez Mackenna es el principal ejecutivo del *holding* del Grupo Luksic, una de las mayores fortunas de Chile. Fue gerente general de la Compañía Cervecerías Unidas (CCU), propiedad del mismo grupo económico. Desde julio de 1998 ocupa el cargo de gerente general de Quiñenco S.A.; además, es parte del directorio del Banco de Chile, Madeco, CCU, la embotelladora de CCU, ECUSA, CCU Argentina, Inversiones y Rentas, Telefónica del Sur, Banchile Corredores de Bolsa, LQ Inversiones Financieras y asesor del directorio de la Viña San Pedro Tarapacá.

Un Presidente preocupado por sus empresas

La lista de empresas que tenía y tiene Sebastián Piñera es extensa y variada. El Presidente ha explorado distintos rubros comerciales, desde la construcción hasta la salud, pasando por el deporte, el transporte aéreo y las comunicaciones.

En plena carrera presidencial la crítica por sus posibles conflictos de interés fue creciendo. Ya electo, los cuestionamientos se mantuvieron, y el Presidente tuvo que tomar decisiones claves ante la opinión pública. Pasado el cambio de mando, y en medio de un ambiente hostil por las características de su nuevo equipo, Sebastián Piñera dio una entrevista al diario argentino *Clarín*⁵⁹.

En el artículo el Mandatario contó que en el momento del terremoto estaba reunido con amigos, “íbamos a hacer una excursión a caballo a la Cordillera”, afirmó. Recuerda que se dio cuenta “de inmediato de que esto iba a cambiar la agenda. Lo primero que pensé es dónde había sido el epicentro, porque si era cercano a la costa, el riesgo de maremoto era inminente y había que evacuar las zonas costeras”. Según Piñera, en la reacción a la catástrofe “se cometieron errores que significaron muchas muertes”.

Entrando en materia de conflictos de interés, la periodista Hinde Pomeraniec del

59 *Clarín*, 2010. “Piñera: 'Sólo los muertos y los santos no tienen conflicto de intereses'”, Hinde Pomeraniec.

medio trasandino le comentó que el equipo ministerial le costó “muchas críticas, dicen que se trata de un gabinete de empresarios y que no representa la diversidad cultural chilena...”. El Mandatario respondió en tono profundo que en “la vida uno siempre enfrenta conflictos de intereses, solamente los muertos y los santos se salvan de esta situación. Lo importante es saber resolverlo bien, y yo le aseguro que todo mi equipo de gobierno tiene un solo Norte, una sola misión: velar por el bien público”.

El artículo publicado en abril de 2010 fue muy difundido en Chile y generó una nueva ola de comentarios a favor y en contra de la autoridad y su bloque político que llevaba poco más de un mes en La Moneda.

El Presidente añadió que el gobierno era para todos los chilenos, “pero con un compromiso muy especial de alma con los sectores más pobres y la clase media. No es el gobierno de los empresarios”, aseveró, “a pesar de que creo que la labor de innovación e inversión de los emprendedores es fundamental”. Piñera justificó los nombres de su gabinete porque después de más de 20 años de gobiernos de la Concertación, “la gente de nuestro sector estaba en el Parlamento o en el sector privado, no estaban ni de vacaciones ni en la Luna, y como no podíamos recurrir a legisladores porque tienen un mandato constitucional, recurrimos a gente con trayectoria en el sector privado”.

Según describe Ernesto Carmona en *Yo, Piñera* “las críticas al patrimonio de los ministros también apuntaron indirectamente al Mandatario electo”. Sus cercanos anunciaron que “desearía conservar algunos ingresos o mantener un fondo no definido para financiarse durante su período, pues el sueldo de Presidente no cubriría sus gastos básicos”

Una vez que asumió el mando, los cuestionamientos fueron en aumento y el Presidente vendió acciones de algunas de las empresas más conocidas que controlaba: Clínica Las Condes, LAN, Chilevisión, y Blanco y Negro, dueña del club deportivo Colo-Colo.

El 16 de febrero de 2010 Piñera vendió 9,76 por ciento de su participación en la Clínica Las Condes. La Bolsa de Comercio de Santiago remató las acciones. La corredora

Celfin compró casi el diez por ciento que mantenía el Jefe de Estado, por un valor cercano a los 37 millones de dólares.

Piñera poseía el 26 por ciento de LAN a través de Inversiones Axxion S.A. e Inversiones Santa Cecilia. Dice María Olivia Mönckeberg en su libro *Los magnates de la prensa* que a través de estos dos brazos, Piñera mantenía presencia activa en LAN.

Según Mönckeberg, la familia Cueto poseía otro 27 por ciento y entre ellos tienen un pacto de accionistas que les permite controlar cómodamente LAN. “Diversas estimaciones indican que la mitad del patrimonio de Piñera está constituido por sus acciones en LAN Airlines, como se llama ahora la compañía que opera en Chile, Argentina, Perú y Ecuador”⁶⁰.

En el Debate Presidencial de Anatel transmitido el 11 de enero de 2010 el actual Mandatario declaró “voy a vender LAN antes de asumir como Presidente”. Pero Sebastián Piñera vendió sus acciones de la aerolínea catorce días después de haber llegado a La Moneda.

Puso a la venta el 21 por ciento, por un precio de mil 237 millones de dólares. Como consignó la prensa del período, la familia Cueto, cercana al Mandatario y propietaria del 27 por ciento de la aerolínea a través de la financiera Costa Verde Aeronáutica, tuvo la primera opción de compra gracias al pacto de control de la compañía que suscribieron ambos grupos.

El 24 de marzo de 2010 el grupo Bethia, liderado por Liliana Solari, una de las socias de Falabella, acordó la compra del ocho por ciento de las acciones de Piñera en la línea aérea. Por un valor de 425 millones de dólares adquirió el vehículo de inversiones del Mandatario: Axxion. En un remate en la Bolsa de Santiago, se vendió un poco más del tres por ciento de las acciones restantes de la compañía. La corredora Celfin se adjudicó un lote de más de once millones de acciones por 196 millones de dólares. Con estos movimientos, Sebastián Piñera se deshizo de su participación en LAN.

60 María Olivia Mönckeberg, *Los magnates de la prensa: Concentración de los Medios de Comunicación en Chile*. Editorial Random House Mondadori, Santiago, 2009.

Después de cinco meses de asumir la Presidencia de la República, Piñera vendió las acciones que tenía en el canal de televisión abierta, Chilevisión (CHV). El gigante de las telecomunicaciones estadounidense Time Warner se quedó con la empresa el miércoles 25 de agosto de 2010. Se calculó que la venta le significó a Piñera una cifra cercana a los 150 millones de dólares.

El catorce por ciento que el Presidente mantenía en la sociedad anónima Blanco y Negro, que controla al club deportivo Colo Colo también fue vendido. Con la disputada transacción, Piñera recaudó siete millones y medio de dólares en diciembre de 2010. La Corredora CorpBanca se adjudicó el once por ciento y el porcentaje restante se lo llevó LarraínVial. El subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, también vendió sus acciones del club deportivo. Después de estas operaciones, el consuegro de Sebastián Piñera, Hernán Levy, pasó a ser el accionista mayoritario del popular equipo de fútbol, con un 24 por ciento de la compañía.

A pesar de estas transacciones, las redes de negocios e interés entre el actual gobierno, su gabinete y colaboradores cercanos, con grandes grupos económicos chilenos siguen siendo fuertes y diversas.

No se sabe con exactitud si el Presidente mantendría intereses en la importante constructora nacional Salfacorp. Según el reportaje “Los vínculos de Piñera con las empresas de los edificios dañados: Los hombres del Presidente”, publicado por *Ciper* en marzo de 2010, Piñera poseía casi un seis por ciento del *holding*, “inversión que podría formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que delegó en Celfin y LarraínVial, pues no se ha informado públicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursión presidencial en 2005, Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña”⁶¹.

Los periodistas Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa afirman que Piñera “sabía que este activo podría significarle un conflicto de interés y en diciembre de 2009 anunció su venta: ‘Tengo la firme intención de desprenderme de la propiedad o administración de todas las empresas que puedan significar cualquier obstáculo o

61 *Ciper*, 18 de marzo de 2010. “Los vínculos de Piñera con las empresas de los edificios dañados: los hombres del presidente”, Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa.

conflicto de interés con mi vocación de ser un buen Presidente para todos los chilenos”.

En la actualidad no es información pública en qué porcentaje el Mandatario conserva sus acciones y qué tipo de administración o vínculos mantiene con ellas. Es posible que haya realizado un fideicomiso voluntario con las entidades financieras Celfin y LarraínVial por el resto de sus empresas e inversiones. Pero esto no ha sido confirmado. El Presidente y sus círculos cercanos mantienen en reserva cuál es la lista real de la participación en empresas que podría conservar el Jefe de Estado hoy.

¿Manos a la Obra?

Entretanto, desde marzo de 2010 el gobierno y sus redes han desplegado la estrategia de fortalecer el modelo de subsidios y concesiones, minimizando el suministro directo, la administración y gestión del Estado sobre los derechos básicos como la vivienda, la educación, las obras públicas y la salud.

Tal como lo auguró el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, en su presentación “Desafíos del nuevo gobierno: Levantemos Chile”, el 19 de marzo de 2010 ante distintos líderes empresariales. En la ocasión planteó la necesidad de “refundar la relación Estado y privados: *Public Partner Partnership* para poner en marcha la reactivación productiva”⁶², a través de esta vigorizada estrategia de conducción gubernamental y económica, la conocida “alianza público-privado”.

Para enfrentar la emergencia se establecieron una serie de medidas impulsadas por el gobierno y los grandes grupos económicos. Una de las primeras se enfocó en los damnificados con urgencias de reparación de los daños de sus viviendas, la que causó gran polémica.

El sábado 27 de marzo en una visita a la Región del Bío-Bío, el Presidente Sebastián Piñera anunció uno de sus programas de reconstrucción: “Manos a la Obra”. Este consistió en la asignación de dinero a las personas que sufrieron daños en sus viviendas para comprar materiales de reparación.

62 Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter en presentación de “Desafíos del nuevo gobierno: Levantemos Chile”, el 19 de marzo de 2010.

Pasaron cuatro días y Radio Bío-Bío informó que a través del Programa el gobierno asignó ocho mil millones de pesos a las tres grandes cadenas de materiales de construcción a nivel nacional: Homecenter Sodimac, Construmart e Easy.

En los anexos del informe del Programa Manos a la Obra se especifican los montos distribuidos por comuna y proveedor, entre la Región Metropolitana, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bío-Bío y de la Araucanía. Homecenter Sodimac, Construmart e Easy serían las únicas empresas a las que los damnificados podrían dirigirse con un descuento de un diez por ciento -según el convenio acordado entre el gobierno y las empresas- para comprar sus materiales de reparación. Más de 200 comunas tendrían acceso al Programa.

En el adjunto se detalló cuánto es lo que debían comprar a cada proveedor y con quién debían contactarse al momento de la compra de materiales. Incluso se informó el nombre y mail de contacto de los ejecutivos de venta de las empresas por zona.

En el anexo también se puede observar una ficha tipo que debieron rellenar los damnificados donde tuvieron que especificar la lista de materiales entregados, los que no podían exceder la suma de 300 mil pesos por grupo familiar. Quienes utilizaran esta medida debían firmar el siguiente consentimiento: "Al recibir este beneficio rechazo formalmente la posibilidad de postular para acceder una mediagua. La recepción de beneficios por el programa Manos a la Obra no impide postular a otros beneficios distintos a las mediaguas".

Para estas asignaciones no hubo proceso de licitación y tampoco se invitó a otras compañías del rubro a participar. Menos a las de mediano y pequeño tamaño. Por esto surgieron reclamos de los empresarios de las zonas afectadas que se podrían haber sumado al proceso.

El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter justificó que el programa se desarrollara por asignación directa para que les llegara a los chilenos afectados “con la mayor prontitud posible, una gran cantidad de materiales”⁶³.

Los cuestionamientos forzaron al Ejecutivo a cambiar de planes. En la misma ocasión Hinzpeter manifestó haber escuchado “el planteamiento de las ferreterías regionales”, el que le pareció “sensato”. Agregó que “cuando las cosas son sensatas, cuando van en la línea correcta, no nos demoramos y tomamos las decisiones en forma inmediata”.

De paso, explicó que las intendencias contarían con recursos adicionales a los ocho mil millones de pesos asignados al Programa Manos a la Obra para subsidiar recursos que se adquirieran por fuera de Homecenter Sodimac, Construmart e Easy. “De este modo, no solo ayudaremos a las familias afectadas con materiales para la reparación, sino que también reactivaremos a las pequeñas y medianas empresas”, afirmó el abogado.

A pesar del anuncio de enviar nuevos fondos para que las ferreterías locales pudieran reactivarse a partir de la venta de materiales para la reconstrucción, la decisión inicial y gruesa benefició directamente a las tres principales cadenas. Esas empresas además, estaban vinculadas a algunos de los nuevos ministros del gabinete de la Alianza por Chile e, incluso indirectamente, al mismo Presidente Sebastián Piñera.

Los intereses cruzados

Easy es propiedad de Cencosud, *holding* del que fue gerente corporativo hasta 2009 el exministro de Minería y de Obras Públicas, Laurence Golborne, como se ha visto antes.

El ministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno y Homecenter Sodimac también están relacionados. Uno de los propietarios de la empresa de materiales es Dersa, grupo económico de la familia Del Río Goudie, donde Moreno fue vicepresidente y

63 *Emol*, 1 de abril de 2010. “Gobierno amplía a Pymes locales programa de reconstrucción en zonas devastadas”, *Emol*.

mantuvo una inversión de más de cinco mil millones de pesos, según la memoria de 2008 de la firma⁶⁴. El grupo Bethia, dueño de Falabella, también tiene relación con la familia del Río a través de las inversiones en Sodimac donde posee el 0,21 del capital social, según consta en la Memoria de 2009 de la empresa de construcción. Además en 2011, los grupos económicos Solari, Cuneo y Del Río controlan Falabella, la empresa chilena con mayor capitalización bursátil⁶⁵.

La nota de *Ciper* “Los nexos del gobierno con las empresas de la reconstrucción”⁶⁶, de abril de 2010, informa que el mismo día del cambio de mando, el *Diario Oficial* publicó “la desvinculación que Moreno hizo de Inversiones Dersa Tacas Tres Ltda., una sociedad que nació de una división de Dersa S.A. en octubre de 2009 y que es parte del grupo de accionistas de S.A.C.I. Falabella”. Como consecuencia de ese movimiento, Moreno retiró una suma cercana a los seis mil millones de pesos.

Otras autoridades menos conocidas se vieron involucradas con negocios privados. Incluso uno de ellos se encuentra hasta hoy en una posición de supervigilancia del mercado: el fiscal nacional económico Felipe Irrarzábal, quien es cuñado de Guillermo Elgueta, gerente de Construmart, una de las empresas beneficiadas con el Programa Manos a la Obra.

El origen de la decisión

Juan Cristóbal Lira Ibáñez, exsecretario ejecutivo del Comité de Emergencia, instancia que funcionó de forma transitoria durante ese período, también se vio cuestionado por el escándalo que provocó la asignación directa de recursos públicos a Homecenter Sodimac, Construmart e Easy.

Lira es ingeniero comercial de la ex Escuela de Negocios de Valparaíso –que en 1988 pasó a ser la actual Universidad Adolfo Ibáñez- y exgerente general de Distribución y Servicio (D&S) entre 2002 a 2004. Esta empresa creada por la familia Ibáñez, dedicada

64 *Memoria anual 2008 de Homecenter Sodimac*. Disponible en sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, (www.svs.cl/documentos). Consultada el 25 de julio de 2012.

65 *La Tercera*, 26 de abril de 2011. “Socios de Falabella trabajan en nuevo pacto de accionistas para definir fórmula de sucesión”, Héctor Cárcamo.

66 *Ciper*, 1 de abril de 2010. “Los nexos del Gobierno con las empresas de la reconstrucción”, Juan Pablo Figueroa.

al *retail*, era propietaria de las cadenas de supermercados Híper Líder, Express de Líder, Ekono y Acuenta, hasta 2009 cuando D&S fue adquirida por la internacional Walmart, el gran *holding* norteamericano con sedes en varias partes del mundo.

Pasaron casi dos meses y el domingo 23 de mayo Cristóbal Lira declaró a *El Mercurio* que la experiencia de la emergencia hasta el momento había sido “dura”.

En el artículo titulado “Los intensos días de Cristóbal Lira al mando de la emergencia” también se menciona que el ingeniero “dejó el directorio del club de la UC⁶⁷ y de la Universidad Adolfo Ibáñez, se quedó abajo de la regata Bicentenario que haría en la Esmeralda y nunca más volvió a pisar su oficina de Lounge y Ditec”.

Lira informó a las periodistas Bernardita Aguirre y Magdalena Winter de *El Mercurio* cómo formó su equipo de trabajo: “Salió a pedir ayuda al sector privado” relatan. El ingeniero comercial afirma que llegaron “a tener 22 personas de distintas partes. Les pedí gente a la empresa privada, a los ministerios, al Ejército. Todos tenían que ser prestados. Pedía a las empresas gente de buen nivel, que supiera del tema y que estuviera dispuesta a quedarse el ciento por ciento del tiempo”, cuenta.

Las periodistas agregan que “así llegaron ejecutivos de LarraínVial y de Celfin, de Cencosud y D&S, de Aguas Antofagasta y de Salfacorp. Sus empresas respectivas les mantienen el sueldo, pero trabajan en la reconstrucción”. Cabe recordar que LarraínVial y Celfin compraron las acciones del Presidente Sebastián Piñera en Colo Colo, LAN y Clínica Las Condes.

El artículo también aborda las asignaciones a las tres principales empresas de materiales de construcción. Dice que “a Lira le ha pesado la inexperiencia política. Por ejemplo, cuando pensaron en la reparación de las casas dañadas, con 300 mil pesos por familia. ‘Ahí fue donde tuvimos un lío, porque hicimos un convenio con Easy, Sodimac y Construmart y ‘altiro’ saltaron todos los políticos, porque no les compramos a los ferreteros chicos. Me dijeron que se los había dado en bandeja, pero yo no soy político, desgraciadamente, y por eso me equivoco en estas cuestiones”, afirmó Lira Ibáñez a *El*

67 Donde posee cerca del cinco por ciento de Cruzados SADP, sociedad controladora del equipo de fútbol de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Mercurio.

El ingeniero comercial se justificó. “Yo sabía que ellos eran los mejores, los que podían responder. Conseguimos entre un diez por ciento y un doce por ciento de descuento en los materiales, fletes gratis y toda la logística de informes diarios”, manifestó el exsecretario del Comité de Emergencia.

La nota termina con una pequeña entrevista de las periodistas, en la que le consultan “¿Qué pasó con Lounge y Ditec, sus empresas?”. Lira respondió que las dejó en manos de su socio Ignacio Concha. “Él siguió trabajando en Lounge y me dijo que no me preocupara, que él estaría ahí ciento por ciento. Pero el domingo 28 de marzo estaba empezando mi comité de emergencia y me sonó el teléfono, me dijeron que se había muerto Ignacio, y no lo podía creer... Tenía 25 personas en la reunión y tenía que seguirla, después me fui a su casa”.

Una vez finalizada la labor de Cristóbal Lira en el Comité de Emergencia del gobierno, siguió como asesor del Ministerio del Interior. En noviembre de 2010 se le asignó como jefe de la División de Seguridad Pública. Desde ese puesto se hizo cercano del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter. Después de que promulgaran la ley⁶⁸ que estableció la institucionalidad del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue nombrado en febrero de 2011 subsecretario de Prevención del Delito.

Los intendentes y sus edificios

Cuando Rodrigo Hinzpeter se acercó de manera informal a los elegidos del Presidente para ocupar el cargo de intendente, al menos tres rechazaron la invitación. Fernando Echeverría, Rodrigo Pérez Mackenna y Andrés Molina, de la región Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins y la Araucanía habrían declinado argumentando tener otras responsabilidades, informó *La Tercera*. Pero, “el terremoto y el rol en el proceso de reconstrucción terminaron por doblegar voluntades e incidieron en una respuesta favorable”, indicó el principal medio del consorcio de Álvaro Saieh.

68 La nueva normativa establece que el Ministerio estará compuesto por el ministro del Interior, secundado por el subsecretario del Interior y el de Desarrollo Regional, a los que se agregará el de Prevención del Delito. Esta repartición también contempla la creación de Jefes de Dirección de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

El 4 de marzo de 2010 el Ejecutivo nombró a los cinco intendentes de las regiones más afectadas por el terremoto. En la Región de O'Higgins asumió Rodrigo Pérez, en el Maule lo hizo Rodrigo Galilea, en el Bío-Bío Jacqueline Van Rysselberghe, Andrés Molina en La Araucanía, y Fernando Echeverría en la Región Metropolitana. Cinco días después, nombró a los jefes regionales restantes.

En la ceremonia se entregó a cada autoridad la carpeta de desafíos, que en el caso de las regiones terremoteadas incluía solo temas de reconstrucción, y los *pendrive* con información local de carácter general.

Se había superado el primer problema, pero al Presidente no tardaría en presentársele otro.

A una semana de gobierno y aún pendiente la venta de todas las acciones de LAN, Sebastián Piñera por segunda vez debía dar la cara a los conflictos de interés originados de su inmensa red de inversiones. Esta vez el problema surgía en las edificaciones más dañadas por el sismo.

Se trató del edificio Geocentro de calle Amunátegui en Santiago, que fue construido por Novatec y cuya inmobiliaria fue El Bosque S.A., ambas empresas ligadas a Constructora Aconcagua, en la cual Piñera tenía una antigua inversión. Poseía el 17,8 por ciento de la compañía, siendo el tercer mayor inversionista después de su amigo Andrés Navarro, que tenía el 30 por ciento de la sociedad, y de los hermanos Aníbal y Gustavo Montero que controlaban el 50 por ciento.

Cuando Aconcagua se fusionó con SalfaCorp en septiembre de 2007, Piñera quedó con un 5,7 por ciento de este nuevo *holding*. “Somos empresas muy afines tanto en términos de valores como de desafíos”, señaló en aquella ocasión el gerente general de la compañía, Francisco Garcés⁶⁹.

69 *El Mercurio*, 4 de septiembre de 2007. “Salfacorp y Aconcagua se fusionan y forman mayor grupo constructor inmobiliario”, equipo Economía y negocios.

En los últimos quince años Salfacorp, a través de sus filiales Inmobiliaria Geosal y Aconcagua, se abocó a la venta de casas de entre mil y tres mil UF, destinadas a los segmentos medios de la población, que representaban al momento de la fusión, cerca del 75 por ciento de las ventas totales de viviendas en el país⁷⁰.

La pyme del intendente

El terremoto tocó fuerte al intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría. Y no es que su casa de veraneo en Cachagua, donde se encontraba con su familia el día del sismo, haya sufrido daños o que haya perdido algún familiar.

Echeverría es socio de la constructora Echeverría e Izquierdo, empresa responsable de la construcción de al menos tres de los edificios dañados por el terremoto. En Santiago estuvo a cargo de la edificación de Altos de Huechuraba y en Concepción de Alto Arauco II y Castellón. Este último presentó daño estructural severo y Arauco II mantuvo por largo tiempo un decreto de demolición.

Ante los eminentes cuestionamientos públicos, el recién nombrado intendente Echeverría afirmó al vespertino *La Segunda* que se debía buscar responsabilidades en forma gradual. “Hoy estamos preocupados de la emergencia, de que haya agua y luz, orden público, de que haya techo... después se investigará si hay o no responsabilidad”.

Esas declaraciones fueron formuladas en abril, en el acto en el cual el intendente de Santiago firmó un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para que el gremio pusiera a disposición de los municipios a voluntarios que evaluaran los daños de las edificaciones capitalinas. Echeverría fue presidente de la CChC durante más de diez años y esta relación con el gremio constructor le costó variadas críticas por conflictos de interés.

En entrevista con las autoras de esta Memoria, el exintendente Echeverría recuerda el episodio casi en tono de anécdota: “Fui presidente y tuve mucho honor en recibir ese puesto. No veo ningún problema. El Presidente trató de traer gente especializada, cuando el daño era mucho. Incluso yo en un momento le pedí ayuda a la

70 Manuel Salazar, *Sebastián Piñera*. Editorial Mare Nostrum, Santiago 2009.

Cámara y firmamos un acuerdo en el cual nos dieron la asesoría técnica porque se necesitaban cientos de especialistas”⁷¹.

Con el acuerdo la CChC asumió la tarea de fiscalizar a las empresas que resultaron con sus edificios dañados. Claro que la mayoría de las constructoras de los inmuebles, y posibles responsables de los daños, son socios de la misma entidad⁷².

Echeverría estudió en el colegio San Ignacio, se tituló de ingeniero civil en la Universidad Católica y obtuvo un diplomado en la Universidad de Chile y otro en la Universidad de Stanford. Se desempeñó como presidente de la Corporación Educacional de la Cámara de la Construcción, fue director de AFP Hábitat, y de Invesco SA, brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción. Además fue vicepresidente de Cruzados Sociedad Anónima Deportiva Profesional, empresa creada para hacerse cargo de los intereses económicos del club deportivo Universidad Católica.

La inspiración jesuita donde se formó en los años de enseñanza básica y media lo llevaron a ser miembro del Consejo de la Universidad Alberto Hurtado y consejero de la fundación Un Techo para Chile. También fue directivo del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), sustentado por las corporaciones más relevantes del país para “la promoción de los principios, valores y conceptos que inspiran el desarrollo de la empresa privada como agente de progreso nacional”, según manifiesta su sitio web.

La experiencia de Echeverría en el sector público era nula, pero no se pudo negar a la llamada del Presidente. Apenas dos días después de ocurrido el terremoto y tsunami, Piñera le pidió ayuda para enfrentar “la tragedia de la capital”, detalla en la entrevista. “Me ofreció el puesto de intendente y yo le dije que estaba dispuesto a irme a cualquier lugar que él me encomendara. Mi ‘sí’ fue inmediato, pese a que ni siquiera había conversado con mi familia o socios”, indica.

Echeverría quería irse de voluntario sin cargo, pero Sebastián Piñera le planteó

71 Entrevista realizada a Fernando Echeverría por las autoras de esta Memoria. 9 de agosto de 2011.

72 *Ciper*, 18 de marzo de 2010. “Los vínculos de Piñera con las empresas de los edificios dañados: Los hombres del Presidente”, Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa.

que había bastante daño en la Región Metropolitana y que no enfrentarlo a través de un puesto específico, con ciertas atribuciones, no iba a tener mucho sentido, recuerda el ingeniero.

Piñera y Echeverría hacen negocios

Al ser consultado si conocía de antes al Presidente, Fernando Echeverría Vial manifestó que sí y que tal vez por eso lo había llamado para el cargo de intendente.

Lo que desconoció la exprimera autoridad regional es la relación comercial que mantuvo por largos años con el Mandatario y que le permitió ganar más de 68 millones de dólares, de acuerdo a datos del periodista Manuel Salazar en su libro *Sebastián Piñera*.

Al Presidente “lo conozco socialmente nada más, no lo conozco en negocios. En lo personal yo no tuve relaciones comerciales con él, puede que algunas sociedades, pero muy indirectamente”, señaló a las autoras de esta memoria Fernando Echeverría.

En 2004 Sebastián Piñera mantenía a través de diversas sociedades negocios inmobiliarios junto a Ignacio Guerrero, José Cox y Ricardo Bachelet, primo de la expresidenta concertacionista. Uno de esos emprendimientos inmobiliarios los realizó Piñera junto a la constructora Echeverría e Izquierdo.

La sociedad incluyó tres importantes proyectos, según el periodista Manuel Salazar. “Se trató del Proyecto Plaza Forestal, en calle Loreto junto al río Mapocho, con 400 departamentos en tres torres, por un monto de 25 millones de dólares; un segundo en Vitacura, en calle Las Nieves, por catorce millones de dólares; y otro de tres torres de once pisos cada una, en Las Condes, por 30 millones de dólares”⁷³.

“¡Vaya a ver nuestras casas!”

Rodrigo Galilea aún no asumía su cargo como primera autoridad de la Región del Maule y ya era cuestionado por sus intereses.

73 Manuel Salazar, *Sebastián Piñera*. Editorial Mare Nostrum, Santiago, 2009.

“¡Vaya a ver nuestras casas!, ¡vaya a ver nuestras casas!”, le gritó un grupo de pobladores a Galilea cuando visitó las instalaciones del diario de la zona *La Prensa*. Ellos no lo interpellaron como intendente, sino que como gerente general de la empresa que construyó sus casas, las mismas que resultaron destruidas por el terremoto.

La empresa Galilea S.A tiene proyectos inmobiliarios entre Valparaíso y Puerto Montt, y es una de las compañías de ingeniería y construcción más grandes del país. En el Maule la sociedad tiene seis proyectos: cuatro en Talca y dos en Curicó.

Según el Plan Nacional de Reconstrucción Nacional, después del Bío-Bío, la Región del Maule ha sido la segunda del país con más inyección de recursos, cerca de 300 mil millones de pesos. “A Galilea le corresponde coordinar la gestión de dicho plan. Pero los vecinos de la Villa Galilea de Curicó no entienden cómo, quien debe encargarse de reconstruir su región, no ha respondido adecuadamente al daño en las casas que su empresa levantó hace menos de cinco años. Tampoco están satisfechos muchos de quienes habitan casas Galilea en la Región Metropolitana y en el Bío-Bío”, describió el 18 de diciembre de 2011 la periodista Lissette Fossa en el artículo de *Ciper*, “La reconstrucción pendiente del intendente del Maule”.

El problema salta a la palestra cuando el intendente Galilea debe ser juez y parte en el proceso de reconstrucción. “Hay un conflicto de interés en ciernes, ya que va a tener que participar como cabeza del gobierno regional en la licitación de muchas obras de reconstrucción”⁷⁴, indicó a *El Mostrador* el diputado por la zona y exmilitante del Partido Socialista, Sergio Aguiló, en marzo de 2010.

Un próspero y multifacético empresario

Rodrigo Galilea Vial es conocido en el Maule por su activa vida empresarial. Tiene 43 años y está casado con Pilar Vicuña con quien tiene cinco hijos. En Santiago, su ciudad natal, desarrolló sus estudios básicos y medios en el Colegio Tabancura y en 1985 ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose de abogado en 1990. Ese año formó junto a sus hermanos Pablo y Felipe la empresa de Ingeniería y Construcción

⁷⁴ *El Mostrador*, 12 de marzo de 2010. “El talón de Aquiles del nuevo intendente del Maule”, Claudia Urquieta.

Galilea S.A., con proyectos realizados en el sur y centro del país.

En 1992 creó la Constructora Pehuenche, y en 2005 el grupo formó Aguas San Pedro, empresa abastecedora y distribuidora de agua potable y tratamiento de aguas servidas de la Región del Bío-Bío, con presencia en las comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Chillán. Al asumir como intendente, Rodrigo Galilea era socio y director de esta empresa sanitaria, el mismo cargo que mantenía en Aguas y Riles, empresa dedicada al tratamiento de residuos industriales líquidos; y Agrícola El Volcán. Según su declaración de patrimonio, el abogado tiene vínculos con 16 empresas o sociedades.

En materia gremial y social, el nuevo jefe regional era consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, miembro del directorio de la Corporación Educacional Colegio Inglés de Talca y miembro del directorio de la Sociedad Desarrollos Educativos. En representación de los empresarios de la región fue expositor designado por el Obispado de Talca para dar a conocer el contenido de la encíclica “Caritas In Veritate” del Papa Benedicto XVI.

Galilea es además un destacado deportista y un ferviente devoto religioso. Días después de asumir el cargo declaró a *Red Maule* que el terremoto es el “momento en que todos tienen que hacer algo más por el otro, más que por uno mismo, este es el momento en que uno tiene que pensar más bien en qué puede ayudar, en vez de qué puedo obtener. Yo creo que en la medida de que todos tengan esa actitud, vamos a poder salir adelante mucho más rápido de lo que todos creemos”⁷⁵.

En los Ángeles 38 familias de la Villa Galilea no trepidaron en enfrentar al intendente por lo que ellos consideraron una estafa. En agosto de 2010 presentaron una demanda debido al daño en los pisos y el asentamiento de sus casas en hasta 50 centímetros. Además, con el terremoto se destruyeron muros interiores y cortafuegos, tabiques, puertas y ventanas.

Las casas más antiguas tienen seis años, las más caras costaron cerca de 600 UF. Algunas ya habían presentado problemas de humedad e inundaciones en 2004 y 2006.

75 Colaboradores *Red Maule*, *Entrevista al nuevo Intendente del Maule Rodrigo Galilea*. Disponible en sitio web de *Red Maule* (www.redmaule.com). Consultado el 18 de diciembre de 2011.

Después del terremoto, seis de ellas tuvieron que ser demolidas y reconstruidas por la empresa. Otra treintena de propietarios aceptó la oferta de la compañía para reparar las viviendas. Algunos lo hicieron porque no tenían seguros. Los que sí tenían, debieron entregarlos a la empresa para cubrir parte de los costos. En marzo de 2010 los vecinos reclamaron que no los habían dejado revisar el proyecto de reconstrucción ni había un inspector de obras que evaluara la calidad de los trabajos.

De acuerdo a la información solicitada mediante la ley de Transparencia, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) evaluó el daño y entregó un informe, con fecha 27 de marzo de 2010. En la investigación calificaron como grave el caso de 120 viviendas del sector. Los profesionales argumentaron que “los daños estructurales provocados en las viviendas corresponden al descuadre de paredes, suelos y techo, con grietas en pisos, muros y patios, y asentamientos diferenciales”. El estudio es lapidario con la empresa Galilea S.A. Determinó que las construcciones se hicieron sobre humedales mal rellenados, incluso con bolsas de plástico, escombros o papeles.

La acción legal interpuesta por los vecinos de Los Ángeles apunta contra la Fundación Almudena, autorizada por el Serviu como Empresa de Gestión Inmobiliaria (EGIS), y que actuó como intermediaria en la venta de las casas con subsidio. De acuerdo a los documentos oficiales, la fundación –pese a no tener fines de lucro– está representada por Galilea S.A., que a su vez tiene como representantes legales al intendente Rodrigo Galilea y su hermano Pablo. Como segundo demandado, y responsable de los daños si la fundación no responde, aparece la Constructora Pehuenche, representada por Felipe Galilea, el otro hermano del intendente.

El requerimiento de la comunidad detalló que ambas entidades debían responder por “todos los daños y perjuicios que han sufrido los actores, derivados como ya se ha planteado, tanto de la negligencia en la elección del suelo como de las fallas o defectos que afectan a la estructura soportante del inmueble”.

Aduciendo que se desligó de la vocería, el intendente ha esquivado los cuestionamientos de la prensa, pese a que aún conserva el 99 por ciento de la compañía y cuando se construyeron las casas y al momento del terremoto era dueño, gerente y representante legal de la constructora.

Los pobladores de Villa Galilea abandonaron sus casas, a pesar de que continúan pagando el crédito hipotecario, además del arriendo de otros lugares para vivir. Siguen en conversaciones con Álvaro Tapia, quien asumió la gerencia de la empresa cuando Rodrigo Galilea fue nombrado intendente. Él insiste que la empresa no tiene responsabilidad, ya que la construcción se realizó de acuerdo a las exigencias del plano regulador de Los Ángeles, con todos los permisos respectivos.

Sin trabajo por ley

Además de la falta de vivienda, comida, agua y luz, a los habitantes de las regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule y del Bío-Bío se les sumó un nuevo castigo que no fue consecuencia de las inclemencias de la Tierra. Se trató de la aplicación del artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo, que permite despedir trabajadores, sin pago de indemnizaciones.

Entre el 1 y el 30 de marzo de 2010 los despidos a nivel nacional por “caso fortuito o fuerza mayor” sumaron ocho mil 758. La cifra es elevadísima si se compara con los dos primeros meses del año, antes del terremoto, cuando se reportaron solo 547 de estas causales, de acuerdo a la Dirección del Trabajo.

Para el asesor de proyectos del Ministerio del Trabajo, el ingeniero industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, Rodrigo Sobarzo, los despidos se entienden en el contexto de una emergencia “que debía salir adelante pensando que sí o sí la reconstrucción iba a traer aparejada una mejor condición de empleo”. El encargado del Plan Nacional de Intermediación Laboral para la Reconstrucción, desarrollado en conjunto con el Minvu, afirma que “la causal es obvia si tienes plantas que dejaron de producir. Es lo mismo que puede haber pasado con la Planta Arauco, que se quemó y despidieron a mil trabajadores. Por una razón obvia debían despedirlos o sino la planta no iba a producir”⁷⁶.

Numerosos usos que hicieron los empresarios de esta normativa, en distintos rubros y sectores productivos del centro y sur del país, motivaron a la Dirección de

76 Entrevista realizada a Rodrigo Sobarzo por las autoras de esta Memoria. 12 de abril de 2012.

Trabajo a emitir el 19 de marzo de 2010 un dictamen que aclaró la correcta interpretación de la ley.

El documento precisó que la desvinculación procedía solo si había paralización total y permanente de la empresa, e incluso ponía ejemplos de los casos en que no correspondía hacer uso del artículo 159. “Sería el caso de un empleador que hubiere sufrido la destrucción completa de sus instalaciones en una ciudad determinada, pero que tuviere otra u otras instalaciones a las cuales pudiere trasladar a quienes laboraban allí”.

Los habitantes de las regiones Metropolitana y del Bío-Bío, que concentraron la mayoría de los despidos, debieron absorber a los nuevos cesantes. También tuvieron que resistir las fuertes réplicas, que en los primeros días después del terremoto llegaron a ser hasta diez por jornada.

Un intendente y las necesidades de su empresa

Según las estadísticas de la Dirección del Trabajo, durante marzo de 2010 los despidos que se justificaron como caso fortuito o de fuerza mayor se concentraron en un 85 por ciento y en partes casi iguales entre la Región Metropolitana y la del Bío-Bío, con tres mil 703 y tres mil 684 trabajadores.

En medio de esta catástrofe social y económica un caso llamó la atención. Fueron los casi dos mil 500 obreros desvinculados de la central térmica de carbón Bocamina II, proyecto en construcción de la potente Endesa Chile, evaluado en 460 millones de dólares y ubicado en Coronel, Región del Bío-Bío.

Como muchos proyectos de esta envergadura, Endesa trabajaba con empresas subcontratistas más pequeñas. Y como es de esperar, los trabajadores subcontratados fueron los más afectados.

Entre los cerca de dos mil 500 obreros especializados que prestaban servicios a la filial chilena de la empresa ejecutante de Endesa, la italiana Tecnimont, se encontraban 938 empleados de la sociedad anónima Echeverría Izquierdo Montajes Industriales, encargada de construir la caldera de la planta térmica.

El por esos días intendente de la Región Metropolitana Fernando Echeverría, es socio de la empresa matriz Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción. Ésta figura entre las cinco más grandes de Chile en su rubro y exhibe en su currículum 150 edificios, tres millones de metros cuadrados de superficie construida, diez plantas y más de siete mil unidades habitacionales vendidas, según consigna la revista *Qué Pasa* en su edición del 17 de mayo de 2012.

El protocolo que se usó para despedir fue el que muchos otros inversionistas utilizaron, el mismo que el gobierno convocó a evitar: el ya conocido artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo.

Recién cuando los empleados de las empresas involucradas, organizados en el Sindicato Nacional de Montajes Industriales (Sinami), comenzaron a hacer conocida su situación, mediante la toma de la planta y denuncias a los medios de comunicación, el caso hizo su aparición ante la opinión pública. Al nítido conflicto de interés se sumó la posibilidad de que Echeverría fuera cuestionado por su doble investidura de empresario y funcionario público. Esta fue una razón más para juzgar el tinte empresarial del gobierno, la autoridad del Presidente frente a sus subalternos y el compromiso de su equipo con la ciudadanía.

Con la ola de despidos como antecedente y en el contexto del llamado que realizó la Dirección del Trabajo a través del dictamen 19, que reguló a las empresas a la hora de ejecutar las desvinculaciones arbitrarias, se realizaron varias negociaciones entre los sindicatos y los empleadores.

Fue así como la empresa del intendente Echeverría Vial se retractó de los 938 despidos vinculados a la construcción de Bocamina II. Los afectados fueron trasladados a otras faenas dentro de la Región del Bío-Bío.

Empleos y crecimiento a la chilena

A cinco meses del terremoto, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Sol, institución sin fines de lucro que realiza investigaciones, estudios y

asesorías sobre el mundo del trabajo en Chile, publicaron el informe “Impacto del Terremoto sobre el Empleo”. En él hicieron un catastro del tejido productivo de las 41 comunas de las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío-Bío y de la Araucanía.

El estudio estimó que en el territorio abordado se perdieron 89 mil empleos, mientras se crearon otros 22 mil. Los 67 mil puestos de trabajo cerrados se concentraron en las regiones del Maule y Bío-Bío. Y el 60 por ciento de estas bajas correspondieron a mujeres.

Según datos que maneja el asesor del Ministerio del Trabajo, Rodrigo Sobarzo, fueron unos 40 mil puestos perdidos en el primer período, de marzo a junio 2010. Pero después, dice, comenzó una reactivación de la mano de empleos de emergencia para 20 mil trabajadores, que se contrataron en dos semanas. Se trató de un programa intensivo de mano de obra para ordenar las ciudades, un programa de limpieza y demolición.

Las comunidades costeras del Bío-Bío resultaron las más perjudicadas. La pesca, turismo, agricultura, y en menor medida la industria alimenticia fueron los sectores productivos más deprimidos. La investigación de la OIT y Sol concluyó que los más dinamizados por la reconstrucción fueron el rubro forestal, el comercio *retail* y la agricultura.

Aunque las pérdidas de trabajos se distribuyen en términos equitativos entre las empresas de más y menos de 20 trabajadores, son las de menor tamaño las que presentan más cierres de puestos de trabajo, en términos absolutos. El economista Marco Kremerman de la Fundación Sol⁷⁷ afirmó en entrevista con las autoras que las empresas más grandes resultan ser las más revitalizadas, concentrando el 80 por ciento de los empleos creados después de la catástrofe: 17 mil 745, de un total de 21 mil 936.

Los desempleados que el gobierno no ve

Con este panorama como telón de fondo, el gobierno dio a conocer en septiembre de 2010 las cifras de empleo en Chile. Según los datos aportados por el Instituto Nacional

77 Entrevista realizada a Marco Kremerman por las autoras de esta Memoria. 22 de junio de 2011.

de Estadísticas (INE), el desempleo era de un 8,3 por ciento, esto es, alrededor de 650 mil personas sin una ocupación remunerada.

La cifra fue valorada desde los distintos sectores. “Tenemos muy buenas noticias”, afirmó el Presidente Sebastián Piñera, subrayando que en los primeros cinco meses de su gobierno se habían generado los 200 mil puestos de trabajo que esperaba crear durante su primer año. Los gremios empresariales también celebraron, y plantearon que el comercio lideraba los nuevos bríos de la economía nacional.

Según Fundación Sol, estas cifras no reflejaban el estado real del mundo laboral en Chile. “Urge poner nuevos indicadores en el debate, que sean capaces de reconocer de forma más fidedigna la realidad y que recojan las recomendaciones de carácter técnico que provienen de la OIT y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, refuta Marco Kremerman desde la sala de reuniones de la entidad.

A partir de las recomendaciones de esos organismos internacionales y sobre la base de los resultados de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) que realiza el INE, la Fundación Sol creó la “tasa de desempleo integral”. Este indicador considera tres componentes: el desempleo abierto o nivel oficial declarado por el gobierno; el desempleo oculto y el desempleo equivalente por subempleo.

El desempleo oculto considera como desempleados a todas aquellas personas que no tienen trabajo “y que se cansaron de buscar uno, por razones de desaliento y desesperanza”. El economista afirma que la literatura internacional los llama desempleados ‘desanimados’, ‘desalentados’ o incluso ‘descorazonados’. Este tipo de personas suele contabilizarse en Chile como inactivos. “Sin embargo, su disponibilidad para comenzar a trabajar, si es que les ofrecieran un empleo, los hace estar en realidad desempleados”, explica Kremerman.

En contraposición, Rodrigo Sobarzo argumenta desde su oficina en el Ministerio del Trabajo que “la gente no está desencantada, lo que pasa es que no está formada, hay que formarla”. El profesional indica que en los últimos 20 años todo sistema de capacitación en Chile ha sido un “fracaso” y apunta al problema de la “títulomanía”, es decir, “todos quieren títulos”, pero éstos no se requerirían.

Sobarzo afirma que “se necesita un modelo enfocado a operarios calificados y escuelas de oficios, eso estamos formando. De aquí a 2014 el rubro minero va a requerir 50 mil trabajadores. Eso va a empujar al país hacia un nuevo concepto de movimiento y formación de personas para el trabajo”.

En la categoría “desempleo equivalente por subempleo” Fundación Sol contempla a aquellas personas que se encuentran subocupadas. Por ejemplo, afirma Kremerman, si una persona trabaja media jornada, “pero tiene el deseo y la disposición de trabajar tiempo completo, la literatura considera ese caso como ‘medio puesto de trabajo’. En Chile, más del 95 por ciento de las personas que trabaja a tiempo parcial debería ser considerado subempleado por insuficiencia horaria”.

Siguiendo esa lógica y con los datos de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, la Fundación calculó la “tasa de desempleo integral”. Esta sumaría más de un millón de personas sin trabajo en Chile: “Al incluir el desempleo oculto y el desempleo por subempleo, la tasa se sitúa en casi un catorce por ciento. Mucho más del ocho por ciento declarado por el gobierno”, señala el economista. Hoy el gobierno declara un 6,57 por ciento de desempleo. A pesar de que se registra una variación de los ocupados de 707 mil entre el trimestre enero-marzo 2010 y agosto-octubre 2012, en Fundación Sol dicen que aún el 37,4 por ciento de esos trabajos siguen siendo labores no vinculadas a políticas o planes de empleo del gobierno.

Pero desde el Ministerio se manejan cifras optimistas e incluso una teoría distinta. Para Rodrigo Sobarzo lo que ocurrió y sigue ocurriendo es que en las zonas afectadas la gente no quiere trabajar. El ingeniero plantea que “no es por las condiciones laborales ni por los niveles de sueldo, que son bastante buenos. La causa de que no quieran trabajar es súper complicada y tiene que ver con los subsidios que el Estado desde siempre ha entregado. La gente está acostumbrada a que le den, no a trabajar. Es más conveniente vivir de subsidios y empleos de emergencia que tener un trabajo real”, sostiene.

Los asalariados que ya no existen

Una de las promesas más rimbombantes del gobierno decía que en su gestión se crearía un millón de empleos. Si este total se divide por el período presidencial de cuatro años, por cada uno deberían surgir 250 mil nuevos puestos de trabajo.

En septiembre de 2010, el Presidente anunció 202 mil empleos creados. Pero los economistas críticos encendieron las alarmas.

“Hay una deuda en el análisis. Nos dimos cuenta que de los 202 mil, 150 mil son trabajadores ‘por cuenta propia’ y que además existen cerca de 27 mil personas que son trabajadores familiares no remunerados”, aclara Marco Kremerman. Respecto a los trabajos por cuenta propia, Gonzalo Durán, economista de la Universidad Católica quien también trabaja en la Fundación Sol, señaló al diario electrónico *El Mostrador* en octubre de 2010 que “en Chile estos empleos rayan en la informalidad, las personas tienen que trabajar muchas más horas de las que establece el Código del Trabajo”.

Para el asesor del Ministerio del Trabajo, Rodrigo Sobarzo, las condiciones precarias que muchas veces deben enfrentar “los emprendedores obedecen a las ‘reglas del juego’. Es un riesgo y está mal si no tenemos capacidad de frustración, en caso de que les vaya mal en el emprendimiento. Uno ve en Estados Unidos que las personas emprenden, se caen diez veces y a la décima primera les va bien”, reflexiona.

Rodrigo Sobarzo justifica que durante los primeros meses del terremoto los empleos hayan sido en su mayoría por cuenta propia, “porque las condiciones de contratación son más lentas y ese tipo de trabajos salen más rápido. Después se reactiva el país y eso cambia”, afirma.

Con esta realidad, cabe cuestionarse a qué tipo de empleos el gobierno le ha dado auge y qué influencia real tiene en el repunte de los puestos de trabajo. Para la Fundación, si la política del gobierno es impulsar el emprendimiento y el empleo “por cuenta propia” pueden tener algún mérito en el repunte. Pero, “si quiere crear empleos de calidad, lo importante es enfocarse en los empleos asalariados. En esto el gobierno tiene

una deuda muy alta porque entre enero y octubre de 2010 no se crearon empleos, sino que se destruyeron cerca de 50 mil puestos de trabajo”.

Dos años después del terremoto, al comparar lo ocurrido entre los trimestres enero-marzo 2010 y febrero-abril 2012 se registró una variación de los ocupados de 695 mil cupos, o sea hay más personas que consiguieron trabajo. Pero se mantiene la tónica de trabajos no vinculados a planes de empleo del gobierno y desamparados por los sistemas de protección del trabajo: casi el 29 por ciento de esta cifra son puestos por cuenta propia, personal de servicio doméstico y familiar no remunerado.

El 84,5 por ciento de los empleos asalariados creados entre el trimestre enero-marzo 2010 y agosto- octubre 2012 fueron tercerizados, vía subcontratación o suministro de personal, según datos de la Fundación Sol. Ante esto, Sobarzo manifiesta que están preocupados de los empleos protegidos, “pero hay sectores que requieren sí o sí empleos por cuenta propia, sectores como mujeres costureras, mucha mujer que tiene que estar en la casa con sus hijos y puede trabajar en la casa. ¿Por qué trabajar por pocas horas es empleo precario?”, cuestiona. Y realiza un emplazamiento: “Yo invito a la Fundación Sol a ir a la calle, les falta juntarse con sectores que están desesperados por trabajar. Eso les falta ver. Uno puede estar en el computador mirando cifras todo el día”, contraataca.

Según Sobarzo, el gran problema “es que el Sence no ha funcionado en los últimos 20 años. Uno ve los sistemas de intermediación de Europa y funcionan relacionados. Si en tres meses no encuentras trabajo se activa un programa, si eso sigue, se activa otro. En Chile van todos juntos para allá, todos para acá. Hay que empezar a ordenar el sistema de mediación laboral en Chile y fortalecer los mecanismos de intermediación y eso estamos haciendo”, afirma.

El *pendrive* con fecha de vencimiento

Cuando el gobierno cumplía diez meses nadie, de la Coalición ni la oposición, creía que Piñera y su equipo de ese entonces, con su mentado gobierno de los estándares y la excelencia, fuera lo que el país necesitaba.

Al nombrar el gabinete el Presidente cumplió una de sus promesas iniciales: que los ministerios serían ocupados en su mayoría por personas sin militancia política activa, los llamados 'independientes' con un perfil técnico forjado a punta de trabajo en la empresa privada y postgrados en el extranjero. Pero cumplir una promesa no es la clave del éxito y como el caso de Sebastián Piñera en La Moneda lo demostró, puede ser hasta un error.

El 14 de enero de 2011 se realizó el primer cambio de gabinete. Se alejaron del gobierno los titulares del Trabajo, Camila Merino; de Transporte y Telecomunicaciones, Felipe Morandé; y de Energía, Ricardo Rainieri, quien al dimitir evitó ser interpelado en la Cámara de Diputados por el alza del precio del gas en Magallanes. A los diez meses de gobierno entró Evelyn Matthei en Trabajo, Pedro Pablo Kuczynski a Transporte y Telecomunicaciones y Laurence Golborne quedó como biministro, al permanecer en Minería y asumir en Energía. En Defensa hizo triunfal ingreso Andrés Allamand, a quién muchos indican como el artífice de la carrera política de Sebastián Piñera.

La llegada de la antigua “Patrulla Juvenil”- Allamand y Matthei- comenzó a poner en segundo plano la propuesta de la “Nueva Derecha” que encarnó como principal exponente el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter. “El tiempo de la instalación, de las urgencias, quedó atrás. Todos sabían ya que ese sería un año político decisivo para el gobierno y para los partidos de la derecha. Por eso entraron los políticos a batallar. Ahí está Andrés Allamand, el rugbista por excelencia. Ahí está Evelyn Matthei, con su destreza innegable para moverse en el masculino mundo de los políticos”⁷⁸, indicó en enero de 2011 en revista *Cosas* el historiador y columnista Alfredo Jocelyn Holt.

Al calor del remezón provocado por el movimiento estudiantil, el 15 de julio de 2011, las piezas de ocho ministerios volvieron a ser removidas. El anuncio fue dado a conocer por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en una ceremonia desarrollada en el Salón Montt Varas de La Moneda. Estuvieron los nuevos ministros que juraron, los que se iban, los que quedaron en sus cargos, subsecretarios y personeros de los partidos oficialistas.

78 *Revista Cosas*, enero 2011. “Golborne es como el hijo indeseado de Piñera”, Claudia Álamo.

Andrés Chadwick Piñera, primo hermano del Presidente y dirigente histórico de la UDI, dejó su cupo en el Senado por la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins e ingresó al equipo reemplazando a Ena Von Baer en la Secretaría General de Gobierno.

Pablo Longueira también renunció al Senado y se empoderó de la cartera de Economía; Felipe Kast fue removido y en su lugar trasladaron a Joaquín Lavín de Educación al Ministerio de Desarrollo Social. Felipe Bulnes llegó a Educación, en vez de Joaquín Lavín. Teodoro Ribera por Felipe Bulnes en Justicia, Laurence Golborne por Hernán De Solminihac en Obras Públicas y este, a su vez, tomó el puesto de Golborne en Minería. Fernando Echeverría dejó la Intendencia Metropolitana y ocupó la vacante de Golborne en Energía.

Los cambios en su mayoría fueron enroques de nombres en distintos cargos dentro del mismo gabinete, salvo Ena Von Baer y Felipe Kast. Desde su salida del gobierno, Von Baer reemplaza a Pablo Longueira como senadora por Santiago Oriente. Kast asumió como coordinador general del programa de reconstrucción "Levantemos Chile", hasta julio de 2011. Hoy es delegado presidencial para los campamentos y aldeas de emergencia.

Con Matthei, Allamand, Longueira y Chadwick en el gabinete, el "gobierno de los mejores" adquirió un nuevo cariz donde la UDI pasó a tener una influencia que en un primer momento fue rehuida por el Presidente. El caso más claro fue Pablo Longueira quien el 11 de marzo de 2010, desde el Senado, difundió que estaba disponible para ocupar un cargo en el equipo de La Moneda. Pese a ser un militante duro de la Alianza que aglutina a RN y la UDI, expresó críticas al gobierno por una falta de relato político que lo identificara con la ciudadanía y "que le permita a ésta comprender, de forma sencilla, cuáles son las ventajas de una administración de este sector, y por qué conviene volver a votar por él", resumía a Radio Cooperativa en abril de 2011.

Longueira es en gran medida el artífice de la denominada "UDI Popular", por eso el sociólogo Eugenio Tironi recalcó⁷⁹ la importancia de su llegada como el mismo Longueira decía, para darle un "relato político" al gobierno. "Si yo quiero saber para donde va el

79 *Diario Financiero*, 17 de diciembre de 2011. "Los Chicago Boys se convirtieron en más economicistas que los propios marxistas", equipo de Política.

gobierno escucho a Longueira -afirmó Tironi-. Todo lo que él dijo cuando entró como ministro se ha venido cumpliendo. Creo que desde (Pedro) Vuskovic⁸⁰ que no había un ministro de Economía tan poderoso como Longueira. En la historia post 90, ésta es la administración que tiene más políticos en ejercicio dentro del gabinete”, indicó Tironi, exasesor de la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz- Tagle.

“Fue un lapsus de vacaciones”

El Presidente Sebastián Piñera, que a comienzos de 2010 se demoró en designar su gabinete porque quería “a los mejores para los cuatro años de gobierno”, pronto se desinfló y dio paso al Presidente que sobre la base de la contingencia y las encuestas tomaba decisiones ministeriales. Claro ejemplo es el Ministerio de Educación, que con el tercer cambio de gabinete el 29 de diciembre de 2011, de nuevo quedó sin cabeza.

El ministro de Agricultura José Antonio Galilea renunció por motivos personales y el titular de Educación Felipe Bulnes, después de cinco meses a cargo de la cartera pidió su remoción. Él venía de una bien evaluada gestión en el Ministerio de Justicia cuando fue trasladado en julio de 2011 al Mineduc, en medio del conflicto estudiantil.

El Jefe de Estado realizó el reajuste en su gabinete justo el día en que se dieron a conocer los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) a fines de diciembre de 2011, que arrojó que solo un 23 por ciento aprobaba la gestión presidencial y un 62 por ciento la desaprobaba, doce puntos más desde la anterior encuesta, en agosto. Esta es la tasa más alta de rechazo que ha obtenido un gobernante en Chile desde el regreso de la democracia en 1990.

Al Ministerio de Agricultura llegó Luis Mayol, quien antes oficiaba de presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y al de Educación Harald Beyer, exsubdirector del CEP. Según los críticos del gobierno, el hecho de que Piñera haya debido volver atrás, reemplazando a los exministros de Educación y Agricultura, ambos de perfil político, por dos figuras técnicas, reflejó la incapacidad del Presidente de captar líderes partidarios para el gobierno, lo que limitaría la proyección de su gestión.

80 Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, entre noviembre de 1970 y noviembre de 1972, por el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.

A juicio de dirigentes de la Concertación e incluso de la Coalición por el Cambio, los constantes cambios de gabinete sin un norte claro reflejaban un desorden interno importante. En este contexto el gobierno debió encarar el anuncio adelantado por uno de sus ministros sobre la última rotación ministerial. Fue Pablo Longueira quien, recién llegando de vacaciones, admitió que “ambos (Bulnes y Galilea) se retiran del gobierno por motivos personales”.

Esto causó un gran revuelo que incluso sacó a relucir viejas rencillas entre el ministro de Economía UDI y el Presidente Piñera. Para acallar la polémica, Pablo Longueira debió aclarar sus dichos.

El mismo día del cambio de mando señaló al medio digital *El Dínamo* que “lo que pasó fue que llegué en un bus a las seis y media de la mañana, pasé por la casa, me duché, agarré el diario, me fui al aeropuerto porque teníamos una ceremonia a las siete y media de la mañana. Leí la prensa y la verdad es que cuando uno ya ve que se habla de nombres de reemplazantes de los ministros... Lo único que hice fue señalar que si ambos se van, creo que han sido grandes ministros. Nada más que eso”, explicó en detalle el ministro de Economía.

El Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile ve con preocupación los cambios que han sucedido en el equipo de gobierno y encargados del proceso de la reconstrucción. “Es evidente que mucha gente de la que entró a ocupar cargos públicos durante la actual administración, no conocen cómo funciona el Estado. El gobierno, bien o mal, más allá de su perspectiva de poner gerentes a dirigir ministerios - que es una opción política- ha tenido serios problemas para completar los cuadros técnicos”, opina el antropólogo y miembro de la entidad, Walter Imilan.

Califica como “alarmante” que desde el terremoto haya habido cinco seremis de Vivienda en la Región del Maule. “Indica un problema de gobernabilidad”, según él. “Si se revisa cómo han sido los cambios en los cuadros técnicos -ni siquiera políticos, que es otro tema: ya hemos tenido dos ministros de Vivienda también-, cómo han cambiado los equipos y las direcciones, lo único que te queda decir es que es evidente que hay problemas de dirección y marcha de la reconstrucción”, analiza el antropólogo.

CAPÍTULO IV

LA FÓRMULA DEL FINANCIAMIENTO

La preocupación por la forma en que Piñera gobernaba se sentía desde hacía un tiempo. Pero el 24 de abril de 2010 el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se reunió con los empresarios del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) para tranquilizarlos.

En la ocasión afirmó categórico que el Ejecutivo seguía avanzando en una serie de temas, más allá del terremoto. "La emergencia nos ha consumido en el corto plazo, pero no nos vamos a olvidar que nuestro propósito central es el de caminar con Chile hacia el desarrollo", señaló.

El gobierno no quería perder su agenda y ya en marzo de 2010 comenzaron a diseñar la primera cuenta pública de Sebastián Piñera.

El discurso del 21 de mayo fue sobrio, pero remarcó el trabajo realizado para superar la emergencia. Piñera detalló el avance de los compromisos adquiridos por la expresidenta Michelle Bachelet en su última cuenta pública y las tareas realizadas por cada ministerio, independiente del terremoto, desde el 11 de marzo de 2010.

Un mes antes de la cuenta pública, el 21 de abril de 2010, *La Tercera* ya anticipaba el tono y el objetivo político que cumpliría el mensaje. El diario del empresario Álvaro Saieh señaló que "el discurso no solo permitirá dar un cierre simbólico a la etapa de emergencia. También pretende ser un hito fundacional, por cuanto se reinstalarán en la agenda algunas de las promesas que formaron parte del programa de gobierno", afirmó.

¿Cuánto afectó el terremoto al nuevo gobierno? Esa fue la primera interrogante que ayudó a despejar durante la primera semana de abril de 2010 la encuesta Adimark. Los datos indicaron que el recién asumido Presidente marcaba 52 por ciento de apoyo y el gobierno subía ocho puntos llegando al 60 por ciento de respaldo.

La percepción ciudadana de los primeros meses era proclive al desempeño de la autoridad. La “agenda terremoto” fue la oportunidad que tuvo el nuevo equipo para dotar de épica su llegada a La Moneda. “Sentido de urgencia, misión, unidad nacional, lista de tareas, alcances épicos; todo lo que no tenía antes del 27 de febrero se creó de inmediato con el cataclismo”, resumió el decano de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ascanio Cavallo, en su columna dominical para *La Tercera*, el 14 de marzo de 2010. Para el académico, el gobierno en cada intervención repetía el discurso de la eficiencia, que era lo que la gente necesitaba escuchar y que a ellos “les salía tan creíble”.

La decisión política del gobierno fue no perder sus proyectos insignes, y aprovechar la agenda impuesta para poner en primer plano sus atributos de rapidez y racionalidad, propios de la administración del sector privado. “No voy a aceptar que mi gobierno sea solo terremoto. Voy a cumplir con mi programa. No es lo uno o lo otro, lo quiero todo y necesito recursos para eso”, dijo el Presidente antes de su primera cuenta pública.

La caleta Lo Rojas, en la comuna de Coronel fue el escenario escogido el 16 de abril de 2010 para anunciar el Plan de Reconstrucción. Piñera destacó que su gobierno tendría tres enfoques: reconstruir el país en un plazo de cuatro años, destinando ocho mil 431 millones de dólares para ello, desarrollar el programa de gobierno en campaña y recuperar el equilibrio estructural de las ganancias públicas.

“El alma de un país y el temple de un pueblo no se miden en tiempos de calma y tranquilidad, se miden en tiempos de tormenta y adversidad”, dijo el Mandatario y añadió que la “nobleza y coraje, unidos al trabajo conjunto de todos los chilenos, con unidad, generosidad y solidaridad” permitiría poner en marcha de nuevo al país y “levantar todo lo que el terremoto y maremoto destruyeron”.

En la caleta detalló los recursos que se destinarían a cada área. Dos mil 300 millones de dólares -afirmó Piñera- permitirán dar 200 mil soluciones habitacionales, de las cuales 135 mil serían para construir casas y 65 mil para reparar aquellas viviendas que presenten daños.

En educación manifestó que se asignarían mil 500 millones de dólares para construir y reparar escuelas, liceos y salas cunas. Asimismo, anunció la creación de colegios modulares y la habilitación de cuarteles de Carabineros y de Fuerzas Armadas para recibir alumnos. También dijo que se repondría la tecnología dañada.

Con respecto al área salud, se dispondrían dos mil cien millones de dólares para volver a construir los más de trece hospitales que quedaron inutilizables y reparar aquellos que sufrieron deterioros. Lo mismo ocurrirá con consultorios. También se instalarán -dijo Piñera- 16 hospitales modulares y se repondría el equipamiento médico perdido.

En Obras Públicas, mil 200 millones de dólares serían para reconstruir sistemas de agua potable rural, caletas de pescadores, conectores de aguas lluvias, embalses, puentes, caminos y edificios públicos afectados.

Cifras más, cifras menos

El 19 de marzo de 2010 Sebastián Piñera realizó una cadena nacional grabada, seguida por nueve vocerías en 48 horas. Sin detallar nuevas medidas ni fórmulas de financiamiento, dijo que se iniciaba la etapa de reconstrucción. La orden era clara: los ministros debían estar presentes día y noche en las regiones para que la gente supiera lo que estaba haciendo el gobierno. Se inauguraban los ministros “24x7”, que trabajarían todo el día, los siete días de la semana.

Sebastián Piñera no tardó en reafirmar la magnitud de los daños que había declarado el gobierno saliente, e indicó que se necesitarían 30 mil millones de dólares para reconstruir el país. Esta cifra equivale a casi el 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual de Chile.

En principio gobierno y oposición estuvieron de acuerdo con las cifras, aunque después la Concertación fue crítica del supuesto abultamiento de los daños. Los que siempre manejaron montos distintos fueron los consultores nacionales y extranjeros. Por ejemplo, según informó *La Tercera* el 20 de marzo de 2010, un estudio del director de estrategia de IM Trust, Matías Braun, evidenció que los daños por el sismo sumarían como máximo unos ocho mil millones de dólares frente a los 30 mil millones declarados.

El fisco debería financiar el cinco por ciento de esa cifra, unos cuatro mil millones de dólares.

Entre los habitantes de las regiones del Maule y Bío-Bío, las más afectadas, de inmediato comenzó el debate sobre si la etapa de emergencia estaba superada, tomando en cuenta que continuaban apareciendo víctimas fatales y nombres de desaparecidos.

El sector más damnificado y donde la reconstrucción se observaba más lenta era, y sigue siendo, vivienda. En los distintos niveles socioeconómicos la casa propia, en arriendo o donde residen allegados, sufrieron desperfectos ornamentales y daños estructurales. Y en el peor de los casos, se desplomó entregando una de las imágenes más imborrables de la memoria reciente del país.

La billetera del Estado se hace presente

El presupuesto que se requería para reconstruir todavía tenía versiones encontradas, pero de todas maneras se inició el debate sobre las formas de financiamiento que tendría el proceso.

Del monto oficial de 30 mil millones de dólares por daños ocasionados, solo ocho mil millones fueron cubiertos por seguros y diez mil correspondieron a daños del sector privado, en total, 18 mil millones. Así, el Estado debió solventar doce mil millones de dólares por concepto de reparación y construcción de infraestructura pública.

En medio de discusiones por la demora y contradicciones de las cifras de daños, en marzo de 2010, el ministro de Hacienda Felipe Larraín anunció los componentes que nutrirían la denominada "fórmula de la reconstrucción": una ley de donaciones, nuevo royalty, alzas de impuestos a las grandes empresas, refocalización de recursos fiscales y un "revitalizado" sistema de concesiones. Los anuncios parecieron ambiguos y el debate se amplió.

El plan fue percibido como generalista, poco claro e incluso equivocado por la oposición política y sus alrededores. Las regiones criticaron la lentitud para entregar recursos, ya que a más de un mes de la tragedia no veían mejoras en la infraestructura

vial, viviendas, escuelas ni hospitales.

Los cuatro presidentes de partidos de la Concertación, que en ese entonces eran Juan Carlos Latorre (DC), Adriana Muñoz (PPD), Fulvio Rossi (PS) y José Antonio Gómez (PRSD), se reunieron con Sebastián Piñera para abordar los efectos del terremoto. Los timoneles querían despejar las críticas sobre la supuesta intención de negarle “la sal y el agua” al nuevo gobierno.

En la cita Piñera les propuso un “nuevo trato” y los dirigentes comprometieron su apoyo a las tres primeras iniciativas legales que impulsaría el gobierno entrante: ley de emergencia, ley de reconstrucción y ley de donaciones. Con esto postergaron la discusión sobre el nuevo royalty; tema que abriría fuegos en lo sucesivo.

“Nosotros rechazamos el royalty. Una vez que lo planteamos, el gobierno se abrió a una discusión que permitió mejorarlo, sacándolo de la emergencia del terremoto. Desde nuestro punto de vista no correspondía discutir una ley del royalty en ese marco”, señala Camilo Escalona, desde su oficina del ex Congreso Nacional en Santiago.

El actual presidente del Senado explica que “los fondos relativos a la emergencia estaban en los artículos transitorios que propuso el gobierno”, es decir, se trataba según él, de subir en 2011 de 17 a 20 el impuesto de primera categoría, en 2012 bajarlo a 18,5 y en 2013 volver a 17, que era el aumento transitorio de tributos. Pero el royalty no era un aumento transitorio de tributo, o sea, había que discutir el tema en su propio mérito⁸¹, señala.

Recién cuatro meses después del terremoto, el 16 de junio, el ministro Felipe Larraín logró aprobar el plan de financiamiento en el Senado. Desplegó un intenso *lobby* en foros, seminarios, declaraciones de prensa, reuniones con empresarios y conversaciones permanentes con los congresistas independientes y los “blandos” del conglomerado del arcoíris.

El gran obstáculo, y justificación de las tratativas, fue el “nuevo royalty”. La propuesta oficialista se encontró con la oposición en bloque criticándola por “poco

81 Entrevista realizada a Camilo Escalona por las autoras de esta Memoria. 8 de agosto de 2011.

transparente” y “proempresarial”.

La Concertación votó a favor del impuesto a las grandes empresas, la reforma a la ley Reservada del Cobre, el impuesto al tabaco, la mantención del valor del impuesto a los timbres y estampillas y el beneficio del artículo 14 quáter, que es una exención tributaria para las pequeñas y medianas empresas que reinviertan sus utilidades por hasta 53 millones de pesos.

La batalla del reajuste presupuestario

Todos los presupuestos originales de los ministerios y otras las reparticiones de la administración del Estado fueron disminuidos o refocalizados a la emergencia. Las regiones sufrieron mermas. “Pienso que hubo tozudez del gobierno. Debí haber alza tributaria si no alcanzaba el financiamiento”, afirma desde la oficina de su bancada en el ex Congreso de Santiago, el diputado demócrata cristiano Gabriel Silber⁸².

Una semana después de la tragedia, el economista Jorge Selume, quien fue director de Presupuesto durante el terremoto de 1985, declaró en una entrevista a *La Tercera* que “parte de la reconstrucción debiera financiarse con reasignación de gastos”. Ante la pregunta “¿qué programas o inversiones se dejaron de hacer para financiar ese gasto?”, o sea, reconstruir en dictadura, Selume respondió que “todas las reparticiones sufrieron recortes. En esa oportunidad se inició la venta de algunas empresas públicas, como Chilectra, Soquimich y la Compañía de Teléfonos, que pertenecían a Corfo. La situación de 1985 llevó a tomar ese tipo de opciones para financiar la reconstrucción”.

Jorge Selume estudió ingeniería comercial en la Universidad de Chile, institución en la que conoció al empresario Álvaro Saieh, de quien fue su colaborador. Trabajó en la Odeplan junto a Sergio de Castro y Miguel Kast. Al igual que otros jóvenes funcionarios de la dictadura de Pinochet, estudió en la Universidad de Chicago de Estados Unidos. En esa experiencia conoció a Julio Dittborn, Cristián Larroulet y Joaquín Lavín, con quienes mantiene una relación estrecha hasta hoy.

A su regreso fue jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y

82 Entrevista realizada a Gabriel Silber por las autoras de esta Memoria. 27 de marzo de 2012.

después decano de la actual Facultad de Economía y Negocios. Participó en numerosos directorios de empresas del Estado y en el periodo del terremoto de 1985 trabajó desde la Dirección de Presupuestos junto a Hernán Büchi, cuando era ministro de Hacienda, como detalla la periodista María Olivia Mönckeberg en el libro *Los Magnates de la prensa: Concentración de los Medios de Comunicación en Chile*⁸³.

Comenzó su carrera empresarial durante la dictadura. En la actualidad tiene inversiones en Corpgroup, Clínica Indisa, donde es socio con Álvaro Saieh; es presidente de la Región Andina de Laureate, el *holding* de educación superior más grande de Chile, dueño de las universidades Andrés Bello, Las Américas y Viña del Mar y del instituto profesional AIEP.

Al igual que Büchi, Selume reapareció en la esfera mediática por la reconstrucción y se declaró contrario a un alza tributaria. “Hoy es mucho más alta que en 1985 (cuando se creó el impuesto a los combustibles). Estamos allegando más ingresos al fisco, pero estamos mermando los recursos del sector privado para volver a producir y generar empleo”, señaló.

Piñera reaccionó rápido ante las presiones de su sector. El domingo 12 de marzo declaró que el gobierno realizaría “un tremendo esfuerzo de austeridad en el gasto público, de forma de reasignar recursos desde tareas que no son tan prioritarias hacia las tareas de reconstrucción”. Planteó el envío de una ley para reestructurar las partidas presupuestarias, pues el Presupuesto de 2010, que comprometía fondos por unos 40 mil millones de dólares, contaba con solo 450 millones de dólares de libre disposición, cifra insuficiente para cubrir los gastos de la reconstrucción.

En el Congreso la Concertación podía ejercer su mayoría, por eso, el gobierno reajustó las partidas utilizando solo las atribuciones del Mandatario. Presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta, con el que a juicio de los críticos, los principales actores perjudicados fueron los organismos ministeriales, las regiones no afectadas por el terremoto y los municipios.

83 María Olivia Mönckeberg, *Los magnates de la prensa: Concentración de los Medios de Comunicación en Chile*. Editorial Random House Mondadori, Santiago, 2009.

La reducción al presupuesto de 2010 ascendió a 702 millones de dólares. Contra todo pronóstico, el Ministerio de Obras Públicas fue el que sufrió la mayor reducción: 265 millones. El recorte en la partida correspondiente al Ministerio del Interior, que incluye a las quince regiones del país, afectadas o no, sumó un promedio de nueve millones de dólares por región.

De acuerdo a cifras manejadas por la Asociación Chilena de Municipalidades, se recortaron y redistribuyeron casi 720 millones de dólares de diferentes proyectos municipales que aún no se habían iniciado, pero ya tenían asegurado su financiamiento.

El fútbol y el presupuesto de Ena

El mismo día en que la lista encabezada por Harold Mayne Nicholls perdió en las elecciones para un segundo período de cuatro años al mando de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), se desató una polémica política que condicionó el presupuesto de una repartición de gobierno.

La gestión que Mayne Nicholls realizó junto al director técnico de la Selección Nacional, Marcelo Bielsa, fue elogiada en el territorio nacional e internacional. Sin embargo, también recibió críticas de la Alianza por Chile, exoposición del gobierno y actual oficialismo.

En distintas ocasiones, tanto Bielsa como Mayne Nicholls, manifestaron simpatía por la expresidenta Michelle Bachelet, lo que muchas veces generó cuestionamientos en los círculos políticos y sociales de la derecha chilena. Sobre todo desde que a principios de julio de 2010 el ex director técnico le diera a regañadientes un saludo de mano al Mandatario, en medio de una visita de la Selección Nacional a La Moneda después de su positiva participación en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El conocido expresidente de la ANFP entre 2007 y 2011, Harold Mayne Nicholls, perdió las votaciones. En el cargo lo sucedió Sergio Jadue.

El 4 de noviembre de 2011 el periodista deportivo Felipe Bianchi afirmó en Radio Universo que el gobierno de Sebastián Piñera intervino para levantar una lista paralela a

Mayne Nicholls, con el fin de derrotarlo. “Me consta, por relaciones sociales, por trabajo periodístico, por análisis de muchos puntos que han ocurrido en estos días: hubo intervención del gobierno. Me constan los llamados de Sebastián Piñera, me constan los llamados de Gabriel Ruiz Tagle⁸⁴, me consta la articulación que se hizo desde La Moneda para que saliera Harold Mayne Nicholls de la ANFP”, señaló Bianchi.

El argumento del periodista Felipe Bianchi era que el expresidente del fútbol nacional repartió los beneficios económicos generados por ese deporte de manera más equitativa entre todos los clubes, reduciendo las ganancias de los “clubes grandes”. En ese marco Colo Colo y otros equipos se vieron perjudicados. El Presidente Piñera y el actual subsecretario de Deportes Gabriel Ruiz Tagle tenían intereses económicos involucrados en el popular plantel.

Las polémicas afirmaciones del periodista deportivo encontraron apoyo en algunos congresistas de la Concertación, como la senadora de la Democracia Cristiana (DC) Soledad Alvear, quien pidió investigar las versiones que apuntaron a una supuesta intervención política en la elección de la Asociación del Fútbol Profesional. El diputado del Partido Por la Democracia (PPD) Marco Antonio Núñez planteó que “sobran antecedentes para, a lo menos, una comisión investigadora”, mientras el DC Gabriel Ascencio anunció que presentaría a la Contraloría General de la República un requerimiento.

Aunque Ascencio no presentó su moción, la ira en el gobierno ya estaba desatada. Primero fue el propio Sebastián Piñera quien amenazó con llevar las acusaciones a la justicia, “porque la moral y la decencia imponen un límite de cosas que no se pueden aceptar”, dijo. La entonces ministra vocera de Gobierno, Ena Von Baer, fue más allá y calificó las afirmaciones de “canallescás” y “miserables”.

Las descalificaciones iban y venían, y la popularidad del Presidente acusó el golpe. El martes 4 de enero de 2011 la encuesta Adimark reveló un significativo aumento en la desaprobación de Piñera, del 36 al 43 por ciento.

Para Roberto Méndez, director de Adimark, la caída en la aprobación y crecimiento

84 Subsecretario del Deporte de Chile desde el 11 de marzo de 2010. Empresario chileno, fue el principal accionista de Blanco y Negro S.A., administradora del club de fútbol Colo Colo, y presidente de su directorio entre 2007 y 2010.

en el rechazo al gobierno de Sebastián Piñera tuvo relación con lo sucedido en la asociación del fútbol y el episodio Bielsa. “Es probable que el gobierno haya tenido otros problemas en estos meses, pero el efecto ANFP causó mucho daño al Presidente y al gobierno en su conjunto”, afirmó en Radio Cooperativa.

Siete días después de las acusaciones de intervención en el fútbol, el 11 de noviembre de 2010 llegó el momento de votar el presupuesto para 2011. Sin planificación de las partes, los dos temas y los ánimos que generaron, se mezclaron en la discusión del Congreso. El debate de los diputados comenzó a las 11:00 horas y después de tres horas y media se aprobó en general el proyecto con el voto favorable de 83 diputados, diez en contra y dos abstenciones.

Todo parecía fluir entre la oposición y el gobierno; días antes habían firmado un protocolo de acuerdo. Después de un descanso, a eso de las 16 horas se retomó el trabajo en el Congreso para revisar en profundidad el contenido de las 26 partidas presupuestarias.

El primer punto de discusión fue el presupuesto de Hacienda y Educación, pero ambos se aprobaron sin problemas después de que los diputados de la Concertación incluyeran indicaciones y precisiones. Hasta que llegó el momento de discutir el presupuesto para el Ministerio Secretaría General de gobierno (Segegob), encabezado por Ena Von Baer. Los coletazos de la polémica “fútbol-intervención política” volvieron a marcar presencia.

Los diputados recordaron las palabras de la ministra, cuando calificó de “canallescós” y “miserables” los dichos de algunos parlamentarios de la Concertación que acusaron intervención de Piñera en las elecciones de la ANFP. El resultado fue negativo para el presupuesto de la vocera. Su partida resultó rechazada por 40 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones.

La discusión terminó a las cinco de la mañana, con casi todo el presupuesto aprobado. Los recursos de la Segegob quedaron en pausa hasta el 16 de noviembre, cuando el proyecto pasó a tercer trámite en el Senado. Allí se incluirían las modificaciones propuestas por la Concertación y se intentaría retornar el presupuesto a la Segegob.

Llegado el día, los senadores concertacionistas mantuvieron firmes las críticas a la ministra e incluso sumaron nuevas. El senador demócrata cristiano Andrés Zaldívar, jefe de la bancada DC en ese entonces, dijo que Ena Von Baer parecía “salida de las juventudes hitlerianas”, en referencia a la supuesta intransigencia de la ministra para conversar.

“El tema del presupuesto estaba contaminado porque el rol de Ena Von Baer en la vocería del gobierno era bastante conflictivo para el entorno de La Moneda y para la Concertación. A mi juicio, ella cumplió un rol bien odioso. Esa votación fue una suerte de voto de censura a la conducción de la cartera de Von Baer”, comenta Gabriel Silber cuando analiza el episodio⁸⁵.

De todas maneras, el objetivo del gobierno se cumplió: lograron reponer los recursos de la Secretaría General de Gobierno con una votación de 20 votos a favor y uno en contra. El único rechazo fue el de Alejandro Navarro del MAS, a modo de protesta por el cierre de la edición impresa del diario *La Nación*.

Pero este conflicto que parecía concluido, reincidió más adelante.

La aprobación del presupuesto tuvo entretelones como las negociaciones parciales y nacionales por recursos para las regiones. El senador del Partido Socialista Camilo Escalona fue uno de los que condujeron las tratativas con el gobierno, y hoy acusa que estos acuerdos “no se respetaron”.

Escalona afirma que “Piñera no respetó lo que solicitamos: que el país gastara más en las regiones. Con la excusa del terremoto el gobierno recortó los recursos de las regiones de 2010 de una manera tremenda. Y da un ejemplo: “en la Región de los Lagos recortaron el de Obras Públicas en una tercera parte, el de Vivienda casi en la mitad y el de Salud en una cuarta. En 2011, cuando la emergencia debería haber sido etapa superada, porque además el país tuvo una recaudación más elevada, el presupuesto de la Región de Los Lagos siguió siendo menor que en 2009, el año de la crisis

85 Entrevista realizada a Gabriel Silber por las autoras de esta Memoria. 27 de marzo de 2012.

económica”⁸⁶.

Según el senador, el uso discrecional de los recursos por parte del Ejecutivo “ha sido escandaloso”. Explica que esto “se ampara en la Constitución del 80, en la cual el Presidente de la República tiene la facultad de reasignar los recursos. “Utilizando esta arbitrariedad -afirma- Piñera ha realizado en los hechos una política de ajuste fiscal no explícita, cuyo costo principal está en la disminución de la inversión en las regiones”.

Los tres puntos de la discordia

En el anuncio de Coronel, donde el Presidente dio a conocer el “Plan de reconstrucción, programa de gobierno y financiamiento 2010-2013”, la principal novedad fue una serie de alzas tributarias que aportarían un poco más de tres mil 200 millones de dólares.

Antes de efectuar su anuncio, Piñera recordó que el déficit fiscal de 2009, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, alcanzó los siete mil 200 millones de dólares. En consecuencia, afirmó, el presupuesto fiscal de 2010, antes del financiamiento de gastos del terremoto y del programa de gobierno, presentaba un déficit estructural de dos mil 376 miles de millones de dólares equivalente 1,2 por ciento del PIB”.

En el ítem de alza de impuestos, el Ejecutivo contempló cuatro incrementos que se aplicarían a la minería, con el llamado Royalty; a los bienes raíces de mayor valor no afectados por el terremoto; al tabaco, y al impuesto a la renta de primera categoría⁸⁷ que pagan las empresas.

El Presidente recalcó que el aumento de impuestos sería temporal, por dos años. Subirían un tres por ciento en 2011 y un 1,5 por ciento en 2012, para volver a su nivel acordado de 17 por ciento en 2013. Para evitar que esta alza tributaria afectara a las Pequeñas y Medianas Empresas -Pymes-, el Ejecutivo señaló que ampliaría el beneficio

86 Entrevista realizada a Camilo Escalona por las autoras de esta Memoria. 8 de agosto de 2011.

87 El Impuesto de Primera Categoría, grava las utilidades tributarias de los negocios, dejando afectas a las rentas provenientes del capital y de las empresas comerciales, industriales, minera y otras. Este impuesto se determina sobre la base de las utilidades líquidas obtenidas por la empresa, vale decir, sobre los ingresos devengados o percibidos, menos los gastos. Fuente: Servicio de Impuestos Internos.

contemplado en la ley de Renta⁸⁸ con el fin de permitir a más de 800 mil Pymes eximirse del impuesto, siempre que se reinvirtieran sus ganancias hasta los 55 millones de pesos.

La experiencia de mandatos de derecha en el mundo y la resistencia que este sector mantiene en Chile frente al tema, demuestran que el alza de impuestos a las compañías privadas no estaba originalmente en el programa de gobierno de Piñera. Incluso para la coalición progresista de la Concertación fue un asunto pendiente, en el que no se pudo avanzar por la férrea oposición interna liderada por el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, según cuenta el exministro secretario general de Gobierno y de Defensa de Michelle Bachelet, Francisco Vidal, en la entrevista concedida para esta Memoria.

En la Coalición por el Cambio los impuestos han dividido a los militantes de la UDI y RN. Al interior de ambos partidos de derecha no hay una posición única. Ejemplo claro es el nuevo subsecretario de Hacienda, ingeniero comercial UC y magister en la Universidad de Chicago, Julio Dittborn, quien asumió sus funciones el lunes 1 de agosto de 2011. Él fue uno de los participantes de la comisión económica de la UDI que se reunió para suscribir de forma unánime una declaración donde rechazaba la aplicación de una reforma tributaria.

Mientras la UDI cerraba la puerta a la reforma tributaria, La Moneda encargó estudios al Ministerio de Hacienda, con el fin de analizar eventuales cambios a la estructura impositiva del país. Este sería el primero de varios roces que tendrían los dos partidos de la Alianza.

La disyuntiva fue descrita por *El Mercurio* como un fuerte gallito entre las dos almas de la Alianza. “En el interior del equipo de gobierno Hinzpeter fue el gran impulsor de la trascendencia de incluir la medida en el paquete”, indicó el diario de los Edwards. “La discusión tributaria -señaló a su vez *La Tercera*- dividió al gabinete”.

88 Beneficio tributario que pueden utilizar los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva y cuyos ingresos anuales por ventas, servicios u otras actividades de su giro, no hayan excedido un promedio anual de cinco mil unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, o en el caso de los que de los que inician actividades, los que determinen un capital propio inicial igual o inferior al equivalente de 1000 Unidades Tributarias Mensuales del mes en que ingresen. Fuente: Servicio de Impuestos Internos.

Según informó Radio Universidad de Chile el 31 de julio de 2011 una de las alternativas que se barajaban en La Moneda era mantener de forma permanente el tributo en 20 por ciento. “El diseño que ha comenzado a ganar fuerza es que una reforma tributaria podría servir de hito para dar cuenta del 'relato' que quiere imprimirle el Presidente Sebastián Piñera a la segunda etapa de su gobierno, basado en la lucha contra las desigualdades”, señaló *El Mostrador*.

El temor de que un alza transitoria se convirtiera en permanente parecía cada vez más real y los sectores duros neoliberales se pusieron en alerta. El diputado Ernesto Silva Méndez afirmó a Radio Cooperativa que "las reformas tributarias tienen que tener un sentido. Estoy seguro que no vamos a avanzar en temas que generan división en la Coalición". Silva Méndez es hijo de Ernesto Silva Bafalluy⁸⁹, militante histórico de la UDI que fundó la Universidad del Desarrollo y fue socio en el mismo proyecto con los ministros Joaquín Lavín y Cristian Larroluet. El diputado Javier Macaya, otro de los firmantes de la declaración en contra de la reforma, señaló a *La Tercera* que el alza de impuestos no estaba en la propuesta original del Ejecutivo “y a nosotros se nos ha pedido alinearnos con un programa de gobierno”⁹⁰.

Pero en el gremialismo también hubo grupos abiertos a revisar el tema. Dos expresidentes de la colectividad, el ministro de Economía Pablo Longueira y el senador por la Región del Maule Sur, Hernán Larraín, manifestaron apertura en estudiar el sistema tributario para financiar planes sociales. Larraín, esposo de la exministra de Vivienda Magdalena Matte, fue un paso más allá y señaló que cualquier acuerdo que se alcance en educación requerirá un desembolso mayor al que el gobierno ha ofrecido.

El público *lobby* de los empresarios

Al exministro de Hacienda de la dictadura, Hernán Büchi, al director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo, Luis Larraín o al expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Rafael Guisasti no les temblaron las palabras para decir a

89 El empresario, que llevaba 21 años frente a la Universidad del Desarrollo y era asesor histórico de las campañas de Joaquín Lavín, falleció el 8 de agosto de 2011. Era ingeniero comercial de la UC y Máster en Economía de la Universidad de Chicago.

90 *La Tercera*, 31 de julio de 2011. “Debate por alza de impuestos a empresas divide a oficialismo”, J.M. Wilson y N. Hernández.

través de medios de comunicación afines lo equivocado que estaba el Ejecutivo. Hablaron de la “pésima señal” en el largo plazo que significaba subir impuestos, ya que había otras formas de financiar la reconstrucción, como la emisión de deuda en el extranjero o los fondos ahorrados con que cuenta Chile.

Desde la tribuna de los editoriales los dos principales diarios del país se manifestaron alineados con las posturas más contrarias al alza, que encabezaron Hernán Büchi y el *think tank* Libertad y Desarrollo. El editorial del 3 de abril de 2010 en *La Tercera* es un ejemplo: “Al verificar las cifras a las que alcanzan los gastos de reconstrucción existen fundados argumentos para sostener que no es necesario recurrir a incrementos tributarios para financiarlos”⁹¹.

La primera ofensiva para detener el alza vino de los afectados directos: los gremios empresariales. De entrada definieron la medida como un freno a las inversiones y propusieron echar mano a los ahorros del fisco, la reasignación de presupuestos, la venta de activos prescindibles y la deuda externa para financiar la reconstrucción. También pensaron en acelerar los procesos de concesiones y se lo hicieron saber al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en la reunión que sostuvo con varios empresarios, algunos de ellos viejos conocidos de Sebastián Piñera en las lides comerciales.

En el encuentro estuvo el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha, quien en 1989 participó en la campaña presidencial de Hernán Büchi. A la cita también asistió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Jorquera, el entonces titular de la Sociedad Nacional de Agricultura, Luis Mayol, socio desde 1979 con el Ministro de Defensa, Andrés Allamand, en su estudio de abogados y designado ministro en un posterior cambio de gabinete. También participó de la reunión el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), Lorenzo Constans. Mayol sería convocado el 29 de diciembre de 2011 como titular de Agricultura.

En entrevista para esta Memoria el primo del Presidente Sebastián Piñera, el abogado Herman Chadwick⁹², sostuvo que el hoy expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y actual presidente de la Confederación de la Producción y del

91 *La Tercera*, 3 de abril de 2010. “Relación del gobierno con los empresarios y el alza de impuestos”, editorial.

92 Entrevista realizada a Herman Chadwick por las autoras de esta Memoria. 12 de abril de 2011

Comercio (CPC), Lorenzo Constans, tuvo posibilidades de ser intendente de la Región de Valparaíso.

Según Chadwick, la opción se habría descartado en marzo de 2010, cuando se cuestionó la calidad de las construcciones que sufrieron numerosos daños posterremoto. Ante las críticas, en su calidad de presidente de la CChC, Constans afirmó a los medios de comunicación que “hay edificios que están inclinados, el ejemplo más claro es la Torre de Pisa, que se ha mantenido por siglos en pie y, por lo tanto, creo que es conveniente analizarlo con un profesional adecuado”. El desliz verbal le significó a Constans la pérdida del gobierno regional de Valparaíso y lo hizo blanco de profundas críticas, y burlas, entre la oposición y la población en general.

Reaparece Büchi en la senda de Piñera

Los vínculos de Hernán Büchi con el gobierno de Sebastián Piñera son profundos. Tuvo una fuerte influencia intelectual en al menos dos ministros claves del gabinete original: Cristian Larroulet, a quién conoce en su calidad de inversionista en el rubro educacional por la UDD, y por Libertad y Desarrollo, y Juan Andrés Fontaine, exministro de Economía, quien es miembro de LyD en la actualidad.

Cristian Larroulet fue jefe de gabinete de Büchi en el ministerio de Hacienda y juntos fundaron el Instituto Libertad y Desarrollo en 1990. A Fontaine, lo conoce desde 1984 cuando era gerente de estudios del Banco Central y Büchi superintendente de bancos. La relación con Piñera también es antigua y se forjó en 1989 cuando Büchi era candidato presidencial y el hoy Presidente de la República fue su generalísimo de la campaña.

No resultó extraño que Piñera, antes de asumir, organizara reuniones con el exhombre de Hacienda para conocer su experiencia después del terremoto de 1985. “El primer encuentro entre Büchi y Piñera lo gestionó personalmente Cristian Larroulet”, señala Hugo Fazio en su último libro dedicado al gobierno de la Coalición: *Un país gobernado por uno de sus dueños*⁹³.

93 Hugo Fazio, *Un país gobernado por uno de sus dueños*. Editorial LOM. Santiago, 2011.

Al hablar de los objetivos que debía tener el gobierno, al exministro de Pinochet le parecía que “lo que interesa a Chile hoy día es que se produzca. Tenemos que salir del problema y si empezamos a generar dudas, estamos haciéndonos el harakiri”, dijo el 19 de marzo de 2010 a *La Tercera*⁹⁴. En los siguientes párrafos clarificó aún más la postura del sector que representa: “Pretender que el costo lo absorban todos los privados subiendo los impuestos, no es una política correcta”, indicó el ingeniero.

A Sebastián Piñera no le pareció bien la abierta oposición a uno de sus anuncios estrella, uno que podía situarlo sobre las críticas por conflictos de interés o incluso sobre la Concertación, que reconocía que subir los impuestos fue una piedra en el zapato durante sus gobiernos.

Alzas para el tabaco

Con el alza de impuestos el gobierno consiguió llevar a cabo una de sus medidas más importantes para financiar la reconstrucción. Otro de los anuncios destacados fue el alza permanente al tabaco que, sin embargo, no corrió la misma buena suerte.

El aumento significó pasar del 60 al 67 por ciento en el gravamen a las tabacaleras. Con ello, la recaudación esperada para el fisco era de 990 millones de dólares. Eso se informó el 16 de abril de 2010. Pero, el 5 de mayo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín expuso una “novedad”: ahora el incremento del impuesto permanente al tabaco subiría del 60,4 a 62,3 por ciento, es decir solo un 2,3 por ciento, en desmedro de los originales siete puntos de alza.

También se anunció que se cobraría un tributo específico fijo de 50 pesos para todas las cajetillas de 20 cigarrillos sin importar su valor, con el fin de evitar que los consumidores prefirieran los productos de menor calidad.

Estos cambios de planes tuvieron detrás fuertes intereses.

Chiletabacos, controlada por la transnacional British American Tobacco (BAT), es

94 *La Tercera*, 19 de marzo de 2010. “Büchi critica eventual alza de impuestos y llama a avanzar en productividad”, David Lefin.

la empresa que maneja el 98 por ciento de la industria de tabaco en Chile. Según sus proyecciones, debido al alza porcentual de siete puntos que anunció el gobierno, el precio de las cajetillas aumentaría en un ciento por ciento. Con el alza, las 20 unidades de cigarrillos podría superar los tres mil pesos, lo que “aumentaría el mercado negro”, entre otros males que le añadían al alza.

El 23 de abril de 2010 a través de la prensa y en reunión con autoridades de gobierno, la transnacional BAT diagnosticó el problema y entregó una solución que, a la larga, sería la misma que adoptaría el Ejecutivo. Propusieron buscar una alternativa mixta, que en lugar de gravar solo el precio de venta, se mezclara con un impuesto específico a cada cajetilla, internalizando así el costo del alza en los bolsillos de los fumadores. Fue lo que ocurrió.

Larraín propone

Dos años después del terremoto, la agenda del gobierno se modificó y los daños de la naturaleza impusieron otro ritmo. La ciudadanía también puso temas sobre la mesa que de nuevo modificaron los planes de La Moneda. Tal es el caso de la reforma tributaria cuya discusión nació en 2011 cuando los estudiantes universitarios se movilizaron por el endeudamiento, la crisis educativa que afecta al modelo chileno y el derecho a la educación.

En septiembre de 2011 el ministro de Hacienda Felipe Larraín consideraba que el crecimiento proyectado para Chile en los próximos años era suficiente para sustentar el gasto social, además de los cuatro mil millones de dólares ofrecidos por el Ejecutivo como fondo para la educación. En cambio, los estudiantes y los expertos manifestaron que la única manera de financiar una reforma integral a la educación era modificar el sistema impositivo de Chile.

Libertad y Desarrollo sostuvo que una reforma tributaria que esté enfocada, por ejemplo, en el incremento de los impuestos a las grandes empresas, tendría un impacto negativo en el Producto Interno Bruto. Tampoco ayudaría a lograr una mejor distribución de la riqueza. El ministro Felipe Larraín tenía la misma opinión antes de las movilizaciones de 2011.

Pero los datos parecen apuntar en otra dirección. Países como Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos mantienen impuestos de primera categoría que alcanzan el 30 y 35 por ciento y registran niveles de desigualdad de 0,33; 0,34 y 0,38 cada uno, según el índice de Gini⁹⁵. En Chile estos tributos llegan a un 17 por ciento y el indicador de inequidad se eleva a 0,50 en una escala donde 0 corresponde a la igualdad y 1 a la desigualdad. La media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 0,31, según informó Radio Universidad de Chile⁹⁶.

La reforma tributaria para la educación

Si en septiembre de 2010 la última alternativa que consideraba el ministro de Hacienda era cambiar el sistema tributario, ya en diciembre de ese año la tomó como una opción y comenzó a trabajar en la elaboración del plan. “Es verdad que una reforma tributaria no estaba explícita en el programa de gobierno”, admitió. Pero planteó que ésta representa un aumento moderado de recaudación: “Algunos dirán que es demasiado poco, pero se hace para tener un compromiso todavía mayor con la educación. Ahora, lo que yo siempre dije era que el presupuesto 2012 estaba financiado por completo con el crecimiento económico”, indicó.

En entrevista concedida a la revista *Qué Pasa* en abril de 2012, Larraín señaló que se afinaban los últimos detalles del proyecto de reforma tributaria. “Está contento, pese a que la tarea le ha significado trabajar cerca de quince horas diarias durante los últimos meses”, señaló la crónica de la revista.

En la conversación con la periodista Josefina Ríos de *Qué Pasa*, el jefe de las finanzas públicas aseguró que la normativa le permitirá al país recaudar los fondos necesarios para financiar las mejoras a la educación. Esto sin hipotecar el crecimiento, pieza clave para alcanzar la gran meta de este gobierno: convertir a Chile en un país desarrollado en 2018.

95 El ideólogo y estadístico italiano Corrado Gini desarrolló en 1912 un método para medir la desigualdad de una distribución. En ella introdujo el valor de 0 para expresar la igualdad total y el valor de 1 para la máxima desigualdad. La aplicación más masificada de este coeficiente, que también se conoce como índice, es en economía para medir la desigualdad de ingresos.

96 Radio Universidad de Chile, 13 de septiembre de 2011. “Los sí y los no de la reforma tributaria”, Loreto Soto.

El miércoles 25 de abril de 2012 el Presidente se reunió en su casa ubicada en el barrio San Damián de Las Condes con las cúpulas de la UDI y RN. La cita, que duró casi dos horas, tenía por objetivo adelantar el contenido de la reforma tributaria para la educación, que se anunciaría a todos los ciudadanos un día después.

Sebastián Piñera explicó que el proyecto inyectaría recursos para los “cambios profundos en la educación”, que entre otros aspectos contemplaban mayor cobertura para las clases medias y bajas. “El gobierno y la sociedad chilena han puesto a la educación en el corazón de nuestras necesidades”, indicó en la ocasión el Mandatario.

La propuesta oficialista planteó una rebaja de entre un diez y un quince por ciento al impuesto a la renta de las personas naturales. El descuento mayor se aplicaría a los sectores de menores ingresos. Se contempló un alza permanente a las empresas: del 17 al 20 por ciento sobre las utilidades. Además se planteó un descuento a las contribuciones de hasta el 50 por ciento por gastos en educación para la clase media. Estas fueron las medidas que levantaron mayores críticas.

Respecto a la rebaja en el tributo a las personas, el doctor en Ciencias Económicas y director del programa económico de la Fundación Chile 21, Eugenio Rivera, indicó a Radio Universidad de Chile que la medida beneficiaría a los sectores de mayores ingresos, ya que la mayoría de los chilenos está exenta de estos gravámenes.

“En lugar de arreglar este sistema tributario tan injusto, propone reducir las tasas marginales del impuesto de segunda categoría a las personas. Favorecerá más o menos al doce por ciento de la población más rica, porque el 88 por ciento de los chilenos, es decir, los pobres y la clase media, ya están exentos. Todas las personas que hoy ganan 530 mil pesos no pagan impuestos, entonces no se les baja ningún impuesto”, precisó Rivera.

Para el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosín, dentro de las medidas anunciadas la única que podría tener un efecto relevante en la recaudación es el impuesto a las empresas. Sin embargo, declaró a Radio

Universidad de Chile que es necesario “hacer una reforma de verdad apuntando hacia las utilidades totales de las compañías”⁹⁷.

Un día después que el Presidente anunciara su reforma, los estudiantes universitarios reunidos en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), presentaron una propuesta alternativa basada en dos ejes: aplicar el 90 por ciento de impuesto sobre la ganancia al sector de los recursos naturales, y cambiar la ley de Renta, creando impuestos según cada sector, “distinguiendo las ganancias de capital a las de trabajo”, informó *El Dinamo*⁹⁸.

Sin embargo, la iniciativa legal del oficialismo, que recaudará una cifra entre 700 y mil millones de dólares al año para el fisco, se debatió por meses en el Congreso y fue aprobada en septiembre de 2012.

El royalty de Piñera

Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Sebastián Piñera le encargó al economista Paul Fontaine, quien era del equipo del excandidato presidencial Marco Enríquez Ominami, un estudio para analizar la posibilidad de un “segundo royalty” en Chile.

Paul Fontaine es hijo de Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga, uno de los primeros “Chicago boys”, que desde la Universidad Católica inspiró junto a Sergio de Castro el modelo económico que se impuso en Chile bajo la dictadura desde los años 70.

Fontaine hijo estudió la viabilidad del impuesto a la minería para el nuevo gobierno de Piñera. Este impuesto específico correspondía a una tasa única de cinco por ciento, obtenida de la renta operacional de las explotaciones, que tienen ventas por más de 50 mil toneladas de cobre fino. Si estas son inferiores a doce mil toneladas, se les exime del gravamen. Entre doce y 50 mil toneladas el impuesto se eleva gradualmente.

97 Radio Universidad de Chile, 26 de abril de 2012. “La reforma tributaria solo cubre el 10% de los requerimientos en educación”, Loreto Soto.

98 *El Dinamo*, 17 de abril de 2012. “Confech presenta propuesta de reforma tributaria y convoca a movilización nacional”, equipo *El Dinamo*.

Los argumentos a favor de aumentar el royalty tomaron fuerza, entre otros factores, por la importante alza que experimentó el cobre. En un año duplicó su precio: en 2009 fue transado en 173 centavos de dólar la libra y en 2010 se comercializó a 336.

La intención era recaudar fondos para la reconstrucción. Con ese objetivo en el horizonte el gobierno impulsó un paquete de medidas que incluyó un nuevo royalty. Pero la discusión se pospuso por la oposición en el Congreso de la Concertación, el Partido Regionalista Independiente (PRI) y los independientes. Y el debate se agitó.

El senador Jorge Pizarro, expresidente del Congreso durante el periodo, recuerda en entrevista con las autoras de esta Memoria la disposición que tuvo la Concertación para trabajar y aprobar iniciativas del Ejecutivo: “El financiamiento de la reconstrucción se vio en los primeros dos meses del gobierno, ahí aprobamos todo. Lo único que no le aceptamos al gobierno en ese momento fue el llamado ‘royalty’, que en realidad era un impuesto específico al cobre, porque nos pareció un regalo a las empresas”, acota⁹⁹.

La oposición, según Pizarro, buscaba conseguir “un verdadero royalty, que es el impuesto que se cobra por sacar una libra de cobre, independiente del valor”, explica. Recuerda que el primer intento por una modificación importante del impuesto al cobre lo hicieron en el gobierno de Ricardo Lagos como Concertación. “Quisimos instalar un royalty de verdad, pero la derecha no nos dio los votos”.

Lo que sí aceptó en esa oportunidad la Alianza por Chile, que en ese momento era liderada por Pablo Longueira desde la presidencia de la UDI y Sebastián Piñera al mando de RN, fue cobrar un impuesto mayor a las mineras, a cambio de la invariabilidad tributaria, régimen bajo el cual las empresas gozan de estabilidad del porcentaje del tributo, más allá de las alzas en sus ventas y utilidades.

Jorge Pizarro critica que lo que planteó el gobierno en 2011 con el llamado segundo royalty “fue un aumento pequeño de este mismo impuesto”. Por eso, explica, rechazaron la primera propuesta del Ejecutivo, que recaudaría “solo 200 millones de dólares y más encima, a cambio de eso, les regalábamos diez años más de invariabilidad”.

99 Entrevista realizada a Jorge Pizarro por las autoras de esta Memoria. 1 de agosto de 2011.

En el ambiente político se sintió la tensión y las declaraciones cruzadas eran asunto de todos los días. En este contexto, *La Tercera* tituló en su editorial del sábado 20 de marzo de 2010 que “Eleva el royalty es contraproducente para la recuperación del país”¹⁰⁰. El diario argumentó que “es inconveniente, pues su aplicación afectaría la seriedad y estabilidad de las normas que deben regir las actividades económicas”. Acusó que “esta posibilidad no estaba en el programa de la candidatura de Sebastián Piñera, pero cuando recibió el apoyo del jefe económico de Enríquez Ominami entre la primera y segunda vuelta, se planteó incorporarlo”.

La Tercera se mostró incluso en contra de un proyecto que ofreciera a los privados la ampliación de la estabilidad de las tasas de impuestos, a cambio de su cooperación voluntaria.

Pero la oferta ante la que el diario adelantó su negativa se concretó. Aún cuando la oposición empresarial al alza seguía, el gobierno elaboró el proyecto de ley “Aumento del Royalty Minero”. En él propuso que la compensación por la explotación de recursos aumentara, obteniendo una ganancia fiscal de 700 millones de dólares.

Pero había un obstáculo. Dada la invariabilidad tributaria otorgada durante el gobierno de Ricardo Lagos por la ley 20.026 a las empresas mineras, el incremento en sus tributos se haría efectivo solo si lo aceptaban de forma voluntaria. Para incentivar la adhesión a la medida, el gobierno le ofreció a las empresas mantener sus tributos libres de alzas por ocho años más.

El intento de Lagos

En 2005, un año antes de terminar su gobierno Ricardo Lagos presentó un royalty que establecía un tres por ciento de recargo sobre las ventas de las mineras. Era una iniciativa por ley Orgánica Constitucional, y fue rechazada. Hizo un segundo intento y utilizó una ley ordinaria para instalar un impuesto específico.

100 *La Tercera*, 20 de marzo de 2011. “Eleva el royalty es contraproducente para la recuperación del país”, editorial.

El primer proyecto de royalty del gobierno de Lagos necesitó el apoyo de a lo menos ocho diputados de derecha. Hubo un acuerdo preliminar con algunos representantes de la bancada de RN, quienes iban a apoyar el tres por ciento sobre las ventas, y no sobre las utilidades, de las mineras.

Julián Alcayaga, economista y presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, afirma que el “*lobby* minero” fue decisivo para que la medida no prosperara y se tuviera que bajar a un tributo por ley simple. “Cuando se fue a votar a la sala, el diputado de RN por Copiapó, Carlos Vilches, que estaba a favor del royalty, denunció el *lobby* al interior de la Cámara de Diputados. Dijo que ‘en los pasillos del Congreso andan las empresas mineras comprando votos para que desaprueben el royalty’”, denuncia el economista. Continúa: “¿qué pasó con Vilches? Lo echaron del partido, no lo llevaron de candidato, estuvo cuatro años fuera y después se inscribió en la UDI”¹⁰¹, señala Alcayaga en entrevista para esta Memoria, desde su oficina en el centro de Santiago.

El gobierno vuelve a la carga

En julio de 2010 la oposición no aprobó el primer proyecto de impuesto a la minería que presentó el gobierno. Eso desató una gran controversia política en la que participaron empresarios nacionales e internacionales, políticos y medios de comunicación.

El todavía poco conocido ministro de Minería Laurence Golborne, declaró en el Tercer Foro Internacional de Exploración del Centro de Estudios de la Minería y el Cobre (Cesco) en abril de 2010 que “la institucionalidad vigente establece cláusulas de invariabilidad tributaria para los principales actores que hoy están pagando este impuesto. Por tanto, cualquier cambio en esta materia tiene nulo impacto en la recaudación. Es una discusión estéril decir si vamos a modificar o no la tasa de impuesto o royalty”¹⁰². Pero a principios de mayo su opinión varió y declaró a *La Tercera* que “las mineras han demostrado disposición a estudiar nuestro royalty”.

101 Entrevista realizada a Julián Alcayaga por las autoras de esta Memoria. 5 de diciembre de 2010.

102 *Área Minería*, 20 de diciembre de 2012. “*Ministro de Minería reitera que discusión sobre royalty es ‘estéril’*”, Reuters.

En medio de esta batahola, el ingeniero civil en minas y alto ejecutivo minero de empresas internacionales -como BHP Billiton Base Metals-, Diego Hernández Cabrera, fue nombrado presidente ejecutivo de Codelco Chile.

Hernández Cabrera fue compañero de Hernán Büchi en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es uno de los empresarios que más presión ejerció en contra del gravamen minero cuando fue propuesto por el expresidente Ricardo Lagos en 2005. En aquel entonces, Hernández persiguió que su empresa a cargo, Minera Escondida, no pagara el impuesto específico.

Preocupado por los múltiples movimientos en la arena política y económica que estaba generando el tema, el lunes 25 de abril Francisco Costabal, presidente del Consejo Minero, se reunió con el entonces ministro del ramo, Laurence Golborne. Costabal manifestó que solo el 60 por ciento de las grandes mineras aceptarían pagar el nuevo gravamen, pues incluso con la extensión de la invariabilidad hasta 2025 no lo encontraban atractivo. El motivo principal, señaló, es que varios yacimientos están próximos a terminar sus faenas, por lo que no podrían gozar del beneficio posterior.

La invariabilidad tributaria que establecía el impuesto específico aplicado desde 2005 duraba hasta 2017. Con el proyecto de Piñera esta situación se extendería. Según cálculos de Alcañaga, en el mediano plazo esta ley significaba la renuncia por parte del Estado a recibir casi 17 mil 500 millones de dólares, entre 2018 y 2025.

La oposición calculó que la extensión de la invariabilidad provocaría una pérdida de 400 millones de dólares en la recaudación fiscal de 2013. Con este argumento sus parlamentarios se manifestaron en contra durante las sesiones del Congreso. Destacaron en esta línea por su ahínco los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Camilo Escalona (PS).

Hasta septiembre de 2010 se discutió el tema. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, sostuvieron intensas y dilatadas conversaciones con los concertacionistas. Lograron poner en discusión aristas que el gobierno estaba dispuesto a negociar con el fin de lograr los votos necesarios y aprobar el royalty minero.

Fueron sesiones eternas en la Cámara. Las tratativas posicionaron a los hombres del Presidente como interlocutores con los diputados y senadores de la Concertación para la consecución de leyes. Se vieron atareados, angustiados y eufóricos en las jornadas. La animadversión y el cabildeo duraron horas y hubo recesos solo para almorzar y tomar café. En el hemiciclo, a pesar de sus protocolos ceremoniosos, se respiró hostilidad durante días.

Cuando el gobierno contó con la venia del PRI y del senador Camilo Escalona, en la segunda semana de octubre lograron el acuerdo. Escalona aseguró los votos de los congresistas opositores más alineados a cambio de partidas presupuestarias para regiones.

De dulce y agraz para la oposición

Con la aprobación se consiguió un nuevo Impuesto Específico a la Minería, que va desde cinco a catorce por ciento dependiendo del margen operacional minero. Se estableció una extensión del período de invariabilidad tributaria de seis años y no ocho como planteaba el proyecto original del gobierno. De 2018 a 2023 las empresas que ya cuentan con contrato con el Estado de Chile y decidan optar por este nuevo régimen tributario, no verán incrementados sus impuestos.

La gran ventaja que sacaron los concertacionistas y el PRI, más otros independientes, fue la creación de un Fondo de Inversión y Reversión Regional permanente. Este recibiría aportes anuales por cien millones de dólares durante cuatro años; después el monto se establecería según las leyes de Presupuesto de la Nación. Un tercio de estos recursos se destinaría a las regiones mineras, y lo restante iría a todas las regiones del país.

Según el senador Jorge Pizarro, la nueva propuesta que presentó el gobierno fue “parecida a lo que habíamos dicho, con una escala variable dependiendo de los precios. El gobierno con su proyecto original pretendía recaudar unos 200 millones de dólares por año y con el cambio que nosotros hicimos están recaudando unos mil 500 millones por año”, afirma.

Aún así la disputa legislativa fue un hito que tensó a la Concertación, y las diferencias siguen recordándose hasta hoy. El diputado socialista Carlos Montes¹⁰³ afirmó en entrevista para esta Memoria que “Escalona se equivocó de manera rotunda, porque lo del cobre es una muy mala ley. Era la oportunidad para un nuevo trato con el cobre y se desaprovechó. Es cierto que logramos bloquear y rechazar la primera ley, después vino la segunda que era ‘ahí no más’. En la Cámara se generó hartó debate, pero al final lo aprobó la mayoría”, señala desde el ex Congreso Nacional en Santiago.

En perspectiva, el diputado DC Gabriel Silber afirma que la Concertación logró que “el royalty entrara de una manera y saliera aportando casi el doble de recursos que el proyecto original que tenía el Ejecutivo”. Sin embargo, lamenta: “Así y todo, sentimos que fue un royalty bastante mezquino”.

Julián Alcayaga continuó crítico de la segunda propuesta oficialista del impuesto específico a la minería porque “subió de un cinco a un catorce por ciento, ampliando la invariabilidad tributaria”. Indica que ya no habrá posibilidad “de aquí al 2018, sino que recién al 2023, de establecer una verdadera regalía minera, sobre las ventas y las utilidades de estas empresas, de a lo menos de un diez por ciento, como debería ser”.

La negociación estuvo llena de derechos y reveses y tuvo un epílogo nada feliz para la oposición. La ganancia que el bloque concertacionista más los PRI e independientes consiguieron en el acuerdo, según Escalona, “no se ha respetado”. Sostiene que el gobierno de Piñera “no cumplió porque la distribución a todas las regiones tenía como propósito que el país gastara más en ellas y, con la excusa del terremoto, se recortó en el presupuesto los recursos de las regiones de 2010 de una manera tremenda”.

El militante socialista y actual presidente del Senado afirma que él se enteró de esta situación relacionando informaciones de prensa “porque no hay datos oficiales de parte de la autoridad superior”.

103 Entrevista realizada a Carlos Montes por las autoras de esta Memoria. 15 de junio de 2011.

Cultura de donaciones y generosidad

“Las sociedades de mercado, a menudo criticadas como puramente individualistas, en realidad logran crear una potente cultura de beneficencia que no se observa en sociedades menos abiertas”. La cita corresponde al editorial del diario *El Mercurio*, del 21 de marzo de 2010, justo cuando el debate sobre la ley de Donaciones se encontraba atrapado.

La Concertación no estaba de acuerdo con que el Comité Ejecutivo que decidiría el destino de las donaciones fuera encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, dos miembros designados por él y tres de sus ministros más cercanos: Rodrigo Hinzpeter, Cristián Larroulet y Felipe Larraín.

Al principio el Ejecutivo no quería ceder terreno incluyendo indicaciones al proyecto. Pero al observar que esa negativa podría significarle truncar la propuesta, se abrieron a la posibilidad de levantar la “Agencia de la Reconstrucción” integrada por gobierno y oposición, que es lo que proponía la Concertación.

La inclusión de indicaciones se gestó durante la mañana del 20 de abril de 2010 cuando los presidentes de los partidos de la Concertación y los jefes de las bancadas de senadores y diputados de la oposición recibieron un llamado telefónico del jefe de gabinete de Sebastián Piñera, Juan Ignacio Eyzaguirre. Los invitó a una reunión a las siete de la tarde en Cerro Castillo, para abordar el proyecto de ley de Donaciones, que se discutía en el Congreso.

En el encuentro -donde compartieron bebidas, vino, pisco *sour* y canapés-, el Presidente expuso en un *powerpoint* las finanzas públicas, su plan de gobierno, el diseño de la reconstrucción y su financiamiento. Después dio la palabra a los parlamentarios asistentes, quienes plantearon la necesidad de quitarle la suma urgencia a la tramitación de la ley y que se creara la Agencia; esos eran puntos definitorios para dar su apoyo.

Fondo Nacional de la Reconstrucción

La ley 20.444, que fue publicada en el *Diario Oficial* el 28 de mayo de 2010, creó el

Fondo Nacional de la Reconstrucción y estableció una serie de beneficios tributarios a las donaciones destinadas a financiar la construcción o reconstrucción de infraestructura u obras afectadas por una catástrofe natural.

En el gobierno existía voluntad de crear una institucionalidad permanente respecto a cómo operarían las donaciones una vez que se levantara el Estado de Catástrofe. Se estableció que se podría aportar en dinero proveniente de herencias o legados y por las donaciones u otros recursos recibidos por cooperación internacional.

Todas los aportes serían recibidas en un plazo máximo de dos años contado desde la fecha en que se dictó el decreto supremo. La administración le correspondería al Ministerio de Hacienda, que también estaba encargado de determinar el destino de las donaciones efectuadas por contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría¹⁰⁴, Impuesto Global Complementario¹⁰⁵ y del Impuesto Único de Segunda Categoría¹⁰⁶.

En el caso de los contribuyentes que declaran Primera Categoría, el proyecto permitía rebajar como gasto la totalidad de la donación. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, afirmó que “por cada cinco pesos que donen las empresas, el Estado pone uno”¹⁰⁷.

El Fondo para la Reconstrucción está ligado a la ley de Donaciones y solo podrían percibir los nuevos beneficios quienes aporten a este ahorro. Según Rodrigo Delaveau, experto del centro de pensamiento de derecha Libertad y Desarrollo esto fue “un avance

104 El Impuesto de Primera Categoría grava las rentas provenientes del capital, por las empresas comerciales, industriales, mineras, servicios, con una tasa vigente para los años comerciales 2011 y 2012, 20 y 18,5 por ciento, respectivamente, para a partir de 2013 volver a la tasa permanente de 17 por ciento. Este impuesto se aplica sobre la base de las utilidades percibidas o devengadas en el caso de empresas que declaren su renta efectiva. La excepción la constituyen los contribuyentes de los sectores agrícola, minero y transporte, que pueden tributar a base de la renta presunta.

105 El Impuesto Global Complementario es un impuesto personal, global, progresivo y complementario que se determina y paga una vez al año por las personas naturales con domicilio o residencia en Chile sobre las rentas imposables. Afecta a los contribuyentes cuya renta neta global exceda las 13,5 Unidad Tributarias Anuales, es decir los seis mil 92 millones de pesos. Su tasa aumenta progresivamente a medida que la base imponible aumenta. Es anual.

106 El Impuesto Único de Segunda Categoría grava las rentas del trabajo dependiente, como sueldos, pensiones y rentas complementarias. Es un tributo mensual que se aplica con una escala de tasas progresivas sobre las rentas provenientes de una actividad laboral dependiente, a partir de un monto que exceda 13,5 Unidades Tributarias Mensuales, es decir los 525 mil pesos.

107 Radio Universidad de Chile, 19 de diciembre de 2012. “Presidente anuncia nuevo sistema de emergencia con reforma a la Onemi”, Ninoska Leiva.

respecto a la política de donaciones de la Concertación, porque les da más libertad a los privados para dirigir fondos a proyectos puntuales”. Aunque -retrucó *El Mercurio*- la iniciativa no es tan libre como lo es en países con mayor cultura filantrópica, ya que habrá un grupo de ministros que visará si los aportes corresponden a tareas de reconstrucción¹⁰⁸.

Antes de la ley de Donaciones se permitían aportes con otros fines sociales, pero el de reconstrucción no estaba contemplado en la normativa vigente. En teoría, las personas o empresas privadas interesadas en donar para este fin u otros no autorizados, debían cumplir con un trámite denominado “insinuaciones”, que además estaba sujeto a un impuesto y, por tanto, “no incentivaba a donar”, afirmó el ministro de Hacienda Felipe Larraín en una actividad con importantes empresarios agrícolas.

Según estimaciones preliminares, por esta vía se recaudarían ingresos fiscales adicionales por unos 155 millones de dólares, que equivalen al 22 por ciento de las reasignaciones presupuestarias anunciadas por el gobierno y al 1,7 por ciento del costo fiscal del plan de reconstrucción, descontados los seguros. “Es un monto de obvia utilidad en el trance actual, pero mesurado, que en principio no debería ofrecer base suficiente para una gran polémica política”, afirmó un editorial de *El Mercurio* en abril de 2010.

Pero, ¿cuál es el interés por impulsar y tratar de llevar a cabo una iniciativa como la ley de Donaciones, que solo financia el 1,7 por ciento de la reconstrucción? Una visión política más que económica, podría ser la respuesta.

Editoriales y Chile ayuda a Chile

En menos de una semana la Fundación Teletón se dio a la tarea de organizar para el 5 de marzo de 2010 una nueva maratón televisiva. Esta vez sería en el marco de un terremoto, de los más destructivos que recuerde el país, ocurrido apenas seis días antes.

Pasadas las 22 horas comenzaron las transmisiones de la cadena “Chile ayuda a Chile”. La misión era recaudar quince mil millones de pesos para destinarlos a la

108 *El Mercurio*, 19 de abril de 2010. “Las donaciones financiarían el 1,7% de la reconstrucción”, sección Economía y Negocios.

construcción de 20 mil viviendas de emergencia en las regiones más afectadas por la catástrofe. Fue una cruzada televisiva similar a la Teletón, en la que todos los sectores de la sociedad se sintieron compelidos en la noble causa de la reconstrucción.

El excedente del dinero que se recaudara sería entregado a la Fundación Un Techo para Chile, Caritas y a la Fundación para la Superación de la Pobreza. El animador Mario Kreutzberger al dar las palabras inaugurales apuntó al sentido de la actividad: “Reunir dinero para los afectados, pero sobre todo reunir al país y que trabajemos juntos para superar esta tragedia”.

Pasadas las once de la noche, el 6 de marzo se entregaron los resultados de la jornada, que contó con la participación de Juan Luis Guerra, Juanes y Los Jaivas, entre otros artistas nacionales e internacionales. La cifra final llegó a los 45 mil millones de pesos y contó con la ayuda activa de varios grupos empresariales chilenos, como Angelini y Luksic.

El socio del grupo Penta, Carlos Alberto Délano, director de la Fundación Teletón y uno de los mejores amigos del Presidente Sebastián Piñera, dio las gracias a los millonarios colaboradores que estuvieron presentes durante la ceremonia televisada.

Délano es director de empresas Banmédica, *holding* controlado por el empresario Eduardo Fernández León. A la cabeza del directorio, como presidente, está el socio y amigo de Délano, el ingeniero comercial Carlos Eugenio Lavín. Desde los ochenta Lavín y Délano han hecho negocios juntos. Formaron el grupo económico chileno Penta, a través del que hoy son dueños de un banco, una compañía de seguros y empresas inmobiliarias. Además son socios y miembros del consejo directivo de la Universidad del Desarrollo¹⁰⁹.

¿Dónde fue a parar el fondo Teletón?

Walter Imilan, antropólogo y coordinador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, señala que junto al equipo multidisciplinario con que trabaja, averiguaron que el dinero recaudado a través de “Chile ayuda a Chile” se traspasó a la

109 María Olivia Mönckeberg, *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*. Ediciones B, Santiago, 2001.

iniciativa “Levantemos Chile”, del fallecido empresario Felipe Cubillos¹¹⁰.

La investigación que inició el Observatorio con el equipo legal partió de una constatación en terreno: “la gente decía, 'aquí no hay plata, aquí no hay plata, ¿dónde está la plata de la Teletón?', porque es lo que ve la gente. De hecho creen que los recursos de la reconstrucción salieron de la Teletón”.

Imilan afirma que los antecedentes reunidos por el Observatorio muestran que el dinero recolectado financió proyectos de educación y aparecían ejecutados por Levantemos Chile. “Por eso empezamos a llamar a las escuelas y preguntar sobre los proyectos. Hablamos con inspectores y directores, y decían ‘sí, vinieron unos chicos en camionetas y nos dejaron computadores’, a otros ventanas, a otros implementos para los baños, bajo una lógica súper asistencialista, sin hacer trabajo conjunto con las escuelas sobre cómo priorizar necesidades. Llegaban y entregaban materiales”¹¹¹, cuenta el antropólogo.

Lo que sucede en el fondo –dice Imilan- es que el sector privado puede hacer políticas públicas con las donaciones y “en realidad las donaciones son mentira, porque lo que hacen es descontar impuestos al Estado. Lo que ganan es posicionamiento en el espacio comunitario, obtienen publicidad gratis, que es un tema no regulado en Chile”, acusa el coordinador del Observatorio.

Un caso claro es la escuela de Iloca, que fue construida ahí después de la bullada aparición del niño Víctor Díaz, quien se hizo famoso cuando *La Tercera TV* recorrió su localidad arrasada por el tsunami y lo entrevistó. Ante la pregunta que le hizo el periodista sobre los materiales que les faltaban, producto de una confusión de lenguaje, el niño respondió que “zafradas”, refiriéndose a frazadas, lo que le dio su apodo.

El Observatorio recorrió la zona y constató que la escuela estaba bien equipada, a

110 Felipe Cubillos fue un abogado y empresario chileno, hermano de la exdiputada UDI Marcela Cubillos, conocido por sus emprendimientos y campañas de ayuda. Murió en septiembre de 2011 en un viaje al archipiélago de Juan Fernández para ver los avances del proyecto “Desafío Levantemos Chile”, dedicado a la reconstrucción del país. El avión en el que volaba junto a 21 personas más, entre los que se encontraba el animador de televisión Felipe Camiroaga, sufrió un accidente en las maniobras de aterrizaje y cayó al mar.

111 Entrevista realizada a Walter Imilan por las autoras de esta Memoria. 5 de abril de 2012.

pesar de que sea un *container*. Walter Imilan recuerda que los profesores le contaron que todos los meses distintas marcas hacen eventos en el establecimiento, a los que llevan payasos, música y productos para regalar. “Ellos van porque donaron algo. Entonces, al final la cuestión se transforma en una plataforma comercial de publicidad, lo que es un tema muy complicado cuando estás hablando de educación”.

La credencial de la solidaridad

La jornada de cuenta pública de “Chile ayuda a Chile” comenzó con la bandera izada a asta entera y con los representantes de las principales organizaciones sociales que daban cuenta de la cruzada.

Después de la ceremonia *El Mercurio* indicó que Un Techo para Chile, Caritas Chile, la Fundación para la superación de la pobreza y el Hogar de Cristo son “las principales instituciones de caridad en Chile y sobre la base de ellas debiera forjarse la ayuda para los afectados del terremoto”.

Las juntas de vecinos, dirigentes locales u otras organizaciones sociales de cada zona en general fueron ignoradas como puente entre el gobierno y las personas afectadas. Solo saltaron a la palestra si se organizaban con la Cruz Roja u otra institución. Así, pocos días después de ocurrido el terremoto comenzaron las críticas por lo poco participativo del proceso. Más adelante, esto se transformaría en un foco permanente de malestar desde la sociedad civil hacia el Ejecutivo.

En el editorial del 21 de marzo de 2010 titulado “Consolidar una cultura de donaciones”, *El Mercurio* expuso ejemplos de otros países desarrollados -como Estados Unidos o Japón- que han sorteado tragedias naturales de manera rápida y eficiente. “Los hombres de empresa exitosos sienten el deber de compartir con la comunidad las fortunas que han acumulado, sin que ello les sea impuesto”, afirmó el diario de Agustín Edwards.

En Chile -señaló el artículo- la actitud solidaria es incipiente, aunque existen varias iniciativas que no podrían sobrevivir sin el aporte generoso de personas de fortuna. A diferencia de lo que ocurre en otros países, “la mayoría de las veces esos aportes

permanecen en el anonimato. Si bien esa actitud es comprensible, puede ser insatisfactoria desde el punto de vista de la consolidación de una cultura de beneficencia, que requiere visibilidad para que otros se sientan ‘presionados’ a hacer su aporte a la comunidad”¹¹².

La donación anónima podría estar quedando atrás, como se evidenció en la Teletón y, de forma más reciente, en una cuantiosa donación de la Fundación Educacional Claro Vial, del grupo económico Claro, para asegurar la construcción y funcionamiento de dos establecimientos educacionales en una zona vulnerable del país. El millonario aporte fue canalizado a través de la Fundación Necedal, entidad ligada al Opus Dei que mantiene dos colegios en La Pintana.

Como detalló la revista *Qué Pasa* en un reportaje de enero de 2012 sobre la actualidad del grupo económico Claro, después de tres años de la muerte de su fundador. “En marzo de 2010 -un año y medio después de la muerte de Claro- la Fundación Educacional Claro Vial logró realizar su primer aporte: donó 16 millones de dólares para construir dos colegios al alero de la Fundación Necedal. La institución, ligada al Opus Dei, acomodó a María Luisa Vial”, viuda de Ricardo Claro.

El medio afirmó que a pocos meses de la muerte del empresario, “María Luisa Vial fue ungida con el título de ‘protectora’ de una fundación que tenía dos fines: resguardar el patrimonio familiar y destinar recursos a la creación de escuelas para sectores de menos recursos”. Según *Qué Pasa*, María Luisa Vial posee el 10 por ciento de los bienes del grupo económico y la fundación el 90 por ciento restante. “Sería esa la fórmula para recibir los dividendos de las empresas y reinvertirlos en obras” de beneficencia, afirmó el medio¹¹³.

La tensión Hinzpeter- Berríos

En este contexto de donaciones, caridad y empresa privada, se produjeron los roces entre el capellán y fundador de Un Techo para Chile, Felipe Berríos, y el gobierno, que culminaron cuando Berríos dejó la institución de las mediaguas.

112 *El Mercurio*, 21 de marzo de 2010. “Consolidar una cultura de donaciones”, editorial.

113 *Qué Pasa*, 12 de enero de 2012. “Después de Ricardo Claro”, María Jesús del Pozo y Emilio Maldonado.

De forma pública, el sacerdote jesuita cuestionó el número de viviendas instaladas en la Región del Bío-Bío y aseguró que lo real era menos de la mitad de lo anunciado. Berríos ironizó con las mediaguas que acababan de anegarse después de una fuerte lluvia que afectó a la zona, la segunda semana de mayo 2010.

Desde La Moneda, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter argumentó que en algunas regiones los alcaldes habían rechazado las viviendas de emergencia y que en el Bío-Bío se había firmado un convenio con el consorcio maderero Corma. "Hemos estado construyendo mediaguas que son más caras y de mayor calidad a la común y corriente que ha instalado Un Techo para Chile en otras zonas del país", señaló Rodrigo Hinzpeter en Radio Cooperativa, el 6 de mayo de 2010¹¹⁴.

Un día después, el capellán les bajó el perfil a las críticas. Antes de entrar a La Moneda a reunirse con el ministro del Interior sostuvo: "Es propio de la emergencia, en la que se está respondiendo a incendios, que hayan ciertos roces. Es bueno conversarlos personalmente y darse cuenta que a veces son menores de lo que se piensa"¹¹⁵.

El encuentro duró un poco más de 40 minutos. Al salir, el sacerdote dijo que con la reunión no solo daban "por superado el episodio", sino que se reforzó el compromiso de "trabajar más fuerte para ayudar a los afectados".

Pero al parecer las buenas palabras no sirvieron para retener al sacerdote al frente de Un Techo para Chile. Primero decidió no acompañar a Rodrigo Hinzpeter a Constitución, donde se anunciarían las 40 mil viviendas de emergencia instaladas. Después, el 17 de mayo de 2010, anunció que partiría al país africano Burundi, para trabajar con los refugiados de ese continente en una misión que él mismo solicitó a sus superiores. Terminaron así sus 20 años de trabajo en Chile, desde que el conocido jesuita fundó Un Techo Para Chile. En su reemplazo asumió Cristián del Campo, también sacerdote de la Compañía de Jesús.

114 Radio Cooperativa, 6 de mayo de 2010. "Polémica por calidad de mediaguas enfrenta a Felipe Berríos con el Gobierno", Cooperativa.cl.

115 Radio Universidad de Chile, 7 de mayo de 2010. "Gobierno y Un Techo para Chile dan por superada polémica por mediaguas", Francisco Mardones.

Donaciones para la evasión

El 31 de marzo de 2011 la Contraloría General de la República emitió un informe final sobre donaciones recibidas por el gobierno de Chile. En el texto, se exponen varios casos en que las donaciones siguieron un camino irregular, marcado por la falta de información y fiscalización de la Subsecretaría del Interior y la ausencia de inspecciones fitosanitarias antes de distribuir las donaciones en la comunidad.

Por falta de control, según consta en el informe, a los damnificados les llegó ropa con fecas humanas, medicamentos vencidos, y niños de Constitución fueron vacunados con dosis de medicamentos de procedencia desconocida.

En 87 páginas la Contraloría cuestionó a los órganos del Estado. En particular las críticas apuntaron al Ministerio del Interior, por la inexistencia de un plan de contingencia en el proceso de recepción, distribución y control de las donaciones llegadas desde el exterior. La Contraloría determinó que no existió un conocimiento integral del contenido de las cargas que ingresaron al país.

Además de que las donaciones llegaran en condiciones indignas, hubo un caso en que, haciendo uso del nombre de los damnificados, se evadieron impuestos. Según el informe de la Contraloría, al 25 de mayo de 2010, de los 237 camiones que ingresaron al país por la aduana de Los Andes, 177 correspondieron a alimentos enviados por Jumbo Retail Argentina S.A., a Chile e iban dirigidos a Cencosud retail S.A., de propiedad del empresario Horst Paulmann.

Paulmann ha sido parte de distintos episodios de la emergencia y la reconstrucción. Es dueño de Easy, una de las tres compañías que recibieron la polémica designación directa de recursos del Estado para costear materiales de la reconstrucción para los hogares de los damnificados. Durante la cruzada Chile "Ayuda a Chile", el dueño de una de las cinco mayores fortunas del país ocupó un rol inédito entre los empresarios que participan en este tipo de eventos solidarios: fue telefonista. Esa función le permitió recibir las llamadas de las donaciones en cámara para todo el país.

Paulmann, como dueño del *holding* Cencosud fue empleador de los exministros

Laurence Golborne y Felipe Bulnes en el pasado¹¹⁶. El primero fue gerente corporativo de la compañía y el segundo lo representó en un conflicto judicial ante los usuarios de la tarjeta Jumbo Más.

Los envíos que venían desde Jumbo Argentina se acogieron a la ley 16.282 y entraron a Chile como asistencia humanitaria. Por este motivo, no estuvieron sujetos a los controles correspondientes en el puerto terrestre, ni al pago de derechos e impuestos respectivos. El valor aproximado de las mercaderías, según lo informado por la Onemi, ascendió a mil millones 800 pesos.

En general se advirtió que las aduanas no exigieron de manera obligatoria el certificado de donación para el retiro de los recursos. De esta forma, ingresaron al país como ayuda humanitaria cargamentos que no tenían esa calidad, dice el informe de la Contraloría en el punto cuatro de sus conclusiones.

A pesar de que la situación se regularizó, en la tercera de sus catorce conclusiones el informe de la entidad fiscalizadora señaló que se mantenían las observaciones. La razón fue una evidente falta de coordinación entre los organismos involucrados, lo que no permitió detectar que las mercancías no eran donaciones, con el gran riesgo de que esto se hubiese repetido con otros cargamentos.

116 El exministro de Justicia Felipe Bulnes fue abogado de Cencosud en 2006. Laurence Golborne, exministro de Minería y Obras Públicas, fue gerente corporativo de Cencosud entre 2001 y 2009.

CAPÍTULO V

LOS OJOS PUESTOS EN LA CATÁSTROFE

Una vez en el mando, Piñera no tardó en reafirmar la magnitud de los daños del terremoto. Indicó que se necesitarían 30 mil millones de dólares para reconstruir el país. Esta cifra equivale a casi el 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual de Chile.

El monto total se justificó por los 20 mil millones de dólares necesarios para reconstruir 500 mil viviendas muy afectadas; cinco mil millones de dólares destinados a poner en pie hospitales y una cifra similar para dejar operativos puentes, carreteras y demás infraestructura vial.

Preparando el ambiente para efectuar transformaciones mayores a partir de la tragedia, cinco días antes del cambio de mando, el domingo 7 de marzo de 2010 *El Mercurio* fijó posición a través de una columna titulada "No solo reconstruir: también reformar"¹¹⁷.

En el texto instaba a que el nuevo Presidente de la República y su "equipo de gobierno afiatado y coherente" cumpliera la principal promesa de campaña: "Recuperar el vigor que exhibía Chile hasta 1998 en materia de crecimiento y de creación de empleos". Proponía avanzar en "una amplia modernización del Estado, una contundente reforma educacional y una significativa flexibilización del mercado laboral". Porque sería "incomprensible que no lo hicieran" dado que "habrá un ambiente muy propicio".

El diario de Agustín Edwards recalcó que "la reconstrucción supondrá un esfuerzo de dimensiones épicas, que tenderá a unir al país en torno a su Presidente. Éste, por su parte, podrá impartirle a su gobierno una mística, un 'relato', un sentido de epopeya comparables a los que motivaban a la Concertación en sus comienzos".

El editorial concluyó motivando a Piñera a reconstruir y reformar y no solo

117 *El Mercurio*, 7 de marzo de 2010. "No solo reconstruir: también reformar", editorial.

"despejar los escombros y levantar las casas caídas, sino también eliminar los obstáculos, los frenos que se le han ido creando al desarrollo con leyes inadecuadas, sistemas anticuados y organizaciones que el tiempo ha tornado ineptas".

Esta intención se reiteraría en distintos mensajes editoriales de ese diario y *La Tercera*, así como también en las variadas declaraciones de los personeros de gobierno a los medios de comunicación masivos.

En cada gesto el Presidente y su equipo se mostraron ante la opinión pública con mucha voluntad de hacer las cosas bien. Pero lo cierto es que desde los primeros días después de la tragedia hubo opacidad en torno a las cifras y su utilidad para graficar de forma confiable la real magnitud de los daños. Esto a la larga se tradujo en que el proceso fuera manejado con escasas certezas e incluso aparecieran informaciones contradictorias.

El gobierno y la oposición vieron en la confusión de las cifras una posibilidad de ataque político. Desde el oficialismo instaron a que la expresidenta concertacionista reconociera "su responsabilidad en el desastre social y político, y en los saqueos y muertes producidas", como señaló el senador de la UDI Víctor Pérez, a quien Francisco Vidal le retrucó que "dejaran de querer enlodar la imagen de Michelle Bachelet con problemas que son de ellos".

En medio de la teleserie política forjada al calor de la reconstrucción, en 2011 la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) emitió una declaración pública. En ella indicó que el proceso de reconstrucción, "ya ha entregado 222 mil subsidios, de los cuales 140 mil ya están en plena construcción. Pero aún hay tres mil familias que deberán soportar un invierno más en campamentos y aldeas. Reconocemos que esta es una tarea país y que nos queda aún mucho trabajo por hacer".

En 2012 la cifra disminuyó. Sin embargo, hay familias que enfrentaron su tercer invierno sin casa definitiva y sin solución.

El desplome de las alturas

La emergencia pasó. Vivieron el primer invierno sin su casa propia, de arrendatarios, allegados o en mediaguas. Comenzó 2011 y los damnificados seguían sin encontrar las respuestas satisfactorias que esperaban desde hacía meses.

Variadas comunidades se vieron afectadas de distintas formas. Ya sea por el impacto del derrumbe de sus hogares, por la falta de apoyo y abierta desaparición de los responsables de sus construcciones, las irregularidades que sufrieron por parte de los bancos y aseguradoras, por los accidentados, e incluso muertos que dejó la catástrofe, o porque su cotidianeidad cambió por completo.

Muchos fueron trasladados juntos a campamentos, otros tuvieron que comenzar a vivir en distintos lugares, separados como vecinos, con nuevos entornos, metas y dificultades.

La situación ha tenido tal impacto en la vida de los damnificados de todo Chile, que a pesar de sus diferencias geográficas, sociales y económicas, la mayoría comparte un factor común: la organización que tuvieron que crear para solucionar sus problemas.

Alejandra Monasterio faltó una semana y media a su trabajo para atender la catástrofe del edificio Don Luis, donde era propietaria de un departamento que mantenía en arriendo. Todo el edificio fue declarado inhabitable después del terremoto. Los primeros días, semanas e incluso meses, se encargó de representar las gestiones de su comunidad ante la prensa, los abogados y las autoridades. En entrevista con las autoras de esta Memoria afirma que al principio no tuvo “problemas en el trabajo”¹¹⁸.

Durante el periodo de emergencia los medios de comunicación se instalaron afuera de las fachadas de los edificios Don Tristán y Don Luis de Maipú, Esmeralda de Ñuñoa y Alto Río de Concepción, para retratar e informar sobre los niveles de destrozos que sufrieron. Alejandra Monasterio estuvo ahí para atenderlos.

118 Entrevista realizada a Alejandra Monasterio por las autoras de esta Memoria. 3 de junio de 2011.

Cuando la comunidad decidió aceptar los servicios del abogado Alfredo Morgado, la propietaria del departamento de un valor cercano a los 30 millones comenzó a ir a las reuniones de coordinación. En el momento en que la organización vecinal determinó ir al Banco del Estado a exigir la cobertura completa del seguro contra sismos, también. A pesar de su embarazo y periodo de lactancia.

Su hija nació en abril de 2010 y ese mismo mes tomó la vocería de los afectados. “Iba con mi hija a las reuniones, al Congreso, al banco. Mientras hablaban yo le daba de mamar o buscaba un lugar para cambiarle los pañales. A todas las reuniones con Banco del Estado fui con mi guagua. Estaba con postnatal y me hice responsable de esta causa, pero esto te pasa la cuenta en varios aspectos y yo lo viví en lo laboral porque me despidieron del trabajo”, cuenta la exjefa de Servicio al Cliente de Falabella.com.

Relata que sus empleadores no entendían que estando con licencia apareciera en programas de televisión informando su situación como “estafados” del Banco del Estado. “Nunca me lo dijeron así. Pero yo dejé de trabajar en febrero de 2010 y llegamos a un acuerdo, sin licencia ni postnatal”, afirma en la entrevista efectuada en un café de Plaza Italia. Hoy ya no trabaja en el *retail* y tiene una productora propia.

Endeudarse para la casa propia

Algunos de los vecinos de la exdirigenta compraron su departamento al contado; es el caso –cuenta- de los adultos mayores, quienes invirtieron parte de su jubilación y ahorros en la propiedad. La mayoría accedió a la vivienda vía endeudamiento a largo plazo.

Después de que el edificio Don Luis fue declarado inhabitable, los vecinos tuvieron que seguir un burocrático procedimiento para la demolición. En paralelo fueron tomando conciencia de otro gran fantasma: los créditos hipotecarios y los seguros de sus propiedades. Las familias observaron el comportamiento de las entidades financieras y al pasar los meses perdieron la tranquilidad y confianza.

Marco Ortiz es uno de los propietarios que hasta hoy no ha recibido una solución. Al igual que Alejandra Monasterio, se endeudó, pero a diferencia de ella que lo hizo con el

banco estatal, él se comprometió con Consorcio Nacional de Seguros. Este conglomerado ofrece seguros generales y de vida, créditos hipotecarios y rentas vitalicias. Es controlado por Juan Hurtado Vicuña y Eduardo Fernández León, entre otros. Su directorio es presidido por el amigo del Presidente Sebastián Piñera, el ingeniero comercial UC y “Chicago Boy” Juan Bilbao, quien fue consultor de Citicorp, junto al ministro Alfredo Moreno y al empresario Francisco Pérez Mackenna, cuando Sebastián Piñera era gerente de ese banco.

Marco Ortiz relata el procedimiento que siguió la aseguradora. Después de que el edificio fue declarado inhabitable, “cada banco, a través de una liquidadora de seguros, envía un inspector que tiene que confirmar los daños. En todo ese proceso pasaron fácil tres o cuatro meses”, señala¹¹⁹. El inspector debe emitir un informe, que después es revisado por el banco y enviado a la aseguradora.

Alejandra Monasterio, quien para ese entonces ya era representante de la organización vecinal, fue armando un mapa mental de las deudas de su comunidad. “Tenemos casos en los que el banco tomó un seguro por una cantidad inferior al valor de la casa. Yo soy uno de esos. Firmé todos los documentos del crédito hipotecario y el mandato al banco”, señala.

Los vecinos se enfrentaron a exponenciales pérdidas: sus viviendas en el suelo, sus dividendos ya cancelados convertidos en polvo, y la nueva deuda que tendrían si sus seguros no respondían con todo el valor de las propiedades siniestradas.

El banco de todos los chilenos

Alejandra Monasterio se endeudó y aseguró con el Banco del Estado. Dice que recién seis meses después de que el liquidador hizo las revisiones de la propiedad se enteraron que su departamento “estaba cubierto por 932¹²⁰ Unidades de Fomentos (UF), siendo que costaba mil 660¹²¹, y yo ya había pagado cuatro años de dividendos”.

La exdirigenta afirma que como cliente nunca firmó ni aceptó esos términos, “no

119 Entrevista realizada a Marco Ortiz por las autoras de esta Memoria. 10 de marzo de 2012.

120 Aproximadamente 20 millones 500 mil pesos.

121 Aproximadamente 36 millones 500 mil pesos.

me dieron la opción de poder tomar un seguro por el valor restante. Aquí hay engaño y omisión de información”, acusa en la entrevista.

Habla con propiedad sobre el tema. Los meses en los que enfrentó adversidades, además del conocimiento sobre los derechos del consumidor que adquirió en su anterior trabajo, le ayudaron a superar la situación: “Veía todo el tema de la letra chica, conozco cómo opera la omisión de información, manejo la ley del Consumidor al revés y al derecho”, señala.

Asegurar una propiedad por menos de su valor real no es ilegal. El problema es que los propietarios de Don Luis nunca fueron informados de la situación y no pudieron tomar decisiones sobre esa base, por eso se sienten estafados. La exdirigenta de la comunidad dice que “el liquidador se demoró meses en entregar los informes. Si hubiéramos querido demandar por engaño al consumidor no habríamos podido, porque a los seis meses el delito estaba prescrito”.

Después de numerosas tratativas e incluso confrontaciones con la entidad, las doce familias que aseguraron su vivienda con el Banco del Estado lograron un acuerdo. Alejandra Monasterio lideró la iniciativa; habló con las autoridades bancarias y recuerda que tuvieron por lo menos diez reuniones. “Nuestro abogado me ofrecía todo el apoyo, pero no me acompañaba en las negociaciones. El Banco se presentaba frente a mí como un monstruo, con el gerente de finanzas, el de banca hipotecaria y el abogado”, afirma.

El acuerdo al que llegaron los afectados con el Banco del Estado implicó anular la deuda hipotecaria y ceder a la entidad los derechos de sus terrenos. Esto significó, explica la exdirigenta, que el banco pudo hacer uso de la superficie por tres meses. “Por suerte no lo hizo y cuando terminó el plazo volvieron a ser propiedad nuestra. La deuda ya no existía, pero perdimos los cuatro años de dividendos que habíamos pagado”, detalla la hoy productora.

De marzo a octubre de 2010 los propietarios sin techo se convirtieron en allegados de sus familiares cercanos, o arrendatarios. En cualquiera de los dos casos debieron seguir pagando dividendos posterremoto que fluctuaban entre los 200 mil y 280 mil pesos. Al finalizar la negociación estos pagos fueron devueltos a los exvecinos.

Pagar por polvo y aire

Marco Ortiz es administrador de sistemas y técnico electrónico. Igual que Alejandra Monasterio era propietario de un departamento del edificio Don Luis. Ahí vivía junto a su familia compuesta por su esposa y tres hijos, en el departamento de mil 660 Unidades de Fomento que estaba pagando con un crédito hipotecario de Consorcio.

Tal como el Banco del Estado, Consorcio Nacional de Seguros resguardó su vivienda por un valor inferior: mil cien UF.

Ortiz junto a dos familias más de Don Luis no tuvieron el mismo apoyo y organización que Alejandra Monasterio y sus vecinos. El administrador de sistemas señala que Consorcio Seguros lo estafó. “Los que teníamos contrato con Consorcio realizamos tratativas particulares. La empresa reaccionó de forma distinta con cada uno: a algunos les saldó todo, e incluso les pagó más. Mi caso fue distinto. Me tramitaron casi un año y quedamos debiendo 600 UF”, afirma¹²².

En noviembre de 2011 el edificio Don Luis fue demolido. El Gobierno Regional Metropolitano gastó 101 millones de pesos para que eso sucediera. Con el procedimiento, el inmueble que albergó a 40 familias quedó reducido a escombros, polvo y aire.

Marco Ortiz sigue pagando el monto que adeuda a Consorcio Nacional de Seguros. Desde que ocurrió el terremoto hasta la actualidad, todos los meses ha pagado y seguirá pagando, por 20 años, 40 mil pesos mensuales.

A diferencia de los casos anteriores, según la exvocera de los propietarios de Don Luis, Alejandra Monasterio, los propietarios relacionados al Banco Santander tuvieron mejor suerte. Se les pagó la deuda insoluble, es decir, la que queda hacia adelante, y se les devolvió el capital invertido.

122 Entrevista realizada a Marco Ortiz por las autoras de esta Memoria. 10 de marzo de 2012.

La vía judicial

En el plano penal, la oficina del abogado Alfredo Morgado patrocina la querrela por el delito de estafa en contra de la constructora Mujica y González y de la inmobiliaria Francisco de Aguirre, responsables de los condominios de Maipú, Don Tristán y Don Luis. Por el caso se formalizó a los representantes legales y el juicio oral se estableció para agosto de 2012.

Ante la ofensiva judicial, después de más de dos años del terremoto, en junio de 2012, el representante de la inmobiliaria que comercializó los edificios optó por pagar una indemnización, y de esta forma evitar el juicio. El acuerdo lo establecieron en una audiencia de formalización con el ejecutivo de la inmobiliaria Francisco de Aguirre, Carlos Kantor. Se comprometieron a pagar 50 millones de pesos a los 74 propietarios de los dos condominios; el monto fue repartido entre los afectados.

Según Alejandra Monasterio, la comunidad seguirá las acciones legales contra Mujica y González. También esperan, más adelante, conseguir sanciones civiles por las pérdidas materiales y daños morales que sufrieron.

No todos los exhabitantes del resto de las decenas de edificios colapsados o dañados por el terremoto han podido resolver sus causas judiciales. En Santiago y Concepción, las dos ciudades que concentraron las viviendas en alturas afectadas, se contabilizaron más de 25 comunidades en estas condiciones. Entre 2010 y 2012 varios han sido reparados, otros, la minoría, sigue sin soluciones y con causas judiciales que se extenderán por algunos años más.

Justicia para Alto Río

Uno de los casos más dramáticos entre los edificios fue el de Alto Río de Concepción. El terremoto y las fallas en su edificación dejaron al inmueble tumbado en el piso de la capital de la Región del Bío-Bío. La imagen recorrió Chile y el mundo, y se convirtió en uno de los recuerdos más comunes de la tragedia.

El juicio penal por la caída del edificio penquista comenzó el 25 de junio de 2012. El punto crítico para la fiscalía fue la clasificación del suelo sobre el cual se construyó. Esto determinó los materiales y la estructura que usaron en Alto Río. Según la defensa, no hubo error al calificarlo, pero el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile así lo indica.

La fatídica madrugada del 27 de febrero de 2010 Mónica Molina, dirigente de los residentes del edificio, sintió cómo el piso le arrebató el equilibrio. Alto Río colapsó por completo, se fracturó y derrumbó contra el piso. Los rescatistas salvaron a 119 personas de los escombros, pero ocho vecinos murieron en medio del desarme estructural. Entre ellos, la esposa de Marcelo González Sazo, Paola Herrera Pavez y el hijo de ambos, de nueve meses, Vicente González Pavez.

Marcelo González presentó una querrela por cuasidelito de homicidio contra los responsables del derrumbe de Alto Río y la consecuente muerte de su esposa e hijo. Con esto inició la línea civil de la judicialización del caso del edificio tumbado.

En la primera semana de agosto de 2012 se marcó un hito que reconoció el perjuicio moral sufrido por la familia González. El tercer juzgado civil de Concepción determinó que la inmobiliaria Río Huequén y la Sociedad Constructora de Viviendas Limitada, ambas responsables de la edificación, debían pagarle 200 millones de indemnización a Marcelo González, viudo de Paola Herrera y padre de Vicente González, y para la madre y abuela de las víctimas, Olga Pavez Navarro.

207 testigos y 34 peritos han sido parte del extenso proceso del juicio penal por el desplome del edificio. Ocho eran los imputados de la fiscalía por cuasi delito de homicidio. La instancia judicial buscó determinar responsabilidades en el colapso de la estructura y en la muerte de los habitantes.

El juicio penal duró más de cinco meses. Recién el 10 de diciembre de 2012, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dio a conocer la sentencia del emblemático caso. 800 días de presidio remitido y una multa de casi cuatro millones de dólares es la condena que debe cumplir el ingeniero calculista René Petinelli por su responsabilidad en

la edificación de Alto Río. Petinelli fue el único condenado por la muerte de los ocho habitantes penquistas y en la actualidad sigue ejerciendo como ingeniero calculista.

Protestando en Macul

El Condominio Sol Oriente fue otro de los más de 20 edificios colapsados de Santiago. La Constructora Sigro y la Inmobiliaria Viva son los responsables de la calidad del inmueble que fue decretado inhabitable por la Municipalidad de Macul. Desde mil cien a tres mil UF valían las viviendas del recinto que contaba con dos torres y 280 departamentos. El terremoto y la construcción deficiente provocaron un colapso estructural de los muros y el octavo piso se desmoronó.

La comunidad de Sol Oriente no recibió explicaciones de parte de los responsables legales y profesionales de las empresas a cargo. Pasados los primeros días posterremoto fortalecieron su organización. Sus voceros comenzaron a difundir por los medios de comunicación su tragedia, e incluso protestaron afuera de su condominio, en plena Avenida Macul.

Un mes después del terremoto, la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Dictuc)¹²³, realizó una inspección visual del recinto y sus daños. Concluyó que tras asegurar la "estabilización gravitacional y sísmica" del edificio, se podría reparar y volver a habitar. Los vecinos se impactaron por el optimismo del informe, pues la noche del terremoto sintieron cómo las paredes y los pisos crujieron y se rompieron. Un piso colapsó y cayó sobre el de más abajo. Dada esta experiencia exigieron la devolución completa de sus inversiones. No obtuvieron respuesta ni ayuda, menos compensaciones económicas.

Más de 120 son las personas que demandaron a la inmobiliaria Viva y a la constructora Sigro. En junio de 2010 interpusieron la acción civil en el 24° Juzgado de Santiago contra las empresas. Algunos propietarios presentaron demandas individuales. A fines de 2011 tuvieron noticias: el tribunal nombró a Enrique Figueroa como perito para inspeccionar el edificio.

123 La Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Dictuc) fue dirigida por el ministro de Minería Hernán De Solminihac antes de entrar al gabinete del Presidente Sebastián Piñera.

Sol Oriente fue declarado inhabitable y recibió una orden de demolición en 2010. Las compañías de seguros involucradas señalaron que el edificio no se podía reparar. Aún así ni la constructora ni la inmobiliaria se hicieron cargo del desarme, en cambio, presentaron una demanda civil para suspender la demolición.

A principios de 2012 el edificio seguía abandonado como un cadáver de cemento, en medio de Macul. Pero, contra todo pronóstico, los empresarios que vendieron los departamentos volvieron a hacer negocios con ellos.

Reparar para rematar

59 departamentos del condominio Sol Oriente, que costaron entre 30 y 50 millones de pesos a sus propietarios, fueron rematados por un millón cada uno, el 25 de enero de 2012.

El informe del Dictuc sirvió como buen antecedente para que la compañía Seguros Generales Santander rematara 59 de los 280 departamentos del recinto. La empresa Macal estuvo a cargo del evento y aclaró que los decretos de inhabilitación y demolición se publicaron antes del procedimiento como signo de transparencia ante los nuevos clientes.

La noticia causó controversia en la población que estaba ad portas de recordar el segundo aniversario del terremoto.

Las personas interesadas en adjudicarse un departamento tendrán que enfrentarse a dos posibilidades futuras. Después del juicio que iniciaron los vecinos, si los tribunales determinan que hay que demoler el edificio el seguro de bienes comunes cubrirá un porcentaje de los gastos de la operación, pero los nuevos dueños deberán costear el resto. De todas formas el terreno seguirá siendo de ellos. En el otro caso, si los departamentos pueden habitarse de nuevo, los propietarios tendrán que invertir en las profundas reparaciones estructurales que requiere el inmueble.

En este contexto inesperado, los vecinos del condominio Sol Oriente de Santiago persistieron en sus críticas hacia la inmobiliaria y la constructora. Casi dos años después del terremoto, manifestaron que todavía algunos exvecinos no obtenían soluciones a sus deudas e inversiones en un edificio que terminó con daño estructural y rematado a un precio ínfimo en relación al que ellos pagaron como propietarios originales.

Villa Futuro fracturada

Las dirigentas Gladys Catalán y Bárbara Orrego organizaron un mitin en la Intendencia de la Región del Bío-Bío. El resultado fue la presencia en la población de Chiguayante, del gobierno regional, encabezado por el director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), el subsecretario de Vivienda y el gobernador.

Las dirigentas exigieron mediaguas para 48 familias que habitaban el único de los 29 edificios que colapsó. Gladys Catalán recuerda que insistieron mucho en que se debían reunir en su barrio. “No queríamos juntarnos solo con ellos o que decidieran entre cuatro paredes”, afirma.

Toda la voluntad de trabajo conjunto y la calma planteada en la reunión se borró el 21 de agosto de 2010, cuando la entonces intendenta Jacqueline Van Rysselberghe visitó la población Villa Futuro para darles la última información disponible sobre su situación habitacional.

“Nos dijo que toda la población tenía que irse a la calle, porque en noviembre se iban a derrumbar los edificios para construir en el mismo terreno unos mejores y más grandes”. Según recuerda Gladys Catalán, la intendenta y su equipo técnico les dijeron que salía más barato edificar de nuevo que reparar.

Les prometieron que los departamentos serían de 55 metros cuadrados y no de 38 como fueron diseñados al principio. La dirigente señala que la intendenta les informó de estudios que habrían demostrado la deficiente calidad de los edificios y no del suelo donde se construyeron.

Quiebres y campamentos en Villa Futuro

En el recorrido realizado para esta investigación en las regiones del Bío-Bío y del Maule, llamó la atención ver a simple vista edificios sin daños estructurales que estaban abandonados, desmantelados y en algunos casos incendiados. Aunque se filtraban con la lluvia, solo uno había sucumbido en Chiguayante.

La multicancha donde se reunió la intendenta con los vecinos está ubicada al centro de la población Villa Futuro. Al norte de la cancha vive Gladys Catalán y al poniente se ubicaba el edificio donde vivía Cecilia Vergara.

Vergara era votante entusiasta de Van Rysselberghe desde su período alcaldicio. Asistió a la reunión del 21 de agosto y acogió el llamado de la autoridad local. El 3 de septiembre de 2010, con un grupo de vecinos de su edificio, Cecilia Vergara dejó su departamento y se fue a vivir al terreno del frente, donde les instalaron las mediaguas. En un plazo máximo de 24 meses tendrían sus nuevas viviendas construidas, les dijeron.

Las mediaguas quedaron instaladas con el río Bío-Bío a las espaldas y fueron inauguradas en una ceremonia el 14 de septiembre. A la cita asistió el alcalde Patricio Kuhn (UDI) y el diputado Enrique Van Rysselberghe, hermano de la intendenta, quien destacó que vecinas como Cecilia Vergara permitían que Chiguayante progresara. Jacqueline Van Rysselberghe se excusó de asistir, pero envió parabienes con su hermano. Según consta en un video grabado por el municipio, en la ocasión la dirigente Cecilia Vergara agradeció al gobierno “porque todo lo que tenemos es gracias a ellos y a los militares; se merecen aplausos de pie por ayudarnos a instalar la aldea”.

En entrevista con las autoras, un año y cuatro meses después del terremoto, Cecilia Vergara reconoce que el panorama es muy distinto al que le prometieron. Basta visitar su mediagua que, aunque más arreglada que la del resto de sus vecinos de la aldea tres, carece de comodidades mínimas.

Cecilia Vergara y su familia continuaban viviendo con el río Bío-Bío de fondo, en la misma mediagua y al frente del departamento que fuera su casa. El mismo que hoy figura sin ventanas ni puertas, ya que todo eso se lo llevaron para instalarlo en las viviendas

temporales. Los otros vecinos que se fueron hicieron lo mismo, ante el temor a los saqueos.

“Estuvimos dos meses y quince días bañándonos en el río”, recuerda Vergara¹²⁴. Su mediagua mide tres por seis metros cuadrados y allí vive con sus dos hijas y dos nietos. Un espacio importante de la cocina lo ocupa la estufa a leña que recibió de la Intendencia. Es una estufa gigante dentro de un espacio donde apenas pueden moverse y el fuerte cambio de temperatura entre el interior y el exterior hizo que su nieta de cuatro meses desarrollara un problema broncopulmonar grave durante 2011.

Culpa de los vecinos

Cuando se trata de buscar un culpable de la tardía reconstrucción para las once aldeas que se levantaron en Villa Futuro, Cecilia Vergara no duda en señalar que son los vecinos por su negativa a desalojar los departamentos, los que han hecho lento el proceso. “¿Cómo van a poder demoler si sigue viviendo gente ahí?”, increpa.

El 10 de marzo de 2011 la situación de desesperación se agudizó. Cecilia Vergara junto a otros pobladores de las aldeas decidieron ponerle un ultimátum a Karen Acuña, jefa de gabinete de la entonces ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte. El 10 de marzo a las cinco de la tarde debía visitarlos “o si no somos capaces de cualquier cosa”, le dijo por teléfono Cecilia Vergara a Karen Acuña.

En su demanda insistían en que el Minvu los había dejado de lado por atender a personas de la misma población, lideradas por el dirigente Jorge Cartes, que mantenían una huelga de hambre por la lentitud de la reconstrucción. Otra vez los vecinos eran los culpables y a ellos había que hacerles frente.

La jefa de gabinete abordó su avión a Santiago ese mismo día. Cecilia Vergara, montada en cólera y en compañía de otros vecinos, incendió un departamento deshabitado del mismo bloque donde ella vivía. Llegó Carabineros y el incidente no pasó a mayores, pero Vergara estaba decidida a enfrentarse a los vecinos que quisieran

124 Entrevista realizada a Cecilia Vergara por las autoras de esta Memoria. 6 de junio de 2011 en Villa Futuro, Chiguayante.

entorpecer la demolición.

Un acuerdo a regañadientes

En mayo de 2011, el presidente de la Junta de Vecinos de Villa Futuro, Nibaldo Viveros, recibió una oferta del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Antes de eso, había trabajado unido con el Comité Pro Defensa de Chiguayante organizando protestas y cortes de calles en repudio al curso que había tomado la reconstrucción.

El protocolo de solución contemplaba que el gobierno entregaría 580 Unidades de Fomento¹²⁵, un poco más de trece millones de pesos para que los afectados compraran una casa usada y 700 UF¹²⁶, casi 16 millones de pesos para adquirir una casa nueva.

Nibaldo Viveros¹²⁷ recuerda que después de mucho negociar y de exponer la situación económica de la población, donde la mayoría de las personas no tiene acceso a crédito por la precariedad e inestabilidad laboral, lograron que las 700 UF entregadas para casa nueva, también pudiesen usarse para comprar casas usadas.

Les darían el dinero en forma parcelada. Primero los pobladores recibirían 480 UF en un cheque a su nombre. Con ese documento debían ir a la constructora y pagar parte de la vivienda. El paso siguiente era notificar al Serviu, para que hicieran llegar las 220 UF faltantes. Estas 220 UF correspondían a un subsidio que tenía 18 meses de duración, tiempo en el cual las personas debían tener un nuevo lugar donde vivir, sino serían expulsados de sus viviendas, que pasaban a ser propiedad de Serviu.

La dirigente Bárbara Orrego, que aún trabaja en el Comité Pro Defensa, se indignó. Para marzo de 2012 el Serviu llevaba meses intentando captar a la mayor cantidad de vecinos para que aceptaran el protocolo de acuerdo. “Uno a uno los llaman a sus celulares y los visitan en sus casas”¹²⁸. Pero sobre todo, acusa la dirigente, los

125 Equivalen a trece millones 249 mil 520 pesos, calculado el Valor UF en 22 mil 844 pesos al 28 de diciembre de 2012.

126 Equivalen a quince millones 990 mil 800 pesos, calculado el Valor UF en 22 mil 844 pesos al 28 de diciembre de 2012.

127 Entrevista realizada a Nibaldo Viveros por las autoras de esta Memoria. 5 de junio de 2011.

128 Entrevista telefónica realizada a Bárbara Orrego por las autoras de esta memoria. 15 de marzo 2012.

presionaron para que firmaran de forma individual el acuerdo extrajudicial con el Serviu. “Los vecinos que ya han firmado solo han recibido el cheque de diez millones y no son pocos los que lo han gastado en pagar deudas y adquirir otros bienes, sin destinarlo a la compra de una casa”, denuncia con indignación Orrego.

Para proteger a los vecinos que hasta la fecha no habían aceptado la oferta del Serviu ni habían vendido, Bárbara Orrego interpuso un recurso de amparo. “Tengo 200 personas que no han firmado nada”, ellos, según la dirigente, aspiran a recibir del Serviu 22 millones de pesos.

Hoy a dos meses de cumplirse el tercer aniversario del terremoto, el protocolo de acuerdo que contemplaba las 700 UF es la solución mayoritaria por la que han optado los vecinos de Villa Futuro. De las personas que se resistían a firmar y esperaban más dinero solo quedan 50 o 70 familias, que siguen apoyadas por Orrego.

Jorge Cartes fue dirigente de Villa Futuro y lideró una huelga de hambre. Hoy vive en Buin pero sigue involucrado en una nueva lucha que libran los chiguayantinos: el subsidio de arriendo por las 220 UF fue firmado en julio de 2011, los primeros vencen en enero de 2013 y los vecinos aún no tienen nueva vivienda.

Al momento de relatar los inconvenientes que han tenido los vecinos para conseguir vivienda en los 18 meses que tenían de plazo, Cartes señala enfático que la responsabilidad es de la burocracia del gobierno. “Se firmó el acuerdo y se demoraron como seis meses en entregarnos los diez millones y los subsidios”, reclama.

Para graficar la negligencia con que ha actuado el Ejecutivo, Cartes da un ejemplo. “Tengo una vecina que firmó el 11 de julio de 2011 y a ella todavía no le entregan su subsidio, todavía no tiene un cartón que la indique como beneficiaria. Fue al Ministerio y le dijeron que no le iban a entregar el apoyo hasta que tuviera el comprobante de compra venta, pero nadie le va a creer de palabra que tiene un subsidio que la avale, eso hay que demostrarlo con documentos”, dice.

Lo que Cartes y los vecinos que representa, 304 familias, van a negociar es que les extiendan el tiempo del subsidio hasta diciembre de 2013 o que les paguen en efectivo

las 220 UF que les deben.

Gladys Catalán se salió del Comité de Pro Defensa. Hoy representa a 17 familias que aceptaron las 700 UF y que sus subsidios vencen en junio de 2013. Nibaldo Viveros, expresidente de la Junta de Vecinos de Villa Futuro compró en conjunto con otras familias un terreno. El problema es que producto de la nula asesoría adquirieron un terreno de un elevado valor y les quedó poco dinero para construir las casas. Son, por eso, muy poco atractivos para las empresas constructoras.

Jorge Cartes hoy reflexiona que las divisiones que se produjeron determinaron el monto de dinero que les dio el gobierno. “Si la Cecilia Vergara no se hubiera separado de mí, si con Gladys y Nibaldo hubiéramos estado trabajando por un solo propósito, hubiéramos logrado las mil UF que pedíamos al principio”¹²⁹.

Entre los vecinos se generó desesperación a partir de la certeza de que la solución del gobierno se veía como la única posible. Y en esa desesperación el gobierno “hizo lo que quiso”, dice Cartes. “Después de un tiempo yo y todos mis vecinos estábamos desgastados: estuvimos 37 días en huelga de hambre, caminamos ocho días de Concepción a Santiago, estuvimos 17 días negociando solos sin familia. Un día dormíamos en el Sintrac, otro día en la CUT, en una iglesia católica, anduvimos durmiendo por días en la sede del MAS, con todas las cosas a la rastra. Fue desesperante y en esa desesperación, perdimos”.

Una larga historia en Concepción

La historia política de los Van Rysselberghe en Concepción comenzó en 1939 cuando el terremoto de Chillán, de 8.3 grados, golpeó a la región penquista dejando el 90 por ciento de las casas destruidas. Para satisfacción de Enrique Van Rysselberghe Martínez, el abuelo de Jacqueline, las casas que él edificó no se cayeron, por lo que sus bonos como constructor subieron y con ellos, aumentó su fortuna.

No estudió arquitectura ni construcción, pero Van Rysselberghe Martínez se

129 Entrevista realizada a Jorge Cartes por las autoras de esta Memoria. 20 de diciembre de 2012.

transformó de hecho en un constructor; por ese motivo Nibaldo Mosciatti Moena, padre de los actuales dueños de Radio Bío-Bío lo apodó “El realizador”. Usaba suspensores y firmaba con una pluma de oro. La Vega Monumental de Concepción fue obra suya.

Desde su cargo de regidor y después de 1973 a 1979 como alcalde designado por Pinochet, se abocó a impulsar obras para los sectores populares, aunque en muchos casos fuese solo el anuncio, sin presupuestos asignados aún, como recoge la crónica del periodista Francisco Torrealba para *Revista Sábado* de *El Mercurio*¹³⁰.

Los primeros acercamientos de Jacqueline Van Rysselberghe con la política comenzaron en la Universidad de Concepción, donde estudió Medicina para después especializarse en psiquiatría. En 1988, como miembro del Movimiento Enrique Molina, de corte gremialista, postuló a la dirigencia estudiantil de la Universidad de Concepción. Su lista fue derrotada con un amplio margen por la del actual senador por la Región del Bío-Bío, Alejandro Navarro, que comandaba a las fuerzas de izquierda en el plantel educativo y ya era parte del Comité Central del Partido Socialista.

Después que “El realizador” dejó la alcaldía pasaron trece años hasta que un Van Rysselberghe entró de nuevo en ella.

En 1992, con solo 22 años, Jacqueline Van Rysselberghe postuló al concejo municipal y once mil 677 votos le bastaron para quedarse con uno de los asientos. Ya era militante de la UDI, al igual que su padre, el arquitecto Enrique Van Rysselberghe Varela, quien llegó a ser presidente regional de la colectividad.

Jacqueline era un rostro conocido en el Bío-Bío desde que fue jefa regional de la juventud que apoyó en su campaña presidencial a Hernán Büchi.

Desde su primer período como concejala, la “Coca” siguió el estilo del abuelo y se puso a hacer cosas. Fundó un hogar para sacar a los enfermos mentales de la calle y presidió la “Agrupación de Familiares de niños violados y asesinados”, a raíz de la violación y el asesinato en Concepción de Elenita Yáñez, de solo cinco años, relataba la

130 *Revista El Sábado*, 09 de abril de 2011, “El clan Van Rysselberghe”, Francisco Torrealba.

periodista Verónica Torres del periódico *The Clinic*¹³¹, en mayo de 2010.

La psiquiatra y madre de seis hijos, a quienes recuerda con una cadena con seis figuras de oro que cuelga de su cuello, obtuvo dos triunfos seguidos como concejala (1992-1996 y 1996-2000) y no paró hasta que en 2000 casi quintuplicó su votación y asestó un duro golpe al ganar la jefatura comunal, después de diez años de predominio de la centroizquierda. Fue reelegida como alcaldesa durante 2004 y 2008 y en el mismo período fue vicepresidenta de la UDI.

Su llegada a la Intendencia estuvo mediada por su alta votación en Concepción y el protagonismo que adquirió en los días posteriores al terremoto. “Sus apariciones en cámara criticando la gestión del gobierno de Bachelet y llamando a los militares a las calles penquistas impactaron”, indicó el UDI Patricio Lynch. Para el concejal, que se transformaría en un duro crítico de la gestión de Van Rysselberghe, “ella tuvo una acción de liderazgo muy decidida. Así como la Presidenta Bachelet tuvo su tanque, creo que el gran tanque de ella para ser catapultada a la intendencia fue el terremoto”, indicó Lynch, citado por *The Clinic*.

Unos días después del terremoto y fiel a su estilo proactivo, Jacqueline Van Rysselberghe le envió un mensaje de texto al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que decía: “Hay muertos. Está la escoba. Llámame apenas puedas”. En lo personal, confesó que se lavó con balde los días posteriores; que se consiguió pañales para su sexta hija con una amiga; y que su marido y su hijo mayor se armaron con pistola, después de sentir disparos afuera de su casa. Lo mencionó en una entrevista con Tomás Mosciatti en CNN Chile, quien le preguntó si su marido había disparado. “No alcanzó, pero estábamos dispuestos”, dijo la intendenta a *The Clinic*.

Vestida de riguroso blanco, la exalcaldesa penquista por tres períodos, que cada 18 de septiembre acostumbraba a lucir sus atuendos de huasa elegante por las calles del Bío-Bío, llegó a la catedral de Concepción. En una sobria ceremonia recibió de manos del intendente del Partido Socialista Jaime Tohá el cargo que la convirtió en la nueva máxima autoridad regional, representante del Presidente de la República en el Bío-Bío.

131 *The Clinic*, 10 de mayo de 2010, “El ascenso de la ex alcaldesa de Concepción: las armas de Jacqueline”, Verónica Torres.

Dicen en Concepción que ella no quería ser intendenta, y que incluso tenía listo al candidato de su confianza: el abogado Alejandro Espinoza. Era su amigo de la universidad, el mismo que defendió a la familia de la niña Elena Yáñez, abusada y asesinada en Concepción.

El terremoto cambió los planes de Jacqueline. Pero antes de aceptar, le rayó la cancha a Sebastián Piñera: le exigió autonomía. Desde entonces se rodeó solo de cercanos. Aquel, dicen los aliancistas, es el secreto de su éxito. A varios seremis que nombró los conoce: Pilar Gutiérrez, de Bienes Nacionales, es la esposa de Espinoza, su candidato a la Intendencia, y Sergio Jara, ex director regional de la Corfo, fue su jefe de gabinete, indicó *The Clinic*.

A la ceremonia en que asumió la intendencia la acompañaron muchos trabajadores de la municipalidad, que ya tenían su cupo asegurado en el gobierno regional. Los que no llegaron fueron los consejeros regionales de Renovación Nacional, lo que confirmó la mala relación que existe en el Bío-Bío entre ambas fuerzas de la Coalición por el Cambio.

Ajenos al desaire, la designación de Jacqueline Van Rysselberghe fue interpretada en la UDI como una oportunidad para proyectar la carrera política de la supernumeraria del Opus Dei, que en 2006 fue la carta presidencial promovida por el senador Jovino Novoa.

Por encima del poder comunal

Héctor Silva es administrador municipal y brazo derecho del alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra (PS). Recuerda que el actuar de Jacqueline Van Rysselberghe en la Intendencia es el exacto modelo que aplicó en la Municipalidad de Concepción. “Primero empieza a intervenir en las Juntas de Vecinos de las poblaciones y después de tres o cuatro años tiene al 80 por ciento de los dirigentes trabajando para ella. Fue un modelo que le resultó, que se convirtió en una máquina, una locomotora y que le entregó los resultados que obtuvo en la última elección”, evalúa Silva, quien se desempeñaba como alcalde subrogante al momento de realizar esta entrevista en el

municipio de la Región del Maule, mientras Saavedra estaba de viaje.

Comenta Silva que cuando estaban disputando las unidades vecinales, la misma Jacqueline Van Rysselberghe iba a las casas de los vecinos a decirles que debían votar por tal o cual persona y que ella les daría beneficios. Incluso afirma que estuvo todo un fin de semana en eso. “Ese modelo clientelar lo llevó a la Intendencia. Se creyó con todo el poder, no midió riesgos y se sintió inmune”, señala Héctor Silva.

Tan resuelta es la exintendente que incluso consiguió que el Serviu modificara ciertos requisitos. La autoridad comunal recuerda que la resolución del Servicio que asignó los subsidios de Centinela exigía en uno de sus acápite el certificado de inhabitabilidad emitido por el municipio. “Pero después esos requisitos los modificó el mismo Serviu a nivel central. Ahora, ¿cómo consiguió la intendenta que eso cambiara?, tiene que haber sido por esas famosas llamadas con el subsecretario: 'yapo guashito busquemos una forma de hacerlo'. Debo decir que ella utiliza muy bien su rol de mujer. Es de las que están en una reunión y es coqueta. Con su desplante seguro consiguió que se liberaran algunas cosas”, aventura Silva.

A las relaciones clientelares que Van Rysselberghe cultivó con los dirigentes sociales, se sumó otra situación que le pegó aún más directo al municipio de Talcahuano.

El administrador señala que en un comienzo desde la Municipalidad se vio con buenos ojos la llegada de Jacqueline Van Rysselberghe a la Intendencia: había ocurrido la tragedia del terremoto y ella era una figura con la que se podía alcanzar entendimientos políticos. Pero recuerda que a poco andar empezaron a ver comportamientos que no les gustaron, porque la autoridad comunal era ignorada por completo.

“Jacqueline por ejemplo llegaba a juntarse a las siete de la tarde con diez vecinos, cuando podría habernos pedido a nosotros que armáramos algo con 200. Eso se empezó a repetir mucho. Después aparecieron los territoriales que le armaban la reunión y de nuevo la Municipalidad era ignorada. Y en cada una de estas reuniones se hacía un aniquilamiento de la imagen del alcalde”, señala Héctor Silva, militante del Partido Socialista al igual que el alcalde, Gastón Saavedra.

Desde que asumió Van Rysselberghe el cargo que la facultó para ser la representante del Presidente en la región, el trato con el municipio de Talcahuano fue siempre tenso. El quiebre definitivo vino en mayo de 2010 cuando unas cuatro mil personas marcharon hasta el edificio de la Intendencia. En la ocasión querían entregar a las autoridades una serie de propuestas en distintas áreas de la reconstrucción, que en esos momentos aún estaba en su etapa de emergencia.

“Aunque no atacábamos al gobierno ni hubo violencia, la relación se terminó de quebrar por la impresión que le dio ver a tanta gente ahí. Ella se vio atacada y nunca más hubo conversaciones”, rememora Silva. Además, recuerda que desde que ocurrió el altercado les comenzaron a quitar atribuciones, como el Programa Manos a la Obra que entregaba materiales, y que desde ese momento pasó a manejarlo la Gobernación.

Solos en la periferia de Talcahuano

En Talcahuano el encargado de velar por la rapidez y eficiencia de la reconstrucción era un funcionario de la Intendencia muy particular, “que tenía *Fotolog* y se promocionaba como bailarín de camisas transparentes”, señala Claudio Eguiluz, presidente regional de RN. Se trata de Cristian Gibson que antes de ser funcionario de confianza de Jacqueline Van Rysselberghe se había desempeñado como bailarín y animador en eventos nocturnos.

Él era parte del grupo de doce trabajadores en terreno, los llamados “territoriales”, que nombró la intendenta en la Región del Bío-Bío. Eran personas de su absoluta confianza, todos militantes o simpatizantes de la UDI, encargados de neutralizar conflictos y controlar la región. Era una verdadera red política que le otorgaba blindaje a la autoridad regional.

Desde su oficina en el municipio, Héctor Silva señaló que en un par de ocasiones se reunió con Gibson. “Era muy empático, porque dicho en buen chileno era 'mino'. La mitad de la responsabilidad en el desastre de Centinela es de él, porque llegaba donde las señoras y las tenía a todas convencidas. Le creían todo. Y llegábamos nosotros de la Municipalidad viejos, pelados y gordos y nadie nos tomaba en serio”, comenta en tono de anécdota el funcionario.

El mismo Gibson era quien animaba a los vecinos de Centinela II el día que la intendenta los juntó a todos en un colegio para informarles los pasos a seguir en la reconstrucción. Había mucha gente. Los representantes del municipio también asistieron. “Nos pusimos en un rincón tratando de que no nos vieran”, recuerda Silva. A los pocos minutos llegó Carabineros y desalojó el local, porque había un aviso de bomba. “Nos sacaron, entraron perros policiales y cuando hicieron entrar de nuevo a la gente no cabían todos y nosotros fuimos de los que nos quedamos afuera”, acusa.

La visita de la intendenta se realizó un viernes y algunos pobladores entusiasmados preguntaron si podían llevarse sus cosas. Les respondió “que se llevaran todo lo que quisieran, que para eso las cosas eran de ellos”, recuerdan en entrevista con las autoras, Patricia Hernández y Aldo Beroiz, de los pocos vecinos que no se fueron a las aldeas.

El sábado 13 de noviembre de 2010 comenzó el desmantelamiento de ventanas, puertas, vigas y todo lo que pudiera usarse en las mediaguas.

Patricia Hernández vive sola en el bloque dos. En junio de 2011 contaba con pesar que todos sus vecinos optaron por irse a la aldea que se instaló a pocos metros de los departamentos. Ante el temor por los saqueos, se llevaron todo lo que pudieron, debilitando la estructura del edificio y lo convirtieron en un nido de delincuencia. “Vivir acá es terrible, una inseguridad tremenda, un no poder dormir en la noche. No estar tranquila. Está viniendo mucha gente a sacar lo más que puedan, tengo que cerrar con llave el portón y a veces me lo patean, tratan de subir. Entonces, uno está a sobresaltos, imagínate, yo aquí estoy sola en el bloque, con dos cabros chicos, separada”, cuenta¹³².

Le habían asignado una mediagua que tenía menos de dos metros para ampliarse, recuerda Patricia Hernández. “Era allá, en la punta de la loma, y dije 'no'. No aguanté eso porque tengo dos niños chicos, que se podrían haber caído al barranco que estaba atrás de la mediagua”, señala. Patricia tiene serios problemas en los discos lumbares, por lo que recibe una pensión de invalidez de 75 mil pesos de la municipalidad. Ese es su único

132 Entrevista realizada a Patricia Hernández por las autoras de esta Memoria. 6 de junio de 2011.

ingreso.

La presidenta de la Junta de Vecinos de Centinela, Rosalba Bello es militante de la UDI y fiel partidaria de Jacqueline Van Rysselberghe. Según los vecinos, ése es el único motivo por el que ella fue la encargada de repartir y ubicar las mediaguas. Patricia Hernández señala que hay complicidad y mafia, “porque hay gente joven que está en las primeras líneas de las casetas y hay personas ancianas que las han tirado para atrás”. En el reporte realizado en la Aldea Barcaza-Valdivia Centinela II se comprueba que quienes se ubican en las mediaguas más cercanas a la salida son habitantes jóvenes.

Rosalba Bello es una dirigente social antigua de Talcahuano y las autoridades municipales la conocen bien. “Tiene carisma y siempre está metida peleando por algo”, dicen desde el municipio. Héctor Silva ve en Rosalba Bello un claro ejemplo de cómo se desplegó la intendenta en la región.

Casas con paneles solares

La vida en las aldeas no es fácil. Casi 500 familias, todavía en junio de 2011, compartían cuatro baños en la aldea Barcaza Valdivia. Un año y medio después del terremoto el sentimiento de los vecinos era de arrepentimiento y en algunos casos vergüenza por haber creído en las promesas de la intendenta.

Leonardo Escobar es dirigente de la aldea y era miembro de la Junta de Vecinos junto a Rosalba Bello. Dice que nunca fue seguidor de Van Rysselberghe, pero sí fue de los primeros en irse a la aldea y convencer a los vecinos que hicieran lo mismo. “Hoy día me arrepiento, debí haberme quedado ahí. La gente que no desmanteló está tranquila con su baño, su ducha, con internet. En mi departamento, mis cabros tenían computador, tv cable, *play station* y en esta mediagua ni siquiera puedo prender todas las luces porque se me baja el automático”, relata con profunda desazón¹³³.

Desde el Observatorio de la Reconstrucción, Walter Imilan opina que el gobierno “nunca previó que las aldeas serían un espacio de mayor permanencia. Pensaron que

133 Entrevista realizada a Leonardo Escobar por las autoras de esta Memoria, el 6 de junio de 2011.

todo iba a ser muy rápido y se les concibió como lugares transitorios, así se entiende que sean tan reducidas -20 a 26 metros cuadrados- y no den espacio para ampliación”¹³⁴.

A juicio del antropólogo, si hubiesen previsto que la gente viviría ahí por lo menos dos a cuatro años tendrían que haber diseñado otros espacios. “Los baños al principio no tenían ni luz y después se dieron cuenta que había que ponerles iluminación, hubo todo un aprender haciendo en el proceso, lo que fue muy desgastante para los damnificados” detalla sobre sus observaciones durante las visitas a terreno.

Viendo las condiciones de vida en las aldeas resulta incomprendible que los pobladores dejaran su departamento, sobre todo si no estaban afectados por el terremoto. Para Aldo Beroiz, habitante del bloque seis de Centinela II, la explicación tiene que ver con lo ansiosa que estaba la gente de vivir de otra forma “y no en el bolsón de pobreza que creó la Concertación al construir estos bloques”, acusa el poblador en entrevista con las autoras.

“Todos nos queríamos ir -recuerda Leonardo Escobar-. A nosotros nos ofrecieron un departamento grande, cómodo, de 57 metros cuadrados, con paneles solares y un estacionamiento para cada departamento. Sabíamos que no había subsidio de arriendo, pero '¿cómo no nos íbamos a querer ir, aunque hubiera que hacer un esfuerzo?'”, reflexiona el dirigente.

Según datos del gobierno, de las casi 80 mil familias que recibieron una mediagua, alrededor del 95 por ciento la construyó en su propio terreno. Sin embargo, cuatro mil 349 familias no tuvieron la misma posibilidad. Para ellos se construyeron las 105 aldeas a nivel nacional. De estas, 16 están instaladas en el Maule, donde residen 430 familias.

En el informe del gobierno se señala que cada una de las viviendas de emergencia cuenta con kit eléctrico, sistema de seguridad, aislación térmica, impermeabilización, batería de cocina, colchones, frazadas y cocinilla. Pero al visitar los campamentos es posible comprobar que la realidad es otra: los kit impermeabilizantes son *nylon* y la aislación térmica la constituyen paneles de plumavit que los mismos vecinos terminaron de instalar. De las baterías de cocina o los kit de seguridad los habitantes no quieren ni

134 Entrevista realizada a Walter Imilan por las autoras de esta memoria. 5 de abril de 2012.

hablar porque nunca los vieron.

La agonía del sueño

Rodrigo Zambrano, director de Planificación de la Municipalidad de Concepción, ingresó el proyecto “Conjunto Habitacional Aurora de Chile” el 8 de octubre de 2010, según información obtenida por ley de Transparencia¹³⁵. Antes de ingresarlo al Fondo Solidario de Vivienda (FSV) Zambrano solicitó una revisión técnica del diseño. El Fondo financiaría una parte y el resto vendría de recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere.

Pero el informe técnico no se pudo realizar. Los antecedentes aportados eran insuficientes, como informó en dos ocasiones Ricardo Silva, constructor civil y revisor de la propuesta.

El 7 de noviembre de 2010 el senador Alejandro Navarro¹³⁶ presentó ante la Contraloría una serie de incumplimientos, omisiones e ilegalidades de las bases del contrato. Estos se sumaron a las irregularidades técnicas y la obra se hizo imposible.

Desde la municipalidad esperaron los montos comprometidos de la Subdere y el Fondo Solidario, pero al momento de presentar el proyecto habitacional estos fondos no existían, lo que convirtió a la iniciativa en ilegal. Esta fue una de las faltas más graves que denunció Navarro ante la Contraloría.

De aceptarse que el municipio puede “licitar” fondos que le son extraños y ajenos, como el del Fondo Solidario de Vivienda del Serviu, el municipio estaría usurpando funciones. Así lo indicó en su oficio el senador Alejandro Navarro.

Después de la última revisión, en la que se confirmó que el proyecto para Aurora de Chile presentaba incumplimientos, no se han ingresado nuevos antecedentes¹³⁷. El

135 Información obtenida el 6 de septiembre de 2011.

136 Documentos obtenidos durante el viaje realizado por las autoras de esta Memoria a la Región del Bío-Bío. 5 de julio de 2011.

137 La última información obtenida por ley de Transparencia es que hasta el 6 de agosto de 2011 no se habían ingresado nuevos antecedentes técnicos.

diario *La Tercera*, citando fuentes de gobierno, informó el 4 de febrero de 2011 que la propuesta no había ingresado al Serviu y los subsidios no estaban autorizados, ya que un porcentaje menor al 80 por ciento de la población había sido damnificada.

“El puente vale callampa, igual que nosotros”

La población Aurora de Chile está ubicada en Concepción. El Puente Viejo que unía la capital penquista con San Pedro de la Paz sufrió graves daños después del terremoto. Esta situación generó consecuencias negativas en la población, que van más allá de las dificultades de conectividad.

La construcción del Puente Chacabuco, que reemplazaría al Puente Viejo, se volvió prioridad para las autoridades regionales. La obra contemplaba usar los terrenos de Aurora para instalar los accesos a la nueva construcción. Era necesario trasladar a los vecinos. Sin embargo, estudios demostraron la inviabilidad del proyecto habitacional que les prometieron y a mediados de 2011 las 160 familias de Aurora todavía no tenían viviendas asignadas.

Previo al Puente Chacabuco y ante la necesidad de conexión, el gobierno instaló de forma temporal un puente mecano. El 12 de enero de 2011 la solución transitoria fue noticia de la mano del ex demócrata cristiano Jaime Ravinet, que en el gobierno de Sebastián Piñera ocupó el cargo de ministro de Defensa, después de renunciar a su militancia de 40 años en la DC.

La empresa inglesa Mabey Bridge Limited solicitó al Consejo para la Transparencia los antecedentes que justificaban la compra del puente mecano a su competencia, la estadounidense Acrow Corporation, con dos millones de dólares de sobreprecio. Ravinet negó la información, con el argumento de que su difusión pública podría afectar la seguridad nacional. El ministro fue citado al Congreso para aclarar esta polémica que se inició en octubre de 2010.

El Consejo para la Transparencia falló en contra de Ravinet el 11 de enero de 2011, un día antes que asistiera al Congreso. El organismo argumentó que “es un puente que se emplazará en paralelo a los otros ya existentes. Además, estará expuesto al

público y sus características serán conocidas por todos. No se aprecia cómo afectaría a la seguridad nacional la revelación de lo solicitado, de manera que no se justifica afectar el derecho de acceso a la información".

El ministro se defendió ante los cuestionamientos legales y de probidad. Al finalizar su argumentación pública creyó apagados los micrófonos y disparó: "El puente vale callampa".

La frase desató airados comentarios políticos y de sobremesa. Al día siguiente, el 13 de enero de 2011 el colorín ministro, tuvo que salir a aclarar a Radio Cooperativa que "el puente no vale callampa, es muy importante para la conectividad de Concepción, que requiere con urgencia restablecer el tráfico de camiones pesados. Mi frase se dio en una conversación entre amigos, en la cual intento señalar que el puente no es el tema central, sino un problema más severo que es una interpretación jurídica"¹³⁸.

El ministro dimitió de su cargo en Defensa el 13 de enero de 2011 por "razones particulares y personales".

Pero a los vecinos de Aurora muy poco les importó la renuncia del ministro. Seguían con la preocupación de ser desalojados para instalar en sus terrenos los accesos al puente definitivo, como se los comunicó el Minvu y la Intendencia.

La señora Inés Oliva es pobladora y miembro de la organización pro defensa de Aurora de Chile. Cuando se reunió con la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, la secretaria de Estado le señaló que no tenía idea de la existencia de la población, pero que debían desalojar. "¿Quieren hacer desaparecer una población de más de 60 años, que construimos con nuestras propias manos? La única respuesta es que el puente vale callampa, igual que nosotros"¹³⁹, declara.

En marzo de 2012 el comité que lidera Jorge Figueroa¹⁴⁰ estaba en

138 *Cooperativa.cl*, 13 de enero de 2011. "Jaime Ravinet: El puente no vale callampa, sino que es muy importante", *Cooperativa.cl*.

139 *El Resumen*, 21 de enero de 2011. "Población Aurora de Chile: para el gobierno no solo el puente vale callampa", *ElResumen.cl*.

140 Actualización de entrevista telefónica realizada a Jorge Figueroa por las autoras de esta

conversaciones avanzadas para levantar una mesa ampliada con las autoridades y resolver en conjunto qué soluciones habitacionales recibirían.

Esa mesa “fracasó por la intransigencia del gobierno”, afirma Alfonso Vera, presidente de la Junta de Vecinos Siglo XXI de la Villa Huracán. El 15 de diciembre de 2012, se levantó una nueva mesa que encabeza el alcalde de Concepción, Patricio Kuhn, con el objetivo de dar una solución satisfactoria para los vecinos que están en la línea que intervendrá el Puente.

Vera cuenta que durante todo el 2012 los funcionarios del Serviu y las asistentes sociales del municipio han hecho un trabajo sistemático de mediación para convencer a los vecinos de que abandonen la Población. Después que la primera propuesta habitacional fuera rechazada por incumplimientos, hay unos nuevos conjuntos habitacionales disponibles para sacar a los pobladores de Aurora de Chile: son dos grupos de edificios enclavados en el extremo de la población por calle Bilbao y Andrés Bello por el lado de la línea férrea y otro grupo de vecinos con casas que vayan a vivir al sector de Nueva Prat por el lado del cementerio de Concepción.

“Hay gente que se ha inscrito de manera compulsiva, pero son personas que no viven en la línea de intervención que se va a expropiar, es gente que vive en el resto de la población”¹⁴¹, señala el dirigente barrial Alfonso Vera.

Después del terremoto un fenómeno que se dio de forma masiva en la Población es que muchas personas que habían perdido sus casas en otros barrios llegaron a Aurora. “La población creció el doble, nos desbordamos y obviamente los que venían recién llegado querían casas, por eso firmaron en masa”, explica Alfonso Vera.

“A la gente que está en la línea de intervención de la calle Andrés Bello no les interesa esta propuesta de departamentos o casas, ellos quieren que les construyan un barrio llamado Aurora de Chile en el sector donde estamos viviendo”, señala el dirigente en entrevista concedida para esta Memoria.

Memoria. 10 de julio de 2012.

141 Entrevista realizada a Alfonso Vera por las autoras de esta memoria. 21 de diciembre de 2012.

De acuerdo a información que ha proporcionado Bienes Nacionales a la Junta de Vecinos de la Villa Huracán, a la que pertenecen la mayoría de las 160 familias que viven en el espacio destinado a los accesos del Puente, existen tres hectáreas y media a disposición para construir viviendas sociales. “Los vecinos esperamos, dice Vera, que se hagan cargo de nuestras demandas, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna propuesta seria y responsable de parte del gobierno central y mucho menos del Serviu regional”.

Hoy los vecinos están en alerta y esperando los resultados que salgan de la mesa de negociación, pero ya desde julio de 2012 empezaron a perder la paciencia. A la preocupación de que los expropiaran para construir el Puente Chacabuco se unió un viejo temor: el proyecto Terrazas del Bío-Bío y la amenaza que significaría para la permanencia de los vecinos en Aurora de Chile.

Los pobladores creen que podrían sacarlos de sus viviendas con la promesa de un nuevo proyecto habitacional sin sustento ni posibilidad de realización, como ya les sucedió. Es tal la desconfianza con las autoridades políticas que sospechan que el Serviu, dueño de los terrenos que habitan, podría expulsarlos. “Nosotros vivimos en una toma porque ellos son los dueños. No tenemos títulos de dominio, ya que cada vez que se formaron organizaciones que intentaron conseguirlos, siempre encontraron trabas en las autoridades”, rememora Jorge Figueroa.

El 12 de agosto de 2012 los vecinos de Aurora convocaron a una consulta por la reconstrucción. El 90 por ciento de los 409 vecinos que participaron se declararon contrarios a la erradicación que volvió a proponerles el gobierno, pese a que a esa fecha aún no les habían presentado un nuevo proyecto habitacional.

Los vecinos temen que los saquen de la población y los terrenos no solo sean usados para instalar los accesos al Puente Chacabuco, sino que también se haga uso comercial del espacio.

Radio Bío-Bío publicó en julio de 2011 una nota¹⁴² en la que informó que el

142 Radio Bío-Bío, 19 de julio de 2011. “Diputado Van Ryselberghe solicitará apoyo al gobierno para concretar proyecto ‘Terraza al Bío-Bío’”, Radio Bío-Bío.

diputado Enrique Van Rysselberghe solicitó apoyo al gobierno para llevar adelante el proyecto, “de emprendimiento público y privado” que pretende instalar una construcción que intervenga el Río Bío-Bío al circuito comercial en tierra.

La nota informa que el proyecto está gestionándose bajo la modalidad “Concesión Onerosa Directa”, de acuerdo a la ley de Concesiones de Bienes Nacionales. Deberá destinar el 50 por ciento de su superficie a uso público y la otra mitad a actividades de *retail*, servicios, hotelería, eventos y centro de negocios y oficinas para inversionistas, “tan necesarias para la región”, acotó el hermano de la exintendenta.

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, ratificó el proyecto como de “interés público”. Fue incorporado a la mesa intersectorial de cinco iniciativas relacionadas a la creación de un polo de desarrollo urbano en las riberas del Bío-Bío.

Los temores de los vecinos, al parecer, no eran infundados.

La Red Construyamos es una asamblea de organizaciones sociales de Concepción. Creada después del terremoto y tsunami en Chile para “defender a la comunidad del abandono y la acción injusta de los capitales y el Estado contra los damnificados y las damnificadas”¹⁴³, autogestionó junto a los vecinos de Aurora la consulta sobre la reconstrucción realizada en agosto de 2012.

Según una nota del sitio web de la organización es “evidente el apetito de lucro de los carteles político-empresariales enquistados en nuestro país. Es muy notorio -dicen los voceros de la Red- que todo esto está relacionado con los intereses de ciertos grupos económicos”¹⁴⁴.

El director del proyecto Terrazas del Bío-Bío es el arquitecto Emilio Armstrong, quien fue candidato de la UDI en las últimas elecciones de alcalde en Concepción y perdió ante el DC Álvaro Ortiz, en octubre de 2012. “Ha sido el diputado Enrique Van

143 Equipo Red Construyamos, *Red Construyamos*. Disponible en sitio web de Red Construyamos (<http://redconstruyamos.org/>). Consultado el 15 de diciembre de 2012.

144 Equipo Red Construyamos, *Red Construyamos llama a una defensa social de la población Aurora de Chile*. Disponible en el sitio web de Red Construyamos (<http://redconstruyamos.org/>). Consultado el 15 de diciembre de 2012.

Rysselberghe el que se ha encargado de las gestiones ante el Ministerio de Bienes para obtener así la concesión sobre una importante superficie del río Bío-Bío, lo que le daría convenientes garantías al sector comercial para que se apodere de estos terrenos”, disparan desde la Red.

Alfonso Vera señala que entre sus vecinos existe certeza de que el plan del gobierno es sacar a toda la gente y el Puente Chacabuco es un pretexto público para tratar de despejar el sector. “Es una excusa brillante para que la gente desocupe, porque el valor del terreno de Aurora de Chile es de 20 Unidades de Fomento el metro cuadrado, tenemos un *mall* gigante al costado que le sube la plusvalía al sector. Esa es la verdadera razón poderosa para que gente humilde esté actualmente viviendo en un lugar que vale oro y que hay que sacar de cualquier forma”¹⁴⁵.

El factor Navarro

Por información de vecinos difundida en la prensa local se supo que en diferentes comunas de la Región del Bío-Bío se estaba cuestionando la entrega de subsidios, por haber sido postulados con certificados de inhabilitación irregulares. Los más bullados fueron los hechos para el conjunto habitacional Aurora de Chile en Concepción y en los sectores Colton Quillay y Nueva Aurora de la comuna de Bulnes.

Con insistencia la autoridad informó que no se había entregado subsidio alguno con estos certificados. Así lo sostenían la exintendente Jacqueline Van Rysselberghe, el exseremi de Vivienda del Bío-Bío, Enrique Matuschka, la exministra de la cartera, Magdalena Matte y el exdirector del Serviu de la Región, Sebastián Salas.

El senador Alejandro Navarro exmilitante socialista y hoy principal figura del Movimiento Amplio Social, MAS, fue el primero que empezó a investigar en la Región del Bío-Bío a la cada vez más empoderada intendenta Jacqueline Van Rysselberghe.

En entrevista con las autoras de esta Memoria, en el ex Congreso Nacional, Navarro señala que fue invitado por el concejal de la comuna de Laja, José Joaquín Sanhueza, a comprobar que allí se habría concretado la obtención de subsidios de

145 Entrevista realizada a Alfonso Vera por las autoras de esta Memoria. 21 de diciembre de 2012.

reconstrucción con certificados falsos. “Observé que había viviendas construidas y otras en plena etapa de edificación, en diferentes sectores de Laja”, describe¹⁴⁶.

Las viviendas señaladas por el senador corresponden a integrantes de un comité de Laja que postularon a subsidios de vivienda antes del terremoto. Como consecuencia de la tragedia algunas personas pudieron sufrir daños en sus casas, pero, según manifestaron los propios vecinos, la mayoría no tuvo perjuicio alguno. De todas maneras, obtuvieron el subsidio.

Hay a lo menos 25 casos en que se asignó subsidio para la vivienda, de acuerdo a la información registrada en la lista de beneficiarios del Plan de Reconstrucción, publicado en el sitio web del Minvu. De esos 25 casos, nueve tenían un certificado de inhabilitación emitido por la Dirección de Obras Municipales de Laja en 2009, según dan cuenta los documentos reunidos por el senador Navarro y presentados el 5 de mayo de 2011 a la Contraloría General de la República para su investigación.

El 23 de mayo de 2012 el órgano contralor falló a favor de la denuncia presentada por Navarro junto al concejal José Joaquín Sanhueza. El líder del MAS explicó que pidieron ante el Ministerio Público que se presentara una querrela criminal en contra de quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Los antecedentes demostraron que nueve familias adquirieron los subsidios presentando documentos que correspondían a un año antes del terremoto. Algunas familias cayeron en la ilegalidad por mentir sobre la ubicación de sus casas para obtener el beneficio; y otras, que no cumplieron ningún requisito, igual consiguieron subsidios habitacionales.

Navarro declaró que “ésta es una pequeña muestra y no la totalidad, lo que nos indica que el fraude al fisco puede ser a gran escala y los culpables se mantienen impunes, pero, les digo, no por mucho tiempo”.

146 Entrevista realizada por las autoras de esta memoria a Alejandro Navarro. 2 de abril de 2012.

Costosas y sin destino

La intendenta Jacqueline Van Rysselberghe ordenó adquirir 154 viviendas de emergencia a un costo de 120 millones de pesos para ser destinadas a la población Aurora de Chile. Primero se compraron 34 mediaguas y después las 120 restantes.

Las últimas mediaguas se obtuvieron el 29 de marzo de 2011, pese a que días antes se desarmaron las primeras 34 viviendas para instalarlas en el sector de Pedro de Valdivia bajo, ya que estaban siendo saqueadas.

Las viviendas de emergencia serían temporales mientras se trabajaba en el proyecto habitacional para Aurora de Chile, pero este había sido rechazado por el Serviu regional del Bío-Bío. ¿Cuál era la finalidad de esta compra de viviendas para un proyecto rechazado, cuando había transcurrido más de un año del terremoto que generó la emergencia?

A través de una resolución que se dictó el 9 de diciembre de 2010, Jacqueline Van Rysselberghe ordenó la adquisición de 200 viviendas de emergencia para Centinela II de Talcahuano. Las mediaguas tenían un valor unitario de 450 mil pesos, y en total se gastaron más de cien millones en la compra. Lo grave es que, según lo informado por la Municipalidad de Talcahuano, en ese sector la Intendencia solo envió 75 viviendas, las que se ubicaron en el sector de Centinela II, denominado Aldea Barcaza Valdivia y fueron distribuidas por personal que no es del Servicio del Gobierno Interior, tal como Cristian Gibson, miembro del equipo de “territoriales” de la exintendenta.

El senador Alejandro Navarro señaló que el funcionario Pedro Venegas, jefe suplente del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia, solicitó en forma reiterada información para identificar a quiénes fueron asignadas las 154 viviendas de emergencia adquiridas para el proyecto habitacional Aurora de Chile. En su tarea de fiscalizar también solicitó la nómina de beneficiarios de las 200 viviendas de emergencia, en teoría distribuidas en el sector de Centinela II en Talcahuano.

El 12 de abril de 2011 Pedro Venegas le informó vía correo electrónico al intendente suplente del Bío-Bío, Renato Paredes, la situación que acontecía.

Todas las solicitudes de información realizadas por el funcionario están documentadas en los informes que presentó a Contraloría el senador Navarro, y a los cuales tuvimos acceso. En esos antecedentes se denuncia que a este funcionario que fiscaliza las adquisiciones no solo no se le respondió, sino que se le cesó de sus funciones, mientras el destino de las mediaguas compradas para Aurora y Centinela continuó siendo desconocido.

Las primeras viviendas fueron compradas a un valor de 450 mil pesos, y las últimas a 658 mil más IVA, siempre por asignación directa y a la misma empresa: Procomad Limitada.

Con fecha 7 de febrero de 2011, el intendente subrogante de la Región del Bío-Bío, Carlos González, le adjudicó construir otra vez a Procomad: 489 viviendas de emergencia por un monto total de casi 380 millones de pesos. Esta adjudicación fue objetada el 14 de marzo de 2011 por la contralora general del Bío-Bío, Gloria Briones, quien estableció una serie de defectos técnicos en la propuesta de la empresa.

La última resolución que se dictó el 21 de marzo de 2011 rechazó la oferta de Procomad. Ante esto la intendenta intervino. Jacqueline Van Rysselberghe hizo uso de las facultades especiales que tenía en el contexto de emergencia. Recurrió a la asignación directa a favor de Procomad y dictó una resolución en la que declaró inadmisibles las ofertas de Transportes Matilde, proveedor al que le correspondía adjudicarse la última licitación de compra de viviendas de emergencia, después de haber sido objetada la oferta de Procomad.

Desde 1988 entregando calidad

La empresa JCE Chile fue fundada el 20 de julio de 1988 por Pablo Guilisasti Gana, hermano del expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, y actual vicepresidente de la Viña Concha y Toro, Rafael Guilisasti. Durante más de 20 años, la diversificación ha sido la estrategia de la empresa para crear valor agregado de largo plazo y para disminuir los riesgos financieros.

Posterremoto, el *holding* lideró una triste estadística: era la constructora que tenía el mayor registro de propiedades con daños estructurales en Concepción, Chillán, San Pedro de la Paz y Temuco. En total quince edificaciones en las cuales tuvo participación y dos de las más destruidas: los edificios Plaza Mayor y Centro Mayor.

En relación a este último edificio, el laboratorio de ingeniería industrial del Dictuc realizó el 15 de noviembre de 2010 el informe “Verificación de correcta ejecución de las obras conforme a diseño edificio Centro Mayor– Concepción” por encargo del Ministerio de Obras Públicas. De acuerdo al análisis de todas las paredes del primer piso, de los once muros medidos cinco tenían déficit importante de resistencia. En el segundo piso, cuatro tenían problemas serios¹⁴⁷.

Vecinos del edificio Centro Mayor interpusieron una serie de acciones en los tribunales penquistas a fin de lograr la retribución que JCE les ha negado. Asesorados por el abogado Ricardo Durán, 24 propietarios sin seguros presentaron una demanda por “vicio de construcción” en contra de la empresa. Para Sergio Ortiz, que compró su departamento al contado y no tiene seguros, la responsabilidad de JCE es clara: “Nosotros pedimos un estudio al ingeniero Claudio Lapostol, exgerente general de Cementos Bío-Bío, que señala que la suma de los vicios en que incurrió JCE hicieron que el edificio cayera en el concepto de ruina funcional, lo que significa que no sirve para lo que fue construido”¹⁴⁸.

Claudia¹⁴⁹ después de ahorrar quince años con su esposo, logró comprar al contado en 2009 el departamento de 40 millones de pesos que tanto quería en el Edificio Thiers, de la Constructora JCE. No tenía seguros que cubrieran las pérdidas del edificio, que solo tenía unos seis años de antigüedad. “Nadie sabe nada. No se nos ha comunicado nada. Lo único que sabemos es que está clausurado y que no podemos ir a sacar las cosas por peligro de derrumbe”¹⁵⁰, contaba el 4 de marzo de 2010 al *Diario Austral*. Claudia vivía en Temuco y tuvo que alojarse fuera de la ciudad absorbiendo a

147 Informe realizado por Dictuc el 15 de noviembre de 2010. *Verificación de correcta ejecución de las obras conforme a diseño edificio Centro Mayor – Concepción*. Por encargo del Ministerio de Obras Públicas.

148 *Ciper*, 9 de febrero de 2011. “Demolición de torres en Concepción: Constructora con más edificios dañados gana licitación”, Tabatha Guerra.

149 Identificación de la fuente según extracto del reportaje del medio. *Diario Austral*, 4 de marzo de 2010. “Propietarios quedan en la calle”, Alma Canales Silva.

150 *Diario Austral*, 4 de marzo de 2010. “Propietarios quedan en la calle”, Alma Canales Silva.

duras penas los costos del alquiler.

Un trato directo y millonario

Una vez que los arrendatarios y propietarios de los cinco edificios colapsados en Concepción salvaron ilesos, lo primero que pensaron es que tenían el respaldo de la empresa constructora y que los seguros millonarios que la gran mayoría había contratado, les darían sustento. No podían estar más equivocados.

Las constructoras se negaron a solventar las estabilizaciones; por esa razón la Intendencia solicitó al gobierno central los recursos para desmontar las construcciones. “Los costos de estos trabajos fueron asumidos por el Ministerio de Obras Públicas, MOP, que destinó para esos efectos más de dos mil 500 millones del erario nacional”, indicó *Ciper* el 9 de febrero de 2011.

De los dos mil 500 millones de pesos aportados por el MOP, 726 millones y medio fueron entregados a la constructora JCE. El 16 de diciembre de 2010 la Municipalidad de Concepción, la Intendencia y la Dirección de Arquitectura del Bío-Bío, suscribieron el convenio que otorgó a JCE la tarea de estabilizar las obras con el objeto de que obreros, vecinos y transeúntes no corrieran riesgos. Se usó el sistema de asignación directa, que no pasa por ChileCompra.

Para esta Memoria se consultó mediante ley de Transparencia a la Dirección de Arquitectura del MOP en Bío-Bío, la razón para haber efectuado un trato directo. La respuesta tuvo como única razón la urgencia de dar pronto inicio a los trabajos de estabilización de los edificios con riesgo de colapso.

En octubre de 2011 las obras de estabilización y mitigación de riesgos fueron ejecutadas en su totalidad por JCE, en apego a las recomendaciones técnicas realizadas por el Dictuc.

La constructora JCE Chile S.A. es parte del *holding* empresarial con sede en Suecia, JCE Group. En su sitio web¹⁵¹ afirman ser “un grupo descentralizado con una fuerte presencia local en los países en que estamos presentes. Nuestro foco principal es el Norte de Europa (Escocia-Suecia) y Sud América (Chile y Brasil)”. JCE lleva más de 20 años participando en el mercado de la construcción chilena. También ha incursionado en la salud con clínicas en el sur del país. Guillermo Carter Morong es su representante legal; Francisco Olivos Valenzuela, Guillermo Salinas Milos, Jan Christer Ericsson y Gerardo Sandoval Gouët conforman el directorio de la empresa en Chile.

Con agenda propia

“Fumaba, le gustaba el *amaretto sour* y decía hartos garabatos. Me sorprendió que siendo tan cercana al Opus Dei no tuviera gustos de beata”. Así recuerda el periodista Andrés Jouflé, citado por el diario *The Clinic*, la impresión que le dejó Jacqueline Van Rysselberghe con ocasión de una entrevista que le realizó. La exintendente nunca ha tenido temor de mostrarse desenvuelta en la región que la vio crecer. En el Bío-Bío estudió, destacó como atleta, se casó a las tres semanas de noviazgo y comenzó una prominente carrera política que, hasta antes del terremoto, la tenía encumbrada en las altas esferas de su partido.

Son sus altas votaciones las que la hacen imbatible y respetada, ya que en la región no cuenta con el apoyo de Renovación Nacional e incluso el presidente regional de la colectividad, Claudio Eguiluz, mantiene una abierta pugna con ella.

Eguiluz señala que, si a un año y medio del terremoto el gobierno de Sebastián Piñera todavía no podía instalarse en la región, era en gran medida por responsabilidad de la figura UDI. “La culpa de que la reconstrucción en la región no haya avanzado es de la exintendente. Cuando asumió lo hizo pensando en un proyecto personal, no con la camiseta de gobierno. La única camiseta que ha tenido siempre es la de ella, el resto le da lo mismo”, indica en entrevista con las autoras de esta Memoria¹⁵².

Las peleas con Eguiluz partieron cuando se debía decidir el candidato de la

151 Constructora JCE, *Holding*. Disponible en sitio web de Constructora JCE (<http://www.constructorajce.cl/>). Consultado el 15 de diciembre de 2012.

152 Entrevista realizada a Claudio Eguiluz por las autoras de esta Memoria. 8 de junio de 2011.

Alianza por Chile para las elecciones de 2010. Van Rysselberghe es cercana a Joaquín Lavín y él era su candidato, mientras que Eguiluz, excompañero de Sebastián Piñera en el Colegio Verbo Divino, lo levantó a él como figura. “Fui durante 18 años consejero regional del partido y proclamé la candidatura de Sebastián Piñera en la zona y el país. Fui candidato a presidente regional para hacer eso, ganamos aquí y dimos vuelta el consejo general, donde todo el mundo sabía que se proclamaba a Lavín”, relata Claudio Eguiluz.

Cuando se confirmó a Sebastián Piñera como candidato presidencial 2009, este acudió al Bío-Bío. La idea era solicitar el apoyo de la entonces alcaldesa Van Rysselberghe. “Dijo que apoyaría, pero con la condición de que el intendente que nombrara no fuera alto, ni flaco, ni de origen vasco, o sea me vetó a mí”, cuenta el actual presidente regional de RN.

“Inventamos una historia”

En medio de todo el proceso de promesas y fracasos sobre sus nuevas viviendas definitivas, la población Aurora de Chile recibió la visita de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe. Igual como había ocurrido en otras poblaciones del Bío-Bío, la doctora llegó al barrio, y el 9 de septiembre de 2010 expuso cómo sería el proceso de desalojo posterremoto.

“Desde el principio sospeché que no era cierto, porque lo que nosotros sabíamos era que no habían subsidios de arriendo”, recuerda Jorge Figueroa, dirigente vecinal de la comunidad¹⁵³. Afirma que “la única solución era irse a vivir con otros familiares o arrendar por sus propios medios, lo que para muchos era imposible”. A su juicio, desde un comienzo el proceso fue confuso para los vecinos, que veían cómo sus casas habían resistido el terremoto, incluso mucho mejor que las viviendas del centro de Concepción.

Los vecinos ya habían tenido entrevistas con autoridades. A veces sacaban distintas conclusiones de la misma información; por eso, el grupo de dirigentes optó por grabar cada encuentro. La visita de la intendenta no fue la excepción.

153 Entrevista realizada a Jorge Figueroa por las autoras de esta Memoria. 7 de junio de 2011 en Concepción.

En el colegio Santa Catalina de Siena de Concepción Van Rysselberghe afirmó ante la atenta mirada de los vecinos: “nosotros usamos el tema del terremoto y del Puente Chacabuco a favor de ustedes. Por eso nos aceptaron meter un porcentaje muy importante de personas que no tienen certificados de inhabilitación”.

“Hay cerca de un 60 por ciento de habitantes que no tienen certificados de inhabilitación, que no están terremoteados. Sin embargo, van a ser beneficiados por el proyecto. Inventamos una historia y pudimos hacer que esta posibilidad no se nos escapara de las manos. Tenemos hoy la autorización del subsecretario para poder seguir avanzando”, afirmó Jacqueline Van Rysselberghe, y el momento fue registrado por un poblador. Jorge Figueroa entregó el audio a la ministra de Vivienda Magdalena Matte, casi dos meses después, cuando recibió a un grupo de damnificados en Santiago.

La titular del Minvu mostró escaso interés ante la denuncia y, frente a los ojos de los dirigentes, entregó el audio a un asesor que se encontraba en la reunión del 16 de noviembre de 2010. Días después la grabación de un video de la misma situación se difundió y generó gran polémica sobre la intendenta.

Solo un 40 por ciento de los habitantes de Aurora de Chile tenía las condiciones para que su casa fuera declarada inhabitable, pero Jacqueline Van Rysselberghe les prometió viviendas de mayor calidad a todos los pobladores. “Son más de tres mil departamentos Serviu que tenemos que reconstruir. Y éstos son de mejor estándar, porque van con un recurso adicional que nos conseguimos por otros lados, los sacamos de otro bolsillo”, dijo la intendenta en septiembre de 2010.

De sus declaraciones se desprende que los vecinos de Aurora serían un grupo “privilegiado”. Por eso, al final del discurso de 58 minutos, se escucha desde los asistentes un sentido “muchas gracias, señora Jacqueline”.

Jorge Figueroa recuerda que el sentimiento de agradecimiento y alegría era mayoritario. Que incluso él, que al principio desconfió del futuro prometido por la líder UDI, terminó aplaudiendo de pie. Pero reconoce que la posterior decepción fue muy grande “al darnos cuenta que todo era falso, que no había posibilidades reales de que cumpliera y

que solo nos estaba usando para fines políticos”, lamenta.

El gallito por el poder penquista

Los audios del discurso de la intendenta también llegaron a las manos de Alejandro Navarro en febrero de 2011. Los vecinos acudieron al senador después de que otros disputados del gobierno y la oposición los ignoraran.

Desde ese momento se convirtió en un agudo fiscalizador e investigador. En entrevista con Radio ADN explicó que su molestia no radicó en que Aurora de Chile tuviera mejores viviendas que las personas de verdad terremoteadas. “Lo que me preocupa es que la política habitacional del Bío-Bío no se revise. Si la intendenta falseó los datos e inventó historias, engañó al Ministerio de Vivienda y eso pone en cuestión la política completa de los subsidios de la reconstrucción de la región”, señaló¹⁵⁴.

La historia entre los líderes penquistas ha tenido períodos de tregua, como la histórica imagen donde se les ve bailando en una fiesta de Año Nuevo organizada por el municipio de Hualpén en vísperas de 2011. Pero, sin duda, han sido más los enfrentamientos.

La disputa comenzó en 2004, informó el *Diario de Concepción* el 12 de agosto de 2012, cuando Navarro era diputado socialista y se aprestaba a enfrentar una campaña por un sillón en el Senado. Ese año realizó diversas acusaciones contra la gestión de Van Rysselberghe, alcaldesa de Concepción. Una de las más fuertes fue la denuncia que llevó hasta la Contraloría Regional por los derechos municipales impagos de la arenera Bío-Bío, propiedad del exdiputado y padre de la alcaldesa, Enrique Van Rysselberghe Varela.

Para Walter Imilan esta relación “de amor y odio” es ejemplificadora de lo que sucede en la zona. “En la Región del Bío-Bío los que eran ‘clientes’ directos de la exintendenta Jacqueline Van Rysselberghe se enfrentaban con los que eran ‘clientes’ del senador Alejandro Navarro”, detalla el coordinador del Observatorio de la Universidad de Chile, y afirma que “los clientelismos políticos han jugado un rol hasta hoy en la

154 *The Clinic*, 4 de febrero de 2011. “Intendenta Rysselberghe: ‘Nosotros usamos el tema del terremoto’”, equipo *The Clinic*.

reconstrucción”.

Cae la doña del Bío-Bío

Después de más de dos meses de estar en el ojo de la tormenta, Jacqueline Van Rysselberghe presentó su renuncia a la Intendencia del Bío-Bío. Lo anunció el 3 de abril de 2011 en una breve conferencia de prensa después de reunirse con el Presidente Sebastián Piñera en la Moneda.

Recordó, ante los medios de comunicación que se apostaron en el Patio de Los Naranjos, que asumió la región angustiada, “de rodillas, en medio de saqueos sin servicios básicos y sin ninguna garantía de orden público. Fuimos capaces de abordar la emergencia de manera exitosa y de asentar las bases de la reconstrucción”.

Una semana antes la oposición había presentado en la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra Van Rysselberghe, para destituirlo. Según el periódico *The Clinic*, “la renuncia tuvo la intención de frenar el proceso en su contra, que podría haber llegado a prohibirle el ejercicio público. Algunos diputados oficialistas amenazaron con que apoyarían la acusación, así que el gesto buscó también apaciguar las aguas en la Coalición por el Cambio”, señaló el medio.

La debacle de Van Rysselberghe comenzó cuando Alejandro Navarro dio a conocer los audios registrados en la población Aurora de Chile. Desde todos los sectores vinieron las críticas, pero el gobierno insistió en respaldarla.

En medio de la polémica, la autoridad regional se tomó junto a su familia dos semanas de vacaciones en Brasil. Desde allá disparó contra representantes del Minvu, quienes, según ella, habían dado autorización para que operaran los subsidios irregulares.

A la vuelta del descanso, la psiquiatra se intentó desdecir. “Tengo la mejor impresión de la ministra Magdalena Matte y su equipo, seguiremos trabajando por la reconstrucción”. Pero las críticas duras ya se habían echado a rodar y el apoyo a ultranza del gobierno comenzó a diluirse. “Era la piedra en el zapato de la relación entre los

partidos de la coalición de gobierno” y “amenazaba con convertirse en una bola de nieve, cuyas consecuencias podrían llegar incluso a amenazar la gobernabilidad del Presidente Piñera”, analizaba el artículo de *The Clinic*.

Al finalizar la conferencia de prensa, Van Rysselberghe afirmó que esperaba que con su gesto se calmaran los ánimos en su sector. “Sigo creyendo que la política es una actividad noble y por eso espero que con mi renuncia vuelva la unión a la Coalición por el Cambio y podamos seguir trabajando por lo que más importa, que es el bienestar de todos los chilenos”¹⁵⁵, manifestó.

La renuncia confirmó la pésima relación de la figura UDI con sus pares de RN. Aunque los diputados y senadores en general se mantuvieron cautos en sus declaraciones, la diputada RN Marcela Sabat rompió la tónica. Celebró su retiro y destacó que era justo y necesario. “Bien por la Región del Bío-Bío”, indicó a través de su cuenta de *Twitter*.

La exintendenta dio las gracias al Presidente Piñera por su “permanente confianza y cariño” mientras desempeñó el cargo, y a la UDI por su apoyo en “circunstancias muy complejas”.

En la actualidad Jacqueline Van Rysselberghe se encuentra en precampaña para disputar un cupo senatorial en el Bío-Bío, espacio que deberá pelear incluso dentro de su partido, la UDI.

La planificación urbana de la reconstrucción

En Chile la planificación de la ciudad y el territorio urbano los establecen los Planes Reguladores Comunes. Estos son instrumentos que fomentan y regulan el desarrollo urbanístico del territorio comunal, en particular de sus zonas pobladas y sus redes de espacios públicos.

155 *The Clinic*, 3 de abril de 2011. “Jacqueline Van Rysselberghe cede a presión y renuncia a intendencia del Bío-Bío”, *EFE/ The Clinic*.

En los últimos años, con el auge inmobiliario que han experimentado algunas comunas y ciudades del país, se ha hecho cada vez más común que los márgenes y categorías de los territorios contenidos en los Planes Reguladores sean modificados. Todo con el fin de ampliar los territorios por urbanizar.

Las disposiciones del Plan Regulador son elaboradas por el municipio. En él se debe incluir la estructuración del sistema de centros poblados de la comuna; el límite urbano, la infraestructura, la vialidad, áreas verdes y equipamiento de nivel comunal, sistema de aguas lluvias y cauces naturales, la zonificación y el establecimiento de condiciones para la ocupación del territorio comunal. Además aborda los usos del suelo, la constructibilidad, las densidades y las condiciones de subdivisión.

Para establecer un Plan Regulador Comunal distintos actores entran en juego. Deben ser aprobados por el Concejo Municipal, previo informe especializado de la municipalidad y el conocimiento de los vecinos de la comuna. Después de ser aprobado, el proyecto es revisado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda. Ésta informa si se ajusta al Plan Regional Urbano Territorial, para la aprobación definitiva del Concejo Municipal y así dictar el decreto alcaldicio. Los planes reguladores son evaluados como mínimo cada cinco años y actualizados, de ser necesario; esta situación es cada vez más común desde que se ha producido el *boom* de construcciones y obras públicas y privadas en las grandes ciudades chilenas.

Pero desde el actual gobierno y sus políticas públicas surgió una innovación al sistema para abordar la gran tarea de la reconstrucción. El plano del territorio, el barrio y la vivienda se trabajó a partir de inéditos instrumentos: los Planes Estratégicos Sustentables (PRES), Planes de Regeneración Urbana (PRU), los 18 Planes de Reconstrucción del Borde Costero (PRBC18), Planes Maestros Interiores, Protocolos y el plan de acción para la reconstrucción del borde costero y la Actualización de Instrumentos de Planificación Territorial (IPTs), según informa el sitio web del Minvu.

Los nuevos Planes de la reconstrucción están constituidos por una serie de proyectos que tienen el objetivo de transformar y dinamizar las zonas dañadas. Casi dos años después de la catástrofe, el Minvu terminó el diseño de 137 en total. “En cuanto a la ejecución de los proyectos, de las 78 obras de los Pres, se han iniciado 22 ejecuciones

(28 por ciento) y se aspira a terminar 73 (80 por ciento) en 2014”, relató *La Tercera* en la nota “Vivienda aspira a terminar en ocho años 190 obras urbanas de mil 135 lanzadas por el gobierno”, el 21 de febrero de 2012.

Bajo el título “Actualización de Instrumentos de Planificación Territorial (IPTs)”¹⁵⁶, el sitio web del Minvu informa que de las 239 comunas afectadas por la catástrofe, “173 no requieren modificar ni actualizar sus planes reguladores en función del riesgo, 66 requieren estudios de riesgo, modificar o ajustar sus instrumentos, de las cuales 33 corresponden a comunas del borde costero y las restantes a comunas de la zona interior de las regiones V a IX que presentan riesgos puntuales y acotados”.

Los nuevos instrumentos incluyen una “cartera de intervenciones” compuesta por pavimentación de calles, paseos costeros y parques. El Plan de obras a nivel nacional asciende a 385 millones de dólares. “En suma, Vivienda contempla ejecutar 190 obras (78 PRES y 112 PRU) de mil 135 en ocho años. Otras 845 corresponden a otras fuentes de financiamiento, como el Ministerio de Obras Públicas y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), entre otras”, escribieron en la nota los periodistas Manuel Valencia y Paula Céspedes.

La primavera pública-privada

Los nuevos planes no se costearán solo con recursos fiscales. Los agentes privados de la economía nacional y local de los distintos pueblos y ciudades afectadas también han financiado y financiarán las propuestas.

“Me alegra poder comunicar que estamos avanzando a paso firme en la reconstrucción de nuestro país. El estado de avance de los Planes Maestros, sumado a la inscripción de 260 mil familias en el registro de damnificados, la asignación de más de 23 mil subsidios hasta la fecha y las dos mil viviendas que en este momento están en proceso de construcción, nos hace estar en condiciones de afirmar que en esta primavera comenzará a florecer la reconstrucción”, declaró el 10 de agosto de 2010, todavía en

156 *Actualización de Instrumentos de Planificación Territorial (IPTs)*. Disponible en sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (www.minvu.cl). Consultado el 15 de agosto de 2012.

ejercicio, la ministra Magdalena Matte¹⁵⁷.

De esta forma la extitular de la cartera anunció que los Planes de Reconstrucción Estratégicos y Sustentables de Constitución y Juan Fernández estaban resueltos y adelantó que otros, como Licantén, Pelluhue, Talca, Talcahuano, Dichato, y 16 localidades costeras de la Región del Bío-Bío, estaban avanzando.

En la ocasión, según señala la nota del sitio web del Minvu, el entonces coordinador nacional del Plan de Reconstrucción Urbana del Ministerio, Pablo Allard, declaró que la elaboración de los Planes Maestros era “el resultado de una serie de metodologías innovadoras que no solo nos ayudan a soñar futuras ciudades, sino que también nos permitirán implementarlas de manera concreta para que las inversiones que se hagan hoy perduren por más años y generen una efectiva herramienta de desarrollo para los chilenos que las habitan”.

Un año más tarde, al finalizar esta tarea, el arquitecto anunció su renuncia y traslado al decanato de la Universidad del Desarrollo (UDD). El profesional, que desde marzo de 2010 tuvo a cargo la reconstrucción de las ciudades y pueblos dañados por el 27F, fue nombrado decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la UDD el 1 de julio de 2011, pero continuó en la coordinación nacional del Plan de Reconstrucción del Minvu hasta el 27 de agosto. En medio de críticas y felicitaciones ante el retraso de las metas y su nuevo puesto de trabajo, declaró desde su cuenta personal de *Twitter*: “Confirmado, el 27 de agosto cerramos la fase de planificación de reconstrucción con entrega de 130 Planes Maestros y asumo como Decano UDD”.

Según el sitio web de la Universidad del Desarrollo¹⁵⁸, Allard sigue “participando como asesor ministerial de reconstrucción urbana, así como en el desarrollo de la Nueva Política de Desarrollo Urbano, a partir de la experiencia de la reconstrucción”.

Los Planes Maestros son descritos como “la respuesta del Ministerio de Vivienda a

157 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, *Ministra Matte detalla estado de avance de Planes Maestros de localidades devastadas por el maremoto*. Disponible en sitio web del Minvu (www.minvu.cl). Consultado el 15 de noviembre de 2012.

158 *Nuevas autoridades en la Facultad de Arquitectura y Arte*. Disponible en sitio web de la Universidad del Desarrollo (www.udd.cl). Consultado el 15 de agosto de 2012.

la reconstrucción de las más de 900 localidades y ciudades que se vieron severamente afectadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero, abarcando no solo la construcción de viviendas, sino que, además, la tarea de repensar las ciudades y pueblos de manera integral, respetando su carácter e imagen urbana”. La entidad también informa en su portal sobre los objetivos de esta estrategia: “Reconstruir las ciudades afectadas por el tsunami, con un estándar superior al que tenían a la fecha de la catástrofe. Su producto más relevante es la construcción de una cartera de proyectos de inversión”.

Son ejercicios mediante los cuales el Ministerio ha generado un marco de acción para que “junto al Estado también participen en la reconstrucción fundaciones, universidades, grupos de amigos de localidades, empresas privadas y vecinos”. Los que son guiados por una “estructura que permita tener una visión de futuro sustentable, generar instancias de participación e instalar sistemas concretos para la gestión e implementación de la reconstrucción”, continúa explicando la nota informativa del gobierno donde es citada la exministra Magdalena Matte.

El Minvu estableció un “marco de acción” para canalizar “la ayuda de privados y organizaciones civiles creando Convenios de Asociación Público-Privado”. La formalización de los PRES no ha sido mediante la ley ni alguna reestructuración institucional, sino que a través de esta alianza “entre municipios, gobiernos regionales, empresas u organizaciones sociales, en que el Minvu actúa como garante y vela porque el resultado genere insumos para la programación de planes de inversión previa validación técnica, económica y social de éstos”¹⁵⁹.

Esta nueva política fue encargada por el Minvu “a diversas casas de estudios, como la UC, la Universidad Mayor y del Bío-Bío, y a consultoras particulares”, según explica el artículo ya citado de *La Tercera*. Esos nombres pueden ser cerciorados al revisar el detalle de los planes maestros del Plan de Reconstrucción del Ministerio, “Chile Unido Reconstruye Mejor”. En el documento se pueden encontrar más instituciones académicas tradicionales y privadas, así como también empresas de distinto tipo, todas participantes en el proceso de diseño o ejecución de los planes.

159 *Planes Maestros Interiores (PRE)*. Disponible en sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (www.minvu.cl). Consultado el 15 de agosto de 2012.

El Ministerio afirma¹⁶⁰ en el documento que el Plan “no impone, sino reconoce acuerdos de ayuda y colaboración liderados por los municipios, y convenios con empresas, fundaciones e instituciones”. También aclara que “no existe en los instrumentos de Planificación Territorial” y “se entiende como un ejercicio técnico prospectivo y participativo”. Por último, y a pesar de que se destaca gráficamente con rojo que no reemplazarán “el rol planificador del Estado”, precisa que “presentan alternativas y recomendaciones que serán insumos valiosos para la actualización de los Planes Reguladores y priorización de Planes de Inversión, previa validación técnica y social de estos”.

Delegar la planificación territorial

Esta estrategia para enfrentar la reconstrucción en el ámbito territorial ha sido criticada por urbanistas, arquitectos y científicos sociales, además de algunos políticos y las organizaciones ciudadanas surgidas ante la catástrofe. Esto porque los planes maestros de la reconstrucción reestructurarían en los hechos el rol del Estado y los privados en la planificación urbana de las localidades abordadas.

Walter Imilan del Observatorio de la Reconstrucción valora la existencia de planes maestros en tanto son instrumentos nuevos que suplen falencias de los planes reguladores, pero cuestiona su impacto y quiénes realmente planificarán la reconstrucción. “Es interesante su función porque establecen un nuevo instrumento de planificación territorial que antes no existía en Chile”, afirma.

A pesar de que el instrumento de planificación territorial clásico en el país es el plan regulador comunal e intercomunal, varias áreas no urbanas afectadas por el terremoto que no tenían planos reguladores ahora serán abordadas por estos nuevos instrumentos. Imilan cuestiona que si no es el Estado, el gobierno o los municipios, ¿qué o quiénes están planificando el territorio en estas zonas? dada la ausencia de nueva institucionalidad que aborde la emergencia y la reconstrucción, lo que implica que los planes maestros no sean vinculantes, no tengan presupuesto propio, ni un modelo de gestión clara.

160 *Planes Maestros de Borde Costero* (PRES y PRBC18). Disponible en sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (www.minvu.cl). Consultado el 15 de agosto de 2012.

A pesar de que entre las características que el gobierno quiere posicionar en relación a los Planes están el que “reconocen la autodeterminación local”, realizan “ejercicios de carácter no vinculante”, no reemplazan “el rol planificador del Estado”, su “relevancia” y “transparencia, los Planes, como estrategia de intervención territorial y reconstrucción, han sido cuestionados por su falta de institucionalidad y delegación del rol del Estado en entidades privadas.

Los urbanistas Iván Poduje y Roberto Moris, cuestionaron los planes maestros en la misma nota de *La Tercera*, porque “están sobredimensionados”. Poduje, socio de la oficina de urbanismo Atisba, afirma que “se traducirán en obras puntuales y quedarán como carteras de diseño a futuro. El plan maestro y el plan regulador no son vinculantes”, y agregó que son obras “muy espectaculares, pero no hay ninguna garantía de que se construyan por completo. Como se hicieron en muy poco tiempo están en un nivel muy primario”. Moris, quien es subdirector del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, opinó que para que los planes tengan validez, debe acelerarse la modificación de los planes reguladores.

“Son un pequeño laboratorio”, dice Imilan sobre esta nueva política territorial. A su juicio, son la jugada más osada que ha hecho el gobierno por implementar su lógica de Estado. Explica que los planes “tienen un mandante que no es el Estado, sino que es una empresa privada, tienen contraparte que puede ser el municipio o la intendencia, dependiendo de la Seremi, y tienen un contratista; son el clásico modelo de administración privada, ahora aplicado al diseño de la ciudad y las localidades”¹⁶¹.

Allegados al borde del río

Pasado el terremoto los habitantes de Constitución participaron en un proceso de votación simbólico. Este indicaría la aceptación de la población frente al Plan de Reconstrucción Sustentable (PRES), el que sería aplicado en la localidad.

Constitución alberga a cerca de 50 mil chilenos. De estos, solo cuatro mil quinientos dichatinos participaron en la votación del PRES, cuenta la exvocera del comité

161 Entrevista realizada a Walter Imilan por las autoras de esta Memoria. 5 de abril de 2012.

de los expropiados del borde río de la zona, la asistente social Carolina Manríquez¹⁶².

Después del terremoto el lugar donde está la vivienda de su familia fue declarado “zona inundable”, por lo que se les ha insistido en abandonar el sitio y permitir que el Estado los expropie. El PRES propuso un bosque de mitigación de olas para el borde río. La medida implicaría trasladar el hogar de Carolina Manríquez y sus vecinos.

La asistente social reclama contra la representatividad de la votación que organizaron las empresas Elemental y Celulosa Arauco (Celco). “Nosotros informamos a la comunidad y en una semana juntamos cinco mil firmas en contra de la expropiación. El PRES, en tres meses, y con todos los recursos a su disposición, solo hizo votar a cuatro mil 500 personas. Dicen que el 93 por ciento estuvo a favor del Plan, pero la gente que votó fue una minoría”, explica la exdirigenta.

En el sector cercano al centro de la ciudad, hay terrenos con varias viviendas y en cada una habita más de un grupo familiar. La exvocera afirma que más de 600 personas serán expropiadas.

Un Plan para Constitución

Según el PRES de Constitución las familias que tuvieran título de dominio recibirían un monto por la expropiación. La mayoría restante, los allegados, serían candidatos a viviendas sociales en la periferia.

La empresa Elemental ha sido un actor clave en el proceso del PRES. La entidad fundada por el excoordinador del Plan de Reconstrucción Urbana del Minvu, Pablo Allard, y el exsubsecretario de Vivienda de Sebastián Piñera, Andrés Iacobelli, diseñó el Plan.

Según el informe del Minvu “Chile Unido Reconstruye Mejor”, disponible en su sitio web¹⁶³, la tarea contó con la colaboración de la importante empresa Forestal Arauco, hermana de Celulosa Arauco que se encuentra al borde del mar de Constitución. Celco

162 Entrevista realizada a Carolina Manríquez por las autoras de esta Memoria. 11 de junio de 2011.

163 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, *Chile Unido Reconstruye mejor*. Disponible en sitio web del Minvu (www.minvu.cl). Consultado el 20 de junio de 2012.

cofinanció la consulta popular sobre el PRES, además de donar otros recursos durante el proceso.

En Constitución junto a propietarios y allegados residentes, hay viviendas de veraneantes. Para Carolina Manríquez, ante la expropiación y dependiendo del caso, se han defendido de distinta forma. “La gente que tiene recursos, como los veraneantes, pueden pagar abogados para litigios largos y conseguir que les paguen lo justo por su vivienda”. Pero familias como la de ella o sus vecinos pescadores, no.

Según la exvocera, el terreno donde vive junto a otras familias tiene 150 metros cuadrados y debieran pagarles “entre quince o 30 millones, pues en la ciudad no hay ningún terreno de características similares que esté bajo los 50 o 70 millones de pesos”. Señala que aunque la ministra Magdalena Matte “se comprometió a que la expropiación iba a cancelarles el valor comercial, no fiscal, del terreno”, ve difícil que cumplan.

Frente al escenario es pesimista. Piensa que al final, “por mucho que nos paguen, es desterrarnos de la ciudad. Las casi 600 personas que vivíamos aquí pasaremos del río y el centro a la periferia de Constitución. Y quizá ni nos paguen lo que en verdad valen nuestros terrenos”.

Celco Elemental

Elemental es una empresa asociada a la Compañía de Petróleos de Chile, Copec, y a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su fortaleza, destacan en el sitio web corporativo¹⁶⁴, es “la innovación y calidad en el diseño de proyectos de interés público e impacto social, para lo cual contamos con un equipo altamente capacitado en el desarrollo de iniciativas complejas, que requieren coordinación de actores públicos y privados y procesos participativos de decisión”.

Para Carolina Manríquez, los cofundadores de la compañía y exfuncionarios de gobierno relacionados a la reconstrucción, Pablo Allard y Andrés Iacobelli, “tienen intereses creados, aunque se hayan desvinculado de la empresa”. La exdirigenta afirma

164 Elemental, *Qué somos*. Disponible en sitio web de Elemental (<http://www.elementalchile.cl/>). Consultado el 20 de junio de 2012.

que Allard, desde su cargo en el gobierno y sus nexos en Elemental, ocupó sus influencias para intervenir en Constitución, hasta que se trasladó al decanato de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo.

La asistente social señala que la compañía construirá en la zona “un proyecto de viviendas sociales ‘tsunami resistentes’, mucho más cerca de la barra del río” que los hogares que serán expropiados.

La empresa más grande y con mayor intervención territorial y económica en la localidad costera es Celulosa Arauco. En la actualidad, después de su participación y financiamiento del diseño del PRES y las votaciones de su consulta, ha influido en el plano social y político del territorio.

Según los pobladores, Celco también tiene intereses creados en los proyectos posterremoto de la zona. Desde hace años la celulosa estima necesario unir el sector norte de la ciudad, donde está ubicada, con la salida sur, hacia la carretera. Esta conectividad se realizará en el mismo sector que ocupaban los expropiados, donde también se ubicará el bosque de mitigación y un paseo peatonal. Carolina Manríquez denuncia que ahí construirán conexión vial, a costa del traslado de los pobladores.

Celulosa Arauco es controlada por el gran grupo económico de la familia Angellini, que también es dueña de Copec; esta empresa está asociada a Elemental, entidad que diseñó la planificación territorial posterremoto en Constitución.

De prioridad a olvido nacional

En la actualidad, cinco familias todavía viven en el borde río de Constitución. Carolina Manríquez¹⁶⁵ es parte de una de ellas. La exvocera cuenta que “más allá de la voluntad de los habitantes del sector, la ley primó” y serán expropiados y trasladados.

Hay dos sectores que vivían al límite de la costa: La Poza y El Dique. Los habitantes del primero están postulando a un proyecto habitacional dentro del plano de la

165 Actualización de entrevista vía telefónica realizada a Carolina Manríquez por las autoras de esta Memoria. 27 de diciembre de 2012.

ciudad. Los de El Dique, que son 40 familias, serán trasladados a la periferia de Constitución y se repartirán en dos proyectos de viviendas: uno en un terreno que pertenecía a Bienes Nacional y otro en una superficie de la Celulosa Arauco. Ahí se edificará un “proyecto complementario” que beneficiará a damnificados y trabajadores de la empresa, detalla Carolina Manríquez desde Constitución.

Hoy los vecinos todavía esperan. “Se supone que el primer movimiento de tierra para construir los proyectos habitacionales era en octubre de 2012. No sucedió y lo postergaron a diciembre. Ahora avisaron que al final será en abril de 2013. No sé si cumplan”, manifiesta la exdirigente. Muchos siguen de allegados o arriendan con la ayuda del programa de subsidio estatal.

Mientras no haya una vivienda terminada las cinco familias que todavía resisten el traslado no aceptarán moverse de sus terrenos. “Casa por casa, llave por llave”, dice tajante la habitante del borde río. Con esto declara que por la fuerza de los hechos se trasladarán, pero solo cuando vean sus nuevas viviendas construidas y entregadas. Confían en la palabra de la serviu regional Clarisa Ayala, quien les aseguró que no serán removidos hasta que eso suceda.

Con el atraso de los proyectos habitacionales se posterga la construcción del parque de mitigación, los accesos y la doble vía que beneficiará la conectividad, el turismo y el traslado de materiales de la Celulosa Arauco. Sin embargo, Carolina Manríquez afirma que a mediados de 2013 se aprobará el proyecto del PRES Constitución. Y, basándose en el diseño hecho en colaboración entre Celulosa Arauco y Elemental, edificarán las obras en paralelo a los proyectos habitacionales.

Hoy vivir en el centro de la localidad costera es muy caro, afirma la asistente social. “Las viviendas pasaron de costar quince a 50 millones”. Esto ha provocado el desplazamiento paulatino de los residentes del centro a la periferia de la ciudad, pues muchos de ellos no pudieron reparar sus casas y prefirieron vender o dejar de arrendar en esa ubicación. El comercio y el turismo han copado la zona céntrica de Constitución.

El lunes 17 de diciembre el ministro de Vivienda Rodrigo Pérez Mackenna informó que 130 mil soluciones habitacionales para familias damnificadas ya fueron entregadas o

se están construyendo, y 66 mil están en reparación. Con esto faltarían por iniciar solo 26 mil.

Pero según informó Radio Cooperativa¹⁶⁶, las familias de Constitución, “denuncian desde la Región del Maule la lentitud con la que se han realizado las labores de reconstrucción. De hecho, dicen que 'con suerte' hay un 40 por ciento levantado”.

Alejandro Hormazábal, dirigente vecinal del sector de La Poza de Constitución, aseguró que falta preocupación por parte de las autoridades y que estarían distantes de cumplir la promesa de reconstrucción. "No hay nada concreto. Creo que la cifra que el gobierno ocupa la están maquillando con todos los subsidios de arriendo que entregaron a la gente que está en aldeas. De prioridad nacional, pasamos a olvido nacional", manifestó.

El desarme de El Molino

En Dichato, localidad costera de la Región del Maule, se construyeron cuatro campamentos después del terremoto. El Molino que albergaba a 500 familias, El Esfuerzo con unas 30, Iglesia donde residen 40 y Nuevo Amanecer en el que habitan 40 grupos familiares.

Recién en julio de 2012, más de dos años después de la catástrofe, comenzó el desmantelamiento de El Molino. Este campamento, al igual que el resto, se pensó como transitorio para enfrentar el período de emergencia, pero terminó siendo el más grande del país, con más de dos mil damnificados.

Felipe Kast, exministro de Planificación y actual delegado presidencial para aldeas y campamentos, junto con el intendente del Bío-Bío, Víctor Lobos, y el director Serviu Sergio Jara, acompañaron el proceso. Cerca de 90 militares iniciaron las labores. Los pobladores se trasladaron hacia sus nuevos hogares permanentes, en la Villa El Sauce de Dichato.

166 Radio Cooperativa, 18 de diciembre de 2012. “Damnificados de Constitución y Talcahuano desmintieron avances de reconstrucción entregados por Gobierno”, *Cooperativa.cl*.

Lorena Arce es profesora, dirigente del Movimiento por la Reconstrucción Justa en la Región del Bío-Bío y una de las propietarias que se resistieron a la expropiación de sus viviendas en el borde costero de Dichato. Según ella, las viviendas que se entregaron son de mala calidad y no cumplen con los parámetros de una vivienda digna.

En su paso por Chile, en abril de 2012, la relatora de las Naciones Unidas Raquel Rolnik, afirmó que las construcciones eran muy pequeñas en relación a estándares internacionales, incluso para edificaciones sociales. Según Lorena Arce, “la maldad más grande es la reconstrucción en el terreno al frente de El Molino, ya que tiene hoyos o socavones mineros de carbón. O sea, las casas se ubican en zona de alto de riesgo”.

Los pobladores de los otros tres campamentos, El Esfuerzo, Iglesia y Nuevo Amanecer, siguen esperando sus soluciones habitacionales definitivas. En sus mediaguas pasaron el tercer invierno posterremoto.

Resistiendo la expropiación

Lorena Arce ha encabezado la oposición a la expropiación. Aunque trabaja como profesora en Concepción, toda su vida ha residido en el sector Litril de Dichato. Su hogar destruido tenía acceso directo al mar.

Hasta mediados de 2011 quedaban seis familias del sector resistiendo a la expropiación de sus terrenos en el borde costero, por ser “zonas inundables”. Durante 2011 y parte de 2012 quienes aceptaron el acto, pero no estaban de acuerdo con el monto ofrecido, judicializaron el conflicto. En la actualidad solo una minoría se sigue oponiendo.

Que casi todos aceptaran al final ceder sus hogares se explica, según la profesora, porque la mayoría de los propietarios son veraneantes o tenían sus casas como segunda residencia, y viven en Concepción, Santiago o Chillán. “No tienen ningún sentimiento de arraigo porque no han crecido ni vivido aquí. Los históricos son otros, llevamos generaciones habitando siempre en Dichato. Algunos también han aceptado, y no los cuestiono, porque llevamos mucho tiempo luchando”, acota la profesora desde la localidad costera.

Al principio 50 familias se opusieron a entregar sus terrenos. De éstas, solo quince eran dichatinas, las que se negaron por más tiempo. Lorena Arce cuenta que en la actualidad dos familias de todo el grupo original siguen en la resistencia a la expropiación: su mamá y su tía.

La dirigente acusa que la medición de los recintos la hizo una pobladora, “Claudia González, que no es experta en el tema”. Denuncia que solo quedan retazos de los terrenos porque el SERVIU ha expropiado “a su arbitrio”. Señala que “los han vendido a sus propios amigos, operadores del gobierno de Sebastián Piñera”. Para su pesar, a quienes viven en el borde costero no les ofrecen “nada a menos que seas de su línea política, como las dirigentes de El Molino que son privilegiadas”.

En el plano legal, después de que interpusieron la demanda en tribunales con peritos en el área, según la profesora, “está todo quieto”. Salvo por un incidente: las autoridades trataron de tomar posesión de las tierras, pero “no los dejamos, por lo que el acto no se ha realizado”, afirma Lorena Arce.

Ante los casos de expropiaciones de terrenos con viviendas en los bordes costeros, desde el Observatorio de la Reconstrucción, Walter Imilan se pregunta “¿quiénes son los que van a reconstruir el borde costero de Dichato?, ¿van a ser capitales de afuera?, ¿los dichatinos de ser empresarios pasarán a ser empleados?, ¿tendrán que migrar? Esas son las preguntas de fondo y nadie está pensando en sus consecuencias, ni desde el Estado ni desde el gobierno”¹⁶⁷.

Por estos días Lorena Arce sigue arrendando una vivienda junto a su familia en Dichato. No quiere abandonar el lugar, aunque le signifique mayores gastos e incomodidades. Toda su vida ha vivido ahí y tiene la esperanza de seguirlo haciendo, ojalá en su antiguo hogar, después de vencer la expropiación y repararlo.

Director del SERVIU expropia a un familiar

En medio del largo y polémico proceso de expropiaciones en la zona, un hito azuzó aún más los cuestionamientos de los dichatinos hacia el gobierno.

167 Entrevista realizada a Walter Imilan por las autoras de esta memoria. 5 de abril de 2012.

Según una denuncia interpuesta por el senador del Bío-Bío Alejandro Navarro, en mayo de 2011, ante la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, Sebastián Salas, exdirector del Serviu del Bío-Bío, compró un terreno a sobreprecio a través de la entidad.

El acto tendría un agravante que lo trasladaría al recurrente campo de los conflictos de interés del nuevo gobierno: la superficie era de unas familiares de Salas. El terreno les pertenecía desde 1998, cuando la adquirieron por un valor cercano a los 124 millones de pesos. En 2011, durante la gestión del Serviu de Sebastián Salas, las mismas dos hectáreas fueron compradas en mil 24 millones de pesos, según la denuncia del militante del MAS.

Lorena Arce reclama porque es “un terreno que está a cinco cuadras del mar, al lado del Sector Litril, los mismos terrenos que están expropiando por seguridad de la población”. Indica que a “un grupo de allegados les estaban cobrando por una superficie que está en altura, 500 millones de pesos y otro en 700 millones de pesos. Mientras que los parientes de Sebastián Salas reciben dos millones de dólares”.

Para la dirigente hay varias irregularidades y contradicciones en el caso: “primero, es un terreno muy inundable. Segundo, la autoridad le compró a un familiar, el monto es exagerado, y más encima nos expropián a nosotros porque somos 'inundables', pero en ese terreno que está al lado de nosotros, igual construirán viviendas”.

Sebastián Salas negó de forma enfática a Radio Bío-Bío¹⁶⁸ que la situación cayera en la ilegalidad. En mayo de 2011 afirmó que él sabía que el terreno era de una familiar y que lo puso en antecedentes, “pero mi equipo jurídico me señaló que no había impedimento legal”. Manifestó que “no hay nada que puedan probar donde haya una presunta irregularidad”. También aseguró que no tuvo influencia en la determinación del precio del terreno; y que esa materia estaba a cargo de los “peritos independientes”, según su versión de la situación.

168 *Soychile.cl*, 19 de mayo de 2011. “Sebastián Salas ‘No hay nada en que se pueda probar alguna irregularidad’”, Manuel Muñoz.

Ante las dudas que generó la cercanía al mar de la superficie expropiada, Salas argumentó que “se consideraron criterios como su buena ubicación y apropiado espacio para desarrollar un proyecto de viviendas sociales para 272 familias”. Además destacó la conectividad y cercanía a los servicios sanitarios de la zona de la propiedad.

De todas maneras, el desempeño de Sebastián Salas en el Serviu ya era materia de análisis desde el gobierno central. Después del incidente fue reemplazado por Sergio Jara, extitular de la Corfo en el Bío-Bío.

En el corazón de Talca

En la Región del Maule, tanto en la costa como en su interior, miles de damnificados se enfrentaron al duro trance de la reconstrucción sin el apoyo del Estado.

En Talca los mayores problemas los tuvieron quienes habitaban en los valiosos terrenos ubicados en el centro de la ciudad. “Yo creo que muchas personas van a tener que vivir mucho tiempo con desesperación. Vamos a llegar a los cinco años con gente en mediaguas, porque hay muchas propiedades que se cayeron que son heredadas y ningún subsidio va a beneficiar esa situación”, señaló el alcalde de Talca Juan Castro al periódico dominical gratuito *La Mira* de Talca, el 3 de Octubre de 2010.

La frase suena pesimista pensando que cuando la pronunció solo habían transcurrido ocho meses desde el terremoto, pero no podía el alcalde pro UDI estar más cerca de lo que a tres años del sismo, ocurriría.

A juicio de Marcos Peña¹⁶⁹, dirigente del barrio Santa Ana ubicado en el centro histórico de Talca, el abandono del gobierno confirma que para la autoridad este es el momento de sacarlos de los terrenos, donde el valor del metro cuadrado fluctúa entre las cinco y las quince Unidades de Fomento, es decir entre los 110 y los 329 mil pesos.

Las familias que todavía no venden ni quieren soluciones habitacionales alejadas del centro, se aferran al lugar en el que han vivido por más de 16 años. “La autoridad se

169 Entrevista realizada a Marcos Peña por las autoras de esta Memoria. 11 de junio de 2011 en Talca.

limita a decir que los caminos para obtener un subsidio están ahí”, indica Peña en la entrevista concedida.

El dirigente recuerda una reunión que sostuvo en marzo de 2011 con la exseremi de Vivienda, Clarisa Ayala, actual directora del Serviu de la Región maulina. “Nosotros le discutíamos que queríamos quedarnos en nuestros barrios, que esa es la riqueza más grande que tenemos. Ella nos respondió 'miren, ustedes han elegido el camino difícil, las soluciones son fáciles: inscribáse en un subsidio, ya se están construyendo barrios en la periferia’”. El valor de un terreno en los límites de Talca es de 0,20 Unidades de Fomento, es decir, cuatro mil 380 pesos el metro cuadrado.

Los pobladores de todo el centro histórico de la ciudad que vivían de allegados o arrendatarios se organizaron en seis comités de los Sin Tierra, que agrupan a 250 familias.

Al comité del Barrio Santa Ana, que representa Marcos Peña, aún no ha llegado ningún subsidio. Ellos postulan en grupo, como comité y no como particulares. Por este motivo, lo que esperan es el subsidio en bloques. “Nosotros nos queremos quedar en el centro histórico, no pedimos que nos construyan casas, porque sabemos que es muy caro, pero sí apostamos a pequeños conjuntos habitacionales”, argumenta Peña.

Los tira y afloja con la autoridad

La política del Minvu sobre estos conjuntos dice que son gestionados por entidades externas al Serviu, las Empresas de Gestión Inmobiliaria Social, más conocidas como EGIS. Estas son de carácter privado y nacen como respuesta a una problemática específica de la ciudad relacionada con la necesidad habitacional y de mejoras de las condiciones de vida de las familias damnificadas. Estas, según los registros del Minvu, ascienden en todo el país a 285 mil 500 familias postulantes, de las cuales 220 mil corresponden a inscritos hábiles.

La EGIS del Barrio Santa Ana es la empresa Casa Propia, que en junio de 2011 tenía recibidos y revisados todos los requisitos sociales para que las personas pudieran postular a un subsidio.

Con los subsidios para construir vivienda y para mejorar y comprar el terreno, el resultado de los antecedentes reunidos fue que la totalidad de los pobladores del Barrio Santa Ana alcanzaba a reunir las 700 Unidades de Fomento necesarias para la postulación. El segundo paso era que la empresa de gestión inmobiliaria elaborara un proyecto habitacional en determinado terreno, el que se ingresa al Serviú para que éste le dé el visto bueno.

Haber sorteado el primer paso sin obstáculos trajo optimismo a los pobladores. Sin embargo, hoy los problemas provienen de la compra de terreno, ya que necesitan dinero en efectivo para hacer el trámite. Marcos Peña señala que tienen terrenos vistos en el centro histórico que si se sustentan con el subsidio que les darían “alcanzaría para comprar un terreno y construir proyectos habitacionales de dos o tres pisos”, según la información que le ha dado la empresa constructora.

El Barrio Seminario, también en el centro histórico de Talca, trabaja con la misma empresa de gestión pero, a diferencia del Barrio Santa Ana, ellos ya tienen sus conjuntos sociales en construcción. El motivo único, según Peña, es que tuvieron un inversionista que compró el terreno y está dispuesto a recuperar su dinero apenas los pobladores reciban los subsidios. Un préstamo que su comunidad no ha conseguido. Mientras, pasa el tiempo y se acaban los terrenos a precios bajos en el centro histórico de la ciudad.

En junio de 2011 los pobladores se reunieron con el nuevo ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna. Le solicitaron que el Minvu comprara los terrenos, los reservara y se los pasara al Serviú hasta que se elaborara el proyecto de edificación. La respuesta del ministro fue el compromiso de gestionarles una reunión con el coordinador nacional de reconstrucción del Minvu, Pablo Ivelic.

Meses antes, el Minvu lanzó su plan de reconstrucción, con el cual buscaba preservar la imagen urbana, “donde predominan las casas de fachada continua y arquitectura colonial”, señaló el documento.

Igual que otras 137 localidades perjudicadas por el terremoto, el plan de reconstrucción de Talca fue diseñado y financiado mediante donaciones del sector

privado, como informa el sitio web del Minvu. “El objetivo del plan es reconstruir la urbe con un estándar superior al que tenían a la fecha de la catástrofe. Los planes fueron desarrollados por consultoras mediante convenios de colaboración con entidades locales”, señala el Ministerio. Indica que el Plan Maestro de Reconstrucción Estratégico (PRE) de Talca ha propuesto importantes proyectos para la zona.

Enfocados en primera instancia en los barrios Seminario, Oriente y Santa Ana, el Serviu identificó 113 familias con viviendas destruidas y que querían volver a levantarlas en el mismo terreno donde vivían. Ellos trabajaron con la consultora Polis en un diseño que preservaba la fachada del casco histórico de Talca.

Arquitectos del Minvu concluyeron el diseño y elaboraron los proyectos de arquitectura, cálculo y especialidades. Con estos antecedentes el Serviu Maule licitó la ejecución de las obras. En teoría a fines de 2010 se daría inicio a las faenas de reconstrucción de las 113 viviendas.

Pero, al cumplirse dos años del terremoto y tsunami Marcos Peña indica¹⁷⁰ que “la realidad es que no tenemos una solución definitiva. Solo algunos atisbos de acercarnos a soluciones, pero no hay reconstrucción en realidad”.

El 28 de febrero de 2012 un grupo de representantes de los comités El Adobe, Manuel Larraín, Fénix, El Prado y Santa Ana realizaron una manifestación en el frontis de las dependencias del Serviu de Talca. El grupo elevó paraguas negros en señal de duelo, destapó un cartel con un mensaje alusivo a la lentitud de la reconstrucción y levantó pancartas exigiendo soluciones por la vivienda definitiva, según recogió en su crónica el portal web de la Región del Maule, *Vivimos la Noticia*.

La protesta fue pacífica e incluyó breves discursos en contra del gobierno. La vocera del Edificio Manuel Larraín, Ana María Lepe expresó que llevan “dos años esperando una reconstrucción que todavía no llega. Creemos que esto podría ser más rápido y eficiente, pero hasta ahora seguimos esperando una solución”. El Edificio Manuel Larraín contaba con 112 departamentos, los cuales colapsaron la noche del terremoto y

170 Actualización de entrevista telefónica realizada a Marcos Peña por las autoras de esta Memoria. 10 de julio de 2012.

no se han vuelto a reconstruir.

Hasta pasadas las cinco de la tarde del 28 de febrero, los manifestantes aguardaron la presencia de la directora regional del Serviu, Clarisa Ayala. Pero según funcionarios del servicio, la autoridad se había retirado del lugar a primera hora para cumplir con asuntos personales.

“Mayoritariamente lograron lanzar a las familias a la periferia, en Santa Ana serían solo doce las que estarían quedándose en el barrio”. Es el relato de Marcos Peña a meses de cumplirse el tercer aniversario del terremoto y tsunami. Él sigue viviendo en el *container* que su hermano le prestó cuando ocurrió el terremoto y perdió su casa.

La situación en Talca es de abandono, así la describe Peña, que continúa como dirigente del Barrio Santa Ana, el único de los siete comités que se mantuvo en funcionamiento, aunque de las 70 familias que lo componían solo doce recibirán soluciones en el centro de Talca. Las 58 restantes firmaron por soluciones habitacionales en sectores aledaños a la ciudad.

La iniciativa de la empresa de gestión inmobiliaria, que reunió los subsidios para armar proyectos sociales y comprar terrenos en el centro histórico resultó, a juicio de Peña, solamente una estrategia para tenernos tranquilos y hacer pasar el tiempo.

“La única fuerza que hacíamos nosotros era por intermedio de los comités. Cuando se desarmaron los vecinos quedaron a la deriva y cada uno optó por asegurarse con una casa aunque fuera en la periferia. Eso era más seguro que seguir en una lucha que no daba frutos”

Las familias de Santa Ana que recibirán soluciones en el centro talquino están ingresando al proyecto Manuel Larraín, en construcción desde antes del terremoto.

Por condición socioeconómica, Marcos Peña también debería ingresar a ese proyecto. Pero en su caso el Serviu considera que no cumple un requisito imprescindible. “Me están rechazando el beneficio del subsidio porque dicen que yo soy solo. Y claro, después del terremoto tuve que mandar a mi hija a vivir a Santiago y eso

automáticamente me saca de la condición de beneficiario. El terremoto no solo me quitó mi vivienda sino que también me quitó a mi hija, que lleva dos años y medio viviendo en Santiago con la mamá y cuando le digo que venga a vivir acá, me dice que no quiere”¹⁷¹, relata conmovido.

El día que se realizó esta entrevista Marcos Peña esperaba reunirse con Alejandra Concha, encargada de subsidios del Serviu del Maule para explicarle su situación. La reunión era al mediodía y pasadas las dos de la tarde aún no lo recibían. “Me dejaron plantado, eso te da indicio de cómo ha sido todo este proceso. Yo sigo acá en el Serviu perdiendo mi tiempo y eso lo llevo haciendo tres años. A uno lo van manejando por el desgaste, van haciendo que perdamos las esperanzas cada día más, lo que para ellos es súper cómodo porque se les termina el problema”, reflexiona.

Reconstrucción sin Estado

La ONG Sur Maule ha trabajado temáticas derivadas de la reconstrucción y vinculada a los actores sociales de la región. A juicio del sociólogo Francisco Letelier, quien trabaja en el área de vinculación social de la organización, resulta lógico que en Talca funcione el “mercado de la reconstrucción”, dado que la Municipalidad está en manos del empresario y alcalde pro UDI, Juan Castro, y la Intendencia a cargo de un gran empresario inmobiliario de la zona: Rodrigo Galilea.

En la tercera edición del Plan Nacional de Reconstrucción del Minsu se establece un criterio que anuncia la ausencia del Estado. “El despliegue de este plan pondrá a prueba a muchas comunidades y liderazgos locales y el gobierno estará atento para acudir y ayudar a todos quienes se vean afectados por la complejidad de la tarea”. En la frase el gobierno se establece como vigilante de la tarea que la comunidad realice, sin asumir un rol preponderante. Pero lo que no está dicho, a juicio de Francisco Letelier, es que “existe otro actor, uno que en el contexto neoliberal se constituye en el principal: el mercado, que durante los últimos 30 años ha tenido un rol central en la producción de ciudad en Chile y que, como es lógico, lo querrá tener también hoy”, afirma¹⁷².

171 Actualización de entrevista realizada a Marcos Peña por las autoras de esta Memoria. 21 de diciembre de 2012.

172 Entrevista realizada a Francisco Letelier por las autoras de esta Memoria. 9 de junio de 2011.

En términos de proyección de los territorios y relacionado con la lógica competitiva que se le quiere inyectar al proceso de reconstrucción, el Ejecutivo señaló que “los conflictos y oportunidades que Talca ha arrastrado por años son la clave para gatillar procesos de renovación y rehabilitación urbana, que acompañen la causa de la reconstrucción con una visión de desarrollo, para hacer la ciudad más atractiva y competitiva”.

La ONG Sur Maule elaboró, en mayo de 2011, el primer balance ciudadano de la reconstrucción llamado “Talca posterremoto, el centro histórico en disputa. Modelo de Reconstrucción, Mercado Inmobiliario y Actoría ciudadana”. En él trabajaron profesionales multidisciplinarios de la ONG y de la Escuela de Líderes Sindicales de la ciudad, que funciona al alero de la Corporación Sur.

Más del 20 por ciento de la superficie total de Talca presentó severos daños con la catástrofe y quince barrios resultaron con un promedio del 60 por ciento de sus viviendas destruidas. La ciudad se vio enfrentada a cambios radicales que requerían un trabajo mancomunado de la sociedad civil y el Estado. Eso, desde el sentido común de quiénes son los actores que primero debiesen operar ante un desastre natural.

Sin embargo, como consta en el Plan de Reconstrucción del Minvu 2011, y como lo había anticipado la ONG Sur Maule, “el diseño de las viviendas será desarrollado por la consultora de arquitectura y urbanismo Polis, que será financiada por la empresa El Bosque S.A.”, propiedad del empresario Juan Hurtado Vicuña, quien junto a su familia posee una de las fortunas más abultadas del país.

En este contexto, el Plan propone, a juicio del gobierno, una mirada distinta de la reconstrucción: recuperar más que solo reconstruir y esta tarea quedaría en manos privadas.

El catastro municipal utilizado por el PRE Talca localiza la concentración del daño en el casco antiguo de la ciudad. Esta zona es la que la ONG Sur Maule ha llamado la “ciudad democrática”, dado que uno de sus atributos es conjugar heterogeneidad socio económica, diversidad funcional, calidad urbana y alto valor de suelo, indica Francisco Letelier.

La arquitecta Constanza Sateler lideró el equipo urbano que desarrolló el plan de recuperación urbana de Talca. En entrevista con la revista digital *Planeo*, desarrollada por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, destacó que el grupo Hurtado Vicuña “quiso regalarle a la ciudad un Plan maestro de reconstrucción, porque tienen un lazo afectivo con estas tierras”.

El proyecto de reconstrucción “donado por el grupo” contempla cuatro proyectos “detonantes”, asociados a inversiones privadas para el uso público.

La arquitecta señala que una de las formas bajo las cuales se daría la reconstrucción de viviendas en Talca sería a través de las empresas “que tienen reservas de terrenos en la periferia, lo que constituye el grueso del negocio inmobiliario de la ciudad”.

De bajo perfil público

Juan José, Pedro, José Ignacio, Nicolás, María Mercedes y María Victoria, los seis hermanos Hurtado Vicuña, avanzaron a paso firme desde la privatización de empresas del Estado durante la dictadura militar. Hoy son uno de los grupos con mayores campos de acción en Chile. Su diversificación es indiscutida, puesto que tienen presencia en los sectores financiero, de seguros, minería, telecomunicaciones, inmobiliaria y educación.

La periodista María Olivia Mönckeberg relata en su libro *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*¹⁷³, que el grupo comenzó a desarrollarse a fines de los '70, cuando Manuel Cruzat invitó a Juan Hurtado Vicuña a incorporarse a su *holding* Forestal, con un aporte de capital de 200 mil millones de dólares. Visionario, Hurtado Vicuña se retiró poco antes del colapso de la empresa y vendió su participación en cuatro millones de dólares.

El ingeniero civil Juan Hurtado Vicuña es el líder de este poderoso grupo y según diversos rankings, es quien entre sus hermanos contabiliza más directorios de empresas.

173 María Olivia Mönckeberg, *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*. Ediciones B, Santiago, 2001.

En tiempos del régimen militar mantuvo un perfil bajo, pero su opinión era muy escuchada en las altas esferas del gobierno. En su libro, María Olivia Mönckeberg señala que el empresario fue uno de los hombres claves en el proceso de privatizaciones de las empresas estatales y en el control del poder económico que se configuró después.

La actividad financiera de Hurtado Vicuña se intensificó en la década del 70 desde que ingresó a la empresa energética Endesa, donde estuvo hasta 1982. En Chilectra fue director desde 1977 hasta 1981. En los 80 fue el primer presidente de Chilemetro. Con posterioridad participó en la privatización de Chilquinta, una de las tres empresas en que el equipo económico de la dictadura dividió a la antigua Chilectra Metropolitana (Chilmetro). Junto a Eduardo Fernández León tomó el control de la empresa eléctrica que provee de energía a la Región de Valparaíso.

Hacia fines del gobierno militar, Juan Hurtado se benefició con otra privatización poco conocida: el yacimiento Punta de Cobre, que era de la Empresa Nacional de Minería (Enami) y que pasó a ser controlada por Hurtado en sociedad con Fernández León. Bajo la denominación "Pucobre" el yacimiento ubicado en la Región de Copiapó es hoy una compañía minera de ambos grupos.

Fernández de León y Hurtado Vicuña también controlan Consorcio Nacional de Seguros, entidad financiera que cubrió por menos del monto real de mercado el departamento de Marco Ortiz y dos de sus vecinos del colapsado edificio Don Luis de Maipú. Por esta razón hoy siguen pagando dividendos del crédito hipotecario, a pesar de que fue demolido en 2011.

En defensa del adobe

Como en el caso del centro de Talca, el histórico Barrio Yungay de Santiago poniente siempre ha sido acechado por empresas constructoras, sobre todo después del auge de los edificios en altura. Tras el terremoto, este interés creció.

Después de mucho trabajo, en mayo de 2008 el Comité de Defensa del Barrio Yungay ingresó al Consejo de Monumentos Nacionales su expediente. El 14 de enero de 2009 el Barrio fue declarado Zona Típica, lo que frenó a las inmobiliarias interesadas en

construir en el sector.

Cuando ocurrió el terremoto, los vecinos se mantuvieron tranquilos, ya que la mayoría de sus casas no sufrieron daños importantes, según la licenciada en historia y dirigente vecinal del sector, Rosario Carvajal. "De los siete mil inmuebles protegidos, hay cerca de 200 dañados y solo 91 de ellos en estado grave. Me impresiona la calidad de su construcción: son resistentes a terremotos, incendios y al descuido de los propietarios", señala¹⁷⁴.

Hoy en el Barrio Yungay, además de propietarios históricos, la mayoría adultos mayores, habitan inmigrantes y personas de escasos recursos que llegan a arrendar por piezas. El cuidado de las casas no es el mejor. Siete meses después del terremoto, recuerda Rosario Carvajal, los afectados se dirigieron al municipio para pedir ayuda en la reparación de sus casas, pero les cerraron la puerta en la cara diciéndoles que tenía un costo de cuatro millones de pesos.

Los vecinos han optado por exigir que la reconstrucción y reparación se haga con adobe, ya que los subsidios no alcanzan para construir una casa sólida, debido al gran tamaño de los terrenos. En caso de tener que reconstruir una parte del costo tendría que correr por cuenta de los propios afectados.

Christian Matzner, de la Comisión de Arquitectura del Consejo de Monumentos Nacionales, está de acuerdo con la construcción en adobe. "Yungay data de mediados del siglo XIX, son construcciones antiguas que están en pie, y que han resistido no solo este sismo, sino todos los anteriores. No hay que condenar al adobe; un tercio del mundo está construido con barro. Lo importante es mantenerlo", señaló el arquitecto a *El Mercurio* en marzo de 2010¹⁷⁵.

Para los vecinos, la batalla del adobe se ha convertido en una lucha por la identidad. Los edificios y casas históricos del Barrio siguen sin tener ayuda del gobierno. Lo único que han conseguido es un subsidio de 300 a 500 mil pesos del municipio de Santiago.

174 Entrevista realizada a Rosario Carvajal por las autoras de esta Memoria. 3 de mayo de 2012.

175 *El Mercurio*, 8 de marzo de 2010. "Edificios patrimoniales que se resisten a caer", Romina de la Sotta y Víctor Soto.

Hasta el 20 de octubre de 2011 estuvo abierta la postulación a la segunda etapa del Programa de Apoyo a la Reconstrucción del Patrimonio Material. Esta iniciativa durante 2010 solo financió proyectos en las regiones damnificadas. Organizaciones sociales y especialistas aseguraron que la primera etapa fue deficiente y que los avances se deben en su mayoría a la organización ciudadana preocupada de la recuperación de los edificios dañados.

Francisco Letelier de la ONG Sur Maule, señala que en los casos de las zonas más antiguas o cascos históricos de Talca y Barrio Yungay ha sido difícil que se valore el patrimonio. El proceso de reconstrucción está condicionado por el precio del suelo y las lógicas del mercado inmobiliario: "En Talca hay tanta desorientación como en el Barrio Yungay, en ambos se ven los espacios patrimoniales como una oportunidad para posicionarse en los centros históricos", dice.

El sociólogo afirma que el tema patrimonial "está cruzado por cómo los habitantes han construido una cierta manera de habitar. Consideramos que las políticas públicas de reconstrucción que se han aplicado en estas zonas han sido pobres y que no han incorporado como variable el modo de uso del territorio", explica Letelier.

Zona típica arrasada

En 2010 los vecinos de Barrio Yungay consiguieron ser declarados habitantes de una zona típica. El origen de la organización que lideró el proceso se sitúa en 2005. Rosario Carvajal lidera al grupo desde sus inicios y recuerda que el Consejo de Monumentos aceptó proteger 113 hectáreas de 170 que propusieron. "Lo logramos un año antes del terremoto y nos ayudó porque impedía la demolición total, que fue lo que pasó en otras zonas", rememora la licenciada en historia.

Pero el 30 de abril de 2012, contraviniendo el espíritu de una zona típica, el Consejo de Monumentos Nacionales otorgó permisos de demolición de cinco inmuebles ubicados en el corazón del Barrio Yungay.

La inmobiliaria Emarco, bajo la excusa de un mal estado de conservación, se llevó

los derechos. Según cuentan los vecinos afectados, la empresa estaría demoliendo desde enero de 2011, mucho antes que fueran otorgados los permisos.

Acusan que la compañía ha actuado de manera ilegal y sin fiscalización. Dicen que incluso podría ser responsable del estado de deterioro de las propiedades. “Lo que no logró el terremoto de 2010, lo están logrando las resoluciones emitidas desde la institución estatal que debiera proteger su patrimonio”, resume Rosario Carvajal. Agrega que la inmobiliaria compró predio por predio en el Barrio y ya tiene casi la mitad de una manzana. “Eso es típico. Emarco se jactaba de que le daba lo mismo la zona típica, porque ellos hablaban con las autoridades y con eso bastaba”, señala.

Desde diciembre de 2011 los vecinos denunciaron ante la Dirección de Obras Municipales de Santiago la irregular demolición que estaba realizando Emarco. Cuando los vecinos reclamaron, en la municipalidad les dijeron que no había ningún permiso asignado para demoler. Pero una copia del documento que obtuvieron el 3 de mayo de 2012 demostró que la autoridad comunal estaba al tanto de los planes.

Seis familias serán expulsadas de las casas que ahora pertenecen a Emarco. Son casi 30 personas, en su mayoría inmigrantes. La dirigente vecinal señala que tienen miedo. “Cada vez que sentimos sirenas de bomberos, nos asustamos, porque nos han quemado esquinas del Barrio. No me extrañaría que a las seis familias que están resistiendo, alguna de estas noches las quemen. Tenemos testimonios de vecinos que han visto cómo les prenden fuego a sus casas desde afuera”.

Sin planes del gobierno

Los hechos han demostrado que la declaración de zona típica no ha servido para proteger el Barrio. No ha implicado ningún beneficio para Yungay, peor aún, sienten que les ha traído abandono total de parte del gobierno de Sebastián Piñera. “No recibimos ayuda, ni siquiera un litro de agua mineral”, reclama Rosario Carvajal.

Las viviendas dañadas de manera importante por el terremoto siguen con las grietas al aire y moradores dentro. Las que sufrieron perjuicios menores se han reconstruido a costa del endeudamiento de sus habitantes, pero la capacidad de pedir

préstamos en el mercado formal es escasa y la mayoría echó mano a los ahorros.

A la dirigente le sorprende la escasa voluntad política del gobierno. “Nunca nos presentaron nada, nosotros hicimos una propuesta y ellos no mostraron voluntad política para implementarla. Toda la iniciativa la hemos tenido nosotros”, acusa en una sede social del antiguo barrio capitalino.

Previo al terremoto los vecinos propusieron un plan de gestión que era abordado en mesas de trabajo con el municipio. Pero antes de que se cumplieran dos años de la tragedia, el alcalde de Santiago de ese entonces, Pablo Zalaquett, interrumpió la mesa de forma unilateral. Según Rosario Carvajal, a ellos no les avisaron ni dieron explicaciones: “Ahí quedó todo, gastamos dos años de nuestro tiempo y nos dimos cuenta de que no hay la voluntad política”.

La dirigente afirma que no abandonarán la lucha por su barrio. Dice que su heterogénea comunidad de adultos mayores, parejas jóvenes, inmigrantes y personas de pocos recursos, seguirá defendiendo el barrio que los acoge, a pesar de que no cuenten con la protección del Estado.

CAPÍTULO VI

PIÑERA WAY

Meses después de que el país enfrentara el terremoto de marzo de 1985, comenzaron las privatizaciones de empresas públicas. Iansa, Soquimich, Chilectra, Entel, y otras, fueron repartidas entre sociedades de la época, asesores afines o activos participantes del régimen dictatorial.

Cuando terminó la dictadura y después de 17 años el gobierno de Patricio Aylwin conoció la situación por la que atravesaba el país y se encontró con las arcas fiscales debilitadas e incapaces de desarrollar políticas públicas. El Estado tenía menos facultades y poder. Y pese a que muchos lo esperaban, no hubo revisión de las privatizaciones de aquellas grandes empresas consideradas estratégicas.

Tampoco había recursos para construir infraestructura. En ese escenario, ante la necesidad de nuevas vías para Chile, el modelo de concesiones apareció ante el gobierno como la mejor expresión del nuevo tipo de Estado impuesto por el régimen militar. De planificador y ejecutor, pasó a ser espectador de las grandes obras. En vez de garantizar los derechos sociales, comenzó a subsidiar programas de protección social que permitieron, con relativo éxito, suavizar los márgenes más descarnados del tejido social en el país. El Estado se retiró a administrar los excesos del mercado.

Desde los 90 el crecimiento económico ha sostenido las políticas públicas asistenciales en Chile. La necesidad de reformas redistributivas que se escucharon en los meses iniciales del primer gobierno democrático postdictadura, pronto se acallaron y el Estado subsidiario, vía financiamiento focalizado, licitaciones y concesiones, estableció la relación entre los recursos públicos y la población.

Amigos y conocidos

Antes de ser ministro de Obras Públicas de Patricio Aylwin, el ingeniero comercial

de la Universidad de Chile, y exdirigente del Partido Alianza Liberal (PAL), Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, prestó servicios de consultoría a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Desde el nuevo gobierno postdictadura mantuvo un estrecho vínculo con la entidad empresarial y afianzó la alianza público privada, con el objetivo de modernizar el país sin descuidar las necesidades básicas de los ciudadanos.

Con la asesoría directa de José Cox Donoso, ingeniero comercial y amigo cercano de Sebastián Piñera, Carlos Hurtado se convirtió en el principal impulsor del modelo de concesiones. Así, el exsecretario de Estado, sobrino de San Alberto Hurtado y cuñado del senador demócrata cristiano Andrés Zaldívar, logró que se promulgara la ley de Concesiones de Obras Públicas, en 1991.

Después de la dictadura, un socialista llegó al Ministerio de Obras Públicas. Con Ricardo Lagos como titular del MOP, se creó la Coordinación General de Concesiones para administrar el naciente sistema y el sector privado fue convocado a participar en concursos públicos mediante la fórmula de concesiones BOT (por su denominación en inglés: Built, Operate and Transfer).

La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) ha sido un actor relevante en la instalación de esta política en el país. El primer director fue Vicente Domínguez Vial. Entre 2007 y 2011 Herman Chadwick Piñera fue presidente del gremio y recuerda a Carlos Hurtado como el artífice del trabajo legal que amparó las concesiones. Sin embargo, para él, quien impulsó en forma definitiva el modelo en el país fue Ricardo Lagos, cuando llegó a ser titular del MOP.

Lagos fue ministro de Obras Públicas de Eduardo Frei Ruiz Tagle entre 1994 y 1998, y después Presidente de la República por seis años, entre 2000 y 2006. Ante la consulta por los resquemores que podría haber tenido el gremio de los concesionarios con el “Lagos socialista”, Chadwick señala¹⁷⁶ que él mismo se encargó de tranquilizarlo, “porque lo conozco y sé que es un socialista moderno, partidario del mercado, que hizo un gobierno muy cercano al sector privado, sin dejar por eso, el mundo público”.

176 Entrevista realizada a Herman Chadwick por las autoras de esta Memoria. 12 de abril de 2011.

Chadwick y Lagos se conocen desde 1972, cuando fueron panelistas por cuatro años en el programa *A esta hora se improvisa* de Canal 13, conducido por el publicista Jaime Celedón. Desde su oficina revestida en madera de roble, el empresario recuerda que “nos caímos bien, nos hicimos amigos y hasta hoy cuando almorzamos o estamos juntos, hablamos de las concesiones”.

La celebrada llegada de Bitar

El modelo de concesiones establece que las construcciones de uso público pueden ser realizadas por empresas privadas. El contrato entre el Estado y la concesionaria le permite a ésta explotar por un período definido la obra. Los ingresos que recibe se generan a través del cobro a los usuarios y van directo al bolsillo del empresario privado. Una vez que finaliza el plazo de explotación, la obra pasará a manos del Estado.

La llegada del ingeniero del PPD Sergio Bitar¹⁷⁷ al Ministerio de Obras Públicas en el período de la Presidenta Michelle Bachelet, dejó contento al influyente gremio de los concesionarios, que hoy es presidido por el exsubsecretario de Obras Públicas de Ricardo Lagos, el abogado DC Clemente Pérez.

Chadwick no duda en destacar la gestión de Bitar durante el terremoto de 2010. “Los daños fueron tremendos. Los primeros días trabajamos mano a mano, casi como dos ministros, en el mismo escritorio. Funcionamos día y noche y logramos conectar el país nacional e internacionalmente, en menos de 24 horas, y hacer un plan de reconstrucción que está casi terminado”¹⁷⁸, contó a mediados de abril de 2011 a las autoras de esta Memoria.

El expresidente de los concesionarios afirma que Bitar les permitió solucionar trabas y dar ritmo al sector. “Desarrollamos muchos problemas pendientes que había, como juicios, obras donde había que solucionar plazos, estándares que mejorar en

177 Sergio Bitar fue ministro de Minería del gobierno de Salvador Allende en 1973, senador de la Concertación en los noventa, presidente del Partido por la Democracia en tres ocasiones y ministro de Educación (2003-2005) y Obras Públicas (2008-2010) en el gobierno de Ricardo Lagos.

178 Entrevista realizada a Herman Chadwick por las autoras de esta Memoria. 12 de abril de 2011.

algunas construcciones. Se revivió un poco el mundo de las concesiones que estaba muy detenido”.

Al parecer, quien no está de acuerdo con el modelo de concesiones tiene dificultades para desempeñarse como ministro de Obras Públicas. El estancamiento que señala Chadwick, a su juicio, tiene un gran responsable: Eduardo Bitrán, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y predecesor de Sergio Bitar en el MOP.

En 2008 Bitrán fue removido de su cargo. Su salida se atribuyó a la escasez de obras bajo su administración y los roces con el gremio de los concesionarios que criticaron la falta de proyectos y la insistencia por supervigilar las iniciativas.

A mediados de 2008, Herman Chadwick desplegó desde Copsa grandes esfuerzos para evitar que el proyecto de ley impulsado por Bitrán, que regulaba el sector, incluyera la creación del Consejo de Concesiones, describe el periodista Manuel Salazar en el libro *Sebastián Piñera*.

Bitrán fue removido de su cargo y llegó en su reemplazo Sergio Bitar. “De ahí en adelante, las cosas se tranquilizaron para Herman Chadwick: el proyecto de ley era monitoreado desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cargo que ya ocupaba su cuñado José Antonio Viera Gallo”, señala Manuel Salazar¹⁷⁹.

El primo del Presidente opina

Herman Chadwick Piñera es un hombre que acostumbra usar camisas Dior, reloj Cartier y colleras de oro con sus iniciales grabadas. Es hermano de Andrés, actual ministro vocero de Gobierno y primo hermano del Presidente Sebastián Piñera. Desde mediados de 2008 hasta 2010 presidió Copsa.

Abogado de la Universidad Católica y militante histórico de la UDI, fue alcalde designado en Providencia durante 1981 y 1982. Es cuñado del exministro de Michelle Bachelet, José Antonio Viera Gallo, y tío del director del periódico *The Clinic*, Patricio

179 Manuel Salazar, *Sebastián Piñera*. Editorial Momentum, Santiago, 2009.

Fernández. Desde 2010 hasta hoy preside el Consejo Nacional de Televisión; además es presidente del directorio de la Universidad de Las Américas, consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), socio mayoritario de Chadwick y Cía Estudio de abogados, socio de la Inmobiliaria e Inversión Alcantara, de Agrícola La Viña Colectiva Civil, miembro del directorio de la Viña Santa Carolina y Aguas Andinas, y vicepresidente de Intervial Chile y de sus concesionarias: Autopista del Maipo S.A., Ruta 5 Talca-Chillán, Ruta del Bosque y Ruta de la Araucanía.

Chadwick y las concesionarias vieron en la destrucción de los centros de salud públicos y la reconstrucción una oportunidad. En entrevista con las autoras manifiesta que el ministro de Salud Jaime Mañalich sabe que su gestión será difícil: “Es probable que tenga que privatizar. Va a tener que concesionar algunos hospitales, pero se da cuenta que hoy hay una capacidad en el mundo privado que está subutilizada”¹⁸⁰, opinaba en abril de 2011.

¿Por qué creen -pregunta Chadwick- que las clínicas construyen y construyen torres adentro, que se parecen al Parque Arauco? “Es porque están esperando a mucha gente que se atiende en el sector público y que va a llegar con un bono bajo el brazo. Van a decir, 'opérame de la vesícula y aquí está el bono, aquí pago el millón de pesos que cuesta la operación'”, afirma.

El bono al que hace referencia Chadwick tiene un nombre específico en el gobierno de Sebastián Piñera: Bono AUGE. Su prioridad es “eliminar las listas de espera en todas las enfermedades del Plan, asegurando a las personas más vulnerables una atención oportuna en clínicas u hospitales”, describe el sitio web del Ministerio de Salud.

La concesión de la gestión clínica

Las concesiones hospitalarias en Chile permiten que los inversionistas privados se hagan cargo de administrar todos los servicios no clínicos. Lo referente a la gestión médica y la dependencia de los profesionales de la salud, la llamada “bata blanca”, sigue siendo tarea del Ministerio de Salud.

180 Entrevista realizada a Herman Chadwick por las autoras de esta Memoria. 12 de abril de 2011.

La iniciativa de los privados es avanzar en este rubro. A juicio del presidente de la Federación Nacional de los Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Claudio González, la avanzada de las concesiones en salud, “está entrapada por el compromiso presidencial que implica que la gestión clínica no sea tomada por privados”¹⁸¹.

En la vereda opuesta, el abogado Herman Chadwick Piñera opina que “las clínicas privadas son bastante más populares, uno va a hacerse un chequeo y es como llegar a un *mall*. La gestión de los hospitales, cualquiera sea que los haya construido, debe estar en manos del mundo privado”.

Para Chadwick, con la bata blanca no hay que “hacer nada, hay que dejar que el mundo público, solo, con el correr del tiempo, se dé cuenta que la medicina es mejor en el mundo privado que en los hospitales”.

En lo formal hay una ventana abierta para los privados en la gestión clínica. La ley de Concesiones permite ceder desde la construcción del hospital hasta su operación, incluyendo la “bata blanca”, pues no fija límites. La norma señala que el nivel de prestación de servicios por parte del concesionario lo determinan las bases de la licitación, este contrato podría ser blando y abarcar toda la gestión del hospital.

La doctora Vivienne Bachelet Norelli¹⁸², prima de la expresidenta y exasesora en temas de salud de la candidatura presidencial de Marco Enríquez Ominami, indica que “la pelea es porque no se concesione la gestión clínica, porque eso terminaría de privatizar la salud pública”.

En el período de emergencia posterremoto, no solo el sector salud se vio vulnerable ante la ofensiva privada. También educación y vivienda. En estos frentes el miembro del gremio de las concesionarias y presidente del Consejo Nacional de Televisión, Herman Chadwick también vio oportunidades.

181 Entrevista realizada a Claudio González por las autoras de esta Memoria. 10 de octubre de 2010.

182 Entrevista realizada a Vivienne Bachelet por las autoras de esta Memoria. 12 de octubre de 2010.

El 15 de marzo de 2010, Chadwick se dirigió al Ministerio de Obras Públicas con el fin de reunirse con el titular de la cartera Hernán De Solminihac. En la ocasión dijo a la prensa que quería “hablar un poco con el nuevo ministro y con el Presidente Piñera para que todas las rutas, además de escuelas, hospitales, cárceles y edificios públicos que se cayeron, se concesionen”. Al día siguiente, De Solminihac declaró que “el proceso de concesiones ha ayudado al desarrollo del país” y que “podría ayudarnos ahora en la reconstrucción”.

Pese a que la iniciativa del primo del Presidente fracasó, antes de su visita al MOP el gobierno no había planteado reconstruir mediante concesiones, o al menos no lo había hecho público aún. En entrevista con las autoras de esta Memoria, los exfuncionarios del MOP durante la concertación, Leonel Vivallos¹⁸³ y Rafael Ibarra¹⁸⁴, analizan que el proceso se vio truncado por la burocracia y falta de presupuesto estatal; el nuevo gobierno de Sebastián Piñera no manejaba estas condiciones en ese entonces.

El modelo probado

El 21 de mayo de 2010 el Presidente dio su cuenta anual con la catástrofe de fondo. A la salida de la ceremonia, el ministro de Salud Jaime Mañalich expresó que “este gobierno no va a invertir más en ladrillos, sino en personas”¹⁸⁵.

Estas declaraciones siguieron la tónica planteada por De Solminihac después de la visita de Chadwick al MOP. Las concesiones eran una opción viable y, al parecer, en el sector salud, la única alternativa para reconstruir.

Las aseveraciones del exdirector de la Clínica Las Condes, Jaime Mañalich, movilizaron a los gremios de la salud, pero no lograron cambiar las coordenadas del gobierno.

183 Entrevista realizada a Leonel Vivallos por las autoras de esta Memoria. 13 de diciembre de 2010.

184 Entrevista realizada a Rafael Ibarra por las autoras de esta Memoria. 27 de diciembre de 2010.

185 *LaTercera.com*, 24 de mayo de 2010. “Anuncian movilizaciones ante eventual concesión de hospitales públicos”, equipo latercera.com.

El Ejecutivo avanzó rápido en su plan y generó una larga lista de hospitales afectados, no solo por el terremoto. En concordancia con el discurso del 21 de mayo se priorizó hacerse cargo de los grandes daños que afectaron a la infraestructura hospitalaria y de atención primaria de 18 de los 29 servicios de salud. En este marco, el gobierno anunció el comienzo de la reconstrucción en salud, que constaría de cuatro etapas.

La primera etapa de emergencia inmediata solucionó las necesidades urgentes con 18 hospitales de campaña, emplazados en diversas localidades desde la Región Metropolitana hasta la del Bío-Bío. La segunda etapa de emergencia recuperó instalaciones y equipamiento para el corto plazo, con el fin de enfrentar de mejor forma el período invernal. La tercera etapa entró en la reconstrucción con la habilitación de hospitales modulares, que debían estar terminados en seis meses. La cuarta etapa fue de seguimiento de las tareas antes encomendadas.

El Ministerio de Salud (Minsal) contrató a empresas constructoras para levantar los hospitales modulares transitorios.

El primer fracaso de Mañalich

La infraestructura de salud sufrió un duro golpe por la catástrofe. Según el catastro de la Red Asistencial del Minsal del 22 de marzo de 2010, resultó afectado un 71 por ciento de la red hospitalaria del país y un 63 por ciento de las camas de las que dispone el sistema público. Pocos días después del terremoto, el ministro de Salud anunció un ambicioso e innovador programa de reconstrucción basado en la instalación de quince hospitales modulares.

El primer llamado a licitación se realizó el 1 de septiembre de 2010. Fueron 18 empresas que presentaron 87 ofertas¹⁸⁶, lo que permitió que cada recinto hospitalario tuviera en promedio cinco empresas oferentes. Todo hacía presagiar que el escenario

186 De acuerdo al Informe Técnico Final del proceso licitatorio "Contratación de los Servicios de Construcción de Obras Civiles, Provisión y Montaje de Sistemas Modulares o Prefabricados, para Quince Establecimientos Hospitalarios", que inició el 14 de abril de 2010. Este informe fue que se inició el día 14 de abril de 2010. Este informe fue solicitado por las autoras usando la Ley 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública.

ideal de suficiente mercado y competencia estaba ocurriendo y la “Nueva forma de gobernar” había aportado para que se produjera.

Según consta en Mercado Público, en esta primera licitación participaron diversas empresas, de distinto tamaño y nivel de influencia: Claro Vicuña Valenzuela, Icafal, Pilasi, Brotec, Tecno Fast Atco, Obrascón Huarte Lain, Socovesa y Salfacorp, entre otras. Estas últimas tienen lazos con el gobierno: José Cox, amigo cercano del Presidente es director de la constructora Socovesa, y Sebastián Piñera era accionista en Salfacorp junto a su otro amigo, Andrés Navarro, quien todavía es uno de los propietarios.

Jaime Mañalich dijo a *El Mercurio* que debió tomarse más tiempo para analizar la gran cantidad de ofertas que llegaron a su oficina en calle Mac Iver 541. La inversión proyectada era de 119 millones de dólares, según informó el diario de la familia Edwards, aunque el Minsal no confirmó la cifra. El monto promedio para cada hospital era de cuatro mil 288 millones de dólares.

La decisión de optar por los recintos modulares para reponer la red hospitalaria se debió a “la rapidez con que se montan y quedan operativos, en comparación a la construcción de un recinto sanitario convencional”, informó *El Mercurio*.

Casi un mes después, Mañalich debió reconocer el primer traspie de su proyecto estrella. “Los precios que tuvimos por metro cuadrado construido fueron mucho más caros que un hospital definitivo”, reconoció el ministro a *La Tercera*.

Para Claudio González, presidente de la federación de profesionales de la salud que agrupa a trece mil afiliados de Arica a Puerto Williams, el que se hayan bajado proyectos por el precio del metro cuadrado revela una especulación de los privados, que el gobierno “tal vez no esperaba, lo que demuestra que no conocen la historia de la salud pública en el país”.

Según datos entregados por el dirigente, el valor del metro cuadrado en salud es un tema que se viene debatiendo hace bastante tiempo¹⁸⁷. “Ese precio empezó a subir

187 Entrevista realizada Claudio González por las autoras de esta Memoria. 10 de octubre de 2010.

desde hace diez años, cuando la Concertación comenzó a hacerse cargo del déficit de infraestructura en consultorios”.

El aumento de precios, dice González, tuvo que ver con la falta de una oferta instalada. “Los proyectos tenían dimensiones que requerían de mucha inversión privada vía licitación”, señala. Desde el incremento de la construcción de grandes obras, el alza de precios llegó a un límite que alcanzó su máxima expresión a partir de la reconstrucción y la urgencia de recuperar la infraestructura de salud.

Salud a trato directo

En una primera instancia, los altos precios determinaron que solo los hospitales de Parral, Curicó, Cauquenes y Talca externo en la Región del Maule fueran construidos de forma modular. Las convocatorias para los hospitales de San Antonio de Putaendo, Psiquiátrico de Putaendo, Instituto Geriátrico, Hualañé, Constitución, San Carlos, Chillán, Florida, Penco- Lirquén y Angol fueron declaradas desiertas.

El primer llamado para reponer las cuatro mil cien camas perdidas se realizó en septiembre de 2010 y los altos precios hicieron desechar la mayoría de las ofertas. Se abrió un nuevo proceso y Peter Ihl, jefe de la División de Presupuesto e Inversiones del Minsal y exgerente general del Hospital Clínico de la Universidad Católica confirmó, de visita en la Región del Maule, que esta vez la adjudicación sería sin licitación.

No existió un segundo llamado a concurso. Esta vez la modalidad fue trato directo para no entorpecer los proyectos, lo que dio resultados. En abril de 2011 *La Tercera* informó que en los hospitales modulares había un 50 por ciento de avance y el gobierno aceleraba la construcción.

El Ministerio de Salud anunció para octubre de 2010 la entrega de los primeros nueve. La meta no se cumplió y el gobierno puso como nuevo plazo junio de 2011, porque “nuestro compromiso es terminarlos antes del invierno”¹⁸⁸, señaló Peter Ihl. Pero nuevos retrasos derivados de los estudios de suelo provocaron que la fecha límite del gobierno

188 *La Tercera*, 9 de abril de 2011. “Hospitales modulares: hay un 50 % de avance y gobierno acelera construcción”, Paula Riquelme, Patricio Tapia y Ana María Morales.

venciera con solo cuatro recintos habilitados, uno entregado de forma parcial y otros cuatro en construcción.

Después de muchos dimes y diretes, los hospitales modulares o de construcción acelerada licitados por el Minsal fueron ocho: San José de Parral, Cauquenes, Talca Externo, Talca Interno, San Antonio de Putaendo, Hualañé, Herminda Martín de Chillán y Félix Bulnes. El noveno, correspondiente a Curicó, fue construido por cuenta del Servicio de Salud Maule.

Estos establecimientos están en funcionamiento desde fines de 2011.

Tiempos privados vs tiempos públicos

El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, dirigió en 2009 una carta abierta a su electorado. En ella presentó su programa de gobierno “para el cambio, el futuro y la esperanza”. En el texto se comprometió a realizar una mejora sustancial en la infraestructura del país. Para ello iniciaría la construcción de diez hospitales y 76 consultorios, a través de concesiones.

Anunció que se invertirían cientos de millones de dólares para recuperar y modernizar hospitales y consultorios. “Nuestro gobierno contempla un plan de inversiones en concesiones de más de ocho mil millones de dólares”, prometió en la misiva.

Exfuncionarios del Estado en los gobiernos de la Concertación coinciden en que la cifra es imposible de ejecutar en un gobierno, debido al tiempo que implica un proceso de concesiones.

Leonel Vivallos fue durante quince años jefe de la División de Desarrollo y Licitación de Proyectos en la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP). El ingeniero de la Universidad de Santiago de Chile afirma que en sus años de experiencia observó lo difícil que era licitar mil 500 o dos mil millones de dólares, por lo que la cifra que anunció el Presidente le pareció inverosímil.

El proceso de concesión demora a lo menos 20 meses. En sus etapas está el llamado a concurso, la evaluación de los antecedentes por parte de la empresa, un período de consultas y la precalificación que tiene tres fases. Después viene la licitación y la adjudicación. Vivallos afirma: “Se requieren equipos que conozcan el sistema de concesiones, que es una industria particular, una forma específica de hacer infraestructura”.

Por ejemplo, los hospitales de Maipú y La Florida iniciaron sus trámites en 2007-2008, con la precalificación. Recién en junio de 2009 se concretó la licitación y adjudicación, que contempló la explotación por parte de la empresa privada durante quince años, describe el documento “Programa de concesiones en salud- Chile”¹⁸⁹ del doctor Ignacio Astorga, asesor del Minsal en materia de concesiones.

Para Herman Chadwick la opción de construir ocho mil millones también es irreal. “Es una locura, pero lo que me ha dicho a mí el ministro Mañalich -contaba en abril de 2011- es que él se compromete a llamar a licitación por los ocho mil millones de dólares, durante el período de Piñera, que es distinto a construir por todo ese monto”. Y así sucedió. Por distintas razones el presupuesto del sector salud en su mayoría no fue ejecutado en 2011, al igual que en 2012.

Chadwick Piñera afirma¹⁹⁰ que antes el Mandatario estaba en la posición de ampliar el número de concesiones. “Pero yo he visto cambios; al Presidente Piñera lo conozco, lo quiero, es primo hermano mío, hablo con él de repente. Lo veo más en la posición que estoy yo hoy: no entusiasmarse en gastar tanto cemento y tanto ladrillo, sino que entusiasmarse en mejorar lo que tenemos y en hacer muchas obras medianas y pequeñas en las actuales concesiones, que nos permitan que lo que hay se use mejor”, cuenta el abogado en su oficina de El Golf.

189 Documento se presentó en mayo de 2009 en el segundo Congreso Peruano de Administración Hospitalaria.

190 Entrevista realizada a Herman Chadwick por las autoras de esta Memoria. 12 de abril de 2011.

Los subsidios en tela de juicio

A fines de diciembre de 2010 la oposición no estaba conforme con el avance de la reconstrucción. Los jefes de bancada de la Concertación juntaron las 45 firmas necesarias y realizaron la interpelación a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte Lecaros.

La acción estuvo a cargo del diputado demócrata cristiano, Juan Carlos Latorre. El objetivo era buscar respuestas ante la lentitud de la marcha de la reconstrucción y los múltiples cuestionamientos a las cifras de asignación de subsidios habitacionales para las familias damnificadas, según la Concertación.

Definieron un cuestionario para ahondar en los detalles del plan de gobierno, qué presupuesto estimaban, qué tipo de catastro de damnificados manejaban y cuáles eran los procedimientos internos del Ministerio.

Antes de que se concretara la interpelación, la ministra Magdalena Matte criticó el uso de la herramienta. Argumentó que se trataba de un intento por politizar la tragedia. Sobre todo considerando que los parlamentarios de la oposición, según afirmó a *El Mercurio* el 16 de diciembre de 2010, “tienen toda la posibilidad de estar sentados en el Ministerio preguntando”.

El diputado Juan Carlos Latorre¹⁹¹ afirma que la interpelación surgió de un proceso regular de reuniones con el Ministerio, las que dejaban grandes dudas sobre la reconstrucción. El parlamentario DC recuerda que a comienzos de octubre de 2010 le hizo ver a la ministra que al ritmo que llevaba el Minvu “no iban a meter nunca la cantidad de plata disponible”.

La titular de la cartera desestimó la crítica y pidió a la Comisión, que también integraban los diputados Patricio Hales (PPD), Carlos Montes (PS) y el senador Gonzalo Uriarte (UDI), una semana más para presentar sus cifras. “Pero cuando le tocó presentar llegó con montos insuficientes, cercanos a los diez millones de Unidades de Fomento, muy por debajo de los 27 millones que se necesitan, según el catastro de la autoridad”,

191 Entrevista realizada a Juan Carlos Latorre por las autoras de esta Memoria. 30 de mayo de 2011.

recuerda Latorre en su oficina en el centro de Santiago.

El día antes de la interpelación, el Presidente y la ministra entregaron en Cobquecura el subsidio número cien mil del plan de reconstrucción “Chile Unido Reconstruye Mejor”. Los críticos del proceso se alarmaron.

El diputado DC acusa que “para entregar el subsidio cien mil tendrían que haber entregado el 99 mil, el 98 mil y eso no había pasado. Para mí, le mintieron a Piñera haciendo que él pudiera transformar en su discurso la palabra ‘asignación’ en ‘entrega’”. El conflicto era que los anuncios del gobierno en vez de ser obras ejecutadas, por el momento eran, en su mayoría, solo certificados de asignación del subsidio. Mucha gente se sintió engañada.

Según el diputado demócrata cristiano, la exministra Magdalena Matte era bastante inexperta en el tema que le tocaba afrontar. “En la interpelación, sin querer denostarla, repetí muchas veces que ella no controlaba su Ministerio, que le vendían cualquier pomada y se la compraba”, señala el integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

El diputado Juan Carlos Latorre sigue siendo un atento observador de la reconstrucción. Desde su rol de diputado por la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, a fines de junio de 2012 criticó al ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez. El titular del Minvu aseveró que la reconstrucción llegaba al 62 por ciento de avance con cien mil viviendas entregadas.

Según Latorre, en su región se distribuyeron cerca de 27 mil subsidios, de los cuales siete mil 500 eran para reparaciones y 19 mil 500 para adquirir nuevas viviendas. Pero de acuerdo a las cifras del propio Ministerio solo se han hecho efectivos cinco mil subsidios para el primer ítem y apenas tres mil 500 en el segundo. “Hay 16 mil familias esperando una solución definitiva y que están pasando un tercer invierno en condiciones de desprotección”, indicó el diputado en *The Clinic*, a fines de junio de 2012.

La promesa vencida

A principios de noviembre de 2010 el programa dominical *Tolerancia Cero*, de Chilevisión se transmitió desde La Moneda. Sebastián Piñera recibió a los panelistas y conversaron sobre los lineamientos que seguían la reconstrucción y los planes futuros del gobierno.

Sin que los panelistas ejercieran alguna presión, Sebastián Piñera prometió resultados concretos e incluso fijó una fecha para poder evaluar su gestión en materia de reconstrucción. El plazo que se autoimpuso el Presidente fue junio de 2011. Ya expirada la fecha el resultado “era pobrísimo”, consignó Fernando Paulsen en su columna para el portal *El Post*¹⁹². “Había una compulsión por demostrar que se batían récords y los subsidios eran un ejemplo a mano, fácil de cuantificar”, escribió el periodista.

Cuando Piñera habló en *Tolerancia Cero*, Magdalena Matte estaba empoderada. Aparecía todos los días en los medios, se rodeaba de un equipo lleno de postgrados y experiencia en la arquitectura privada, que *El Mercurio* denominó los “Matte boys”. El Ministerio de Vivienda aún no recibía el impacto del escándalo Kodama, en el que se le pagó a la empresa 17 mil millones de pesos de sobreprecio por la construcción de un corredor para Transantiago.

A diario se anunciaban decenas de nuevos planes maestros, fórmulas novedosas para que las familias escogieran su nuevo hogar y el cambio definitivo de la gestión de viviendas sociales en Chile. Las noticias eran enfáticas en que nunca antes se habían entregado tantos subsidios en el país.

Mezclar peras con manzanas

Después del caso Kodama¹⁹³, el gobierno y el Minvu se enmarañaron en promesas, cifras divergentes y confusión general. La ministra Magdalena Matte renunció y

192 Fernando Paulsen, *Promesa vencida*. Disponible en sitio web de El Post (<http://www.elpost.cl>). Consultado el 15 de noviembre de 2012.

193 Escándalo que se destapó en 2011. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo pagó a la empresa Kodama 17 mil millones de pesos de sobreprecio por la construcción de un corredor para Transantiago.

asumió como titular el exintendente de la Región del Libertador Bernardo Ohiggins, Rodrigo Pérez Mackenna.

A diciembre de 2010 se habían asignado 124 mil subsidios. Un 60 por ciento de éstos era para reparaciones menores, que entregaban 55 Unidades de Fomento por hogar. En el conteo total sería posible incluir estos subsidios en la cifra, pero el propio Presidente fue específico en su promesa por las pantallas de Chilevisión: “En dos años todos los que perdieron sus viviendas y que califican en los segmentos de pobreza van a tener un subsidio y la construcción de su vivienda con un desfase de seis meses”, señaló aquel 7 de noviembre de 2010.

Desde los pobladores organizados, los sectores de oposición y los organismos creados para monitorear la reconstrucción, se denunció el uso comunicacional y el aumento intencional de las cifras al incluir los subsidios de reparación de 55 UF en los números totales de subsidios.

Los subsidios de reconstrucción total asignados hasta mayo de 2011 eran 28 mil y la cifra general sumaba 152 mil. Fernando Paulsen indicó en su columna que “si el Presidente tiene razón y hay seis meses de rezago para terminar una obra o tenerla en franco tren de construcción, la enorme mayoría de las edificaciones contabilizadas en el informe de mayo corresponden a los subsidios entregados hasta diciembre del 2010”. El periodista puso en duda la veracidad del anuncio del Presidente sobre el real avance del proceso.

Paulsen cuestionó la pirotecnia comunicacional y el llamado “autobombo” del Ejecutivo. Criticó que “cuando se informa que hubo 200 mil casas destruidas por el terremoto y se entregaron 124 mil subsidios a diciembre del 2010, que suben a 132 mil en febrero del 2011 hasta llegar a 152 mil subsidios en mayo, la gente se puede formar la idea, equivocada, que esos subsidios son todos de casas destruidas. Y no, que el 60 por ciento de ellos son de reparación”.

La única explicación de la cifra es que se incluyan los subsidios de 55 UF, porque en el informe del Minvu a mayo de 2011, las obras iniciadas y proyectos en ejecución eran la mitad: 36 mil.

Las cifras finales de la promesa no forzada e incumplida del Ejecutivo muestran que de los 124 mil subsidios entregados a diciembre de 2010, un 40 por ciento correspondía a viviendas inhabitables que debían ser construidas o adquiridas en su totalidad. Las casas destruidas con subsidio en 2011 eran 49 mil 600 y las reconstruidas a mayo 2011 sumaban solo dos mil 175, es decir un cuatro por ciento.

Según Walter Imilan del Observatorio de la Reconstrucción, de los 220 mil subsidios “la mitad son de reparación -que hay de distintos niveles -, y la otra mitad son de reconstrucción o compra de vivienda”. Dice que a mediados de 2012 “había un 50 por ciento de avance en los de reparación, y en los de reconstrucción o compra solo un diez por ciento de subsidios ejecutados”.

Critica que se hayan “demorado” dos años en entregar los subsidios: “Aunque lenta, la tarea más fácil y menos costosa, que es la reparación, se ha realizado. Pero lo más difícil todavía no se desarrolla bien”. Cuando se habla que de un total de 110 mil viviendas nuevas por construir hay un diez por ciento de avance, a juicio de Imilan, el gobierno omite que “faltan 90 mil viviendas por construir, o sea, la mayoría”.

CAPÍTULO VII

EL RETIRO DEL ESTADO Y EL MALESTAR EMERGENTE

El nivel de destrucción y de desconcierto que reinó durante los primeros días y meses posterremoto mantuvo a un sector importante de los damnificados inmovilizados, esperando respuestas.

Se tomaron medidas de emergencia, entre las que estuvieron la distribución de mediaguas. En el caso de quienes no tenían sitio propio o un espacio donde ubicar las casas de madera, se habilitaron “aldeas”, eufemismo referido a los nuevos campamentos que surgieron en todo Chile producto de la destrucción de miles de viviendas.

En estos nichos de nuevos pobres se forjó un gran malestar, el que ambientó el primer aniversario de la catástrofe del 27 de febrero de 2010. En medio de tensiones sociales y decisiones gubernamentales apuradas, el gobierno de la Coalición por el Cambio realizó la gira presidencial de la reconstrucción 2011.

En una columna publicada en el diario español, *El País*, el 27 de febrero de 2011 el Presidente Sebastián Piñera afirmó que la “primera prioridad fue adelantarnos al frío, las lluvias y el riesgo de enfermedades que la llegada del invierno podía significar para los damnificados”. Para ello, el nuevo gobierno recurrió a toda la ayuda disponible, tanto nacional como internacional.

“Convocamos a voluntarios de la sociedad civil para que se trasladaran en masa a colaborar en las zonas afectadas, y fueron miles los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que cambiaron el fusil y la metralleta por la pala y el martillo”¹⁹⁴, contó el Mandatario en el medio extranjero.

Durante la vigilia en conmemoración del primer aniversario del terremoto en Cobquecura, el 27 de febrero de 2011, Piñera dio un discurso con casi los mismos

194 *El País*, 27 de febrero de 2011. “Chile, a un año del terremoto”, Sebastián Piñera.

contenidos. Más fiel a su estilo, esta vez señaló que tal como ocurrió después de la hazaña del rescate de los mineros, “cada vez que los chilenos nos unimos detrás de metas grandes, nobles y factibles, por difíciles que parezcan, nada ni nadie puede impedirnos alcanzarlas. Esta convicción, tan arraigada hoy en el alma de cada uno de mis compatriotas, constituye un verdadero tesoro, al que podremos recurrir como inspiración cada vez que las sombras del pesimismo pretendan volver a inundarnos el alma”¹⁹⁵, concluyó metafórico, en el pueblo que fue epicentro del sismo.

El “antes y después”

En el afán por cumplir la cuestionada promesa de la eficiencia, el Ministerio de Obras Públicas difundió en febrero de 2011 un álbum fotográfico digital con 16 imágenes. En ellas establecieron una comparación entre la destrucción provocada por el terremoto y el avance del gobierno en la reconstrucción de obras e infraestructura: un “antes y después”.

El problema fue que en dos de estas fotografías, el “después” no correspondía a la intervención del gobierno, ya que eran imágenes anteriores al terremoto y tsunami. Tal fue el caso de la imagen del Puente Llacolén de Concepción, que en el documento del gobierno aparece con fecha de febrero de 2011, cuando en realidad fue tomada el 2 de junio de 2009 por el fotógrafo Luis Enrique Fritz, quien no autorizó su uso; y la bahía de Dichato en febrero de 2011, pero cuya imagen había sido subida el 24 de febrero de 2009 y correspondía al sitio web de la Federación Chilena de Handball.

El portal digital de una de las carteras más involucradas en la reconstrucción aparecía así mintiendo sobre el real avance del proceso, ante la vista de todo Chile. Después del cuestionamiento y rechazo que recibió en las redes sociales las fotografías fueron retiradas de los sitios gubernamentales, pero el hecho ya había generado noticia en varios medios de prensa nacionales.

El primer aniversario del terremoto y tsunami se desarrolló en medio de una polémica por las conmemoraciones oficiales y la negativa de la oposición a participar en

195 Sebastián Piñera, *Palabras de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, durante Vigilia en conmemoración del Primer aniversario del terremoto*. Disponible en sitio web del Gobierno de Chile (<http://www.gob.cl>). Consultado el 15 de noviembre de 2012.

ellas. Mientras, los pobladores de la mayoría de las localidades afectadas hicieron conmemoraciones paralelas a las que no invitaron a la Alianza ni a la Concertación.

El Presidente hace arder *Twitter*

En lo que va de gobierno, se ha vuelto usual que Sebastián Piñera figure en las redes sociales como *Trending Topic* o tema más comentado del día. Las llamadas “Piñericosas” o errores no forzados cuando habla en público, son comunes. Es posible considerar como “salida de libreto” confundir a Cumpeo con la tierra de Condorito, pero no cae en la misma categoría hablar de un Plan de Gobierno para los damnificados del terremoto que consiste en subarrendarle piezas a familiares.

En el marco de la gira por la reconstrucción, ad portas del segundo aniversario del terremoto, el Presidente declaró que el gobierno hizo “un compromiso”. Ninguna familia “pasará más de dos inviernos viviendo en aldeas que eran soluciones de emergencia y transitorias. Una enorme cantidad de familias ha recibido su casa nueva y han abandonado las aldeas”, dijo el Mandatario. A lo que siguió un anuncio. Como no era posible que todas las familias recibieran “sus viviendas definitivas antes de que comience el próximo invierno 2012, hemos decidido diseñar un nuevo programa: dar una vivienda o irse a vivir con un familiar aportando el subsidio de arriendo”, señaló en febrero de 2012.

Tal nivel de polémica causaron los dichos que de inmediato el ministro de Vivienda Rodrigo Pérez Mackenna debió salir a “precisar lo expresado por el Presidente”, según manifestó por la red social *Twitter*. Pérez indicó que la idea no era un plan, sino un programa que existe hace mucho tiempo y contempla un contrato de arriendo para familias que tienen su casa en construcción y quieren esperar la vivienda definitiva fuera de las aldeas. Es, a juicio del ministro, una opción temporal con un tope subsidiado por el Estado de hasta 150 mil pesos.

A pesar de la rectificación, el programa bautizado por los usuarios de internet como “Váyase a vivir con un familiar”, fue muy criticado en la red y columnas de opinión. Los principales cuestionamientos indicaron que no consideró las condiciones reales de vida de los afectados.

El presidente de la Agrupación de Damnificados de Constitución, Pablo Díaz, rechazó lo expresado por el Presidente en la gira. Señaló que el gobierno "está apurado porque saben que se están atrasando. Es una manera de demostrar que terminaron con las aldeas, pero esa no es la forma, porque la gente prefiere esperar que les entreguen su vivienda".

Díaz afirmó que Sebastián Piñera les "prometió que no salíamos del sitio hasta que tuviéramos las llaves en la mano. Pero resulta que en abril de 2011 se venció el contrato de arriendo, y ellos mismos dicen ahora 'váyanse donde un familiar', den el subsidio de arriendo y se quedan con plata. Ellos mismos ayudan a que la gente los estafe y eso no lo encuentro justo", agregó el dirigente.

Una situación proyectada desde el Observatorio de la Reconstrucción es que como no se establecieron límites para el subsidio de arriendo, en pos de quedarse con el dinero, las familias vivan en malas condiciones. Esto podría incrementar el hacinamiento y la falta de privacidad, dos problemas graves de la población en aldeas.

Walter Imilan indicó en febrero de 2012 al semanario *Cambio 21*, que los arriendos generaron especulación de precios entre arrendadores de viviendas. "Si se entregan subsidios en pueblos donde viven mil personas, lo que sucede es que el precio de la oferta sube y su precio comienza desde el valor del subsidio hacia arriba", señaló el antropólogo.

La consulta de los terremoteados

Con la idea de hacer visible la experiencia y la opinión del millón de damnificados que dejó la catástrofe del 27 de febrero de 2010, la Red de Organizaciones pro Reconstrucción convocó a la primera Consulta Nacional. La agrupación que reúne a la mayoría de los afectados que se han organizado en las regiones siniestradas planteó que "la reconstrucción ha pasado a segundo plano y por eso es necesario reponer el tema en el centro del debate público, más allá de la coyuntura de los dos años", porque "los damnificados no pueden ser olvidados", señaló una de las voceras de la organización, Carolina Manríquez, al periódico *El Ciudadano* en el segundo aniversario del terremoto.

Por esta razón durante el 25 y 26 de febrero y 3 y 4 de marzo de 2012 se instalaron mesas de votación en Santiago, Valparaíso, Pichilemu, Vichuquén, Curicó, Talca, Constitución, Cauquenes, Chanco, Dichato, Concepción, San Rosendo y Tirúa.

La mayoría de las más de doce mil personas que participaron en la consulta señalaron que el proceso de reconstrucción impulsado por el gobierno ha sido “malo”, “lento” y no ha incluido la participación necesaria de parte de las víctimas. Esta fue la principal conclusión de la iniciativa, cuyos resultados fueron entregados el 9 de marzo en La Moneda por dirigentes de comunidades damnificadas de Talca, Constitución, Rancagua, Concepción y Santiago, junto a voceros de la Red de Organizaciones pro Reconstrucción.

Las opiniones de la gente que participó apuntaron a que el Plan de Reconstrucción debe ser transformado sustancialmente, creando nuevas políticas públicas, invirtiendo más recursos y aumentando la participación ciudadana. También los resultados dieron cuenta de que la ciudadanía no confía en que el Estado esté mejor preparado para enfrentar una nueva catástrofe.

Respecto a la percepción del proceso de reconstrucción, el 78 por ciento de los votantes en esa consulta manifestó un alto descontento. De ellos, el 43 por ciento sostuvo que el proceso ha sido “pésimo y muy lento”; el 35 por ciento declaró que lo consideraba “malo y lento”, el quince por ciento lo calificó como “bueno, pero no muy rápido”. Una minoría lo valoró como “excelente y rápido”.

Sobre el Plan de Reconstrucción del gobierno, el 42 por ciento de los doce mil votantes, lo consideró “pésimo”, y el 31 por ciento opinó que “no es bueno, pero algo hacen”.

Pero este último resultado tuvo un contexto especial: dos semanas antes el sitio web *Sentidos Comunes* había publicado la insólita respuesta que recibió a la solicitud de información pública que envió al Minvu para obtener “el documento del Plan Nacional de Reconstrucción por el que se debe estar guiando el proceso, según Decreto Supremo del 11 de marzo de 2010”. La respuesta fue que el organismo no cuenta con el documento del

plan, “sin embargo, en su sitio web el texto está disponible”, informó el equipo del medio digital en la bajada de su noticia¹⁹⁶.

La solicitud que realizaron mediante la ley de Transparencia a comienzos de febrero de 2012 recibió la inesperada respuesta el 24 del mismo mes, indicando que el “Ministerio no cuenta con el documento solicitado, aun siendo integrante del Comité Interministerial para la Reconstrucción”, por lo que le solicitó a *Sentidos Comunes* “derivar esta consulta al Ministerio del Interior, que preside dicho Comité en ausencia del Presidente de la República, y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que ha asumido la gestión principal del mismo”.

La nota del portal de noticias y opinión explicó que “el primer día de su gobierno, el Presidente Sebastián Piñera decretó la creación del Comité Interministerial de Reconstrucción, responsable por Decreto Supremo de generar el Plan Nacional de Reconstrucción. El comité es liderado por el Presidente, y deben concurrir once ministerios: Interior, Secretaría General de la Presidencia, Obras Públicas, Vivienda, Salud, Educación, Transporte, Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y Planificación y Cooperación (hoy Desarrollo Social)”.

Sus sesiones son determinadas por voluntad del Presidente, “de esta manera, no hay institucionalidad de la reconstrucción, sino que se deben coordinar once ministerios, exactamente la mitad del gabinete completo, que deben además continuar con sus funciones regulares. Este comité no tiene asignados recursos, de modo que depende de poder coordinar las agendas de los distintos ministerios”, señaló el sitio web.

Sobre el comité, solo había noticias hasta septiembre de 2010; esta fue la razón que motivó la solicitud de información pública a la repartición gubernamental. El texto solicitado, tanto en esa fecha como en la actualidad, sigue disponible en el portal del Minvu, a pesar de la dificultad que tuvo el Ministerio para entregarlo mediante la ley de Transparencia.

196 *Sentidos Comunes*, 24 de febrero de 2012. “Insólito: Minvu afirma que no cuenta con el Plan Nacional de Reconstrucción”, *Sentidos Comunes*.

Frente a la pregunta sobre las medidas que debiera tomar el gobierno para mejorar el plan de reconstrucción, esa Consulta Nacional incluía cuatro alternativas: crear políticas y estrategias más eficientes; organizar espacios de participación ciudadana en que las decisiones tomadas sean realizadas; entregar más recursos y más rápidamente y todas las anteriores. Un 55 por ciento de los votantes marcó la alternativa “todas las anteriores”, lo que a juicio de los organizadores manifestó que la ciudadanía quiere cambios profundos y estructurales en el plan de reconstrucción. El 20 por ciento privilegió los espacios de participación ciudadana; el quince el aumento de recursos, y el ocho por ciento la eficiencia de las políticas públicas. Solo un dos por ciento declaró que no había nada que mejorar.

Para Nicolás Valenzuela, director de la ONG Reconstruye y director ejecutivo de *SentidosComunes.cl* “la reconstrucción debe mantenerse en el debate público, porque hay miles de chilenos para quienes el terremoto no ha terminado. La reconstrucción no termina con la entrega de los 220 mil subsidios. La experiencia de los propios dirigentes da cuenta de que hay una cantidad muy importante de familias damnificadas y vulnerables, que están quedando fuera”, indicó el 9 de marzo de 2012 al medio digital, *El Dinamo*¹⁹⁷.

Perspectivas finales

Con el tiempo, el terremoto y el tsunami se han consolidado como una pesada carga que arrastra el país desde hace casi tres años. Se puede observar, a través del seguimiento de casos de damnificados y la constante revisión de prensa, que hay un divorcio entre las promesas del gobierno de Sebastián Piñera y los cumplimientos que se han alcanzado.

Uno de los factores que parecen determinantes de esta situación es el desencuentro del gobierno con el mundo público, lo que se demostró con especial énfasis mientras operó el equipo conformado por los primeros nominados a asumir responsabilidades políticas. Después vinieron cambios de gabinete y entraron al gobierno figuras con mayor manejo político y conciencia de la estructura estatal.

197 *El Dinamo*, 9 de marzo de 2012. “Consulta Ciudadana por Reconstrucción: Un 78% rechaza plan del Gobierno”, *El Dinamo*.

Sin embargo, al principio se trató en su mayoría de profesionales exitosos en el mundo de los negocios, con postgrados y doctorados en el extranjero, de numerosas familias y cercanos ideológicamente al modelo neoliberal impuesto desde el régimen militar.

Su carencia absoluta de conocimiento de lo público les jugó una mala pasada, como señala el sociólogo y exvocero de la candidatura presidencial de Marco Enríquez Ominami, Max Colodro. “Esos jóvenes profesionales -dice- hoy miran la realidad con el mismo sentido de frustración que transmite el Presidente de la República. Consideran que se pudieron ejecutar proyectos significativos para el país y que, si no fue posible más, ha sido por las trabas que la lógica pública y el imperio de la política pusieron en el camino”.

Colodro plantea que los cuadros de gobierno actual “observan el presente y constatan que la inmensa mayoría de los chilenos ‘no entendieron’ y ‘no valoraron’ la amplitud de los avances, que un cierto sesgo ideológico o un abierto resentimiento les impidió percibir los frutos de su esfuerzo, el peso que tiene y ha tenido el sacrificio emprendido”¹⁹⁸.

De la mano de este equipo se planteó el desafío de que en Chile nacieran cien mil nuevos emprendedores en cuatro años y que estos produjeran 800 mil empleos. Además, se comprometían a que se crearan un millón de nuevos empleos por gestión del gobierno.

A diciembre de 2012 es posible rastrear que hay desfases menores en el ritmo de esta generación de empleo, pero en general las metas se han cumplido. Esto se debe en buena medida a los resultados macroeconómicos, que en el segundo trimestre de 2012 sitúan en crecimiento del Producto Interno Bruto en un 5,5 por ciento. Lo que se cuestiona desde los gremios y los organismos independientes que trabajan monitoreando el ámbito laboral, es la calidad del empleo y cuánto de ese porcentaje creado es por acción del gobierno. Las cifras muestran que una cantidad importante de los trabajos nuevos son impulsados por los trabajadores independientes bajo la modalidad del subcontrato.

De acuerdo a la última minuta de Fundación Sol, al analizar el trabajo asalariado

¹⁹⁸ *Qué Pasa*, 27 de diciembre de 2012. “La generación trunca”, Max Colodro.

los datos dan cuenta que aumenta en 442 mil personas. “No obstante, el 84,5 por ciento de la variación corresponde a la modalidad de subcontratación, servicios transitorios y suministro de personal, lo cual es una señal de mayor precarización e inestabilidad en el mundo del trabajo”¹⁹⁹. Y la cifra, dicen, llega al 96 por ciento para el caso de la variación de las asalariadas mujeres.

Otra de las promesas que no logró tener un correlato en la realidad y demuestra el divorcio del gobierno con las lógicas de funcionamiento del aparato público fue el anuncio de concesionar ocho mil millones de dólares en cuatro años a través del sector Salud. Era una cifra inalcanzable por los tiempos que toma el proceso de concesiones. El ex funcionario del MOP, Leonel Vivallos recuerda que venían “como de excursión, sin saber que las concesiones al menos demoran 20 meses en concretarse”²⁰⁰.

En sus visitas a terreno, el equipo del Observatorio de la Reconstrucción ha podido analizar, cuenta Walter Imilan, el despliegue del gobierno de Piñera. “En reuniones con damnificados de pueblitos rurales, les decían ‘ustedes van a recibir una *gift card* para comprar sus materiales de reparación’. Para ellos es lógico, pero para los lugareños es extraño”, opina el antropólogo.

Este divorcio explica en parte que las primeras propuestas de reconstrucción que emanaron desde el Minvu y los Servius hacia los afectados no hayan tenido ninguna relación con lo que ellos deseaban. La mayoría de los pobladores de las distintas regiones golpeadas por la catástrofe querían que les reconstruyeran sus casas en los mismos terrenos que habitaban. En cambio, el gobierno les ofrecía viviendas sociales en la periferia.

Conversando con los afectados directos y observando en perspectiva lo que sucedió en las distintas regiones damnificadas, es posible apreciar que primaron las soluciones ofrecidas por el gobierno, ante la descomposición social y el desarme de los comités de vivienda, tal como ocurrió en los casos de Talca y Chiguayante. En ambas localidades los dirigentes hoy ven con ojos críticos el actuar del gobierno, porque, según

199 Fundación Sol, Unidad de Estadísticas de empleo. Minuta de trabajo agosto- octubre 2012, consultada el 26 de diciembre de 2012.

200 Entrevista realizada a Leonel Vivallos por las autoras de esta Memoria. 13 de diciembre de 2010.

ellos, promovió el desgaste y el abandono, lo que contribuyó a ablandar posiciones en la población.

En 2013 el país enfrentará un año presidencial y parlamentario, un tiempo de debates nacionales y regionales. Este escenario es propicio para que el terremoto y la reconstrucción no pasen de ser prioridad a olvido nacional. También puede ser una oportunidad para que no se siga reduciendo el tema al ámbito individual, entre el gobierno y los afectados, o entre empresas y damnificados.

“No creo que esté garantizado llegar a la meta”

Al segundo año de ocurrido el terremoto los habitantes de Dichato, Concepción, Chiguayante, Talcahuano o Villa Olímpica no querían escuchar más discursos. Para ellos la reconstrucción aún no llegaba y en algunos casos polémicos, en que estuvo involucrada la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe, nunca llegaría.

Es en la cantidad de viviendas construidas donde se encontró y persiste la mayor contraposición de números. En el verano de 2012 la oposición aseguró al gobierno que los logros reales bordearon el 10 por ciento. En paralelo, los organismos creados para dar seguimiento al proceso, como el Observatorio de la Reconstrucción, coinciden en que los avances son mucho menores de los que plantea el Ejecutivo, porque “se mezclan metodologías y se confunden conceptos”, afirma la entidad.

El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, señaló a BBC Mundo que hasta enero de 2012 ya se habían entregado los subsidios para las 222 mil casas que perjudicó el terremoto y en las que vivían familias candidatas a subsidios sociales. La autoridad destacó que se trataba de un paso importante, aun cuando la meta de concretar la construcción de estas obras en los dos años restantes de gobierno era complicada. “Queda un trabajo muy grande por delante y muy difícil, y no creo que esté garantizado llegar a la meta, porque en casos similares, en países bastante más desarrollados que el nuestro, ha tomado más tiempo”, señaló el titular de Vivienda.

No obstante el mea culpa desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, *El Mercurio* entregó su apoyo incondicional a la gestión del gobierno. El 4 de marzo de 2012 el diario

de Agustín Edwards publicó una extensa columna de opinión de Hernán Büchi, en la que señaló que “transcurridos dos años de la catástrofe es posible evaluar positivamente la respuesta del país, tanto del sector privado como del gobierno. Los problemas que aún persisten son importantes, pero el resultado de la gestión no se puede medir solo respecto a lo que desearíamos, sino respecto a lo posible”, indicó el exministro de Hacienda de Pinochet.

En la actualidad Hernán Büchi insiste en su postura contraria a la alteración de la estructura impositiva en Chile, tema que saltó a la palestra en medio del debate sobre los fondos para la reconstrucción.

En la charla “Será Chile un país desarrollado” que realizó Libertad y Desarrollo junto al *Diario Financiero* en octubre de 2012²⁰¹, el exministro de Hacienda dijo que “en los ochenta Chile estaba viviendo cambios, además del terremoto, y en esas transformaciones fueron importantes una serie de políticas, por ejemplo la apertura al mundo, y, entre otras cosas, las privatizaciones”.

Continuó señalando que “la gente tiene la idea de que las empresas cuando son del Estado, son de todos, y no son de todos: son de los que están ahí. Esa es la realidad”. Por ejemplo -preguntó-, “¿Codelco es de todos o de quién?, ¿quién tiene los buenos sueldos en Codelco? ¿Quién puede decirle a Codelco si en realidad invirtió mal y sacó pocos resultados? Se le van a venir los sindicatos encima”. Terminó afirmando que las privatizaciones “ayudaron en la nueva economía, primero para que las empresas fuesen responsables, que si lo hacían mal no podían venir a conseguir con sus sindicatos, con sus instituciones, regalías con el gobierno y, por otro lado, ayudaron a aportar todas las nuevas tecnologías que hoy nos parecen elementales”.

En 2010, según él, “Chile ya no necesitaba tanto eso”. Pero no perdió la oportunidad para realizar una crítica directa a la gestión de Piñera. “Creo que sí podría haberse hecho más, pero el gobierno tomó una decisión que a mi juicio fue equivocada. Yo voté por este gobierno, lo respaldo, pero estoy en desacuerdo con lo que han hecho con la reconstrucción”, manifestó.

201 Primer encuentro del ciclo de charlas para futuros periodistas organizado por Libertad y Desarrollo junto al *Diario Financiero*, durante octubre de 2012.

Minvu y Segpres se contradicen

Dos ministerios, Vivienda y Urbanismo y Secretaría General de la Presidencia han liderado la ejecución y supervisión de las acciones de reconstrucción. Los documentos que ellos publican son las principales fuentes en los avances de la reconstrucción desde el punto de vista del gobierno.

En el reporte de cumplimiento de la reconstrucción del terremoto del 27 de febrero de 2010 presentado en enero de 2012 por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se consigna que hay un 47 por ciento de avance en el ítem Vivienda. La cifra es mayor a la presentada por el informe del Minvu que indica 76 mil 152 obras terminadas, de un total 222 mil 418 subsidios asignados; es decir, un 34 por ciento de trabajos finalizados en función de subsidios asignados.

De acuerdo a la información recogida por el Observatorio, la diferencia en porcentajes se puede explicar porque el reporte de la cartera de Vivienda solo presenta cifras respecto a soluciones habitacionales de principios de año. El informe de la Segpres, en cambio, para la misma fecha contempla seis metas, incluyendo viviendas de emergencia, regularización de títulos de dominio y gestión.

Al desagregar las cifras de obras terminadas se aprecia una clara diferencia, en ambos informes, entre los subsidios de reparación, que ascienden a un 58 por ciento y los subsidios de construcción y adquisición, que llegan al 10,8 por ciento.

La explicación de los organismos que monitorean el proceso es que la ejecución de subsidios de construcción, más la adquisición, tienen una complejidad mayor a los de reparación. “Si bien ambos son soluciones de habitabilidad, representan complejidades distintas en su gestión e implementación”, señaló el Observatorio de la Reconstrucción en su informe de febrero de 2012 titulado “Cómo leer los avances del gobierno en reconstrucción”²⁰².

202 Observatorio de la Reconstrucción, *Cómo leer los avances del gobierno en reconstrucción*. Disponible en el sitio web del Observatorio de la Reconstrucción (<http://reconstruccion.uchilefau.cl/>). Consultado el 20 de octubre de 2012.

El Observatorio indica que se presentan dos metodologías distintas para medir los avances en el ámbito de vivienda y territorio. El reporte de la Segpres identifica metas por ámbitos de acción, pero establece un indicador basado en ejecución presupuestaria y el Minvu entrega información con desagregación insuficiente, lo que no permite visualizar los avances del propio plan sectorial.

La conclusión final es que los reportes del gobierno configuran una visión que no ofrece la adecuada sensibilidad respecto a los avances efectivos de la reconstrucción. En la práctica se da cuenta de procesos burocráticos pero no de cómo ellos impactan en los territorios afectados por el 27F, indicó en su análisis la entidad de la Universidad de Chile.

El permanente desencuentro de las cifras

En su Mensaje del 21 de mayo de 2012 el Presidente Sebastián Piñera presentó una cuenta pública y anuncios en variadas materias. Habló del “desafío de la reconstrucción” y afirmó que tres cuartos del proceso estaban resueltos.

En la ocasión Piñera señaló que los 220 mil subsidios de reparación y reconstrucción comprometidos ya estaban asignados, y que 165 mil de ellos correspondían a proyectos individuales. Según lo anunciado, para abril de 2012, 90 mil viviendas estarían entregadas; 70 mil se encontrarían en reparación o reconstrucción, y las 60 mil restantes estarían edificadas para antes del cuarto invierno de reconstrucción, en 2013.

“Contamos con 111 planes de Regeneración Urbana y 27 planes maestros de reconstrucción y ejecución, todos en marcha, para lugares como Dichato, Juan Fernández, Talcahuano, Constitución, Talca, Lebu y Tirúa”, señaló. El Presidente también afirmó que tres mil 483 establecimientos educacionales ya fueron reparados o reconstruidos; también 110 hospitales, al igual que 207 postas rurales y consultorios. E indicó que más del 99 por ciento de las mil 500 obras públicas dañadas se encuentran en operación.

Pese a que las cifras oficiales indican que habría cumplimiento, las críticas de los damnificados, organizaciones y entidades externas al gobierno, continúan.

El 17 de diciembre de 2012 el ministro de Vivienda Rodrigo Pérez Mackenna, informó en la cuenta pública de la cartera las cifras actualizadas del avance del proceso de reconstrucción. De acuerdo con los datos oficiales, en noviembre de 2012 el total de obras terminadas posterremoto alcanzó a 130 mil 519 casas o departamentos que ya fueron entregados, lo que equivale al 58 por ciento de la meta de 222 mil 418 unidades del programa de reconstrucción.

El gobierno, además, contabilizó 65 mil 784 viviendas en proceso de reconstrucción, con distintos niveles de avance. Según Juan Andrés Muñoz, coordinador de Vivienda del programa de reconstrucción del Minvu, “las obras que restan por iniciar sus trabajos ascienden a 26 mil 115”, señaló a *La Tercera*²⁰³.

Muñoz detalla que en el programa de reconstrucción, solo en el área de vivienda, hay cerca de 800 constructoras trabajando, con 260 modelos de casas distintos. “Ha sido atractivo para las operadoras del sector, porque les interesó la cantidad de recursos disponibles y una demanda que no tenían antes, en ciudades donde no había renovación urbana”, dijo al medio.

Según *La Tercera*, el personero añadió que el negocio de la construcción no ha sido sostenido solo por grandes empresas. “La lista está compuesta, entre otros, por Salfa, en Dichato; Epcó, en Caleta Tumbes; Bech e Icafal, en la Región del Maule; Armas, en Talca y Concepción, y Mingatek (filial de Sinergia) en toda la Región del Maule y algunas localidades de Bío-Bío”, informó el diario.

Ante las cifras, Walter Imilan llama la atención frente a un tema olvidado: los damnificados que nadie ve y las cifras negras de la reconstrucción. Dice que el gobierno sigue mezclando las cifras de subsidios asignados con obras terminadas, además de los subsidios para reparación con los de reconstrucción total. El equipo del Observatorio cuestiona la metodología y resultados de la medición del proceso porque los porcentajes de logros se establecen a través de un cálculo de la ejecución presupuestaria y no necesariamente respecto a avances concretos.

²⁰³ *La Tercera*, 17 de diciembre de 2012. “A 59% llega el total de viviendas reconstruidas tras terremoto de 2010”, Carla Alonso.

También afirma Imilan que “la gente que vive en aldea es un porcentaje pequeño; son cuatro mil y tantas personas. De los 110 diez mil que esperan reconstrucción total o casa nueva, son casi cuatro mil los que están en aldeas”. ¿Y el resto? “Se las arreglaron como pudieron -dice-. Hay mucha gente que no está en campamentos, que está viviendo en mediaguas en sitio propio y esos son los que más dificultades van a tener para la construcción de una vivienda definitiva, porque para las aldeas lo que van a hacer es construir conjuntos habitacionales, que son más rentables para la empresa constructora”, dice el antropólogo.

En relación a las construcciones de viviendas en sitio propio, Imilan es tajante: “El gobierno todavía no sabe cómo resolver ese tema. Ninguna empresa constructora lo hace, porque como no es a gran escala no es rentable. Estos damnificados se las terminarán arreglando cada uno por su cuenta”, señala.

El foco en el territorio

Para el Observatorio de la Reconstrucción es relevante ampliar el foco de investigación y acción en el proceso de reconstrucción por fuera del ámbito de la vivienda, ya que, según Imilan, al abordar solo esta dimensión “cuando se realice la entrega el problema desaparece”. En conversaciones con habitantes de las zonas dañadas es evidente que hoy, a casi cuatro años de la tragedia, su preocupación sobrepasa el problema material de la vivienda para instalarse en una lógica contextual del entorno y las condiciones sociales de la comunidad y la planificación urbana.

Según el Observatorio, a nivel internacional ya no se ven reconstrucciones basadas solo en la vivienda. “Hoy se habla de viviendas, pero también de hábitats y cuando hablas de hábitats hablas de distintas escalas, distintas complejidades. El plan de reconstrucción que estamos viendo es muy básico en términos conceptuales”, manifiesta Walter Imilan.

Discusiones sobre, trabajo, por ejemplo, no existen acá –dice el profesional de la Universidad de Chile. “Tú construyes la vivienda, pero resulta que como todos los hombres tuvieron que migrar, cómo evitas procesos de deterioro que ya venían

desarrollándose, como es el caso de Talcahuano, ¿es una oportunidad o no es una oportunidad?”, pregunta el miembro del Observatorio. Y él mismo responde: “Toda la plata que vamos a invertir en Talcahuano invirtámosla para generar nuevas oportunidades de trabajo, en innovación, en cómo mejorar las desigualdades territoriales entre las regiones y dentro de las regiones”.

El antropólogo evalúa que se “están malgastando recursos profesionales, técnicos y monetarios en restituir y profundizar lo que había antes, sin preguntarse cómo podríamos mejorar la calidad de vida y las condiciones generales de la población”.

Estado ausente

El Plan de Reconstrucción del Ministerio de Vivienda (Minvu) “Chile Unido Reconstruye Mejor”²⁰⁴ plantea tres escalas de planificación e intervención en materia de reconstrucción: “Ciudad y Territorio”, “Barrios”, y “Vivienda”.

Ciudad y Territorio está asociada a la actualización de los planes reguladores en función del riesgo, recuperación patrimonial y desarrollo de planes maestros que orienten el proceso de reconstrucción.

Las críticas que ha recibido el plan maestro como política en materia de urbanismo e impacto comunitario plantean que las escalas de Ciudad, Territorio y Barrios han sido delegadas a los privados con iniciativa. Ellos estarían contemplados en la cartera de inversiones de los planes, acordado bajo los convenios público-privados, o simplemente serían ámbitos de la reconstrucción abandonados.

En entrevista con las autoras, Walter Imilan opina que los planes maestros son un pequeño laboratorio en materias de políticas públicas territoriales. Afirma, con especial énfasis en sus palabras, que son la política más avanzada y experimental que ha hecho el actual gobierno por implementar su ideal de Estado y mercado. A juicio del antropólogo, los planes maestros “son un experimento que avanza en privatizar un nivel más allá del visto hasta ahora al territorio y la vivienda”.

²⁰⁴ Información obtenida por Ley de Transparencia en el Programa de Reconstrucción Nacional de Vivienda *Chile Unido Reconstruye Mejor*, del 29 de marzo de 2010.

Al revisar los planes maestros, sorprende que los nombres de las empresas privadas aparezcan destacados. Para Imilan la explicación es clara: “Salen los nombres de las empresas porque el mandante es el que paga el plan maestro. Un privado le paga a otro la planificación, es decir, ya ni siquiera esa función realiza el Estado, incluso eso lo delega en un privado”.

Los planes maestros no tienen institucionalidad legal ni son vinculantes. Sin embargo, como los empresarios privados son los únicos actores con iniciativa en varias de las localidades azotadas por la catástrofe, sus proyectos han configurado gran parte del proceso de reconstrucción local.

Según el Observatorio, si el gobierno no fue más osado en llevar adelante sus planes es porque les faltó poder de gestión. “Si lo hubieran tenido habrían implementado el nuevo modelo de planificación territorial de forma mucho más fuerte, pero como no tenían esa capacidad, no propusieron las leyes que podrían haber hecho y por eso los planes maestros no tienen institucionalidad”. Hoy Imilan observa que “la fuerza privatizadora, que en un principio se temió que iba a resultar del proceso de la reconstrucción, ha existido, pero no ha sido tan fuerte, por las insuficiencias propias de este gobierno”.

Por lo que se ve en terreno el sentir mayoritario de la población es que el Estado nunca se hizo parte cabal de la reconstrucción. Lo que se puede concluir es que delegó en los empresarios e iniciativa individual de los damnificados gran parte del proceso y cuando esta estrategia fracasó, intervino. Es el actuar de un Estado subsidiario cada vez más mermado en sus roles, funciones y posibilidades, que con los desafíos y diligencias propias de la atención a la catástrofe quedó al descubierto.

La opinión de los damnificados entrevistados es compartida por el Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile. “Aquí nunca se consideró un proceso de reconstrucción territorial desde el aparato público, que es a lo que deberían apostar los planes maestros. Solo postulan proyectos privados ‘detonadores’ que dinamicen la economía local, en vez de hacerse cargo de reconstruir la ciudad y las comunidades, y todo lo que eso significa en lo social, económico y cultural”, concluye Imilan.

En este contexto miles de damnificados siguen esperando su vivienda definitiva. Cada mes que pasa acumulan más frustración frente a la dificultad de recuperar su vida de barrio, territorio y ciudad.

Los dirigentes de las organizaciones constituidas en el proceso de reconstrucción, más las ONGs dedicadas a observar e investigar el tema, aspiran a que el 2013 sea clave para alzar la voz de los damnificados y la defensa de la planificación territorial pública. Pero surgen dudas: ¿delegarán su representación o serán silenciados por la falta de interés mediático?, ¿podrán instalarse con una voz propia? En los próximos meses se podrán ver las respuestas.

El tercer aniversario del terremoto de 2010 coincide con el inicio de un año de elecciones parlamentarias y presidenciales. El 27 de febrero de 2013 será también el episodio previo a una cuarta temporada de otoño e invierno que los damnificados vivirán en mediaguas o en precarias viviendas transitorias. Este será el ambiente en el que los terremoteados observarán, con menos paciencia que antes, las promesas de gobierno de todos los candidatos.

ANEXO I
FUENTES

Fuentes Personales

- Alcayaga Julián: 5 de diciembre de 2010
- Arce Lorena: 9 de junio 2011
- Bachelet Vivienne: 12 de octubre de 2010
- Barrientos Sergio: 2 de agosto 2011
- Beroiz Aldo: 6 de junio de 2011
- Büchi Hernán: octubre de 2012.
- Cartes Jorge: 20 de diciembre de 2012
- Carvajal Rosario: 3 de mayo de 2012
- Catalán Gladys: 2 de abril de 2011
- Chadwick Herman: 12 de abril de 2011
- Echeverría Fernando: 9 de agosto 2011
- Eguiluz Claudio: 8 de junio de 2011
- Escalona Camilo: 8 de agosto 2011
- Escobar Leonardo: 6 de junio de 2011
- Fernández Carmen: 31 de mayo de 2011
- Figueroa Jorge: 7 de junio 2011 (presencial) y 10 de julio de 2012 (vía telefónica)
- Frei Ruiz- Tagle Eduardo: 12 de abril de 2012
- Garcés Mario: 22 de julio 2011 en ECO
- González Claudio: 10 de octubre de 2010
- Hales Patricio: 31 de diciembre 2010
- Hernández Patricia: 6 de junio de 2011
- Ibarra Rafael: 27 de diciembre 2010
- Imilan Walter: 5 de abril de 2012
- Kremerman Marco: 22 de junio de 2011
- Larraín Carlos: 28 de diciembre de 2010
- Latorre Juan Carlos: 30 de mayo de 2011

- Letelier Francisco: 9 de junio de 2011
- Manríquez Carolina: 11 de junio 2011, actualización 27 de diciembre de 2012.
- Molina Mónica: 10 de julio de 2011
- Monasterios Alejandra: 3 de junio de 2011
- Montes Carlos: 15 de junio de 2011
- Muñoz Ana: 8 de junio 2011
- Navarro Alejandro: 2 de abril de 2012
- Navarro Ricardo: 4 de julio 2011
- Núñez Gladys: 10 de junio de 2011, actualización 21 de diciembre de 2012
- Orrego Bárbara: 6 de junio de 2011, actualización 15 de marzo de 2012
- Ortiz Marco: 10 de marzo de 2012
- Peña Marcos: 11 de junio 2011. Actualización 10 de julio de 2012. Actualización 21 de diciembre de 2012.
- Pérez Francisco: 11 de junio 2011.
- Pizarro Jorge: 1 de agosto 2011.
- Sáez Patricio: 7 de junio de 2011
- Silber Gabriel: 27 de marzo de 2012
- Sobarzo Rodrigo: 12 de abril de 2012
- Trincado Ricardo: 13 de enero de 2011
- Vera Alfonso: 21 de diciembre de 2012
- Vergara Cecilia: 6 de junio 2011
- Vidal Francisco: 2 de agosto 2011
- Vivallos Leonel: 13 de diciembre de 2010
- Viveros Nibaldo: 5 de junio de 2011

Fuentes documentales

Informes

- Observatorio de la Reconstrucción, *Cómo leer los avances del gobierno en reconstrucción*. Disponible en el sitio web del Observatorio de la Reconstrucción (<http://reconstruccion.uchilefau.cl/>). Consultado el 20 de octubre de 2012.

- Fundación Sol, Unidad de Estadísticas de empleo. Minuta de trabajo agosto- octubre 2012. Disponible en el sitio web de Fundación Sol (www.fundacionsol.cl). Consultada el 26 de diciembre de 2012.
- Información obtenida por Ley de Transparencia en el Programa de Reconstrucción Nacional de Vivienda Chile Unido Reconstruye Mejor, del 29 de marzo de 2010.
- Vladimir Hernández, Lo que oculta la riqueza en Chile. Disponible en sitio web de BBC Mundo (www.bbc.co.uk). Consultado el 30 de junio de 2011.
- Sebastián Piñera, *Palabras de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, durante Vigilia en conmemoración del Primer aniversario del terremoto*. Disponible en sitio web de el Gobierno de Chile (<http://www.gob.cl>). Consultado el 15 de noviembre de 2012.

Fuentes personales citadas de archivo de prensa

- Juan Castro en *Diario El Centro*, 21 de julio de 2011. “Escuela Las Concentradas no serán removidas del centro de la ciudad”, Claudio Rojas.
- Verónica Reyes, ingeniera civil de la Secretaría Comunal de Planificación, Secplan, de Talca en el *Diario El Centro*, 9 de marzo de 2012. “Próxima a licitarse la demolición parcial de las Escuelas Concentradas”, Daniela Giacaman.
- Sebastián Piñera en Emol, 30 de julio de 2010. “La historia desconocida de las parkas rojas del Gobierno”, Leonardo Núñez.
- Sebastián Piñera en *Clarín*, 2010. “Piñera: 'Sólo los muertos y los santos no tienen conflicto de intereses’”, Hinde Pomeraniec.
- Rodrigo Hinzpeter en Radio Cooperativa, 6 de mayo de 2010. “Polémica por calidad de mediaguas enfrenta a Felipe Berríos con el Gobierno”, Cooperativa.cl.
- Felipe Berríos en Radio Universidad de Chile, 7 de mayo de 2010. “Gobierno y Un Techo para Chile dan por superada polémica por mediaguas”, Francisco Mardones.
- Jacqueline Van Rysselberghe en *The Clinic*, 10 de mayo de 2010, “El ascenso de la ex alcaldesa de Concepción: las armas de Jacqueline”, Verónica Torres.
- Jaime Ravinet en *Cooperativa.cl*, 13 de enero de 2011. “Jaime Ravinet: El puente no vale callampa, sino que es muy importante”, *Cooperativa.cl*.
- Inés Oliva, pobladora de Aurora de Chile en diario *El Resumen*, 21 de enero de 2011. “Población Aurora de Chile: para el gobierno no solo el puente vale callampa”, equipo *ElResumen.cl*.

- Diputado Enrique Van Rysselberghe en Radio Bío-Bío, 19 de julio de 2011. "Diputado van Rysselberghe solicitará apoyo al Gobierno para concretar proyecto Terraza al Bío-Bío", Radio Bío-Bío.
- Sergio Ortiz, propietario de departamento en edificio Centro Mayor en *Ciper*, 9 de febrero de 2011. "Demolición de torres en Concepción: constructora con más edificios dañados gana licitación", Tabatha Guerra.
- Senador Alejandro Navarro en *The Clinic*, 4 de febrero de 2011. "Intendenta Rysselberghe: 'Nosotros usamos el tema del terremoto'", equipo *The Clinic*.
- Christian Matzner, de la Comisión de Arquitectura del Consejo de Monumentos Nacionales en *El Mercurio*, 8 de marzo de 2010. "Edificios patrimoniales que se resisten a caer", Romina de la Sotta y Víctor Soto.
- Jacqueline Van Rysselberghe en *The Clinic*, 3 de abril de 2011. "Jacqueline Van Rysselberghe cede a presión y renuncia a intendencia del Bío-Bío", *EFE/ The Clinic*.
- Iván Poduje, urbanista en *La Tercera*, 21 de febrero de 2012. "Vivienda aspira a terminar en ocho años 190 obras urbanas de 1.135 lanzadas por el gobierno", Manuel Valencia y Paula Céspedes.
- Roberto Moris, urbanista en *La Tercera*, 21 de febrero de 2012. "Vivienda aspira a terminar en ocho años 190 obras urbanas de 1.135 lanzadas por el gobierno", Manuel Valencia y Paula Céspedes.
- Peter Ihl, jefe de la División de Presupuesto e Inversiones del Minsal en *La Tercera*, 9 de abril de 2011. "Hospitales modulares: hay un 50 % de avance y gobierno acelera construcción", Paula Riquelme, Patricio Tapia y Ana María Morales.
- Sebastián Piñera en *El País*, 27 de febrero de 2011. "Chile, a un año del terremoto", Sebastián Piñera.
- Hernán Büchi en *El Mercurio*, 04 de marzo de 2012. "27-F: Dos años después", Hernán Büchi.
- Max Colodro en *Qué Pasa*, 27 de diciembre de 2012. "La generación trunca", Max Colodro.
- Juan Andrés Muñoz, coordinador de Vivienda del programa de reconstrucción del Minvu en *La Tercera*, 17 de diciembre de 2012. "A 59% llega el total de viviendas reconstruidas tras terremoto de 2010", Carla Alonso.

Archivo de prensa

- *Ciper*, 10 de febrero de 2010. "Las redes de amistad y negocios del gabinete de Sebastián Piñera", Mónica González.
- *Ciper*, 18 de marzo de 2010. "Los vínculos de Piñera con las empresas de los edificios dañados: los hombres del presidente", Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa.
- *La Nación*, 28 de febrero de 2010. "Empresas de telefonía móvil explican las fallas post sismo", equipo País.
- Radio Bío-Bío, 21 de noviembre de 2012. "Querellante en el Caso Tsunami solicitará formalización de cargos contra Bachelet", Alberto González/UPI.
- *La Tercera*, 21 de diciembre de 2012. "Creo que hay que bajar la angustia, hay tiempo suficiente, hablemos en marzo", Paula García y Pablo Cádiz.
- Radio Cooperativa, 27 de diciembre de 2012. "Familiares de víctimas del 27-F emplazaron a Bachelet a comparecer ante la fiscal", EFE.
- *Emol*, 1 de abril de 2010. "Gobierno amplía a Pymes locales programa de reconstrucción en zonas devastadas", *Emol*.
- *Ciper*, 1 de abril de 2010. "Los nexos del Gobierno con las empresas de la reconstrucción", Juan Pablo Figueroa.
- *La Tercera*, 14 de marzo de 2010. "La 'agenda terremoto'", Ascanio Cavallo.
- *La Tercera*, 20 de marzo de 2010. "Estudio cuestiona pérdidas por terremoto estimadas por el gobierno y las reduce a un tercio", Valeria Ibarra M.
- *La Tercera*, 20 de marzo de 2010. "Parte de la reconstrucción debiera financiarse con reasignación de gastos", César Valenzuela.
- *La Tercera*, 31 de julio de 2011. "Debate por alza de impuestos a empresas divide a oficialismo", J.M. Wilson y N. Hernández.
- *La Tercera*, 19 de marzo de 2010. "Büchi critica eventual alza de impuestos y llama a avanzar en productividad", David Lefin.
- Radio Universidad de Chile, 13 de septiembre de 2011. "Los sí y los no de la reforma tributaria", Loreto Soto.
- Radio Universidad de Chile, 26 de abril de 2012. "La reforma tributaria solo cubre el 10% de los requerimientos en educación", Loreto Soto.
- *El Dínamo*, 17 de abril de 2012. "Confech presenta propuesta de reforma tributaria y convoca a movilización nacional", equipo *El Dínamo*.

- *La Tercera*, 20 de marzo de 2011. "Elevar el royalty es contraproducente para la recuperación del país", editorial.

Fuentes bibliográficas

Estadísticas chilenas del siglo XX, Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 1999.

Hugo Fazio, *Un país gobernado por uno de sus dueños*. Editorial LOM, Santiago, 2011.

Ernesto Carmona, *Yo, Piñera*. Editorial Mare Nostrum, Santiago, 2010.

Manuel Salazar, *Sebastián Piñera*. Editorial Momentum Santiago, 2009.

María Olivia Mönckeberg, *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*. Ediciones B, Santiago, 2001.

María Olivia Mönckeberg, *La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias*. Editorial Copa Rota. Santiago, 2005.

María Olivia Mönckeberg, *Los magnates de la prensa: Concentración de los Medios de Comunicación en Chile*. Editorial Random House Mondadori, Santiago, 2009.

ANEXO II

CRONOLOGÍA

2010

18 de enero de 2010: Miguel Flores, Rodrigo Hinzpeter, María Luisa Brahm y Cristián Larroulet forman la comitiva a cargo de la instalación del gobierno y la búsqueda de profesionales jóvenes que se hagan cargo del Estado.

27 de febrero de 2010: a las 03:34 se produjo el segundo sismo más fuerte de la historia. El epicentro fue frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura, a unos 150 kilómetros al noroeste de Concepción y tuvo una magnitud de 8.8 grados.

27 de febrero de 2010: 30 segundos después del terremoto en Maipú, el edificio Don Luis donde vivía Alejandra Monasterio se desmoronó.

27 de febrero de 2010: Marcos Peña perdió su casa ubicada en el centro de Talca. Desde esa fecha vive en un *container*, en el mismo terreno que ocupaba su vivienda.

27 de febrero: a las 05:15 de la mañana, el cabo Raúl Díaz se logró comunicar desde el retén de la Isla Juan Fernández para dar la primera señal de que la marea aumentaba y el oleaje se hacía más violento. "Hay riesgo de tsunami", avisó.

27 de febrero de 2010: a las 6 de la mañana, la expresidenta Michelle Bachelet descarta el riesgo de tsunami. "Es una posibilidad muy remota, así que llamamos a la ciudadanía a la calma", dijo por televisión. Se le criticó que ella manejaba la información de tsunami y la omitió a la opinión pública.

28 de febrero de 2010: La alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, solicita el envío del Ejército para poder controlar los saqueos que afectan a la ciudad. "Cuando hay víctimas lo que se necesita es premura", dijo, acusando "negligencia" de parte de las autoridades de gobierno.

28 de febrero de 2010: Mónica Molina estuvo tres horas aplastada bajo los escombros del edificio Alto Río en Concepción. En la misma torre murió la esposa e hijo de Marcelo González, y seis personas más.

28 de febrero de 2010: En las islas Orrego y Cancún en Constitución se celebraba la Noche Veneciana, motivo por el cual ambas islas tenían mucha concurrencia de habitantes y turistas. De los 156 fallecidos producto del tsunami a nivel nacional, 45 correspondieron a esta zona.

28 de febrero de 2010 Patricio Rosende, exsubsecretario del Interior, confirma que el 80 por ciento de Dichato se encuentra inundado.

28 de febrero de 2010: En la región del Maule y la zona de Concepción se decreta toque de queda a partir de las 21 horas.

28 de febrero de 2010: Francisco Vidal, ex ministro de Defensa, anuncia que diez mil efectivos de las FF.AA. serán desplegados para enfrentar las emergencias del terremoto.

28 de febrero de 2010: Horst Paulmann, dueño de Cencosud, Enrique Ostalé, gerente general de D&S Wal-Mart y un representante de Unimarc, llegaron hasta La Moneda para reunirse con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, el jefe de gabinete del ministro del Interior, Carlos Mladinic, y un representante de la Presidencia para analizar la situación de los supermercados después del terremoto.

5 de marzo de 2010: Se realiza la maratón televisiva “Chile ayuda a Chile”, donde se pretendía recaudar quince mil millones de pesos para destinarlos a la construcción de 20 mil viviendas de emergencia en las regiones más afectadas por la catástrofe. La cifra final reunida llegó a los 45 mil millones de pesos y contó con la ayuda activa de varios grupos empresariales chilenos, como Angelini y Luksic.

6 de marzo de 2010: Los presidentes de partidos de la Concertación sostuvieron una distendida reunión con el Presidente, donde acordaron apoyar todas las iniciativas que apuntaran a enfrentar la tragedia.

11 de marzo de 2010: A las 11:41 horas ocurre la primera gran réplica del terremoto con una intensidad de 6.4 grados.

11 de marzo de 2010: A las 12:18 horas ocurre la segunda gran réplica de magnitud mayor a la anterior. Fueron 7.2 grados.

11 de marzo de 2010: A las 12:23 horas Sebastián Piñera Echeñique asume como Presidente de Chile.

11 de marzo de 2010: Piñera convoca a su primer equipo de gobierno y les entrega un *pendrive* que contenía las tareas de cada Ministerio.

2 de abril de 2010: La encuesta Adimark indica que el recién asumido Presidente marca 52 por ciento de apoyo y el gobierno sube ocho puntos, llegando al 60 por ciento de respaldo.

24 de abril de 2010: El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se reúne con los empresarios del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) para tranquilizarlos. Larroulet afirmó que el Ejecutivo seguía avanzando en una serie de temas, más allá del terremoto. "La emergencia nos ha consumido en el corto plazo, pero no nos vamos a olvidar que nuestro propósito central es el de caminar con Chile hacia el desarrollo", señaló.

10 de mayo de 2010: Los alumnos de la Escuela Las Concentradas de Talca son trasladados a otros establecimientos de la ciudad a fin de no seguir retrasando el inicio del año escolar.

28 de mayo de 2010: Se crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción que estableció una serie de beneficios tributarios a las donaciones destinadas a financiar la construcción o reconstrucción.

Julio de 2010: La oposición no aprueba el primer proyecto de impuesto a la minería que presentó el gobierno.

30 de julio de 2010: Sebastián Piñera defiende su iniciativa de usar parkas rojas para cuando el equipo de gobierno se desplegara en terreno. "El tema de las parkas fue una idea de mi hija Magdalena. Era como una especie de símbolo de la gestión en terreno, cercano a la gente. Creo que fue una buena idea y no me voy a sacar la parka roja ", afirmó.

10 de agosto de 2010: La, en ese entonces, ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, anuncia el estado de avance de los Planes Maestros para la reconstrucción: Constitución y Juan Fernández estaban resueltos y –adelantó- otros, como Licantén, Pelluhue, Talca, Talcahuano, Dichato, y 16 localidades costeras de la Región del Bío-Bío, estaban avanzando.

21 de agosto de 2010: La intendenta Jacqueline Van Rysselberghe visita la población Villa Futuro en Chiguayante y le informa a los vecinos que deben abandonar sus viviendas "porque es más barato construir de nuevo que reparar".

3 de septiembre de 2010: Comienzan a dejar sus casas para irse a vivir a aldeas los primeros vecinos de Villa Futuro.

3 de septiembre de 2010: Llegó a la Escuela Los Lobos de Talcahuano una comitiva del SERVIU y la Intendencia. Tal como se repetiría en otras poblaciones, el grupo lo lideró Jacqueline Van Rysselberghe. La autoridad se dirigió a la gente y les comunicó que el plan de reconstrucción contemplaba que dejaran sus casas el 12 de noviembre de 2010 para comenzar el proceso de demolición.

9 de septiembre de 2010: La intendenta Jacqueline Van Rysselberghe visita la población Aurora de Chile para informar cómo será el proceso de desalojo postterremoto. "Nosotros usamos el tema del terremoto y del Puente Chacabuco a favor de ustedes. Por eso nos aceptaron meter un porcentaje muy importante de personas que no tienen certificados de inhabilitación", indicó la autoridad regional. Este discurso, que fue grabado por dirigentes de la Población y difundido por el senador Alejandro Navarro, le costó la salida de su puesto a Van Rysselberghe.

12 de octubre de 2010: El Senado aprueba un impuesto específico a la gran minería de entre un cinco y un catorce por ciento. El período de invariabilidad tributaria se fijó en seis años y no ocho como planteaba el proyecto original del gobierno.

14 de octubre de 2010: Culmina el rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José en Copiapó desde agosto de 2010. Este hecho marcó la carrera política de un hasta ese entonces desconocido ministro de Minería, Laurence Golborne, hoy precandidato presidencial de la Alianza.

11 de noviembre de 2010 Llega el momento de votar el presupuesto para 2011. A la Secretaría General de Gobierno en una primera instancia se le negaron los recursos por las diferencias que tuvo la ministra Ena Von Baer con los congresistas de la Concertación. El conflicto se desató cuando se señaló que el gobierno había intervenido en las elecciones del presidente de la ANFP y Von Baer calificó los dichos de “canallescós”. De vuelta, Andrés Zaldívar le respondió que ella parecía sacada de las “juventudes Hitlerianas”. Finalmente la discusión terminó a las cinco de la mañana con el presupuesto de Segegob restablecido.

13 de noviembre de 2010: Los vecinos de la población Centinela II en Talcahuano comienzan a desmantelar sus casas para llevarse la mayor cantidad de enseres a las aldeas.

2011

4 de enero de 2011: La encuesta Adimark reveló un significativo aumento en la desaprobación de Piñera, del 36 al 43 por ciento.

12 de enero de 2011: El ministro de Defensa Jaime Ravinet es citado por el Consejo para la Transparencia a aclarar por qué negó información sobre la compra de un puente mecano en reemplazo del Puente Chacabuco, bajo el argumento de seguridad nacional. En una conferencia de prensa y creyendo los micrófonos apagados, el ministro dijo que “el puente vale callampa”.

13 de enero de 2011: El ministro de Defensa Jaime Ravinet renuncia a su cargo.

3 de abril de 2011: Jacqueline Van Rysselberghe presenta su renuncia a la Intendencia del Bío-Bío.

14 de mayo de 2011: El Serviu de Concepción negocia con los pobladores de Villa Futuro en Chiguayante la entrega de 700 unidades de fomento para la compra de una vivienda nueva o usada. Pese a la resistencia inicial que pedía más dinero, fue la solución que la mayoría de la población tomó.

1 de julio de 2011: El arquitecto, y hasta ese entonces, coordinador nacional del Plan de Reconstrucción del Minvu, Pablo Allard, fue nombrado decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la UDD. Entre críticas a los avances del proceso y cuestionamientos por conflictos de interés, Allard renunció al cargo de gobierno.

20 de julio de 2011: Los habitantes del campamento El Molino se retiraron de una mesa de negociación que mantenían con el gobierno y comenzaron a manifestarse. Entre los actos de protesta contra la autoridad y la fuerza policial estuvo la retención en una sede del Hogar de Cristo del gobernador provincial de Concepción, Alejandro Reyes.

20 de julio de 2011: El Concejo municipal de Talca decidió que la Escuela Las Concentradas debía ser reparada en el mismo terreno que ocupaba antes del terremoto.

31 de julio de 2011: Carlos Larraín se manifiesta en contra de “improvisaciones” en materia de impuestos, cuando se discutía si subirlos o no.

23 de noviembre de 2011: Comienza la demolición del Edificio Don Luis en Maipú.

2012

Febrero de 2012: El Observatorio de la Reconstrucción (OR) cuestiona las cifras entregadas por el gobierno sobre la marcha del proceso. El Ejecutivo estimó en 47 por ciento el avance de ejecución de las obras de vivienda, mientras que el OR los logros en esta materia solo serían de un 10%.

25 de abril de 2012: El Presidente se reunió en su casa con las cúpulas de la UDI y RN. La cita, que duró casi dos horas, tuvo por objetivo adelantar el contenido de la reforma tributaria para la educación, que se anunciaría a todos los ciudadanos un día después.

26 de abril de 2012: Se da a conocer la Reforma Tributaria que planteó una rebaja de entre un diez y un quince por ciento al impuesto a la renta de las personas naturales. El descuento mayor se aplicaría a los sectores de menores ingresos. Se contempló un alza permanente a las empresas: del 17 al 20 por ciento sobre las utilidades. Además, se planteó un descuento a las contribuciones de hasta el 50 por ciento por gastos en educación para la clase media.

30 de abril de 2012: Contraviniendo el espíritu de una zona típica, el Consejo de Monumentos Nacionales otorgó permisos de demolición de cinco inmuebles ubicados en el corazón del Barrio Yungay.

25 de junio de 2012: Comienza el juicio penal por la caída del edificio penquista Alto Río.

27 de julio 2012: Comienza el desmantelamiento del campamento El Molino de Dichato, el más grande del país con 451 mediaguas.

12 de agosto de 2012: Los vecinos de la población Aurora de Chile convocan a una consulta ciudadana por la reconstrucción.

10 de diciembre de 2012: el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dio a conocer la sentencia del emblemático caso. 800 días de presidio remitido y una multa de casi cuatro millones de dólares para el ingeniero calculista René Petinelli por su responsabilidad en la edificación de Alto Río.

17 de diciembre de 2012: El ministro de Vivienda Rodrigo Pérez Mackenna, informó las cifras actualizadas del avance del proceso de reconstrucción. De acuerdo con los datos oficiales, en noviembre de 2012 el total de obras terminadas posterremoto alcanzó a 130 mil 519, lo que equivale al 58 por ciento de la meta de 222 mil 418 unidades del programa de reconstrucción. Las cifras fueron nuevamente cuestionadas por organizaciones sociales de damnificados y entidades fiscalizadoras del pro

ANEXO III
ÍNDICE ONOMÁSTICO

A

- Agosín Manuel 126
- Aguilera Eduardo 15
- Alcayaga Julián 130, 133
- Allamand Andrés 60, 103, 121
- Álvarez Angélica 20
- Andina Mario 18
- Aranda Carlos 18
- Arce Lorena 47, 48, 49, 198, 199, 200
- Astorga Ignacio 225
- Aylwin Patricio 55, 214

B

- Bachelet Michelle 9, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 107, 114, 118, 145
- Bachelet Vivienne 219
- Beroiz Aldo 53, 166, 168
- Berríos Felipe 140
- Bianchi Felipe 114, 115
- Bilbao Juan 55, 62, 78, 148
- Bitar Sergio 10, 14, 16, 216, 217
- Bitrán Eduardo 217
- Bolocco Cecilia 25
- Büchi Hernán 66, 68, 75, 76, 113, 120, 121, 122, 131, 161, 241
- Bulnes Felipe 56, 68, 74, 104, 105, 143

C

- Cavallo Ascanio 108
- Chadwick Andrés 20,104
- Chadwick Herman 73, 121, 215, 217, 219, 220, 225
- Castro Juan 39, 40, 201, 206
- Carvajal Rosario 42, 210, 211, 212, 213
- Catalán Gladys 50, 155, 156, 160
- Colodro Max 238
- Coloma Fernando 61
- Cox José 55, 76, 77, 91, 215, 222
- Constans Lorenzo 121, 122
- Costabal Francisco 131

D

- De Borbón Felipe 25
- Délano Carlos Alberto 62, 63, 66, 76, 137
- De Solminihac Hernán 70, 73, 104, 220
- Díaz Raúl 10
- Díaz Pablo 234
- Dittborn Julio 63, 112, 119

E

- Edwards Sebastián 63
- Enríquez Andrés 18
- Enríquez Ominami Marco 127, 219, 238
- Escalona Camilo 17,111, 118, 131, 132
- Escobar Leonardo 8, 167, 168

F

- Fernández Carmen 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19
- Fernández Cristina 25

- Fernández Patricio 217
- Figueroa Jorge 52, 171, 173, 182, 183
- Flores Fernando 24
- Fontaine Juan Andrés 62, 63, 67, 121, 122
- Fontaine Paul 127
- Frei Ruiz-Tagle Eduardo 58, 105

G

- Garcés Mario 7
- Golborne Laurence 57, 68, 69, 70, 74, 75, 84, 103, 104, 130, 131, 143
- Gómez Pablos Amaro 9
- Gómez José Antonio 111
- González Fernando 25
- González Claudio 219, 222, 223
- Guerrero Ignacio 55, 76, 91

H

- Hales Patricio 226
- Hernández Patricia 53, 166, 167
- Hernández Diego 131
- Hinzpeter Rodrigo 23, 25, 54, 67, 68, 82, 84, 87, 103, 134, 141, 162
- Huerta Solange 12, 13, 16, 17, 21, 22
- Hurtado Ruiz-Tagle Carlos 215

I

- Ibarra Rafael 220
- Ihl Peter 223
- Imilan Walter 3, 45, 106, 137, 139, 167, 184, 191, 199, 230, 234, 239, 244, 245, 246

J

- Jamett Johaziel 18
- Jaman Sergio 25, 26, 28

K

- Kremerman Marco 77, 98, 99, 101
- Kreutzberger Mario 137

L

- Lagos Ricardo 66, 69, 128, 129, 131, 215, 216
- Latorre Juan Carlos 10, 58, 111, 226, 227
- Larraín Carlos 15, 16
- Larraín Felipe 61, 64, 72, 110, 111, 123, 124, 131, 134, 135, 136
- Larraín Hernán 71, 120
- Larroulet Cristián 23, 56, 62, 63, 64, 66, 75, 107, 112, 131, 134
- Lavín Joaquín 56, 62, 63, 65, 66, 67, 75, 104, 112, 182
- Lavín Carlos Eugenio 62, 63, 66, 76, 137
- Longueira Pablo 67, 72, 104, 106, 120, 128

M

- Macaya Javier 120
- Malfanti Osvaldo 13, 18
- Manríquez Carolina 44, 45, 46, 193, 194, 195, 196, 234
- Mañalich Jaime 56, 71, 72, 218, 220, 221, 222, 225
- Matte Magdalena 71, 120, 157, 171, 175, 183, 185, 189, 190, 194, 226, 227, 228
- Mayne Nicholls Harold 114, 115
- Méndez Roberto 115
- Meza Raúl 19, 21
- Molina Mónica 34, 35, 152
- Monasterio Alejandra 6, 31, 32, 33, 146, 147, 148, 149, 150, 151
- Montes Carlos 133, 226

- Morel Cecilia 26
- Morandé Felipe 64, 72, 103
- Moreno Alfredo 61, 62, 63, 64, 77, 78, 84, 85, 148
- Muñoz Ana 47
- Muñoz Juan Andrés 244

N

- Navarro Alejandro 3, 4, 52, 117, 152, 161, 169, 175, 176, 177, 178, 184, 185, 200
- Navarro Andrés 76, 77, 88, 222
- Núñez Gladys 38, 39, 40, 41
- Núñez Marco Antonio 115

O

- Orrego Bárbara 50, 51, 155, 158, 159
- Ortiz Marco 31, 32, 33, 147, 148, 150, 209

P

- Parodi Patricio 55
- Paulmann Horst 15, 68, 69, 70, 142
- Paulsen Fernando 228, 229
- Peña Marcos 36, 37, 201, 202, 203, 205, 206
- Pérez Francisco 43, 44
- Pérez Mackenna Francisco 62, 78, 148
- Pérez Mackenna Rodrigo 71, 87, 196, 203, 229, 233, 240, 244
- Pérez Yoma Edmundo 13, 17
- Pickering Guillermo 11
- Piñera José 63, 65
- Pizarro Jorge 25, 26, 27, 128, 132

R

- Rojas Mariano 13, 18
- Rosende Patricio 10, 13, 17, 18, 21, 22, 46
- Rossi Fulvio 59, 111

S

- Salas Sebastián 175, 200, 201
- Selume Jorge 63, 112, 113
- Silber Gabriel 112, 117, 133
- Silva Bafalluy Ernesto 66, 120
- Silva Méndez Ernesto 120

U

- Ulloa Jorge 13, 14

V

- Van Rysselberghe Jacqueline 3, 4, 8, 15, 51, 52, 53, 155, 156, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 175, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 240
- Van Rysselberghe Enrique 174, 175
- Valdés Federico 76
- Valenzuela Nicolás 237
- Vasseur Juan 20, 21
- Velasco Andrés 15, 29, 119
- Vidal Francisco 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 59, 119, 145
- Viera Gallo José Antonio 217
- Vivallos Leonel 220, 224, 225, 239
- Von Baer Ena 23, 66, 67, 68, 75, 104, 115, 116, 117

Z

- Zaldívar Andrés 117, 215



Sra.
Ma. Eugenia Domínguez
Directora de Pregrado
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
PRESENTE

A continuación le comunico a usted la evaluación de la memoria de título “*La reconstrucción en Estado precario: el laboratorio de la nueva forma de gobernar*”, de las estudiantes Lissette Fuentes Lorca y Úrsula Schüler Vidal:

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	%
1.1	Problematización	Planteamiento y contextualización del tema	10%
1.2	Pertinencia	Relevancia y originalidad de la investigación	15%
1.3	Estrategia Metodológica	Recolección de la información, datos y antecedentes.	20%
1.4	Conclusiones	Análisis e Interpretación de los hechos relevantes.	15%
1.5	Estructura	Orden narrativo, construcción del texto.	15%
1.6	Presentación	Calidad de la redacción, recursos estilísticos.	15%
1.7	Recursos bibliográficos	Materiales y textos utilizados.	10%

Ítem	Nota	Valor
1.1	7,0	0,7
1.2	7,0	1,1
1.3	5,5	1,1
1.4	5,5	0,8
1.5	4,5	0,7
1.6	5,5	0,8
1.7	5,0	0,5
Nota Final		5,7

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0.

COMENTARIO

Observaciones, comentarios, sugerencias, críticas, etc.

En febrero de 2013, se cumplirán tres años desde que un terremoto de grado 8,8 en la escala de Richter y un maremoto posterior afectaron a la zona centro-sur del país. La catástrofe cobró vidas humanas y miles de millones de dólares en pérdidas materiales, públicas y privadas, dejó a miles de chilenos y chilenas en



la calle y develó el desarrollo del país como un espejismo: las telecomunicaciones no soportaron la emergencia, hubo edificios de reciente construcción que colapsaron y los avances de la reconstrucción han sido lentos e insuficientes. Miles de familias se aprestan a pasar nuevamente el invierno en mediaguas, a la espera de una solución habitacional definitiva tras haber perdido su vivienda debido al desastre natural.

El terremoto y maremoto se produjeron pocos días antes de que asumiera la primera magistratura del país Sebastián Piñera, el primer presidente de centroerecha elegido democráticamente en 50 años. Los requerimientos de levantar el país fue el primer pie forzado con que se encontró. Y el camino elegido fue el de profundizar el modelo de mercado, el rol subsidiario del Estado, la prescindencia de políticas públicas a cambio del fortalecimiento de la iniciativa privada, en un marco de tupidas redes de relaciones personales, familiares y empresariales que ha caracterizado a los miembros de este gobierno desde sus inicios.

Allí es donde se ubica la propuesta de las estudiantes Lissette Fuentes y Úrsula Schüler: implícitamente en el título de la memoria y explícitamente en el objetivo que se proponen, está la reconstrucción posterremoto como un laboratorio de la “Nueva forma de gobernar” –como la calificó Piñera-, que se caracterizaría por exacerbar las características del modelo político, económico y social chileno. En síntesis, menos Estado y más privados.

Ésta es, tal vez, la principal fortaleza de la propuesta: una mirada novedosa y desconocida desde donde abordar la catástrofe, la crisis y las estrategias para salir de éstas emprendidas como Estado.

Es evidente el esfuerzo desplegado por las estudiantes para realizar la investigación: unas cincuenta entrevistas propias, varios documentos obtenidos por la vía del uso de la ley de acceso a la información y el reporteo en terreno en varios de los lugares afectados por la catástrofe dan cuenta del trabajo que se espera de egresadas de Periodismo de la Universidad de Chile. La exhaustiva revisión de prensa también es un valioso aporte del trabajo, así como también el índice onomástico y la cronología.

Sin embargo, el reportaje tiene una debilidad de fondo, que es su estructura. Las autoras despliegan un enorme esfuerzo en describir detalladamente el terremoto, el tsunami, el cambio de gobierno, los cambios de gabinete de Piñera, entre otros, que son episodios complementarios al foco de la investigación y que le restan fuerza a lo que debiera ser el centro de la investigación. Así, en vez de los tres primeros capítulos, debieran reestructurarse en uno o máximo dos, que articulen el terremoto y maremoto, el desastre posterior, las cifras de la catástrofe, de los daños y de los requerimientos de reconstrucción, que incluya los testimonios de los damnificados, por ejemplo, en las distintas zonas afectadas. Luego, el cambio de gobierno y, con ello, las redes de intereses cruzados de sus miembros, para luego desplegar las políticas y anuncios en materia de reconstrucción.

En este aspecto -las redes de las autoridades que asumieron con Piñera- es indispensable encontrar una fórmula que pueda sintetizar y graficar de mejor manera el objetivo de demostrar las redes. Una posibilidad es agrupar los ámbitos productivos o comerciales donde tienen intereses comunes, algo que dé una panorámica, antes que detallar uno por uno en qué empresas tienen intereses. Del mismo modo, privilegiar el relato de los ámbitos donde tienen intereses pero que tengan relación con el proceso de reconstrucción



(concesiones, construcción, inmobiliaria, etc...). En este sentido, también se echa de menos un contexto, un marco general, que dé cuenta y enmarque el tipo de relaciones y redes que históricamente han amalgamado a la elite política y empresarial. No es algo nuevo. Es parte del *ethos* de la derecha y de la elite en general. El libro de Sofía Correa "Con las riendas del poder" es una buena fuente (pensando en todo el subtítulo Los amigos del presidente, p. 76, por ejemplo).

En general, es fundamental una síntesis en muchos y largos pasajes del texto. Esto permitiría enfocarse en el objetivo central propuesto, sino que también mejorar el ritmo de la narración. Esto resolvería también la reiteración de ideas o, incluso, oraciones.

En general, el texto requiere una edición acuciosa, final, que permita trabajar en su estructura, afinarla, sintetizar largos pasajes y, con ello, potenciar las principales ideas y hallazgos. Los eventos o pasajes complementarios que mencionamos más arriba, además, no tienen entre sus fortalezas ser investigación propia o aporte de las autoras, ya que se construyen principalmente de fuentes secundarias. Así, pareciera que el reportaje quisiera dar cuenta de una época, la del cambio de mando, más que de las políticas específicas y sus consecuencias en el marco de la reconstrucción postterremoto y maremoto.

Se advierte otra debilidad: en varios pasajes, las autoras optan por narrar cronológicamente, desdibujando la importancia de la resolución de las historias (un fallo judicial, un informe de Contraloría, proyectos de ley, etc.).

Por razones propias del tema elegido para investigar, las autoras recurren y citan muchas cifras y datos cuantitativos. Sugerimos el uso de gráficos y/o recuadros, que facilitarían la lectura y la comprensión, así como también la dimensión y la comparación de los datos en el tiempo (por ejemplo, cuando se refieren a las reducciones presupuestarias).

Hay pasajes donde las autoras abusan de los dichos, cuando lo recomendable –incluso, lo que uno como lector espera– es conocer los hechos. Ahí, se extraña la referencia a documentos oficiales o versiones oficiales, al menos.

En cuanto a ciertos aspectos formales, hay referencias bibliográficas, sobre todo documentos o informes, que no están incluidos en las referencias bibliográficas al final (como el informe de la Contraloría sobre las irregularidades de las donaciones o el informe de la Cámara de Diputados o la presentación de Hinzpeter citada en p 82, entre otros. Además, la bibliografía no debe ir en anexo sino que al finalizar el texto. También faltan referencias a pie de página, tal como indicamos en el texto revisado (como de dónde sacan la historia de la plaza Yungay, p. 41-42). Asimismo, hay bibliografía que se omite y que debiera haberse consultado, como es la biografía de Piñera de las periodistas Bernardita del Solar y Loreto Daza.

En este mismo punto, la bibliografía al final debe ser una sola, que incluya: libros, artículos académicos, memorias de título o tesis, informes o documentos, artículos de prensa, etc... Pueden guiarse por <http://www.comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/about/submissions#authorGuidelines>



Para construir el índice, basta el título de los capítulos y no los subtítulos de éstos.

Hay referencias a sitios web que no se indican a pie de página o, bien, que se refiere solo a la página principal (www.minvu.cl, por ejemplo), pero no al url exacto donde consta el documento, informe o reporte de prensa mencionado. Están todos debidamente indicados en el texto corregido a mano.

Algunos otros detalles a considerar en la edición final:

¿Por qué hay diferencias entre las cifras originalmente entregadas sobre muertos y desaparecidos y las que finalmente manejó la fiscalía? ¿Significa que las primeras cifras dadas por el gobierno fueron infladas o no confirmadas? ¿O que las de la fiscalía, son los muertos que efectivamente pudieron verificar como víctimas de la catástrofe? (p. 44).

En el caso del conflicto en Dichato, se sostiene sobre la base solamente del testimonio de una de sus dirigentas. Pero no hay documentos oficiales o versión oficial (por ejemplo, respecto a las diferencias que se pagaron por metro cuadrado por concepto de expropiación, p. 48).

Hay varias redundancias o reiteraciones. Un ejemplo: "unirse" y "unitarias" (p. 50, primer párrafo).

Hay algunas actualizaciones que agregar, como la proclamación de Golborne como precandidato de la UDI (p. 70), las formalizaciones de los ejecutivos de Cencosud por el contrabando o la renuncia de Kast para asumir liderazgo de movimiento político.

Creo que no es "*public partner partnership*", sino que *public private partnership*. Revisar (p. 82).

Se refieren a un adjunto y un anexo, que no es tal (o sea, no hay un adjunto al texto), entonces, es confuso como está redactado (p. 83).

Por todo lo anterior, califico la memoria de título "*La reconstrucción en Estado precario: el laboratorio de la nueva forma de gobernar*", de las estudiantes Lissette Fuentes Lorca y Úrsula Schüller Vidal, con un 5,7 (cinco coma siete).

Atentamente,

Claudia Lagos Lira
Profesora Asistente
Instituto de la Comunicación e Imagen



UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la Comunicación e Imagen
Dirección de Pregrado

Escuela de Periodismo
Informe de Memoria

Universidad de Chile

Santiago, 18 de enero de 2013.



Informe Memoria de Título

Chile, el terremoto y la oportunidad de la crisis

La reconstrucción en Estado precario:
El laboratorio de la Nueva forma de gobernar

Alumnas: Lissette Fuentes Lorca
Ursula Schüler Vial

Profesora: María Olivia Mönckeberg Pardo

Santiago, 15 de enero de 2013

Antecedentes generales

Desde que las estudiantes Lissette Fuentes y Ursula Schüller se propusieron -a mediados de 2010-, llevar adelante la investigación periodística que da forma a esta Memoria de Título plantearon una idea novedosa en torno al sentido que podría tomar la reconstrucción en el gobierno de Sebastián Piñera. La capacidad de análisis comunicacional y político de las estudiantes fortaleció lo que habitualmente se conoce como “intuición periodística” y las llevó a observar e investigar minuciosamente lo que ocurría con el proceso de reconstrucción. Y cómo esto se podía plantear “como oportunidad de negocios” a quienes no creían en el rol del Estado.

Tal es así que el objetivo general del proyecto lo definieron en estos términos: “Investigar cómo la etapa de reconstrucción post terremoto devino en una oportunidad para el gobierno y los grandes grupos empresariales para el fortalecimiento de un modelo de financiamiento, gestión y administración de los servicios básicos, el Estado y la economía en Chile”.

No iban detrás de un escándalo puntual o un acto de corrupción, sino que partieron de la hipótesis de que la tragedia de febrero de 2010 podía dar pie a avanzar en el modelo privatizador, marginando al Estado de un rol fundamental. Si uno lee hoy con detención este trabajo y, en particular, los últimos capítulos puede encontrar antecedentes que apuntan en esta línea. Datos y situaciones que pueden pasar inadvertidas ante el drama que implicaron las consecuencias del terremoto y la falta de una cobertura periodística más profunda en los medios de comunicación convencional.

En la medida que avanzaban en la investigación –que se prolongó durante dos años- se encontraron también con que quienes habían asumido el gobierno en nombre de la eficiencia y de la “nueva forma de gobernar”, como la bautizaron, tropezaban con problemas y los damnificados percibían que las promesas no se cumplían.

Este trabajo realizado con notable rigor investigativo constituyó a la vez una profundización y un seguimiento en el tiempo de lo que estaba sucediendo. Su resultado logra constituir una alerta sobre el transcurrir de la reconstrucción y el accionar empresarial que caracteriza al gobierno de Sebastián Piñera, en el que se ha acentuado la disminución del rol del Estado.

Esta Memoria, junto con informar sobre los procesos de reconstrucción y parte de lo hecho y lo no hecho por el gobierno de Sebastián Piñera enciende luces que contribuyen a ver lo que en una primera observación podría pasar inadvertido.

Tiene también esta memoria de entregar una mirada sistémica, en la que se entrelazan situaciones e historias que permiten abarcar el conjunto y no quedarse en el caso aislado. Contribuye, por lo tanto, a mejorar la

perspectiva y a comprender en el contexto situaciones que podrían aparecer triviales.

Simultáneamente, el uso de la descripción de escenarios; los testimonios humanos que van más allá de meras voces sin rostro; el detalle ilustrativo que relata situaciones que aparentan ser anecdóticas, pero que contribuyen al conjunto, hacen que esta investigación logre ser leída con interés.

Investigación

Se trata de una investigación propia de las autoras orientada no sólo a saber qué estaba pasando con la reconstrucción, sino a profundizar en un contexto político-económico-social de mayor envergadura.

La investigación desarrollada con entusiasmo y tenacidad se basó en los siguientes aspectos centrales: una detenida revisión y seguimiento de prensa, a la vez que una profundización bibliográfica con la lectura de algunos libros que permitieron a las autoras comprender el contexto más allá del terremoto y el tsunami de febrero de 2010.

Las fuentes personales se pueden clasificar en entrevistas de tres tipos: testimonios de personas afectadas, varias de ellas dirigentes sociales o que devinieron en dirigentes de organizaciones surgidas precisamente a raíz de los problemas que acarreó para sus integrantes la reconstrucción; políticos o figuras con protagonismo público, y expertos en diversas áreas vinculadas al tema. El conjunto de estas entrevistas y testimonios le da fuerza y vivacidad tanto a la investigación como al relato logrado.

Resulta particularmente interesante la correlación constante que efectúan las autoras al abordar los diferentes temas entre lo que aparecía en la prensa, por ejemplo, y lo que señalan entrevistados de primera fuente. Así también se da un muy interesante juego al presentar la investigación en la relación espacio tiempo.

A la vez, resulta muy valioso el subrayar ciertos pasajes de la contingencia de un momento determinado, así como el esfuerzo por actualizar hasta enero de 2013, en algunos casos, la información. Esto denota un sentido periodístico que no siempre se da cuando los estudiantes e incluso los profesionales emprenden trabajos investigativos que aparecen en cierto sentido desvinculados del panorama general.

Presentación, Edición y Redacción

Tras un constante proceso de redacción y revisión, la Memoria logró adquirir un ritmo ágil, un lenguaje sencillo y atractivo. Destaca en particular el capítulo inicial (1) y el segundo que recrean situaciones que aunque se

vivieron y fueron muchas veces contadas a través de medios de comunicación, están descritas de tal modo que resultan interesantes y con ángulos novedosos. Naturalmente esa fluidez se hace más difícil cuando las autoras incursionan en los temas económicos, financieros y tributarios por el carácter más especializado que estos tienen. Sin embargo es destacable la decisión de las autoras por encarar esos temas que les parecieron importantes para el recuerdo y el contexto, a sabiendas que podían ser más áridos y complejos de explicar. En el resto de los capítulos los testimonios personales y el esfuerzo permanente por llegar al lector contribuyen a un lenguaje amable y a un ritmo fluido.

En general, en materia de redacción y edición hay solo detalles susceptibles de ser pulidos, como algunas repeticiones de palabras y cacofonías.

Los nombres de capítulos requieren alguna edición ya que incluso hay repeticiones de palabras en algunos de ellos. El uso de subtítulos es abundante y, en general, son apropiados. Se podría, con todo, buscar un estilo más homogéneo en ellos para que no aparezcan unos demasiado largos en comparación con otros. Asimismo, la forma de citar es adecuada.

La presentación general en capítulos es adecuada. Un especial aporte lo constituyen la cronología y el Índice Onomástico configurado por las memoristas que se presentan en anexos al relato general.

La memoria tiene así en lo básico la estructura de un libro periodístico que podría ser publicable, dado que el tema es de alto interés público y está bien tratado. Naturalmente, para hacer la transformación en libro requeriría una edición más acuciosa. El título requiere una modificación ya que los dos puntos entre dos ideas no son adecuados para titular, aunque los conceptos son ilustrativos.

NOTA: 6,8

MARIA OLIVIA MÖNCKEBERG P.
Profesora guía